

En lo principal: deduce cuestión previa; **Primer otrosí:** contesta Acusación Constitucional; **Segundo otrosí:** acompaña documentos; **Tercer otrosí:** patrocinio y poder.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República, asistido por su abogado Juan Domingo Acosta Sánchez, ambos domiciliados para estos efectos en el Palacio de La Moneda S/N, ciudad de Santiago, en acusación constitucional interpuesta en mi contra, a esta H. Cámara de Diputados, respetuosamente digo:

Con fecha 20 de noviembre de 2019, y en virtud del artículo 52 N° 2, letra a), de la Constitución Política de la República (en adelante, indistintamente, “**CPR**” o “**Constitución**”), un grupo de 11 honorables Diputados presentaron ante esta H. Cámara de Diputados, acusación constitucional en mi contra (en adelante, respectivamente, los “**acusadores**” y la “**Acusación**”), la que me fue notificada con fecha 22 de noviembre de 2019, en la que se me imputa haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes y haber comprometido gravemente el honor de la Nación.

Encontrándome dentro de plazo, mediante esta presentación promuevo en lo principal de la misma, cuestión previa de admisibilidad, solicitando que ésta sea acogida y se tenga la Acusación por no presentada para todos los efectos legales. Para el caso que tal cuestión sea desestimada, en el primer otrosí, contesto la Acusación en el fondo, haciéndome cargo de sus dos capítulos acusatorios, para concluir solicitando, en definitiva, que la Acusación se rechace en su totalidad.

A. ANTECEDENTES DE HECHO

El 17 de diciembre del 2017, nuestro Gobierno fue elegido democráticamente por una amplia mayoría de ciudadanos.

Desde que asumí la Presidencia he ejercido mi cargo con el único objetivo de crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de mis compatriotas su mayor realización espiritual y material. En estos 20 meses hemos gobernado con pleno respeto a los principios democráticos, al estado de derecho, a la Constitución y a las leyes y con especial preocupación y ocupación por la promoción y el respeto de los derechos humanos de todos.

Este 18 de octubre nuestro país enfrentó una inesperada ola de violencia extrema y destrucción organizada, que no habíamos conocido en nuestra historia reciente. Chile y los chilenos fuimos víctimas de incendios, saqueos y destrucción, que han causado grave daño a nuestro sistema de transporte público, supermercados, establecimientos comerciales, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, hospitales, monumentos históricos y propiedad pública y privada. Frente a esta ola de violencia, utilicé las facultades e instrumentos que la Constitución y la ley me otorgan, dentro del Estado de Derecho, para resguardar el orden público y la seguridad pública, para dar protección a la población y a las familias chilenas. Este fue el único motivo que nos llevó a establecer, por nueve días, un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.

En forma paralela surgió en Chile el movimiento social más importante de los últimos 30 años, demandando un Chile más justo, más equitativo y con mayor igualdad de oportunidades. Las chilenas y chilenos nos mostraron la necesidad de acelerar el ritmo hacia una mayor sociedad con dignidad, justicia y equidad social. A todos ellos los hemos escuchado con atención y humildad, sin afectar su derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, reaccionando con una exigente Agenda Social, que incluye aumentos significativos en las pensiones e ingresos de los trabajadores, reducción o estabilización del precio de los servicios públicos, como el transporte público, electricidad, agua y peajes de carretera, mejoramiento en el acceso y calidad de la salud y reducción del precio de los medicamentos, mayor equidad entre comunas y mayores impuestos a los ingresos más altos.

Sin embargo, la acción destructiva de algunos grupos extremos, que han enfrentado a nuestras Policías con violencia, ha persistido sin tregua, lesionando a más de 2.600 Carabineros y atacando a 223 cuarteles y 954 vehículos policiales.

Nuestro Gobierno ha desplegado todos sus esfuerzos por resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, avanzando al mismo tiempo con fuerza y sentido de urgencia en una importante Agenda Social que se hace cargo de las legítimas demandas ciudadanas.

En las últimas seis semanas la promoción, protección y el respeto de los derechos humanos ha sido un tema central para el país. Por eso, quiero reiterar el compromiso absoluto de nuestro Gobierno con los derechos humanos, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Además, tengo la firme convicción que no existe una dicotomía entre el mantenimiento del orden público y el respeto de los derechos humanos, pues ambos son elementos esenciales para la democracia.

Nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública han debido actuar con esfuerzo y vocación, de conformidad a la Constitución, la ley, sus reglamentos y protocolos, para resguardar el orden público y proteger a las familias chilenas que han sido afectadas por la inusitada ola de violencia. En el cumplimiento de su deber, la posición del Gobierno ha sido fuerte y clara: toda actuación debe enmarcarse dentro de la ley y regirse por los protocolos que regulan el uso de la fuerza y respetando los derechos humanos de todos.

Lamentablemente, y pese a todas las medidas preventivas y correctivas que hemos adoptado, nuestros ciudadanos han denunciado violaciones a los derechos humanos, consistentes en abusos, usos excesivos de la fuerza y delitos contra las personas. Frente a esto, quiero garantizar mi compromiso irrestricto con la verdad y la justicia, por lo que todas las denuncias están siendo investigados por la Fiscalía Nacional y serán juzgadas y sancionadas por los Tribunales de Justicia y de acuerdo a la ley, como corresponde en una democracia y un Estado de Derecho. Como he dicho anteriormente, no habrá impunidad.

I. ANTECEDENTES DEL ALZA DEL PASAJE DEL METRO DE SANTIAGO

Con fecha 4 de octubre de 2019, el Panel de Expertos del Transporte Público,¹ ente técnico y autónomo, informó de una nueva estructura tarifaria y determinó un aumento de tarifa al sistema de servicios subsidiados de buses, Metro y Tren Central (en adelante, **“Sistema de Transporte Público”**), en las comunas de San Bernardo, Puente Alto y las 32 comunas de la Provincia de Santiago. Este anuncio, que no responde a una decisión del Gobierno, se tradujo en el incremento de CLP \$30 de la tarifa del Metro de Santiago en su periodo punta y CLP \$10 para los buses, sin afectar las tarifas de estudiantes y adultos mayores. Este incremento se explicaba por la variación del precio del petróleo, el Índice de Precios al Consumidor, el incremento del costo de mano de obra, la tasa de cambio, entre otros; y se haría efectivo a contar del 14 de octubre.

Con ocasión de este anuncio, se produjo una serie de evasiones masivas en la red de Metro de Santiago, que se fueron incrementando a partir del lunes 14 de octubre del año en curso: en ocho estaciones de Metro ese día, once el 15 de octubre, veintidós el 16 de octubre y cincuenta y una el 17 de octubre, día en que se completaron acciones de esta naturaleza en noventa y dos estaciones de Metro.

A las referidas evasiones masivas, el jueves 17 de octubre se sumaron acciones de violencia, con ataques a cuatro estaciones de Metro. Una de ellas, “San Joaquín”, de la Línea 5 del Metro, terminó con todos sus validadores destruidos y la consecuente afectación del transporte para miles de ciudadanos, así como la seguridad de ellos. En vista de lo anterior, ese día, fue necesario cerrar nueve estaciones del tren subterráneo por disturbios y, a las 20:00 horas, fue necesario detener el funcionamiento de la Línea 1, luego de que algunos manifestantes que se encontraban al interior de un vagón activaron los frenos de emergencia en la estación “Los Héroes”. Ello generó una sensación de inseguridad, temor y caos entre los santiaguinos que intentaban regresar a sus hogares en Metro, medio de transporte que diariamente es usado por 2 millones 900 mil personas, con la evidente afectación a la libre circulación y la seguridad de los habitantes de la ciudad de Santiago.

Frente a la gravedad de estos hechos, se dispusieron servicios especiales por parte de Carabineros de Chile para resguardar las zonas de mayor riesgo para la seguridad de los ciudadanos, con dos turnos de 1.150 funcionarios cada uno. El único objetivo de esta acción fue proteger a los usuarios y funcionarios del Metro de Santiago frente a los actos de violencia.

II. HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019

El día siguiente, viernes 18 de octubre, la violencia sufrió un aumento exponencial durante la jornada, lo que fue profusamente difundido por los medios de comunicación. La fase crítica se experimentó pasada las 22:00 horas, como se detalla a continuación.

A las 7:30 a.m. del día 18 de octubre, Carabineros de Chile desplegó y distribuyó 1.172 funcionarios para la protección de funcionarios del Metro y sus usuarios. Pese a los

¹ Disponible en: <http://www.paneldeexpertostarifas.cl/>.

esfuerzos de Carabineros de Chile, se iniciaron nuevas manifestaciones acompañadas de actos de violencia, las que aumentaron exponencialmente durante el día.

A las 15:00 horas, el Metro suspendió el servicio de las Líneas 1 y 2, debido a los graves desmanes causados por grupos de manifestantes que participaban en las evasiones masivas para eludir el pago de dicho transporte. La empresa anunció, además, que este cierre sería indefinido mientras no se normalizaran las condiciones de seguridad, debido a las constantes agresiones de manifestantes violentos a los funcionarios de Metro y Carabineros de Chile, muchos de ellos al interior de las estaciones. Esta situación ponía en evidente riesgo la seguridad e integridad física tanto de los usuarios como los funcionarios de la empresa de transporte público. Además, comenzaron a producirse hechos de violencia y destrucción al interior de las estaciones. Metro reportó graves hechos simultáneos de violencia en 15 estaciones, y también de las vías, a las cuales los manifestantes lanzaron objetos contundentes como televisores y otros artículos electrónicos produciendo explosiones y destrozos en las líneas del Metro. Ante la grave afectación que esta situación produjo en el transporte público y como forma de resguardar el derecho de locomoción de los ciudadanos, la Red de Transantiago dispuso 40 buses de apoyo para reforzar los recorridos de las Líneas 1 y 2.

A las 16:00 horas de ese día, sostuve una reunión con la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Sra. Gloria Hutt, el Presidente del Metro, Sr. Louis de Grange, el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Sr. Andrés Chadwick y el Subsecretario del Interior, Sr. Rodrigo Ubilla, para analizar medidas de seguridad que adoptaría la empresa de transportes tras los ataques violentos a distintas estaciones.

A las 19:30 horas, con todas las líneas de Metro paralizadas, el Gobierno anunció la presentación de querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, contra quienes resultaren responsables y respaldó el actuar de Carabineros de Chile para que, con sus servicios reforzados, *“cumpla con su deber constitucional de proteger el orden público y la seguridad de las personas”*. Asimismo, se hizo un llamado a *“los chilenos y chilenas a unirse contra la violencia y actuar en conjunto contra los violentistas y aislarlos con el repudio de toda la ciudadanía, que cree en la paz”*.²

A las 22:00 se produjo un incendio en el edificio corporativo de ENEL, empresa productora y distribuidora de energía eléctrica y gas, ubicado en Santa Rosa con Padre Alonso de Ovalle, en pleno centro de la capital. El fuego, que se expandió por las escaleras del inmueble hasta el piso doce, ocurrió cuando aún se encontraban en el edificio setenta y cinco trabajadores, los que lograron ser evacuados sin registrarse heridos. La empresa calificó el incendio como intencional y atribuyó el origen del siniestro a sujetos desconocidos que se encontraban en el lugar, que lanzaron materiales sacados directamente de las barricadas incendiadas.

Entre las 23:00 horas y las 0:00 horas, sufrieron ataques incendiarios y resultaron quemadas siete estaciones del Metro de Santiago: “Trinidad”, “Elisa Correa” y “Macul” de la Línea 4, “Gruta de Lourdes”, “Barrancas” y “Laguna Sur” de la Línea 5 y “San Pablo” de Línea 1. Además, se registró la quema de un bus de la Red de Transantiago, en Vicuña Mackenna, y otro en Santa Rosa; un incendio y desmanes y destrozos afectaron la Facultad

² Disponible en: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/gobierno-invoca-ley-de-seguridad-del-estado-por-incidentes-en-el-metro/2019-10-18/193507.html>

de Odontología de la Universidad Mayor y se registró un saqueo a un local comercial en Plaza Italia. Todos estos hechos fueron transmitidos a la ciudadanía por los medios de comunicación.

A esa altura de la violenta jornada, resultó evidente que la dotación reforzada de Carabineros de Chile, que tenía desplegado en la calle un servicio especial de 1.300 efectivos, no era suficiente y fue sobrepasada por la magnitud, violencia y simultaneidad de los ataques. Hacia el final del día, los funcionarios de Carabineros de Chile lesionados eran 156; los civiles 15. Adicionalmente se registraron 92 eventos graves, 17 buses vandalizados y 49 vehículos policiales dañados. Cabe destacar en este punto que la decisión institucional fue mantener los servicios regulares de cada comisaría, pues una decisión distinta habría implicado desproteger la seguridad de la población en las comunas de nuestra capital.

III. LA DECISIÓN DE DECRETAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE EMERGENCIA SE ENCONTRABA PLENAMENTE JUSTIFICADA

Ante este complejo escenario de violencia extrema, y como único medio necesario para velar por el orden público y resguardar el goce de los derechos fundamentales de quienes se veían afectados por los saqueos, incendios y destrucción, ejercí mis facultades constitucionales en la forma prevista y decreté Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (en adelante, “**Estado de Emergencia**”), el cual, tras el trámite de rigor de toma de razón por la Contraloría General de la República y su publicación en el Diario Oficial con fecha 19 de octubre de 2019, comenzó a regir para las provincias de Santiago y Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo, de la Región Metropolitana.

La decisión de decretar el Estado de Emergencia recibió un apoyo político transversal, lo que demuestra claramente que esta medida era necesaria, acertada y justificada. Al respecto, numerosas autoridades, de todos los sectores políticos respaldaron esta decisión entre los que se encuentran don Jorge Burgos Varela, ex Ministro de Defensa Nacional (2014-2015) e Interior y Seguridad Pública (2015-2016),³ más de mil académicos y políticos por medio de una carta titulada “En defensa de la democracia”, incluyendo al Senador Felipe Harboe, el ex Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, la ex Ministra de Educación Mariana Aylwin y el ex Senador Fulvio Rossi, entre otros.⁴

A las 00:13 horas, del sábado 19 de octubre, realicé un punto de prensa para informar de esta situación al país, recalcando que el objetivo del Estado de Emergencia era resguardar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger a todas las personas y los bienes, tanto público como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas, que se habían visto seriamente afectados por la acción de verdaderos delincuentes, que están dispuestos a destruir una institución tan útil y necesaria, como es el Metro, y que además no respetan los derechos ni las libertades de nuestros compatriotas. En una democracia, un estado de Derecho, como el que con tanto esfuerzo hemos construido todos los chilenos en nuestro país, no debe haber espacio alguno para la violencia ni la delincuencia que conocimos ese día.

³ Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/jorge-burgos-exministro-del-interior-defensa-no-comparto-nada-la-critica-violacion-sistemica-derechos/885468/>

⁴ Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/defensa-la-democracia-la-carta-convergencia-liberal-donde-pide-dialogo-nacional/874879/>

Como Jefe de la Defensa Nacional, asumió el General de Ejército Javier Iturriaga, quien actuó de conformidad a las facultades que le otorga ley N° 18.415, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción (en adelante, “**LOC Estados de Excepción**”). Al momento de designar al Jefe de la Defensa Nacional, me reuní con él, acompañado del Ministro de Defensa Nacional, Sr. Alberto Espina, y el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Sr. Andrés Chadwick, para instruir la aplicación estricta de las Reglas de Uso de la Fuerza para los Estados de Excepción Constitucional a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, les encomendé que toda actuación del personal uniformado debía ajustarse a dichas reglas y los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público vigentes, en resguardo de los derechos humanos de todos los chilenos.

A las 1:16 AM, la Intendencia de la Región Metropolitana reportó un total de 18 estaciones de Metro con graves daños: “República”, “San Pablo”, “Vespucio Norte”, “Macul”, “Trinidad”, “San José de la Estrella”, “Los Quiyalles”, “Protectora de la Infancia”, “La Granja”, “San Ramón”, “Santa Julia”, “Gruta de Lourdes”, “Barrancas”, “Las Parcelas”, “Laguna de Pedreros”, “Cumming”, “San Joaquín” y “Pudahuel”.

A las 9:00 horas Carabineros de Chile informó que, durante la noche, 41 estaciones de Metro sufrieron severos daños, así como también 27 propiedades públicas y privadas. Adicionalmente, se produjeron saqueos a oficinas de Correos de Chile, farmacias, instituciones bancarias, estaciones de servicio, locales comerciales, supermercados, la Municipalidad de San Bernardo y comisarías. En la tarde del sábado 19 de octubre, al menos 6 buses del transporte público fueron incendiados en el centro de Santiago.

Los violentos hechos descritos, lamentablemente, se fueron expandiendo a otras zonas del país y obligaron al Gobierno a tomar nuevas medidas para velar por el orden público y resguardar la seguridad ciudadana. El mismo día 19 de octubre, entre las 14:00 y las 22:00, los ataques se repitieron en dos regiones del país. En la Región de Valparaíso, hubo ataques a tres estaciones del metro tren (Merval), saqueos en Valparaíso a supermercados, principio de incendios y daños a edificios públicos, fogatas y barricadas en las principales vías de la región. En el Gran Concepción, se verificaron saqueos a locales comerciales y a un supermercado del centro de la ciudad, un incendio en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (en adelante “**COMPIN**”) y el apedreo a la Intendencia del Biobío.

Alrededor de las 22:30 horas, en consideración a los hechos de extrema violencia y destrucción en ambas regiones y siguiendo los criterios anteriormente descritos, decreté Estado de Emergencia para la Región de Valparaíso (con excepción de la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández) y en la Provincia de Concepción, en la Región del Biobío. En ellas, fueron designados respectivamente, como Jefes de la Defensa Nacional el Contraalmirante Juan Andrés de la Maza y el Contraalmirante Carlos Huber, quienes determinaron aplicar *toque de queda* en las zonas bajo su mando. Al momento de decretar dichos Estados de Emergencia, me comuniqué telefónicamente con ambos Jefes de la Defensa Nacional, para reiterar el deber de aplicar las Reglas de Uso de la Fuerza y enmarcar toda acción militar en el debido respeto a los derechos humanos.

En la Región Metropolitana, dado los violentos saqueos y desmanes que seguían ocurriendo en diversos sectores de la capital, se extendió el Estado de Emergencia a toda la Región, y el Jefe de la Defensa Nacional decretó *toque de queda* para esa noche. Los

mencionados Jefes de la Defensa Nacional ejercieron su labor de conformidad a las facultades que la LOC Estados de Excepción les otorga.

IV. DESARROLLO DE LOS HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA

Como se ha señalado, la violencia se fue extendiendo aceleradamente a otras zonas del país. El vandalismo y los ataques incendiarios a bienes públicos y privados obligaron al Gobierno a decretar nuevos Estados de Emergencia, de conformidad a la Constitución: el domingo 20 de octubre, en la comuna de Antofagasta, la comuna de La Serena y Coquimbo, la comuna de Rancagua, la comuna de Talca, las comunas de Chillán y Chillán Viejo, las comunas de Temuco y Padre de las Casas, la comuna de Valdivia y la comuna de Punta Arenas. Igualmente, el lunes 21 de octubre, la Provincia de Iquique y la comuna de Pozo Almonte, en las comunas de Copiapó, Caldera y Vallenar, las comunas de Puerto Montt y Osorno. El martes 22 de octubre, se declaró en la comuna de Arica, y se extendió a las comunas de Tocopilla, Mejillones y Calama, y a la comuna de Puerto Natales.

Los respectivos Jefes de la Defensa Nacional, resolvieron aplicar *toque de queda*, como medida necesaria y legítima de resguardo a los derechos fundamentales de las personas, y asimismo para velar por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad en la zona, cuando el nivel de violencia así lo ameritaba y en forma proporcional, atendiendo a la severidad de los desmanes y ataques que se iban produciendo en cada jornada. Las medidas adoptadas permitieron prevenir y controlar en mejor medida los disturbios y actos vandálicos. De hecho, cuando la situación así lo fue permitiendo, se comenzó a levantar esta medida paulatinamente y el 26 de octubre, un día antes de que anunciara el fin de la declaración de Estado de Emergencia, en ninguna localidad del país se encontraba vigente esta medida.

El Gobierno que presido expresó públicamente y en reiteradas ocasiones que el Estado de Emergencia no se había decretado para impedir que las personas se manifestaran libremente, sino para impedir que los hechos de violencia extrema restringieran el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual de todos los chilenos. Evidencia de lo anterior es que entre el 19 y el 27 de octubre se realizaron 372 marchas pacíficas con alrededor de 2.583.580 manifestantes en total.⁵ Esto demuestra, claramente que, pese a que la Constitución permite restringir la libertad de reunión, durante el Estado de Emergencia dicho derecho fundamental se pudo ejercer con normalidad.

El 26 de octubre, antes de que se cumpliera el plazo de 15 días de vigencia que establece la Constitución, anuncié el fin del Estado de Emergencia en todo el país, que comenzaría a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 28 de octubre. Dicha decisión se basó en que, gracias al abnegado actuar de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, se había reducido significativamente la grave alteración al orden público en el país.

Cabe hacer presente que tanto la declaración del Estado de Emergencia como su término fueron debidamente notificados a la Organización de Estados Americanos, en

⁵ Según información del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

cumplimiento del artículo 22.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos denominada “Pacto San José de Costa Rica” (en adelante, “**CADH**”).⁶

A nivel país, según la información de Carabineros de Chile y las distintas Intendencias, durante el Estado de Emergencia hubo 487 saqueos a supermercados y centros comerciales, daños a 84 entidades comerciales y 74 entidades financieras. También ocurrieron severos daños a la propiedad pública: 27 buses del Transantiago quemados y 741 vandalizados; 12 municipalidades con daños por incendios y ataques (Calama, Copiapó, Villa Alemana, Quilpué, Olmué, Catemu, Cabildo, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Valdivia y Coihayque); cuatro intendencias con destrozos (Valparaíso, Tarapacá, Atacama y Los Ríos) y tres gobernaciones con daños y destrozos (Arica, San Antonio y Osorno); servicios de utilidad pública con daños y destrozos en todo el país (notarías, oficinas del Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, Fiscalía, antenas de telecomunicaciones, entre otros), así como destrozos y daños en cuarteles y vehículos policiales. Particularmente grave resulta el intento de incendio al nuevo hospital Félix Bulnes que se encuentra en la comuna de Cerro Navia.

Al 28 de octubre de 2019, se produjeron 1.227 eventos graves de los cuales resultaron lesionados 745 funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas; y 473 civiles lesionados, según la información consolidada de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, publicada en la Subsecretaría de Derechos Humanos.⁷

V. DESARROLLO DE LOS HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD AL ESTADO DE EMERGENCIA

Una vez levantado el Estado de Emergencia han seguido ocurriendo hechos graves de violencia que han requerido de un enorme esfuerzo, por parte de Carabineros de Chile, para resguardar el orden público. Al 3 de diciembre se han producido 2.488 eventos graves, el número de funcionarios lesionados de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas ascendían a 2.664, y 1.277 civiles lesionados.⁸ Según información de Carabineros de Chile, a esa fecha se han producido 740 ataques a vehículos policiales, 137 ataques a estaciones de Metro, 243 ataques a cuarteles policiales. Se han producido 947 saqueos y 279 incendios, resultando afectados 831 locales comerciales, 389 supermercados, 287 edificios públicos y 86 establecimientos educacionales.

El pasado 22 de noviembre dependencias del Hospital San Pablo en Coquimbo fueron incendiadas y saqueadas, millonarias pérdidas y un tremendo daño a sus funcionarios y usuarios.

Adicionalmente, estos hechos de violencia han afectado directamente los derechos y la vida de las personas, no solo en sus posibilidades de desarrollar su vida con seguridad y

⁶ Nota diplomática Número 155/19, al Secretario General de la OEA, de fecha de fecha 21 de octubre de 2019, notifica estado de excepción constitucional y Nota diplomática número 162/19 al Secretario General de la OEA, de fecha 28 de octubre de 2019, notifica el término de todos los estados de excepción en el país.

⁷ Disponible en: <http://ddhh.minjusticia.gob.cl/informacion-sobre-la-situacion-del-pais-desde-el-19-de-octubre>

⁸ Disponible en: <http://ddhh.minjusticia.gob.cl/informacion-sobre-la-situacion-del-pais-desde-el-19-de-octubre>

dignidad, sino también en la permanencia en sus trabajos y la mantención de sus fuentes de ingresos. Así, de acuerdo a información entregada por la Cámara de Comercio de Santiago, al día 21 de noviembre de 2019, los costos en destrucción de capital se estiman entorno a los US\$1.500 millones, de los cuales US\$ 601 millones corresponden a pérdida de capital público, y entre US\$ 409 y US\$ 507 millones corresponden a empresas de diferentes rubros, entre las que se encuentran miles de pequeñas y medianas empresas. Lo anterior resulta especialmente grave considerando su impacto en las oportunidades de trabajo. Al 21 de noviembre, según datos entregados por la referida Cámara de Comercio, se estimaban entorno a los 100.000 los empleos potencialmente afectados, solo en el sector comercial. Esta situación probablemente se verá agravada, considerando el IMACEC de -3,4% del mes de noviembre que conocimos con fecha 2 de diciembre.

Los hechos de violencia han llegado incluso a dañar instalaciones e infraestructura pública de salud, afectando directamente la salud y condiciones de vida las personas. Así, por ejemplo, de acuerdo a información entregada por el Ministerio de Salud, al 2 de diciembre, se registraban daños en 30 establecimientos de atención médica, cuyos daños sumaban un total de \$1.504.292.275, producto de incendios, saqueos, apedreos, puertas forzadas y otros destrozos interiores. Como consecuencia, más de 12.000 cirugías han tenido que ser pospuestas, se han perdido más de 300.000 consultas de especialidad y las listas de espera han aumentado en 12 mil atenciones. Algunos casos que resultan especialmente graves son los destrozos a la COMPIN de la ciudad de Concepción, donde el 70% del inmueble se encuentra afectado o las oficinas de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, donde el 15% del inmueble se encuentra inutilizado.

En este contexto, junto con disponer de todos los medios en el marco de la Constitución y la ley para resguardar el orden público, he liderado la acción del Gobierno entorno a la creación e implementación de una Agenda Social y a una Agenda de Orden y Seguridad Pública; asimismo hice un llamado a todos los chilenos y chilenas a un Acuerdo por la Paz, la Justicia Social y la Nueva Constitución; convoqué al Consejo de Seguridad Nacional (en adelante “COSENA”), se han adoptado diversas medidas para que se determine la responsabilidad que pudiere existir en casos de abusos o delitos, y he conducido una política de total transparencia y colaboración con los organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Recientemente anuncié una Agenda de Impulso Económico y Protección del Empleo.

a) AGENDA SOCIAL

Miles de compatriotas se manifestaron pacíficamente en las calles, expresando sus anhelos, carencias y sueños, con una voz clara y fuerte. Con el propósito de hacernos cargo de dichos planteamientos, nos reunimos con diversas organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil, alcaldes, parlamentarios y las más altas autoridades de los Poderes del Estado, para escuchar sus opiniones y avanzar en propuestas concretas. Así, el 22 de octubre de 2019, a menos de una semana del estallido de la crisis y con sentido de urgencia, di a conocer las primeras 15 medidas de una Nueva Agenda Social, para responder a las urgencias, necesidades y esperanzas de toda la ciudadanía. Entregar soluciones a las demandas sociales de las chilenas y chilenos ha sido una de las prioridades de mi Gobierno desde sus inicios, con importantes programas como el Acuerdo por la Infancia, Compromiso País, Programa Adulto Mejor, Programa Código Azul, la ampliación del plan AUGE y la Red Clase Media Protegida. Todo por un Chile más libre, justo y solidario. Después de estas primeras 15 medidas se han ido incorporado nuevas iniciativas a la

Agenda Social que buscan reducir las desigualdades y los abusos, avanzando hacia una sociedad más justa con oportunidades y seguridades para todos los chilenos.

Las iniciativas se concentran en las áreas que son más sentidas por los chilenos y en las cuales a través de políticas públicas se pueden hacer grandes avances, estas son: mejorar las pensiones, contener el alza en el precio de los medicamentos y servicios básicos, subir el ingreso mínimo de los hogares, reducir la desigualdad territorial, bajar los privilegios de la clase política y ayudar a las Pymes e impulsar la reconstrucción del país.

Se estima que la Agenda Social tendrá un costo superior a los 1.200 millones de dólares, los cuales se recaudarán a través de un aumento en los ingresos permanentes del Estado, subiendo la tasa de impuesto, agregando un nuevo tramo en el impuesto a la renta y gravando las propiedades que tengan un avalúo fiscal sobre los 400 millones de pesos. Además, se rescatarán recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social (“FEES”), para poder enfrentar los gastos transitorios de reconstrucción.

La Agenda Social impactará en la vida de todos los chilenos, aunque está enfocada en favorecer especialmente a 2,6 millones de adultos mayores, directamente con sus pensiones y con sus fuentes de gasto diario, como el transporte y los medicamentos, así como a los trabajadores más vulnerables, con medidas que aumenten sus ingresos.

Los avances en la Agenda se indican a continuación:

#	Iniciativa	¿En qué consiste la medida?	Estado
1	Mejores Pensiones de los adultos mayores del Pilar Solidario	La medida busca fijar un plan para subir en un 50% los beneficios de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Voluntarios. El aumento será gradual hasta llegar al 50% en enero de 2022. Beneficiarios de la medida: 1,6 millones de beneficiarios del Pilar Solidario.	Proyecto de ley que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias, Boletín N° 13.091-13, en segundo trámite constitucional.
2	Mejora las pensiones de todos los adultos mayores	Incrementar el aporte del Estado para la clase media y mujeres, así como el aumento de la cotización individual en un 5%, destinándose una parte a la solidaridad del sistema. Beneficiarios de la medida: 2.6 millones de pensionados.	Proyecto de ley que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica, Boletín N° 12.212-13, en primer trámite constitucional.
3	Seguro de enfermedades catastróficas	Establece una cobertura financiera especial para cubrir todas las prestaciones necesarias de una enfermedad de alto costo, permitiendo un gasto máximo anual de bolsillo . Los más vulnerables (A) pagarán un deducible de 752 mil pesos, y los de clase media (B, C y D) 1.444.800. Beneficiarios de la medida: Todos los beneficiarios de Fonasa y sus cargas (12 millones de personas), con el único requisito de estar en Fonasa al menos 6 meses previos a activación del seguro.	Proyecto de ley que crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA, Boletín N° 12.662-11, en segundo trámite constitucional.
4	Convenio de medicamentos para usuarios de Fonasa	Fonasa ha diseñado un plan para que sus afiliados accedan a precios preferenciales en medicamentos. Se esperan reducciones cercanas al 30% en algunos medicamentos , mientras que en promedio se estima que por cada 10% de descuento, los beneficiarios se ahorrarán más de 40 mil millones de pesos al año. Licitación próxima a adjudicarse. Beneficiarios de la medida: 12 millones de personas adscritas a Fonasa.	Medida en ejecución.
5	Intermediación de Cenabast para venta de medicamentos	Otorga a Cenabast la posibilidad de vender medicamentos a: 1) una farmacia o almacén farmacéutico de menor tamaño;2) a aquella farmacia ubicada en una comuna en que no hay más farmacias; 3) donde haya inaccesibilidad a medicamentos, así calificadas por los Ministros de Salud y Hacienda. Beneficiarios de la medida: Toda la población podrá acceder a los medicamentos licitados por Cenabast con	Proyecto de ley que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, Boletín N° 13.027-11, en segundo trámite constitucional.

#	Iniciativa	¿En qué consiste la medida?	Estado
		precio regulado. Las farmacias independientes (pequeñas) representan el 20% del mercado.	
6	Ingreso Mínimo Garantizado	Subsidio por parte del Estado para los trabajadores de jornada completa que reciben menos de \$350.000 para que su ingreso alcance esta suma. Beneficiarios de la medida: 668 mil trabajadores dependientes	Proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, Boletín N° 13.041-13, en primer trámite constitucional.
7	Modernización Tributaria para las pymes, adultos mayores y clase media.	Este proyecto aumentará los impuestos del 1% de los contribuyentes de mayor renta, incorporando un nuevo tramo en el impuesto a la renta del 40%, y creando un nuevo impuesto a los activos de alto valor (sobre 400 millones). El proyecto también contempla beneficios como reducir las contribuciones de los adultos mayores. Beneficiarios de la medida: Se estima que se beneficiarán cerca de 100 mil Adultos Mayores con la rebaja de las contribuciones.	Proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria, Boletín N° 12.043-05, en segundo trámite constitucional.
8	Creación defensoría de las víctimas	Institución que permita facilitar el acceso y fortalecer la defensa jurídica y apoyo social y psicológico a las víctimas de la delincuencia. Beneficiarios de la medida: 93 mil personas víctimas de delitos violentos.	Propuesta en elaboración.
9	Cambiar Fondo Común Municipal	Busca una mayor justicia territorial, estableciendo mayores aportes de las comunas de mayores ingresos. Esto permitirá una mayor equidad en la provisión de servicios municipales. Beneficiarios de la medida: 10 millones de habitantes de comunas de bajos ingresos.	Propuesta en elaboración.
10	Reducción de la dieta de los parlamentarios	La iniciativa busca reducir la dieta de los parlamentarios.	Se impulsa vía urgencia al proyecto de ley tramitado bajo el Boletín N° 9304-07, en segundo trámite constitucional.
11	Reducción Número de Parlamentarios	El aumento de parlamentarios ha significado un fuerte gasto para el Estado (\$5.273315.964 para el 2019 por los 40 parlamentarios que ingresaron al Congreso), por lo que esta iniciativa busca reducir el número de parlamentarios.	Se impulsa vía urgencia al proyecto de ley tramitado bajo el Boletín N° 11.692-07, en primer trámite constitucional.
12	Limite a la reelección	La iniciativa genera un aumento de competencia en el ingreso de nuevos parlamentarios, limitando la reelección indefinida. Hoy el candidato desafiante está en desventaja frente a quien busca la reelección, entre otras razones, por la exposición pública de cargo.	Se impulsa vía urgencia al proyecto de ley tramitado bajo el Boletín N° 4.115-07, en segundo trámite constitucional.
13	Acelerar Tramitación Servicio de Protección de la Niñez	Este proyecto se hace cargo de la dejada situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes vulnerables y vulnerados del país, reformando por completo el fracasado modelo del Sename para dar a la infancia de Chile un trato justo. Beneficiarios de la medida: 142 mil niños, niñas y adolescentes.	Se encuentra con urgencia suma en segundo trámite constitucional. (Boletín N° 12.027-07)
14	Acelerar Servicio de Reinserción Juvenil	Con esta iniciativa, el Estado se hará cargo de adolescentes infractores de la ley penal, para su tan necesaria reinserción en la sociedad. Beneficiarios de la medida: 9 mil adolescentes en justicia juvenil.	Se encuentra con urgencia suma en primer trámite constitucional. (Boletín N° 11174-07)
15	Acelerar tramitación de Sala Cuna	Beneficio para madres trabajadoras y niños de dichas madres. El proyecto busca poner fin a la discriminación de establecer Sala cuna en empresas de 20 mujeres. Para esto se entregará un monto de beneficio a las mujeres trabajadoras de 5,14 UTM (\$253 mil) mensuales y una matrícula anual del mismo valor, para permitir que los hijos de estas madres accedan al cuidado y estimulación temprana en las Salas Cunas. Beneficiarios de la medida: 100 mil niños aproximadamente.	Se encuentra con urgencia simple en primer trámite constitucional. (Boletín N° 12.026-13)
16	Plan de Reconstrucción de espacios públicos	Se anunció el plan de recuperación de espacio público y semáforos con un presupuesto de más de \$17.000 millones para enfrentar la reconstrucción de Chile.	Medida en ejecución.
17	Adelanta pago a 30 días	Considerando la delicada situación de las pymes el proyecto busca adelantar la entrada en vigencia de la obligación de pago a 30 días que establece la ley 21.131 de febrero 2021 para concretarlo en un plazo de tres meses de entrada en vigencia de la presente ley. Beneficiarios de la medida: Esto beneficiaría a 900 mil micro, pequeñas y medianas empresas	El proyecto ya se aprobó por el H. Congreso Nacional y se encuentra en el trámite de promulgación y publicación. (Boletín N° 13.045-03)
18	Plan levantemos tu Pyme.	Este plan coordinado con el Ministerio de Economía incluye: Mayor flexibilidad financiera, facilidades para enfrentar obligaciones tributarias, campañas para comprar en Pymes, Subsidios y préstamos blandos, y	Medida en ejecución.

#	Iniciativa	¿En qué consiste la medida?	Estado
		asesorías financieras gratuitas. Beneficiarios de la medida: Esto beneficiaría a 900 mil micro, pequeñas y medianas empresas	
19	Bono extraordinario mes de diciembre	La propuesta propone entregar, a las familias de mayor vulnerabilidad social, un bono de \$50.000.- por cada causante de subsidio familiar o de asignación familiar. El beneficio se entregaría por una vez, al mes de diciembre del presente año. Beneficiarios de la medida: Esto beneficiaría a más de un millón de hogares, aproximadamente 3.200.000 personas individuales.	Proyecto de ley en elaboración
20	Rebaja 50% la tarifa de transporte público para adultos mayores	El Ejecutivo se compromete a rebajar un 50% de tarifa normal vigente al 1 de noviembre 2019, para el 100% de los adultos mayores de 65 años pensionada, en todos los servicios de transporte público mayor remunerado de pasajeros. Beneficiarios de la medida: 2.000.000 adultos mayores.	El proyecto ya se aprobó por el H. Congreso Nacional y se encuentra en el trámite de promulgación y publicación. (Boletín N° 12.097-15)

Esta Agenda Social ya ha dado sus primeros frutos, incluso con importantes leyes ya aprobadas y publicadas en el Diario Oficial:

- § La ley N° 21.184, que faculta al Presidente de la República para dejar sin efecto o limitar un alza de tarifas en el transporte público de pasajeros del Metro de Santiago, que permitió revertir el alza que se había experimentado a principios de octubre de este año.
- § La ley N° 21.185, que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, la cual permitió además anular la reciente alza de 9,2% de la electricidad, retrotrayendo el valor de las tarifas eléctricas al nivel del primer semestre de este año.
- § La ley N° 21.187, que realizó un aumento extraordinario de capital del Banco Estado por hasta US\$ 500 millones, a fin de ampliar la capacidad crediticia de la entidad asegurando el acceso al financiamiento de personas y pymes.
- § La Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020 consideró los recursos necesarios para el incremento del monto de la pensión básica solidaria de vejez y el monto de la pensión máxima con aporte solidario.

b) AGENDA DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

Dada la continuidad de los actos vandálicos y de violencia que se siguieron desarrollando a lo largo del país, alterando gravemente el orden público, con fecha 7 de noviembre impulsé una Agenda de Orden y Seguridad Pública con el objeto de relevar el sentido y urgencia a determinados proyectos de ley relacionados con las policías, la seguridad y el orden público. En ningún caso, estas medidas tienen por objeto reprimir las legítimas demandas de la ciudadanía, como señalan los acusadores, sino que resguardar el orden público.

Esta agenda está conformada por diversas medidas que buscan: 1) modernizar las instituciones policiales para hacerlas más transparentes y eficientes para resguardar el orden público, en una cultura institucional de respeto a los derechos humanos; 2) fortalecer el sistema nacional de inteligencia; 3) entregar más y mejores herramientas para defender el

Estado de Derecho y la democracia, fortaleciendo la persecución penal frente a las barricadas, acción de encapuchados y saqueos; 4) permitir que las Fuerzas Armadas puedan proteger infraestructura crítica colaborando en el resguardo de la seguridad nacional.

§ Medidas para modernizar las instituciones policiales

Proyecto	Descripción	Estado
Especialización de las Policías	Este proyecto considera la especialización preferente en las funciones policiales, reforzando la orientación de Carabineros en prevención y protección, y de la PDI en investigación, junto con una mayor estandarización y coordinación de los procesos de trabajo de las policías. El objetivo del proyecto es que las policías sean capaces de entregar un servicio óptimo y eficiente a la ciudadanía y combatir contra la delincuencia y garantizar seguridad.	Boletín 12.699-07 Actualmente en primer trámite constitucional, con urgencia suma.
Modernización de las policías	Se trata de uno de los proyectos ingresados con el objeto de modernizar las policías y permitir un mejor funcionamiento de las mismas para realizar oportuna y efectivamente la labor de seguridad que requiere la ciudadanía. Este proyecto tiene por objeto fortalecer los mecanismos de transparencia de la gestión de las Fuerzas de Orden, fortaleciendo la cultura institucional de respecto a los derechos humanos, aumentar los estándares de probidad y transparencia, así como el control institucional, gubernamental y ciudadano de la gestión operativa y financiera de Carabineros y miembros de la Policía de Investigaciones.	Boletín 12.250-25 Actualmente en segundo trámite constitucional, con urgencia suma.

§ Medidas para Fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional (SIE)

Proyecto	Descripción	Trámite
Modernización del Sistema de Inteligencia	El Proyecto busca reformular el SIE en su organización y funcionamiento para avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional, que reúna a diversos actores en servicio de la protección de la soberanía, seguridad, y bienestar de la nación. Se incorporan nuevos organismos e instituciones afines al trabajo preventivo de inteligencia y se estimulan las competencias del personal a cargo de ella, como el Consejo Asesor de Inteligencia, se fortalece el rol del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y se incrementa la capacidad de producir inteligencia de Estado por parte de todos los actores y niveles; obligando a un modelo colaborativo, sancionando el incumplimiento al deber de contribuir con información al SIE y la violación de su secreto.	Boletín 12.234-02 Actualmente en primer trámite constitucional, con urgencia de discusión inmediata.

§ Medidas para entregar mayores herramientas para la labor policial en resguardar el orden público

Proyecto	Descripción	Trámite
Ley Antibarricadas	La moción busca disminuir o terminar con las barricadas y la acción de encapuchados que afectan gravemente el orden público y el derecho de los ciudadanos a movilizarse libremente por la ciudad. El proyecto endurece las penas contra quienes turben gravemente el orden público, sancionando con delito, necesario la cotidianeidad y gravedad de los hechos.	Boletín 13.050-25 Actualmente en primer trámite constitucional, con urgencia de discusión inmediata.
Ley Antisaqueos	El Proyecto aumenta la pena máxima (3 años y un día a 5 años) en caso que se realice el robo en lugar no habitado actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él, en el marco de calamidad pública o alteración del orden (saqueo). Además, para estos casos se restringe el cumplimiento en libertad de las condenas por estos delitos, al igual que para la obtención del beneficio de la libertad condicional.	Boletín 13.044-25 Actualmente en primer trámite constitucional, con urgencia de discusión inmediata.
Ley Antienchapuchados	La moción busca incorporar una serie de modificaciones a nuestra legislación penal para sancionar más fuerte y eficazmente a quien	Boletín 12.894-07 Actualmente en primer

	se cubra el rostro para ocultar su identidad y cometer delitos. Esto significa que, establece como agravante general de los delitos contra las personas, el utilizar capuchas con el objeto de ocultar la identidad.	trámite constitucional, con urgencia de discusión inmediata.
Uso de menores en delitos	Proyecto iniciado por senadores de oposición que tiene por fin castigar al mayor de edad que incite o fuerce a un menor a cometer un delito. La moción es atingente a la grave alteración del orden público que ocurre en cada movilización y el creciente número de menores de edad que participan en estas.	Boletín 11.958-07. Actualmente en primer trámite constitucional, con urgencia simple.
Creación de Equipo Especial para Interposición de Querellas Criminales y Tramitación de Causas Penales	Sa refiere a la creación de un Equipo de especialistas abogados que permitan interponer querellas criminales y tramitar causas penales. Esto permitirá incrementar las competencias del Estado para combatir los hechos de violencia y atentados graves que alteren el orden público y afecten la vida libre de las personas.	Medida administrativa en curso.
Creación de Equipo Especial de Investigación preventiva.	Se trabaja en la creación de un Equipo integrado por la Fiscalía, Carabineros y PDI. Esto tiene por objeto aunar y destinar esfuerzos coordinados en el trabajo de Inteligencia Policial Preventiva e Investigativa para enfrentar casos de saqueos, destrucción y vandalismo como los ocurridos en el contexto de las movilizaciones y jornadas de protesta violenta.	Medida administrativa en curso.
Aumento Significativo de la Capacidad de Vigilancia Aérea	Medida que está puesta en marcha en la RM, que permitió más que duplicar (de 7 a 17) los drones de la Intendencia Metropolitana. Se suman a ello planes especiales de vuelo para reforzar la capacidad operativa de nuestras policías.	Medida administrativa en curso.
Fortalecimiento de la capacidad de denuncias para mejorar el accionar policial.	Mejorar los canales de recepción de denuncias tanto en Carabineros como Policía de Investigaciones para mejorar la labor preventiva y de investigación de ambas policías. En estas se considera canales de Whatsap, mail y Comisaria Virtual, entre otros.	Medida administrativa en curso.
Estatuto de Protección para Carabineros, PDI y Gendarmería	El Gobierno ha anunciado el ingreso de un proyecto de ley para asegurar la proyección de Carabineros, PDI y Gendarmería. Comprometidos con la defensa de la labor policial, en conjunto con su modernización y fortalecimiento, se requiere resguardar a funcionarios policiales de actos en su contra en el ejercicio de sus labores. Será en el caso de homicidio, lesiones, castraciones y mutilaciones, amenazas o resistencia violenta, daños e incitación a la violencia.	En proceso de elaboración.
Reintegración de funcionarios con retiro reciente	El Gobierno anunció el reintegro a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones a quienes hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado con la finalidad de aumentar la capacidad de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Se estima que cerca de 1.000 funcionarios podrían incorporarse a sus antiguas labores y así reforzar el trabajo en el resguardo del orden público.	Medida administrativa en curso
Anticipo del egreso de las escuelas de formación	El Gobierno anunció el adelanto del egreso de las escuelas de formación de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para tener en diciembre de este año 2.500 nuevos efectivos	Medida en curso

§ Rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz

Proyecto	Descripción	Trámite
Rol de las Fuerzas Armadas en resguardo de infraestructura crítica.	Con el propósito de resguardar el orden público, brindar garantías y seguridad para las familias, las pymes y los ciudadanos, se ingresó del proyecto que permitirá a las FFAA, colaborar en la protección de la infraestructura crítica del país, tales como abastecimiento eléctrico, de hídrico, hospitales, comisarías, entre otros, sin necesidad de decreto de emergencia o restricciones a la libertad. Considerando el escenario actual de Chile de más de 4.200 saqueos	Boletín N° 13.088-02 Actualmente en primer trámite constitucional, con urgencia de discusión inmediata.

	reportados a la fecha, 20 ataques a comisarías en un solo día y cientos de hechos graves de violencia diarios, muchos de los cuales han sido contra infraestructura pública y privada, se considera relevante esta medida, que encuentra evidencia comparada que avala y promueve, en países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, España, República Checa, Irlanda, Canadá, entre otros.	
--	---	--

c) CONVOCATORIA AL COSENA

Con fecha 7 de noviembre de 2019, y al tenor del artículo 106 de la Constitución, convoqué a una sesión del COSENA, institución que asesora al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional .Participaron el Presidente del H. Senado, el Presidente de la H. Cámara de Diputados, el Presidente de la Excma. Corte Suprema, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, el Comandante en Jefe de la Fuerza Área de Chile, el General Director de Carabineros de Chile y el Contralor General de la República. Adicionalmente, estuvieron presentes el Ministro del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de la Defensa Nacional.

En dicha reunión, di cuenta de las medidas adoptadas por el Gobierno para recoger las preocupaciones de la ciudadanía, a través de la Agenda Social y de la Agenda de Seguridad Ciudadana. En relación a la declaración del Estado de Emergencia, hice presente las medidas preventivas y correctivas adoptadas para resguardar que la actuación de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública se enmarcara en la debida protección de los derechos humanos de las personas. Sobre esta materia se informó a las autoridades presentes de las medidas concretas adoptadas por el Gobierno, entre las que se encontraban: (i) reuniones presenciales y telefónicas con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante en Jefe del Ejército y los Jefes de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, Región de Valparaíso y Región del Biobío, con la clara instrucción de aplicar en forma estrictas las Reglas de Uso de Fuerza; (ii) reunión con el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante, “**INDH**”), a fin de facilitar toda la colaboración necesaria y pleno acceso a todos los lugares y recintos en el cumplimiento de sus labores, subrayando el pleno respeto a su autonomía; (iii) reforzamiento de la Defensoría Penal Pública; (iv) contacto con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la ONG *Human Rights Watch*, para que enviaran misiones de observación en terreno a nuestro país; (v) una política de total transparencia en la información sobre eventos graves, detenidos, lesionados y fallecidos; (vi) comunicaciones con el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia enfatizando su autonomía y la importancia de su labor.⁹

Adicionalmente, consta en el acta de dicha sesión lo señalado por el General Director de Carabineros, en el sentido de que: “*Señala que el Presidente de la República le pidió cumplir con la misión de la Institución, con la advertencia de que debe hacerse con respeto irrestricto a los derechos humanos.*”¹⁰

⁹ Acta de sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 7 de noviembre de 2019, pp. 2-3. Disponible en: <https://prensa.presidencia.cl/fotonoticia.aspx?id=134638>

¹⁰ Acta de sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 7 de noviembre de 2019, p. 5. Disponible en: <https://prensa.presidencia.cl/fotonoticia.aspx?id=134638>

d) LLAMADO AL ACUERDO POR LA PAZ, POR LA JUSTICIA SOCIAL Y POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Adicionalmente, con el fin de abordar las peticiones de las manifestaciones ciudadanas y avanzar en una respuesta a ellas, hice un llamado a iniciar tres grandes acuerdos nacionales: un Acuerdo por la Paz, un Acuerdo por la Justicia Social y un Acuerdo por una Nueva Constitución. Así lo anuncié a todos los chilenos y chilenas, con fecha 12 de noviembre, y luego con fecha 17 de noviembre, en ambas ocasiones, a través de cadena nacional.

En relación al Acuerdo por la Paz, señalé la necesidad de que éste incluyera tanto la recuperación del orden público, como de la amistad cívica entre los chilenos, y el respeto de los derechos humanos de todos. En relación al Acuerdo por la Justicia Social, indiqué la voluntad del Gobierno que presido, materializada en hechos concretos, de avanzar con sentido de urgencia en hacernos cargo de las necesidades más sentidas de las familias de clase de media. Por último, en relación al Acuerdo por una Nueva Constitución, valoré el acuerdo político alcanzado por los parlamentarios la madrugada del viernes 15 de noviembre, el que incluye un plebiscito de entrada, la elección de los representantes que integrarán el órgano constituyente, y un plebiscito de salida o ratificadorio, en que los ciudadanos tendrán la última palabra sobre nuestra Constitución.¹¹

e) AGENDA DE IMPULSO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO

De acuerdo a un catastro realizado por el Ministerio de Economía, Fomento y Producción, entre el 24 de octubre y el 31 de octubre pasado, se afectaron directamente a micro, medianas y pequeñas empresas en 276 comunas a lo largo de todo el país. De un total de 6.791 empresas catastradas, 4.782 reportaron siniestros que implican deterioros significativos en su infraestructura, equipamiento y mercadería, así como impacto en su capital de trabajo.

Teniendo en consideración lo anterior, y la grave situación económica que afecta al país actualmente, producto de los hechos de violencia y destrucción que han afectado seriamente nuestra economía, el Gobierno anunció una Agenda de Impulso Económico y Protección del Empleo, con fecha 2 de diciembre pasado.

A modo de ejemplo, se destinarán US\$ 1.950 millones a medidas directas en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas (“**MiPYMES**” en su conjunto), que incluyen facilidades para el acceso a financiamiento, subsidios, y medidas de alivio tributario.

Por otra parte, se han dispuesto medidas enfocadas en MiPYMES cuya principal dificultad ha sido la ausencia de ventas, entre las que se encuentran la posibilidad de postergar el pago del IVA sin ningún tipo de recargo, acceder anticipadamente a la devolución del impuesto a la renta y ampliar, y facilitar el acceso al financiamiento a través de nuevos aportes al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. Adicionalmente, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento asesorará en forma gratuita a las Pymes afectadas en materias legales y financiero contables.

¹¹ Discurso Presidencia, 17 de noviembre de 2019. Disponible en: <https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=134637>

También se contemplan medidas de apoyo por parte de la Corporación de Fomento de la Producción (“**CORFO**”) y del Servicio de Cooperación Técnica (“**Sercotec**”) hacia aquellas MiPYMES que sufrieron daño material en su infraestructura, maquinarias y equipos y/o mercadería. Para ellas, CORFO y Sercotec ofrecerán un subsidio especial de emergencia, que alcanza un monto total de alrededor de 13.250 mil millones de pesos.

Como es lógico, todas estas medidas tienen un carácter transitorio, y no pretenden ser una solución definitiva a los desafíos que enfrentan las familias chilenas. Sin embargo, también es evidente que ellas son una ayuda necesaria en el contexto actual.

VI. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y ESTE PRESIDENTE EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Como se desarrollará latamente en el Capítulo [VI] de esta contestación, el Gobierno y este Presidente de la República han cumplido íntegramente todos sus deberes y obligaciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos, en todo cuanto se encuentra dentro de la esfera de sus atribuciones.

En ese sentido, el Gobierno y este Presidente han adoptado, y continuaremos adoptando, una serie de medidas preventivas y correctivas en materia de derechos humanos. Todas las medidas y acciones adoptadas dan cuenta del compromiso claro e irrestricto de este Presidente y del Gobierno por la protección y el pleno respeto de los derechos humanos, en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier contexto.

§ Medidas preventivas adoptadas antes de los hechos del 18 de octubre de 2019

Medida	Descripción	Estado
Ley que designa al INDH como mecanismo nacional de prevención contra la tortura	- El Gobierno impulsó la tramitación del proyecto de ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, actual ley N° 21.154.	Ley N° 21154, publicada en el Diario Oficial el 25 de abril de 2019.
Plan Nacional de Derechos Humanos (“PNDH”)	- En marzo de 2012, este Presidente ingreso al H. Congreso el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, actualmente ley N° 20.885. Entre las funciones de la nueva Subsecretaría se contempla la elaboración e implementación del PNDH. - El PNDH contempla 15 capítulos y 604 acciones, y existe un capítulo enfocado expresamente en la educación en derechos humanos del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, dentro del cuales se establecen diversas medidas a adoptar en la materia.	El PNDH fue aprobado por decreto supremo N° 368, de fecha 9 de julio de 2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y actualmente se encuentra en la Contraloría General de la República en el trámite de toma de razón.
Dirección de Derechos Humanos en Carabineros de Chile	- El año 2019, el Gobierno creó la Dirección de Derechos Humanos en Carabineros de Chile, la cual tiene dentro de sus funciones diseñar, ejecutar, y supervisar la implementación Institucional de las políticas, planes, programas y normativas que establecen las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos en la función policial. - Adicionalmente, recae en esta Dirección la tarea de responder a los requerimientos relativos a derechos humanos que se soliciten a Carabineros de Chile por parte de organizaciones civiles u otros organismos del Estado.	Se creó mediante la Orden General de la Dirección General de Carabineros de Chile N° 2.640, de fecha 29 de marzo de 2019.

Medida	Descripción	Estado
Regulación del uso de la fuerza	<ul style="list-style-type: none"> - El decreto supremo N° 1.364, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. - El decreto referido estableció un conjunto de lineamientos generales en el uso de la fuerza pública plenamente coherente con los estándares nacionales e internacionales, y además contempló las disposiciones necesarias para que dichos lineamientos fueran efectivamente respetados e incorporados en las instrucciones dirigidas al personal de Carabineros de Chile, haciendo partícipe de dicho proceso a la sociedad civil y al INDH. - Asimismo, el Gobierno realizó todas las gestiones pertinentes para materializar la actualización de la Orden General N° 2.287 y la Circular N° 1.756, proceso en el cual participaron activamente el INDH, el Consejo de la Sociedad Civil que asesora a la Subsecretaría del Interior y la Defensoría de la Niñez. - Este proceso concluyó con fecha 1 de marzo de 2019, con la dictación, por parte del General Director de Carabineros, de la Circular 1.832, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza y la nueva Orden General N° 2.635, que actualiza los protocolos para la mantención del orden público, ambas publicadas con fecha 4 de marzo de 2019 en el Diario Oficial. 	Las reglas del uso de la fuerza se materializaron con la dictación del decreto supremo N° 1.364, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial con fecha 4 de diciembre de 2018.
Curso de instructores en derechos humanos en Carabineros de Chile	<ul style="list-style-type: none"> - En materia de formación de Carabineros de Chile en temáticas de derechos humanos, se ha mantenido y fortalecido el curso de Instructores en Derechos Humanos en la Función Policial de Carabineros de Chile. 	En ejecución. El curso se inició el año 2012 y en octubre de 2019 se desarrolló su XIII versión.

§ Medidas preventivas adoptadas con ocasión del Estado de Emergencia

Medida	Descripción	Estado
Aplicación de las Reglas del Uso de la Fuerza	<ul style="list-style-type: none"> - Una vez decretado el Estado de Emergencia, este Presidente instruyó inmediatamente al Jefe de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, para que en todo momento fueran obedecidas las Reglas de Uso de Fuerza. La misma instrucción fue entregada a los restantes Jefes de la Defensa Nacional, así como a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. - Con fecha 24 de octubre de 2019, y por instrucción expresa de mi parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, junto a la Subsecretaria de Derechos Humanos, se reunieron con el Jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana y el alto mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y el Ministro de Defensa Nacional, con el objeto de trabajar sobre la adecuada utilización de las Reglas de Uso de Fuerza. 	Medidas ejecutadas.
Promoción y facilitación de la labor del INDH	<ul style="list-style-type: none"> - Desde el primer momento, el Gobierno ha otorgado al INDH todas las facilidades necesarias y la colaboración para el desempeño de su labor. - Tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han mantenido contacto permanente con el INDH, ofreciéndosele total colaboración en el ejercicio de sus funciones. 	Medidas ejecutadas.
Política de transparencia en materia de acceso a la información	<ul style="list-style-type: none"> - El Gobierno prestó plena colaboración a la cobertura de los hechos ocurridos por parte de los medios de comunicación. Así, por ejemplo, se entregaron 1.746 salvoconductos a periodistas para el cumplimiento de su labor. 	Medidas ejecutadas.

Medida	Descripción	Estado
	<ul style="list-style-type: none"> - Desde un inicio, el Presiente instruyó para que toda la información relacionada con eventos graves, detenciones, lesionados y fallecidos, estuviera disponible públicamente a través de la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos (http://ddhh.minjusticia.gob.cl/informacion-sobre-la-situacion-del-pais-desde-el-19-de-octubre). 	
Información e invitación a organismos internacionales	<ul style="list-style-type: none"> - El Gobierno informó debidamente a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos de la declaración de los Estados de Emergencia y de las medidas adoptadas. - Fueron invitados por parte del Gobierno y del Presidente de la República, con fecha 24 de octubre de 2019, el Director Ejecutivo de la División de las Américas ONG Human Rights Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. - Desde el primer momento, hubo plena colaboración por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el trabajo efectuado por dichos organismos. - Se instruyó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos para que se invitara a la CIDH. 	Medidas ejecutadas.

§ Medidas adoptadas para el cumplimiento íntegro del deber de investigar y sancionar posibles violaciones a los derechos humanos

Medida	Descripción	Estado
Coordinación con el Ministerio Público	<ul style="list-style-type: none"> - Se solicitó al Ministerio Público y al Fiscal Nacional poner especial énfasis en la investigación de las causas vinculadas a derechos humanos. - El Ministerio Público ha mantenido en todo momento su plena independencia para recibir e investigar todo tipo de denuncias. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Coordinación con la Defensoría Penal Pública	<ul style="list-style-type: none"> - El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha mantenido contacto y coordinación permanente con la Defensoría Penal Pública para apoyar en todo lo necesario las funciones del referido servicio. - La Subsecretaría de Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría Penal Pública, están confeccionando una cartilla informativa para que sea entregada por las policías a toda persona detenida 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Coordinación con el Poder Judicial	<ul style="list-style-type: none"> - Se enfatizó a los Tribunales de Justicia la importancia de ejercer su importante labor con la mayor celeridad posible, especialmente en causas relativas a derechos humanos. - Los Tribunales de Justicia han mantenido, en todo momento, su plena independencia, como debe ser en un Estado de Derecho como el nuestro, para conocer y juzgar la existencia de posibles violaciones a los derechos humanos. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Coordinación con el INDH	<ul style="list-style-type: none"> - Se han otorgado al INDH toda la colaboración y las facilidades necesarias para efectos de que pueda cumplir adecuadamente sus funciones, gozando de plena autonomía e independencia. - El 23 de octubre el Presidente se reunió personalmente con el Director del INDH, en conjunto con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaria de Derechos Humanos. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.

Medida	Descripción	Estado
	<ul style="list-style-type: none"> - El Ministro de Justicia y Derechos Humanos ha instruido a todos los SEREMIS de Justicia, para efecto de que mantengan contacto directo con los Directores Regionales del INDH, ofreciéndoles plena colaboración y entregándoles toda la información solicitada por éstos, con máxima transparencia. 	
Coordinación con la Defensoría de la Niñez	<ul style="list-style-type: none"> - El Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han mantenido contacto permanente con las autoridades de la Defensoría de la Niñez. - La Defensora de la Niñez ha sido invitada especialmente a diversas actividades e instancias relacionadas con materias de derechos humanos, como por ejemplo, la 8° sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Convocatoria a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal	<ul style="list-style-type: none"> - Se han realizado tres sesiones de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal –el 30 de octubre, el 11 de noviembre y el 4 de diciembre–, con el objeto de revisar el funcionamiento del sistema de justicia penal durante estas últimas semanas, para efectos de asegurar el acceso a la justicia, el debido proceso y la protección de los derechos de todas las personas. 	Medidas ejecutadas.
Convocatoria al Comité Interministerial de Derechos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> - El Comité Interministerial de Derechos Humanos ha sesionado en dos ocasiones, donde han participado, además de los ministros respectivos, representantes de ACNUDH Chile, UNICEF, al Defensora de la Niñez y el Presidente del INDH. La 8° sesión se realizó en el Palacio de la Moneda con mi participación. - En dichas instancias, se reforzó el compromiso de todos los ministerios con el respeto irrestricto a los derechos humanos, y el llamado a redoblar los esfuerzos para profundizar las acciones de protección de los derechos humanos. 	Medidas ejecutadas.
Creación del Comité Técnico Asesor de Derechos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Se creó un Comité Técnico Asesor de Derechos Humanos, dependiente del Comité Interministerial de Derechos Humanos, para trabajar en proposiciones más concretas en los distintos ámbitos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos 	Medidas ejecutadas.

§ Medidas correctivas adoptadas en materia de derechos humanos y para el cumplimiento íntegro del deber de reparar y establecer la verdad de los hechos

Medida	Descripción	Estado
Apertura de sumarios administrativos e investigaciones sumarias en Carabineros de Chile	<ul style="list-style-type: none"> - Con fecha 23 de octubre el Ministro del Interior y Seguridad Pública envió a Carabineros de Chile el oficio N° 33.102, solicitando a dicha institución, remitir cada 24 horas, el detalle individualizado de civiles lesionados o fallecidos, indicando además si ha habido participación o responsabilidad de funcionarios de la Institución en cada uno de los casos. - A esta fecha, Carabineros de Chile ya ha iniciado 464 Sumarios Administrativos y 322 Investigaciones Sumarias. Los uniformados que están bajo Sumarios Administrativos, no siguen ejerciendo funciones en terreno. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Formalización de investigaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Al 12 de noviembre de 2019, el Ministerio Público ha formalizado la investigación respecto de 11 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y hay también a esa fecha 12 solicitudes de audiencia de formalización. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.

Medida	Descripción	Estado
Perfeccionamiento del Protocolo sobre Uso de la Fuerza	<ul style="list-style-type: none"> - Con fecha 11 de noviembre se impartió una instrucción por parte del Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, disponiendo el perfeccionamiento del Protocolo sobre Uso de la Fuerza, reafirmando los principios de racionalidad, proporcionalidad y responsabilidad en el uso de la fuerza. - Se señala además que el uso de escopetas anti disturbios debe ser recurso de última instancia, cuando hay riesgos para la integridad de la población o del personal de Carabineros. - Se establece la incorporación de medios audiovisuales de verificación para quienes ocupan escopetas antidisturbios. - Se indica que 250 instructores institucionales certificados en derechos humanos se desplegarán en los lugares de las movilizaciones para asegurar el correcto cumplimiento de los protocolos. 	Medidas ejecutadas.
Estudio actualizado de la composición de los perdigones de goma	<ul style="list-style-type: none"> - Carabineros de Chile ha encargado un estudio actualizado de los componentes de los perdigones de goma que utilizan las Fuerzas de Orden y un análisis científico a un ente externo para certificar dichos componentes. 	Medidas ejecutadas.
Suspensión del uso de perdigones	<ul style="list-style-type: none"> - Con fecha 20 de noviembre, Carabineros de Chile ordenó suspender el uso de perdigones como herramienta antidisturbios. En consecuencia, sólo podrá ser utilizada como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte 	Medidas ejecutadas.
Solicitud de colaboración de expertos y policías internacionales	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha invitado a delegaciones policiales extranjeras para trabajar en la mejor aplicación de los protocolos de actuación, en el marco de situaciones de extrema violencia. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Reforzamiento en el entrenamiento en el uso escopetas de escopetas antidisturbios	<ul style="list-style-type: none"> - Carabineros de Chile ha reforzado el entrenamiento de sus funcionarios en relación al uso de las escopetas antidisturbios. Ya hay más de 600 uniformados participando en dicho reforzamiento. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Análisis para la utilización de nuevos medios disuasivos compatibles con Protocolos	<ul style="list-style-type: none"> - Se está realizando un estudio para analizar la utilización de nuevos medios disuasivos, que sean plenamente compatibles con los Protocolos del Uso de la Fuerza. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Plan para la instalación de cámaras en todas las comisarías	<ul style="list-style-type: none"> - Se está trabajando en un plan para que todas la comisarías del país tengan cámaras que permitan registrar todo lo que sucede en el interior de éstos. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Programa Integral de Recuperación Ocular del Ministerio de Salud	<ul style="list-style-type: none"> - El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, creó el Programa Integral de Recuperación Ocular, el cual contempla recursos específicos para brindar atención médica integral a aquellas personas víctimas de lesiones oculares totales o parciales en el contexto de las manifestaciones. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.
Resguardos especiales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (Subsecretaría de la Niñez)	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación permanente para el funcionamiento continuo de los actores a nivel local, a través de las Oficinas Locales de la Niñez y el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, “Chile Crece Contigo”. - Se puso a disposición de los SEREMIS de Desarrollo Social y Familia, de los Encargados Regionales de Niñez, Coordinadores de las Oficinas Locales de Niñez y de los Encargados Comunes del Subsistema de Protección Integral a la Infancia, “Chile Crece Contigo” variadas herramientas, como el “Decálogo de Emergencias”, Cuadernillo “Construir esperanza”, Fono Infancia, Salud Responde, entre otras. - Coordinación permanente con los SEREMIS ha permitido canalizar las denuncias sobre posibles vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes hacia la Defensoría de la Niñez y a la Superintendencia de Educación. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.

Medida	Descripción	Estado
	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación permanente con el Servicio Nacional de Menores por la situación de los niños, niñas y adolescentes que abandonan la intervención. - Coordinación permanente con Carabineros de Chile a fin de insistir en el cumplimiento de los protocolos en lo relacionado con niños, niñas y adolescentes. 	
Resguardos especiales en materia de derechos humanos de las mujeres (Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género)	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación permanente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, a fin de verificar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos en el resguardo del orden público y en las detenciones, respecto de las mujeres. - Coordinación permanente con el INDH, a fin de poner a disposición de dicha institución el trabajo que ha estado realizando el Ministerio de la Mujer y la Equidad Género. - Se inició un Plan de Contingencia a cargo de la Unidad Nacional de Violencia contra las Mujeres, desarrollado en todas las Direcciones Regionales del Servicio. También se instruyó a todos los funcionarios del Ministerio la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cualquier hecho de violencia contra la mujer de que se tomare conocimiento. - En materia de acompañamiento a mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto con el Servicio del ramo, conformaron un equipo de profesionales, a fin de brindarles el acompañamiento necesario. 	Medidas ejecutadas y en ejecución.

DEDUCE CUESTIÓN PREVIA DE ADMISIBILIDAD

I. LA ACUSACIÓN NO RESPETA EL CARÁCTER DE ULTIMA RATIO QUE DEBE TENER UNA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL FORMULADA CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

1. La acusación constitucional como herramienta de control constitucional es un mecanismo excepcional o de *ultima ratio*

De acuerdo al artículo 4 de nuestra Constitución, “*Chile es una república democrática*”. Como ha observado la doctrina, la naturaleza republicana de nuestro régimen de gobierno supone que las autoridades son responsables en el ejercicio de sus potestades.¹² En consecuencia, nuestro texto constitucional ha dispuesto diversos mecanismos de control constitucional, los que tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades públicas, en sus distintos niveles.

De las múltiples herramientas de control constitucional, la acusación constitucional es la más excepcional de todas. De ahí que, tanto la doctrina como los precedentes de esta H. Corporación se refieran a ella como excepcional o de *ultima ratio*. Este carácter excepcional se ve reforzado y agravado cuando se trata de la acusación constitucional que se dirige en contra del Presidente de la República, quien, por lo demás y huelga decir, es elegido mediante sufragio universal por la ciudadanía. Así fluye, en primer lugar, de las normas especiales con que la Constitución regula la acusación constitucional dirigida en contra del Presidente de la República; del carácter democrático y presidencial de nuestro régimen y del principio de soberanía nacional, al tenor de los artículos 4, 5 y 24 de la Constitución; y de los antecedentes históricos que existen en esta materia.

Como veremos, el carácter excepcional de la acusación constitucional dirigida en contra del Presidente de la República necesariamente debe traducirse en un tratamiento especialmente riguroso de los antecedentes en que ella se funda y de las imputaciones que ella realiza; además implica que sea usada solo en aquellos casos en que resulta indispensable para resguardar el Estado de Derecho. Sin embargo, la Acusación no satisface este estándar mínimo requerido, por lo que existen razones suficientes para que esta cuestión previa sea acogida por esta H. Corporación y la Acusación rechazada en este examen de admisibilidad.

En primer lugar, el carácter excepcional de la acusación constitucional fluye directamente de las normas constitucionales aplicables. Ella solo procede en contra de las más altas autoridades de nuestro orden constitucional, taxativamente enumeradas en el artículo 52 N° 2 de la Constitución; y en virtud de las causales específicas tipificadas en el mismo texto, las que dicen relación con conductas gravísimas, a las que la propia Constitución se refiere como “*delito, infracción o abuso de poder*”, en su artículo 53 N° 1.

Por otra parte, también resulta excepcional que en ellas el órgano encargado de sustanciar el proceso, y en consecuencia de ejercer atribuciones punitivas, sea el Congreso Nacional, mediante sus dos ramas, en un procedimiento que, a su vez, también es inédito en nuestro ordenamiento. En efecto, de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 18.918,

¹²SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, pp. 124 y 125.

Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (en adelante, “**LOC del Congreso Nacional**”), la acusación constitucional es una materia completamente prioritaria en su tramitación. Por ello, “*la Cámara sesionará diariamente para ocuparse de la acusación*”; una vez aprobada la admisibilidad de la acusación, “*la Cámara de Diputados deberá comunicar este hecho al Senado*” dándose cuenta del respectivo oficio “*en la sesión más próxima que celebre el Senado*”, el cual deberá fijar dentro del cuarto y sexto día siguiente, el día para comenzar a conocer de ella, quedando citado “*por el solo ministerio de la ley a sesiones especiales diarias, a partir del día fijado y hasta que se pronuncie sobre la acusación*”. Todo ello conforme a los artículos 46, 47 y 48 de la LOC del Congreso Nacional.

Por último, y muy especialmente, también las sanciones dispuestas por la Constitución, para el caso de que una acusación constitucional sea acogida, son excepcionales. Ellas implican la destitución e inhabilitación por 5 años para ejercer todo tipo de función pública de la autoridad que se considere culpable, conforme al artículo 53 N° 1, inciso cuarto, de la Constitución.

Este carácter excepcional de la acusación constitucional, que inevitablemente se desprende de las disposiciones citadas, ha sido reconocido por la doctrina. Así, se ha señalado que:

*"[r]esulta claro, atendida la jerarquía de las autoridades susceptibles de ser acusadas, la naturaleza y gravedad de las causales que la autorizan y las consecuencias que puede llegar a producir, que la **acusación constitucional es un resorte excepcional establecido por nuestra Constitución, a fin de sancionar no cualquier actuación, sino que actos graves, concretos, constitutivos de un ilícito constitucional, que amerita la destitución en el cargo de la autoridad acusada**" (énfasis agregado).*¹³

En la misma línea, se han pronunciado los profesores Bronfman, Cordero y Aldunate.¹⁴

En segundo lugar, este carácter excepcional ha sido plenamente recogido por la práctica de esta H. Corporación. Los precedentes en esta materia son abundantes y transversales políticamente, siempre se ha entendido que la acusación constitucional es un mecanismo reservado para aquellos casos excepcionales y en que el resto de la institucionalidad no operó adecuadamente. En esta línea pueden señalarse, a modo de ejemplo:

§ Lo resuelto por la Comisión encargada de estudiar la acusación constitucional en contra del entonces Intendente de la Región Metropolitana, don Marcelo Trivelli, que estableció que este mecanismo es la “*última ratio que el ordenamiento constitucional establece para hacer responsable a autoridades y magistraturas*”.¹⁵

¹³ MARTINEZ, Gutenberg y RIVERO, Renée, *Acusaciones Constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p. 66.

¹⁴ BRONFMAN, Alan, CORDERO, Eduardo y ALDUNATE, Eduardo, *Derecho Parlamentario Chileno. Funciones y atribuciones del Congreso Nacional*, Thomson Reuters, 2013, Santiago, p. 342.

¹⁵ Informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del Intendente de la Región Metropolitana Marcelo Trivelli, voto de los H. Diputados Patricio Hales y Edmundo Villouta, p. 3.

Conclusión que contó con el voto favorable de los honorables ex Diputados, señores Patricio Hales y Edmundo Villouta.

- § Lo resuelto por la Comisión encargada de estudiar la acusación constitucional contra el ex Ministro de Justicia, don Luis Bates, contando con el voto favorable de los honorables ex Diputados, señores Rodrigo González, Guido Girardi y Edmundo Salas, señaló qué:

*“La acusación constitucional, como instituto de garantía, configura un tipo de control jurídico en manos del Congreso Nacional, doblemente excepcional y de carácter subsidiario. Atendida la jerarquía de las autoridades susceptibles de ser acusadas y la naturaleza y **gravedad de las causales que la autorizan, la acusación constitucional es un resorte excepcional establecido por nuestra Constitución, a fin de sancionar, únicamente, actos graves y concretos, constitutivos de un ilícito constitucional que amerita la destitución en el cargo de la autoridad acusada. La acusación constitucional es, en consecuencia, un mecanismo de control jurídico-político de carácter extremo, procedente solo en última ratio, una vez que se han agotado todos los recursos o arbitrios que contempla el ordenamiento jurídico para dar solución a la infracción normativa que sirva de fundamento**”* (énfasis agregado).¹⁶

- § Lo resuelto por la Comisión encargada de estudiar la acusación constitucional en contra del ex Ministro de Economía, señor Jorge Rodríguez Grossi, integrada por la honorable ex Diputada señora María Antonieta Saa, la honorable Diputada señora Alejandra Sepúlveda, y el honorable ex Diputado, señor Esteban Valenzuela, resolvió que:

*“Tampoco puede dejar de mencionarse el hecho que **a juicio de la mayoría de la doctrina constitucional chilena, y tal como ha quedado consignado en la historia de la última década de acusaciones constitucionales, este instituto jurídico debe ser considerado como la última ratio del derecho público chileno**, por cuanto en él se puede llegar a privar a una persona de su alta investidura pública, y más aún, inhabilitarlo, para el evento que la acusación fuera aprobada por el Senado, para el desempeño de funciones públicas por un lapso de 5 años. Incluso hacemos presente que, en estos momentos, y por el sólo hecho de haberse deducido esta acusación constitucional, el acusado se encuentra restringido en un derecho tan esencial y caro a la dignidad humana como lo es la libertad personal, al hallarse arraigado de pleno derecho por expreso mandato de nuestro Código Político.*

Pero la extrema gravedad de las acusaciones constitucionales no sólo se refiere a la persona de los acusados, sino también a la estructura de poder del Estado y al cometido de las funciones públicas. Las acusaciones constitucionales paralizan, y si no al menos desvían la atención que las altas magistraturas deben tener respecto de los asuntos públicos que la Constitución y las leyes han dejado a su cargo.

¹⁶ Informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del ex Ministro de Justicia, señor Luis Bates Hidalgo, de 26 de noviembre de 2004, p. 111.

*Lo anterior obliga a utilizar de forma prudente este dispositivo constitucional extremo, reservándolo para casos particularmente graves en los cuales se han agotado las vías jurídicas y políticas para solucionar los conflictos. No hacerlo importaría no tan solo la banalización de este instrumento, sino que además podría significar un grave atentado a la gobernabilidad del país, que es un valor que debe ser protegido y promovido especialmente por quienes detentan responsabilidades de conducción o representación política” (énfasis agregado).*¹⁷

- § Lo resuelto por la Comisión informante de la acusación constitucional iniciada contra la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco, conformada entre otros por la H. Diputada Karol Cariola y los H. Diputados Iván Flores y Leonardo Soto, señala que:

*“la acusación no puede utilizarse como un instrumento más de fiscalización, de los que la Constitución entrega a la Cámara de Diputados, por medio de otros mecanismos, altamente regulados. Tampoco podría utilizarse con el propósito de ejercer presión sobre el Gobierno para impulsar una determinada política, como según su parecer se verifica en la especie. El desacuerdo político encuentra otros cauces institucionales para manifestarse principalmente en el movimiento legislativo. La acusación constitucional no es así una extensión de las atribuciones legislativas o de fiscalización que corresponden al Congreso Nacional, sino que es un mecanismo sancionatorio que sólo cabe ejercer en casos de especial gravedad y entidad” (énfasis agregado).*¹⁸

Como queda claro de los precedentes revisados, existe una robusta tradición en que esta H. Corporación ha ido reafirmando lo que se desprende inequívocamente de las normas constitucionales: la acusación constitucional es un mecanismo de *ultima ratio*, de carácter excepcional, reservado para actos graves y concretos constitutivos de un ilícito constitucional.

2. En el caso de la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, este carácter excepcional se ve necesariamente reforzado

Ahora bien, tratándose de la acusación constitucional que se dirige en contra de un Presidente de la República, este carácter excepcional se ve reforzado. Así se desprende, nuevamente, de las normas constitucionales aplicables, del carácter democrático de nuestro régimen de gobierno y de los antecedentes históricos que existen en esta materia.

En relación a las disposiciones que regulan de forma especial la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, encontramos, en primer lugar, que las causales por las que puede acusarse al Presidente de la República son especialmente graves; el artículo 52 N° 2, letra a) de la CPR exige, para que proceda la destitución que pretenden los acusadores, que estemos frente a “*actos de su administración que hayan*

¹⁷ Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional deducida contra el ex Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Jorge Rodríguez Grossi, de fecha 1 de abril de 2003, p. 68.

¹⁸ Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional deducida contra la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco, de fecha 6 de septiembre de 2016, p. 133.

comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes”.

Pues bien, en relación a la primera causal contemplada en nuestro texto constitucional, consistente en haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, señala el profesor don Alejandro Silva Bascuñán¹⁹ que ella es equivalente al delito de alta traición, según se estudiará en detalle al tratar el Capítulo Segundo de la Acusación. Lo que interesa, para efectos de este examen de admisibilidad, es que estamos frente a la imputación de una conducta asimilable a un delito gravísimo, lo que refuerza el carácter excepcional de la acusación constitucional que la alega.

En relación a la segunda causal, el tenor literal de las disposiciones constitucionales es aún más claro en su intención de reforzar el carácter de *ultima ratio* de este instrumento. Señala el texto que la acusación constitucional procederá cuando se haya infringido “*abiertamente*” la Constitución o las leyes, especificación que no se contempla respecto de las causales aplicables a los Ministros de Estado, los delegados presidenciales regionales o los delegados presidenciales provinciales. Como subraya don Alejandro Silva Bascuñán, con el término “*abiertamente*”, “*se ha querido hacer notar la importancia y trascendencia de este proceso*”.²⁰

Adicionalmente, también en relación a las causales, la Constitución exige que la acusación constitucional en contra del Presidente de la República se entable por “*actos de su administración*”, subrayando el carácter personal de la responsabilidad que se persigue con ella; y a diferencia de la causal en contra de los Ministros de Estado, no contempla en el caso de la máxima autoridad del país, la hipótesis de dejar la Constitución y las leyes sin ejecución.

Por otra parte, la Constitución también refuerza el carácter de *ultima ratio* de la acusación constitucional contra el Presidente de la República por la vía de exigir un quorum mayor para que se apruebe su admisibilidad en la H. Cámara de Diputados, la mayoría de los miembros en ejercicio y no de los presentes como es la regla general, conforme al artículo 52 N° 2, inciso quinto, de la Constitución; y en la aprobación de los capítulos acusatorios en el Senado, dos tercios de los miembros en ejercicio y no la mayoría de los miembros en ejercicio como es la regla general, conforme al artículo 53 N° 1, inciso tercero de la Constitución.

Como observa don Alejandro Silva Bascuñán, después de hacer un análisis de los antecedentes históricos de la regulación actual en la materia: “*La comparación del actual texto y del precedente, con el que la Constitución de 1833, convence de que el propósito de aquellas Cartas fue y es que (...) la acusación al Presidente solo se interponga cuando se trate de infracciones abiertas y graves.*”²¹

¹⁹ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 146 y 147.

²⁰ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 147.

²¹ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 148.

Lo anterior cobra especial sentido, si se atiende al hecho de que nuestra Constitución establece un régimen de gobierno democrático y presidencial, conforme a sus artículos 4 y 24. En estas circunstancias, la destitución del Presidente de la República resulta ser una cuestión especialmente grave, que requiere de imputaciones precisas y altamente respaldadas. Además de que se hayan agotado los restantes mecanismos institucionales que nuestro orden jurídico contempla para asegurar la vigencia del Estado de Derecho.

El carácter democrático y presidencial de nuestra forma de gobierno es atingente porque pretender la destitución del Presidente de la República supone alterar la decisión soberana de la Nación, ejercida mediante la elección directa, por el pueblo, del Jefe de Estado y de Gobierno, conforme al artículo 5 de la Constitución. Lo anterior no pugna con el hecho de que la propia Constitución establezca la posibilidad de acusar constitucionalmente al Presidente de la República, pero sí subraya el carácter excepcionalísimo que debe tener el ejercicio de esa potestad, por parte del Congreso Nacional. En efecto, la Constitución contempla la acusación constitucional en contra de autoridades elegidas de forma soberana por la ciudadanía en el caso del Presidente de la República y recientemente, en virtud de la reforma constitucional introducida por la ley N° 20.990, a los gobernadores regionales como órgano ejecutivo del gobierno regional.²² Por la misma razón, en esos dos casos, la Constitución exige un quórum mayor para declarar la admisibilidad de la acusación en esta H. Cámara, esto es, la mayoría de sus miembros en ejercicio, y para declarar la culpabilidad del acusado en el H. Senado, dos tercios de sus miembros en ejercicio, a diferencia de lo que ocurre en el caso de otras autoridades contra las que procede una acusación constitucional.

Adicionalmente, confirma lo anterior los escasos precedentes históricos que existen en la materia. En nuestra historia republicana solo en dos ocasiones se ha entablado una acusación constitucional en contra de un Presidente de la República, en ejercicio. Ambas en contra de don Carlos Ibáñez, el año 1931 y el año 1956.²³ En la primera de ellas, acogida por el Senado, se imputaron al entonces Presidente de la República delitos gravísimos en los que, de acuerdo a los acusadores, le cabía responsabilidad personal y directa, tales como *“apresamientos, destierros y otros vejámenes sufridos por parlamentarios durante su gobierno”*.²⁴ En otras palabras, se trataba de una acusación constitucional por responsabilidad penal directa. En la segunda de ellas, rechazada, nuevamente se imputaron hechos propios y personales del Presidente de la República, consistentes en actos, tales como dictar decretos de insistencia en abierta contradicción con la ley, y en haber comprometido gravemente el honor y la seguridad del Estado al haber realizado un Pacto Militar con el Coronel Perón, haber protegido la penetración peronista en Chile y haber comprometido intereses soberanos en el tratamiento de asuntos limítrofes provocando un

²² La ley N° 20.990 corresponde a la reforma constitucional que dispuso la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, disponiéndose así que el gobernador regional sea elegido por sufragio universal en votación directa, e incorporándose la referencia expresa a este cargo en los artículos 52 y 53 de la CPR, a propósito de la acusación constitucional. No obstante lo anterior, en dicha reforma no se especificó la o las causales que se podrían invocar respecto de los gobernadores regionales para ejercer esta facultad por parte del H. Congreso Nacional.

²³ Descontamos a este respecto las acusaciones constitucionales presentadas en contra de quienes, al momento de ser acusados, ostentaban la calidad de ex Presidentes de la República. Tal es el caso del ex Presidente, don Manuel Montt, acusado en su calidad de Presidente de la Excma. Corte Suprema, y del ex Presidente, don Arturo Alessandri Palma, acusado el año 1939, por los hechos ocurridos el 5 de septiembre de 1938, en el edificio del Seguro Obrero, en la ciudad de Santiago; ambas rechazadas.

²⁴ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 148.

grave e irreparable daño al régimen republicano y democrático.²⁵ En ambos casos, resulta relevante destacar que, se trata no sólo de imputaciones gravísimas, sino de acusaciones interpuestas por actos en que al Presidente de la República le cabía, de acuerdo a los acusadores, una responsabilidad personal y directa, penal o administrativa, cumpliéndose con señalar los hechos precisos que se le imputaban. Estándar mínimo que, como se verá en el capítulo III de esta cuestión previa, no cumple esta Acusación, ya que las imputaciones formuladas no satisfacen el requisito constitucional de ser actos de su administración, propios de este Presidente de la República.

3. La Acusación no cumple con el mínimo estándar requerido para proceder a la destitución del Presidente de la República

Ahora bien, corresponde precisar en qué medida y por qué razones la Acusación no cumple con el carácter excepcionalísimo que nuestra Constitución y la práctica de esta H. Corporación exigen para proceder a la destitución del Presidente de la República.

En este sentido pueden distinguirse tres condiciones copulativas que configuran el carácter de *ultima ratio* de la acusación constitucional en contra del Presidente de la República:

- § En primer lugar, este mecanismo solo puede activarse por hechos de la máxima gravedad que configuren un ilícito constitucional por alguna de las causales especiales respecto de esta Autoridad;
- § En segundo lugar, es necesario que la acusación se encuentre suficientemente fundada, tanto en el respaldo de los hechos que sostenga, los que deben estar debidamente acreditados, como en las imputaciones que formule, las que deben ser precisas y comprometer directamente a la autoridad acusada; y
- § Por último, es necesario que ella sea absolutamente necesaria para resguardar el orden constitucional. Es decir, para proceder a la destitución del Presidente de la República es necesario que se hayan agotado las demás vías institucionales o que ellas no estén en condiciones de funcionar normalmente.

En relación al primer requisito, si bien la Acusación alega hechos gravísimos, resulta evidente que la gravedad de esos hechos no se condice con el tratamiento que la Acusación hace de ellos. En otras palabras, no basta con enunciar hechos de la máxima gravedad y que se invoquen las causales de acusación, por cuerda separada, sin explicar cómo se configura la respectiva causal y la relación de causalidad entre el ilícito constitucional y la actuación directa del acusado.

Además, la Acusación no logra cumplir con el segundo requisito que se desprende del carácter excepcionalísimo de la acusación constitucional. En efecto, como se verá en detalle tanto en esta Cuestión Previa como al contestar el Capítulo Primero, la Acusación formula imputaciones genéricas y se apoya en antecedentes que no permiten verificar los hechos y la atribución de responsabilidad que alega. Los antecedentes e imputaciones en que se apoya la Acusación resultan completamente insuficientes para fundar la pretensión de los acusadores en orden a destituir a este Presidente de la República.

²⁵ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 148.

En este aspecto, resulta relevante precisar que el estándar mínimo requerido para acusar constitucionalmente al Presidente de la República debe necesariamente ser estricto. Por una parte, estamos frente al ejercicio del poder sancionatorio del Estado, lo que exige que se respeten plenamente las garantías del debido proceso, según se explicará en el número II de esta Cuestión Previa. Por otra parte, tratándose la acusación constitucional de un procedimiento político-constitucional, el Congreso Nacional, por razones de responsabilidad política, debe exigir que se actúe con la máxima objetividad frente a los hechos e imputaciones que se aleguen para destituir al Presidente de la República. Por lo dicho, en materia del estándar requerido para verificar los hechos e imputaciones que se formulan en una acusación constitucional contra el Presidente de la República, tanto la naturaleza jurídica como el carácter político de esta institución, fundamentan que el Congreso Nacional aplique un estándar especialmente estricto.

Sin perjuicio del análisis detallado que se realizará al contestar el Capítulo Primero de la Acusación, en relación al tratamiento poco riguroso de los hechos y a las imputaciones genéricas que formula la Acusación, para efectos de fundar esta cuestión previa resulta necesario ilustrar algunos errores manifiestos en que incurren los acusadores en esta materia.

En primer lugar, la Acusación realiza imputaciones genéricas y sin fundamento. Sostienen los acusadores que yo habría “*consentido*” en que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública cometieran violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, sin explicitar qué acción personal me haría responsable de ellas. Cabe precisar que la palabra consentir, tal como se explicará más adelante en el número III de esta Cuestión Previa, implica el pleno conocimiento de aquello que se consiente o tolera. En otros términos, significaría que, en forma previa a que ocurrieran, este Presidente habría consentido a violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos.

Más aún, en ninguna parte se especifica cómo se habría dado ni cómo se habría manifestado este consentimiento, por cierto tácito, ni la implicancia precisa que habría tenido en los ilícitos constitucionales que se me imputan, todo ello según se explicará con detalle en el número II de esta Cuestión Previa y al contestar el Capítulo Primero de la Acusación. Claramente los acusadores y parte de los Diputados de esta H. Corporación no estuvieron de acuerdo con mi decisión de declarar el Estado de Emergencia, pero esa discrepancia política no es motivo suficiente para propiciar mi destitución ni acusarme de una abierta infracción a la Constitución y a las leyes. Menos aún ese desacuerdo puede ser utilizado como base para efectuar aseveraciones erradas y para imputarme una intencionalidad que es totalmente ajena a mi persona. La formulación de aseveraciones de este tipo resulta temeraria, artificiosa e irresponsable.

En segundo lugar, en relación al tratamiento de los hechos, la Acusación acompaña antecedentes y prueba que resulta completamente insuficiente para justificar los gravísimos hechos y la responsabilidad que se imputan. En relación a los casos específicos que se enuncian en la Acusación, los acusadores se limitan a dar por acreditados los hechos reportados por medios de comunicación, desconociendo completamente los procesos investigativos y judiciales que se encuentran pendientes. Por otra parte, al referirse a los hechos de forma agregada, los acusadores se remiten a querellas y denuncias, acciones judiciales que no permiten tener por acreditados los hechos y las circunstancias que se describen. La sola interposición de una denuncia o acción judicial no basta para tener por

acreditados los hechos que las motivan, sino que precisamente su efectividad es parte de lo que se investiga o determina por los órganos competentes, según sea el caso.

En relación al tercer requisito del que se desprende del carácter excepcional de la acusación constitucional, la Acusación tampoco logra acreditar el carácter necesario que siempre debe tener la acusación constitucional que se dirige en contra del Presidente de la República. Este requisito se traduce en que la acusación constitucional ha de ser empleada en aquellos casos en que el resto de la institucionalidad no sea suficiente para resguardar el Estado de Derecho. Sin embargo, es evidente que este no es el caso. Si bien en los hechos se han producido numerosas convocatorias a paro o acciones destinadas a paralizar el normal funcionamiento del país, lo cierto es que, en Chile, el Estado de Derecho ha operado plenamente, y este Presidente de la República ha adoptado todas las medidas necesarias para que ello sea así.

En efecto, los dos órganos constitucionales encargados de conocer y resolver las causas criminales, y de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, que son, respectivamente, el Poder Judicial, conforme al artículo 76 de la Constitución, y el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 83 de la Constitución, han operado en perfecta normalidad, haciendo uso de todas sus atribuciones constitucionales y legales. Esto, por lo demás, es algo que los propios acusadores reconocen en numerosas partes del escrito acusatorio.²⁶ Igualmente, desde la semana del 21 de octubre esta H. Corporación ha sesionado ininterrumpidamente, suspendiendo al menos dos semanas distritales, e incluso sesionando durante el fin de semana, discutiendo iniciativas y aprobando leyes en beneficio directo de nuestra ciudadanía.

Además, con el objeto de abordar los hechos de violencia, destrucción y vandalismo ocurridos en las últimas semanas, y la afectación de las garantías constitucionales, el 7 de noviembre pasado convoqué al COSENA, órgano asesor en materias de seguridad nacional, en que participaron el Presidente del H. Senado, el Presidente de la H. Cámara de Diputados, el Presidente de la Excma. Corte Suprema, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, el Comandante en Jefe de la Fuerza Área de Chile, el General Director de Carabineros de Chile y el Contralor General de la República. En dicha oportunidad, recalqué a las autoridades reunidas que una de las principales preocupaciones del Gobierno, al momento de decretar el Estado de Emergencia, fue la protección de los derechos humanos de las personas en toda su dimensión. De hecho, en dicha oportunidad entregué detalles de las diversas medidas preventivas que el Gobierno adoptó sobre esta materia, lo que no es compatible con “consentir” ni tampoco “tolerar” la violación de derechos humanos, como sostienen los acusadores.

En razón de lo expuesto, resulta completamente contrario a la realidad y al objeto de esta herramienta constitucional, pretender la destitución del Presidente de la República en base a imputaciones genéricas e infundadas, no comprobadas y en circunstancias en que la institucionalidad del país ha operado, con el apoyo del Gobierno, para investigar los hechos y determinar los eventuales responsables. De hecho, se ha colaborado activamente con los representantes de organismos internacionales que han visitado nuestro país para conocer la delicada situación por la que hemos atravesado las últimas semanas.

²⁶ Por ejemplo, ver Acusación, pp. 9, 16, 21, 24, 32 y 36.

La acusación constitucional no puede utilizarse como un instrumento más de fiscalización, de aquellos que la propia Constitución contempla y entrega a la H. Cámara de Diputados. Tampoco puede utilizarse como un mecanismo para manifestar meras desavenencias políticas.

Por esas razones, resulta plenamente concordante con las disposiciones constitucionales y con la tradición de esta H. Corporación, desestimar la Acusación y declarar su inadmisibilidad por no haberse respetado su carácter excepcional y de *ultima ratio*.

II. LA ACUSACIÓN VULNERA GRAVEMENTE EL DEBIDO PROCESO, POR FUNDARSE EN HECHOS AUN NO ACREDITADOS Y POR REALIZAR IMPUTACIONES IMPRECISAS

1. La garantía del debido proceso resulta plenamente aplicable a este procedimiento

Nuestra Constitución reconoce como garantía fundamental de todas las personas el debido proceso, señalando en su artículo 19 N° 3 inciso sexto que “[t]oda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”, agregado además que “[c]orresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”.

De esta forma, la referida garantía se ha definido como aquel derecho que “*franqueado el acceso a la jurisdicción, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario*”.²⁷

Así, la garantía del debido proceso debe respetarse en todo procedimiento llevado adelante por cualquier órgano del Estado que ejerza potestades jurisdiccionales o sancionadoras, independiente de cuál sea su naturaleza.

Su amplia aplicación ha sido reconocida expresamente por nuestro Tribunal Constitucional, el cual ha señalado que:

*“[F]luye de los principios del artículo 19 N° 3 de la Constitución, en la amplitud y generalidad ya realzada, se aplican, en lo concerniente al fondo o sustancia de toda diligencia, trámite o procedimiento, cualquiera sea el órgano estatal involucrado, trátase de actuaciones judiciales, actos jurisdiccionales o decisiones administrativas en que sea, o pueda ser, afectado el principio de legalidad contemplado en la Constitución”*²⁸

El debido proceso, como garantía fundamental de todas las personas, también se encuentra recogido en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, los cuales han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes. Podemos así mencionar el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, “**PIDCP**”), y el artículo 8 de la CADH.

²⁷ GARCÍA, Gonzalo y CONTRERAS, Pablo, *El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del tribunal constitucional chileno*, Estudios Constitucionales N° 2, 2013, p. 257.

²⁸ Tribunal Constitucional, Sentencia Rol N° 437, Considerando Décimo Séptimo.

El debido proceso está integrado por variadas garantías o derechos, como lo son, entre otros, el derecho a ser oído, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial establecido por ley, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a la asistencia letrada. Asimismo, tiene por finalidad garantizar el respeto al principio de legalidad, establecido en los artículos 6 y 7 de la CPR, y ser una garantía frente a la facultad sancionadora del Estado, en el sentido de que es la ley la llamada a establecer las garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos, así también el tribunal que juzga debe estar establecido por ley, y todo proceso previo debe ser legalmente tramitado.

No existen dudas a nivel doctrinario de que la acusación constitucional supone el ejercicio de una función jurisdiccional por parte del Congreso Nacional y especialmente por parte del Senado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53, N° 1, de la Constitución. Así, la doctrina ha señalado que la acusación constitucional es:

“[u]n juicio constitucional. Dicha naturaleza emana de que ha sido establecido por nuestra propia Carta Fundamental como tal, configurándose todos los elementos típicos de la función jurisdiccional desde el momento en que existe un acusador, un acusado, una sanción y un órgano llamado a su conocimiento y resolución, que en este caso es el Parlamento. Por lo tanto, estamos claramente frente a un caso de jurisdicción constitucional, en que es la propia Constitución la que ha creado un órgano jurisdiccional especial” (énfasis agregado).²⁹

Así también se precisa:

“De esta manera, al ejercer el Senado funciones jurisdiccionales respecto de la acusación de que conoce, tiene plenas facultades para conocer y resolver todo lo relativo a la causal respectiva... Por último, es importante señalar que el Congreso en uso de sus atribuciones jurisdiccionales está facultado para conocer de todos los antecedentes de hecho y de derecho que configuran la causal respectiva.” (énfasis agregado)³⁰

Del mismo modo, este carácter jurisdiccional ha sido confirmado por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, el cual ha establecido que:

“[e]l Congreso Nacional -órgano colegislador- ejerce funciones jurisdiccionales al conocer de la acusación constitucional, especialmente el Senado de la República, quien debe resolver como jurado, en los términos que establece el artículo 51 N° 1 de la Constitución Política de la República” (énfasis agregado).³¹

²⁹ MARTINEZ, Gutenberg y RIVERO, Renée, *Acusaciones Constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p. 62.

³⁰ MARTINEZ, Gutenberg y RIVERO, Renée, *Acusaciones Constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p. 84.

³¹ Tribunal Constitucional, Sentencia Rol N° 616, Considerando Vigésimo Quinto.

Teniendo en consideración que la acusación constitucional supone el ejercicio de una potestad jurisdiccional por parte del Congreso Nacional, especialmente por parte del Senado, la garantía del debido proceso que la Constitución asegura a todas las personas, debe necesariamente respetarse en el ejercicio de esta función.

Este punto ha sido refrendado por la doctrina, la que ha señalado que *“si bien la acusación constitucional no es un proceso penal, si asimilamos la acusación constitucional a un procedimiento sancionatorio que afecta derechos fundamentales, este debe asumir los parámetros básicos de un debido proceso”* (énfasis agregado).³²

Así también lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “**Corte IDH**”), que ha hecho extensivo el debido proceso a toda afectación de derechos:

“Este Tribunal ha señalado que es exigible a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, que adopte dichas decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal.” (énfasis agregado)³³.

2. La garantía del debido proceso exige que las imputaciones sean precisas y que constituyan actos personales del acusado

Como ya se señaló en el numeral precedente, el estándar y las garantías del debido proceso deben aplicarse plenamente al procedimiento de acusación constitucional. En particular, esta H. Cámara de Diputados debe analizar los hechos en que se sustenta la Acusación, y ponderar si, desde el punto de vista jurídico, a la luz de las normas constitucionales aplicables, se cumple con el estándar de admisibilidad que se exige, esto es, que los hechos estén adecuadamente precisados y que se determinen con claridad y precisión las acciones que se atribuyen al acusado y la forma en que tales comportamientos se pueden enmarcar dentro de los ilícitos constitucionales que se imputan.

De esta forma, existen ciertos requisitos mínimos que se deben cumplir en cualquier libelo acusatorio, para efectos de satisfacer los estándares requeridos de conformidad al derecho fundamental del debido proceso. Así, (i) deben identificarse de manera clara y precisa los hechos u omisiones imputables al acusado; y (ii) debe explicitarse claramente de qué forma los hechos que se mencionan son suficientes para dar por establecido el ilícito constitucional. Estos requisitos deben cumplirse de forma especialísima y con un estándar incluso mayor cuando la acusación constitucional se deduce en contra del Presidente de la República.

3. La Acusación se funda en imputaciones imprecisas y en hechos y circunstancias no acreditadas por los órganos competentes

³² NOGUEIRA, Humberto, *Consideraciones sobre la acusación constitucional en la Carta Fundamental vigente*, en *Congreso Nacional: Libro Homenaje al Profesor Alejandro Silva Bascuñán*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2013, p. 245.

³³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Chocrón Chocrón vs Venezuela*, 1 de julio de 2011, Párrafo 115.

Por consiguiente, corresponde explicar a continuación por qué la Acusación no cumple con los estándares y requisitos mínimos señalados y, por lo tanto, de qué forma la garantía fundamental del debido proceso se ve vulnerada por esta Acusación. Lo anterior, ocurre principalmente por las razones que se señalan a continuación.

En primer lugar, porque el referido libelo acusatorio se funda en imputaciones genéricas e imprecisas, toda vez que los acusadores no identifican de forma precisa y clara los hechos y los actos imputables a este Presidente, y tampoco explicitan cómo tales hechos se enmarcan y son suficientes para dar por establecido un ilícito constitucional.

En segundo lugar, la Acusación se basa en hechos y circunstancias cuya calificación jurídica aún no se ha establecido por los órganos competentes para ello, y en consecuencia, aún no se han acreditado. Es decir, los hechos que fundamentan la Acusación están actualmente siendo investigados y conocidos por las autoridades competentes para ello, los que deberán pronunciarse.

Por consiguiente, el libelo acusatorio no cumple con un requisito fundamental, cual es bastarse a sí mismo para que la persona a quien se acusa pueda defenderse en un Estado de Derecho, contrariando así gravemente el principio del debido proceso.

a. La Acusación se funda en imputaciones genéricas e imprecisas

Los acusadores realizan de forma recurrente imputaciones genéricas e imprecisas que no tienen fundamento alguno, sin explicitar de forma clara de qué manera los hechos que se mencionan son suficientes para dar por establecido un ilícito constitucional.

Así por ejemplo, los acusadores señalan, en varias ocasiones, que este Presidente habría “consentido” que “*las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cometieran graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos*”, sin explicitar de qué forma y en qué casos habría operado ese presunto consentimiento por parte de este Presidente, ni qué acciones dieron lugar al mismo. Tampoco se menciona la implicancia precisa que habría tenido tal imputación en los ilícitos constitucionales imputados, y no se fundamenta por qué estas supuestas violaciones a los derechos humanos habrían sido sistemáticas y generalizadas.

En otra ocasión, los acusadores incluso sostienen que “[L]o que acontezca bajo el estado de excepción constitucional es de responsabilidad política directa del Presidente de la República.”³⁴. Esta afirmación no tiene ningún sentido legal, y desconoce los principios y fundamentos básicos de la teoría de la responsabilidad. Decir que por el solo hecho de decretar un estado de excepción constitucional el Presidente se hace responsable “directamente” de absolutamente todo lo que acontezca en la zona que se encuentra bajo dicho estado, es una afirmación que no resiste ningún tipo de análisis. No resulta aceptable prescindir de la culpabilidad y la relación de causalidad, elementos de la responsabilidad, pues ello vulnera flagrantemente las garantías del debido proceso y los estándares y exigencias mínimos requeridos para poder siquiera considerar una acusación constitucional.

Al final del Capítulo Primero, los acusadores se limitan a decir, antojadizamente, que “[a]nalizados los hechos que fundamentan este libelo, es indudable que los actos de

³⁴ Acusación, p. 62.

*administración del Presidente de la República implican un incumplimiento de la obligación asumida por el Estado de Chile en el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”,*³⁵ y que *“no se ha cumplido con los estándares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contempla respecto a los límites en el uso de la fuerza pública...”*.³⁶

Fuera de estas escuetas declaraciones, en ningún momento fundamentan por qué y de qué forma, actos de mi administración, implicaron un incumplimiento a las referidas disposiciones internacionales. Así, los acusadores no desarrollan estas graves imputaciones y no entregan mayores antecedentes que permitan sostenerlas, tratándose por tanto simplemente de apreciaciones u opiniones, que no se sostienen con fundamentos.

En el Capítulo Segundo, los acusadores imputan la causal contenida en el artículo 52, N° 2, letra a) de la CPR, contra el Presidente de la República *“por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación”*. Ahora bien, la Acusación no es clara al señalar cómo se habría comprometido el honor de la Nación, ni mucho menos indica de qué forma este compromiso ha sido grave. Por consiguiente, no es posible establecer de forma cierta que se haya configurado la causal invocada, toda vez que ésta se sustenta en opiniones y meras eventualidades.

Todo lo referido anteriormente atenta directamente en contra de la garantía del debido proceso, toda vez que siendo las imputaciones formuladas de extrema gravedad, constituyen requisitos mínimos para la satisfacción de dicha garantía. Esto es, que éstas se formulen con precisión y detalle, de forma que no sean imputaciones genéricas e imprecisas, y que además se explicita de forma idónea de qué manera dichas imputaciones constituyen un ilícito constitucional de responsabilidad de este Presidente de la República. Todo lo anterior es requisito indispensable para posibilitar la defensa del acusado, cuestión que no ocurre en la presente Acusación, atentándose así gravemente contra la garantía fundamental del debido proceso de este acusado.

b. Los hechos que fundamentan la Acusación están siendo investigados y conocidos por las autoridades competentes

Nuestra Constitución declara en su artículo 76, que *“[l]a facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”*. Para reforzar el principio mencionado anteriormente, el artículo continúa señalando que *“[n]i el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”*.

Por otro lado, de acuerdo al artículo 83 de la CPR, *“[u]n organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito...”*.

Así, de conformidad a nuestro ordenamiento constitucional, es el Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el llamado a conocer, resolver y hacer ejecutar lo

³⁵ Acusación, p. 41.

³⁶ Acusación, p. 43.

juzgado, en relación a las causas civiles y criminales; y es el Ministerio Público el órgano autónomo constitucional que tiene como objeto y misión llevar adelante todas las investigaciones de los hechos constitutivos de delito y sostener la acción penal. Tanto el Presidente de la República como el Congreso Nacional tienen vedado el ejercicio de dichas funciones, por expresa disposición constitucional.

Ahora bien, la mayoría de los hechos y circunstancias que se mencionan en el Capítulo Primero de la Acusación aún no han sido acreditados por los órganos competentes. Se trata de procesos en curso, actualmente en investigación, por consiguiente, no es posible dar por cierto o verdadero los hechos de que tratan y las especiales circunstancias que se mencionan, ni tampoco sus partícipes, ni las responsabilidades que correspondan.

De hecho, muchos de los antecedentes en que se basa la Acusación ni siquiera son denuncias ni querellas realizadas ante las autoridades correspondientes, sino meras declaraciones o hechos relatados en medios de comunicación social o redes sociales.

No cabe duda alguna que los graves hechos que son mencionados por los acusadores deben ser investigados por el Ministerio Público y conocidos y juzgados por los Tribunales de Justicia con todo el rigor de la ley. Así lo he declarado desde el primer día, en el entendido que tales abusos y delitos no pueden quedar en la impunidad.³⁷

En definitiva, los hechos y especiales circunstancias que alegan los acusadores no han sido acreditados, y así incluso lo reconocen en la Acusación, al referirse a dichos hechos como “posibles” o “presuntos”. En efecto, en múltiples pasajes de ésta, los acusadores dan cuenta de la naturaleza no determinada de los hechos en cuestión, toda vez que los señalan como “*posibles hechos*”. Así se señalan:

- § Desde la página 15 de la Acusación, se relatan “*ii) Posibles torturas por acción de agentes del estado*”.
- § Desde la página 22 de la Acusación se narran lo que serían “*iv) Posibles heridos por acción de agentes del estado*”.
- § En la página 27 de la Acusación se hace referencia a “*Otro tipo de lesiones posibles*”.
- § Desde la página 30 de la Acusación se relatan “*v) Posibles detenciones con uso excesivo de violencia por acción de agentes del estado*”.
- § A contar de la página 34 de la Acusación, se narran “*vi) Posibles detenciones con allanamientos ilegales por acción de agentes del estado*”.
- § Así también, en la página 91 de la Acusación, se señala existirían “*posibles crímenes de derecho internacional*”.

Este tratamiento de los hechos que fundan la Acusación vulnera la garantía fundamental del debido proceso, dificultando gravemente el derecho a defensa de este acusado. Ciertamente, el debido proceso constituye una macro garantía que, entre otros elementos, supone que el acusado tenga la posibilidad efectiva y real de hacerse cargo de los hechos y circunstancias que forman parte del objeto de la controversia.

³⁷ Así lo señalé expresamente en discurso de fecha 17 de diciembre: “*No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas en su recuperación y para que la Fiscalía y los Tribunales de Justicia cumplan con su misión de investigar y hacer justicia.*”.

Lo anterior no es posible si se enarbolan hechos que no han sido acreditados y que son afirmados por los acusadores sin un grado de certeza admisible. Malamente se pueden controvertir hechos que la misma parte acusadora señala serían “posibles”.

En otras palabras, el debido proceso exige que de una parte se apunten hechos precisos y determinados, respecto de los cuales sea posible que la parte contraria los controvierta. Sólo de ese modo es posible que se produzca una real controversia, donde se discuta detenidamente sobre una materia respecto de la que se erigen posiciones contrapuestas.

En caso contrario, si los hechos sobre los que se apoya una acusación consisten en aquellos que la propia parte acusadora indica como *posibles* –como ocurre en la especie- respecto de ellos la discusión –y el proceso- carece de objeto.

De un modo u otro, sea que se asuma que los hechos así planteados conculcan la garantía del debido proceso, o bien, que respecto de aquellos no existe un real objeto del proceso, lo cierto es que la Acusación no debe prosperar.

Por lo señalado, esta cuestión previa debería ser acogida por esta H. Corporación y rechazar la Acusación en este examen de admisibilidad.

III. LA ACUSACIÓN NO CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DE QUE ELLA SE DEDUZCA “POR ACTOS DE SU ADMINISTRACIÓN”

La exigencia de que la responsabilidad constitucional del Presidente de la República lo sea “por actos de su administración” proviene de la Constitución Política de 1925, la que a su vez innovó respecto de la carta constitucional de 1833, que señalaba: “todos los actos de su administración”, eliminándose por lo tanto la palabra “todos”. De esta forma y a partir de la Constitución Política de 1925, el Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente durante su Gobierno y no necesariamente al término del mismo y por actos singulares.

La frase “por actos de su administración” se utiliza únicamente tratándose de la acusación constitucional dirigida en contra del Presidente de la República, lo que no ocurre tratándose de las demás autoridades que pueden ser objeto de una acusación constitucional. Esta peculiaridad, define un marco jurídico aplicable a las dos causales de la letra a) del N° 2 del artículo 52 de la CPR, a saber: haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes, esto es, cada una de ellas sólo tiene relevancia constitucional si se ha perpetrado “por actos de su administración” (la del Presidente de la República).

Además, y esto es particularmente relevante, la expresión “por actos de su administración” permite delimitar en tres sentidos el ámbito de responsabilidad constitucional del Presidente de la República, en cuanto podrá ser sujeto de una acusación en la medida que esta se sustente en una acción imputable directamente al Presidente de la República, y manifestada en un acto de administración. Según se explica a continuación, en este caso no se cumplen dichos requisitos que determinan la admisibilidad de la acusación.

Ello es así pues la Acusación: (i) con las excepciones que se señalan más adelante se fundan casi exclusivamente en omisiones y no en actos; (ii) no persigue la responsabilidad personal y directa del Presidente de la República, sino que los hechos que la fundamentan son atribuidos a terceros; y (iii) las imputaciones no se fundan en actos de “administración” ejecutados por mí.

1. La acusación constitucional contra el Presidente de la República sólo procede por “actos”, es decir, por acciones suyas y no por omisiones, como se hace en la Acusación

La palabra “actos”, a que se alude en la causal, permite afirmar de manera categórica que la norma constitucional sólo comprende los comportamientos activos y no los omisivos. Tan claro es esto, que para el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (en adelante, “**RAE**”), “acto” es “1. m. acción (ejercicio de la posibilidad de hacer). 2. m. acción (resultado de hacer).” Por su parte “hacer” significa “1. tr. Producir algo, darle el primer ser.”, en tanto que “acción” es: “1. f. Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. f. Resultado de hacer. Incluso, los significados aprovechables para estos fines que proporciona la RAE del verbo actuar son: “1. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Ejercer actos propios de su naturaleza. 4. intr. Obrar, realizar actos libres y conscientes.” En todas sus acepciones supone el conocimiento previo de aquello que se permite o tolera. En este sentido, supone una decisión positiva de la autoridad acusada en la que expresamente consiente no impedir algo que se sabe, de antemano, que va a ocurrir.

El significado de estas expresiones conduce a una conclusión inequívoca: la CPR circunscribió la responsabilidad del Presidente de la República a comportamientos positivos, excluyendo los omisivos. Se puede omitir un “acto” pero un “acto” no se puede realizar por omisión; no se puede “hacer” algo omitiéndolo ni se puede “actuar” (obrar) mediante una omisión.

Si la CPR hubiese querido incluir las omisiones en la responsabilidad constitucional del Presidente de la República, en lugar de la palabra “actos” habría empleado la de “conducta” o “comportamiento”, comprensivas de las acciones y de las omisiones, o, simplemente, habría prescindido de la frase, como lo hizo a propósito de las causales de acusación constitucional de las autoridades distintas al Presidente de la República. Esa es y ha sido la voluntad de la CPR manifestada en el tenor literal de la norma.

Cualquier pretensión de aplicar el artículo 52 N° 2 letra a) de la CPR al Presidente de la República por una omisión suya constituiría una aplicación analógica “*in mallam partem*” de la disposición constitucional, lo que está absolutamente vedado, no sólo en Derecho Penal, sino en toda expresión de derecho sancionador de nuestro sistema jurídico, incluyendo el constitucional. El principio de legalidad contenido en los artículos 6° y 7° de la CPR impide recurrir a una analogía *in mallam partem* para sancionar constitucionalmente al Presidente de la República, es decir, hacerlo por una causal distinta a la prevista en la Constitución o sin que concurran sus presupuestos, como ocurriría con la pretensión de imponer su destitución por una omisión.

Tampoco puede estimarse que estemos frente a un vacío normativo o a una “laguna constitucional”, puesto que se trata de una decisión expresa del constituyente en orden a sancionar constitucionalmente sólo conductas positivas del Presidente de la República y no omisiones suyas. Además, es necesario tener en consideración que: “[l]a interpretación que

se realizara sobre sus causales de procedencia debía ser taxativa, de derecho estricto y con un alcance restrictivo. En tal sentido, la interpretación de las causales no podía ser extensiva o amplia. Lo contrario implicaría una violación de la Constitución”.³⁸

En palabras de don Francisco Zúñiga Urbina:

“Para los ministros de Estado también se exige causalidad específica, y por ende es una responsabilidad constitucional personal o subjetiva, directa. Pero a diferencia del Jefe de Estado, los ministros son responsables por inconductas (actos positivos o negativos, formales y no formales) encuadrables en los ilícitos constitucionales antes referidos, todo en estrecha conexión con su posición de órganos del Estado” (énfasis agregado).³⁹

Esto es particularmente relevante en la presente Acusación toda vez que los reproches que la fundan son **omisiones** y que se resumen, en palabras de los propios acusadores, en la expresión: **haber consentido**, o sea, **haber tolerado o no haber impedido** que se cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada, y haber comprometido el honor de la Nación por **haber consentido**, esto es, **haber tolerado o no haber impedido una** violación sistemática y generalizada de los derechos humanos (el verbo “consentir” conforme a la RAE significa: “1. tr. Permitir algo o condescender en que se haga. 6. tr. p. us. Dicho de una cosa: Soportar, tolerar algo, resistirlo.”)

Para comprobarlo basta con ver los títulos de cada uno de los capítulos de la Acusación:

*“Capítulo Primero: el Presidente de la República infringió abiertamente la constitución y las leyes al consentir en que las fuerzas armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada”*⁴⁰ (énfasis agregado)

*“Capítulo Segundo: el Presidente de la República comprometió gravemente el honor de la nación por consentir en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos”*⁴¹ (énfasis agregado)

Si bien el verbo **consentir** se satisface con una conducta meramente pasiva u omisiva (tolerar, permitir), al menos en teoría podría también realizarse mediante una acción o comportamiento positivo. Sin embargo, a lo largo de toda la Acusación los acusadores no identifican ninguna acción (acto) del Presidente de la República que pueda considerarse como un consentimiento expreso o positivo para que en nuestro país se violaran los derechos humanos de forma sistemática y generalizada, como lo sostienen los acusadores.

³⁸ Informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos señora Javiera Blanco, intervención Miriam Henríquez, p. 175.

³⁹ ZÚÑIGA URBINA, Francisco. *Responsabilidad Constitucional del Gobierno* (2006), Ius et Praxis, N° 12(2), pp. 43-74.

⁴⁰ Acusación, p. 7.

⁴¹ Acusación, p. 82.

Por el contrario, la única especificación que en la Acusación se hace de este supuesto consentimiento es con un alcance puramente omisivo, de mera tolerancia: “*En consecuencia, y en base a lo descrito en este segundo capítulo acusatorio, los actos de la administración del Presidente Piñera en orden a **permitir** la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos durante la crisis, comprometieron gravemente el honor de la Nación en los términos del artículo 52 N° 2, letra a) de la Constitución Política de la República*”.⁴² (énfasis agregado)

La supuesta omisión que se me atribuye carece de relevancia jurídico-constitucional para una acusación constitucional según el texto de la CPR. Por ello, una acusación constitucional dirigida al Presidente de la República por supuestas omisiones suyas es inadmisibles porque no cumple con la exigencia de que se le imputen “actos”.

La Constitución al hablar de “actos” por tanto, hace una distinción respecto de hechos, dotando a la acción requerida de una cierta formalidad que la haga identificable. Este estándar de formalidad requerido es el mínimo necesario para efectos de impulsar una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, una autoridad electa por la ciudadanía, por lo que las causales para su destitución deben medirse con el más alto estándar.

Así, para efectos de configurar esta causal, es necesario aludir al menos a los actos precisos emanados de este Presidente en virtud de los cuales se haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido **abiertamente** la Constitución o las leyes, lo que en este caso no ha ocurrido. La Acusación alude a una serie de hechos sobre los cuales se presentan aseveraciones poco rigurosas y a hechos respecto de los cuales se atribuyen calificaciones jurídicas, sin señalar o efectuar un mínimo vínculo de causalidad entre los **actos** imputables a este Presidente y los hechos alegados. Tampoco se me imputa la dictación de un acto, que haya implicado por mi parte un consentimiento a que se cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada, y que a raíz de esto haya infringido abiertamente la Constitución y las leyes o se haya comprometido gravemente el honor de la Nación, lo que no sucede en la Acusación en comento.

2. Una acusación constitucional dirigida al Presidente de la República sólo se puede fundar en reproches por actos de “su” administración, esto es por actos que le sean personalmente imputables y no sean atribuibles a terceros como lo plantea la Acusación

El texto constitucional exige que la causal en estudio se fundamente en actos de “su” administración. Ello implica que una acusación constitucional debe perseguir la responsabilidad personal y directa de aquellas autoridades a que hace referencia la Constitución, la que solo puede emanar de deberes jurídicos personales infringidos dentro del ámbito de su competencia. En tal sentido, cada persona debe responder por actos propios. Es necesario relevar que se me imputa responsabilidad por hechos que, en su mayoría, la misma Acusación atribuye a terceros, lo cual es contradictorio con lo pretendido de hacerme responsable directamente por supuestos ilícitos constitucionales.

Así las cosas, los acusadores me imputan responsabilidad por conductas que los acusadores atribuyen a terceros, que corresponden a gravísimas acusaciones de delitos, los

⁴² Acusación, p. 96.

cuales están siendo investigados y conocidos por los órganos competentes, quienes tendrán la labor de establecer la ocurrencia de los mismos y sus circunstancias.

En este sentido se ha resuelto en numerosas oportunidades en esta H. Cámara de Diputados, al acoger la cuestión previa que ha sido planteada en diversas acusaciones constitucionales. Por ejemplo, en la acusación constitucional en contra del ex Ministro de Justicia, Luis Bates, la comisión encargada de estudiar la procedencia de dicha acusación razonó:

*“Además de lo todo lo anterior, esta Comisión estima que la acusación constitucional debe ser desechada en la cuestión previa porque los hechos en que ella se funda no son de competencia del acusado. El principio que debe quedar claro es que **en caso alguno puede prosperar una acusación constitucional que se funda en infracciones o incumplimientos de otras personas, sean estas autoridades o particulares, por cuanto la responsabilidad que persigue hacer efectiva la acusación es siempre de carácter personal.***

Lo anterior significa que para que se configure respecto de una autoridad acusable el ilícito “infracción a la Constitución” se requiere necesariamente que las actuaciones imputadas al acusado correspondan a acciones positivas atribuibles directamente a su actividad, la que debe verificarse como un quebrantamiento de una norma constitucional.”⁴³
(énfasis agregado)

Del mismo modo, en la acusación constitucional presentada en contra de los ex Ministros de Minería y Hacienda, señores Alejandro Hales Jamarne y Alejandro Foxley Rioseco, la Comisión encargada de su estudio también concluyó la improcedencia de la acusación, recomendando a esta H. Cámara rechazarla en su totalidad, teniendo presente lo siguiente:

*“No existe, en nuestro derecho, la responsabilidad objetiva u orgánica como fundamento de la acusación constitucional. **La Constitución no juzga los resultados sino la legalidad de los actos.**”⁴⁴* (énfasis agregado)

“Finalmente, la falta de cumplimiento de las leyes que se invoca como causal de esta acusación debe entenderse como desobediencia abierta a mandatos legales específicos y claros, requisito que obviamente no se da en el caso. No se trata de un juicio valorativo sobre el desempeño del cargo de Ministros de Estado. Y en la especie ha quedado demostrado que

⁴³ Informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del ex Ministro de Justicia, señor Luis Bates Hidalgo, de 26 de noviembre de 2004, pp. 124 – 125, disponible en: <https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursolegales/10221.3/44107/7/Acusaci%C3%B3nConstitucionalLuisBates.pdf>

⁴⁴ Informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de los ex Ministros de Minería y de Hacienda, señores Alejandro Hales Jamarne y Alejandro Foxley Rioseco, página 132.

no ha habido violación de la ley expresa relacionada con el ejercicio de las potestades públicas de los señores Foxley y Hales.”⁴⁵

En el mismo sentido, en la acusación constitucional presentada en contra del ex Presidente Ricardo Lagos, cuando era Ministro de Obras Públicas, el año 1998, el voto de mayoría en la Comisión señaló que la acusación juzga a los funcionarios señalados en la Constitución por actos propios *“y no por actos ajenos o de terceros; ya que, si se trata de enjuiciar actos antijurídicos de funcionarios subalternos, se debe recurrir al procedimiento disciplinario por responsabilidad previsto en el estatuto administrativo”*.⁴⁶

En ese sentido, señala Silva Bascuñán que en esta materia rige el principio según el cual *“toda forma de responsabilidad ha de revestir carácter personal y no fundarse en decisiones o actuaciones que no se produzcan mediante su directa participación”*.⁴⁷

En ese contexto, resulta especialmente relevante que los hechos de que se me acusa corresponden al despliegue operativo de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, ámbito en el que el Presidente de la República no tiene potestades para incidir directamente. En efecto, tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tienen, por expresa disposición constitucional (artículo 101 inciso tercero de la Constitución) el carácter de “profesionales”. Esto significa que, si bien son “obedientes” conforme la misma disposición, con lo cual están sujetos normativamente al poder civil por medio de los respectivos Ministerios, su carácter “profesional” les confiere autonomía operativa. En dicho ámbito el Presidente de la República no tiene atribuciones legales para intervenir directamente en su despliegue operativo.

Confirma lo anterior el hecho que la propia Constitución, cuando estima necesario que el Presidente de la República incida directamente en el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, dispone una excepción a la regla general. Tal es el caso del artículo 32 N° 18 de la Constitución, que señala que, solo *“en caso de guerra”*, el Presidente de la República asumirá *“la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas”*. Con esa excepción, la Constitución subraya la regla general según la cual el Presidente de la República ha de respetar el carácter profesional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, sin intervenir directamente en su despliegue operativo.

Lo anterior fue reforzado por el profesor Eduardo Aldunate Lizana en su exposición en la Comisión revisora de la Acusación al Presidente de la República de fecha 3 de diciembre de 2019, señalando que *“Hoy día el Presidente de la República desde el punto de vista jurídico no tiene capacidades operativas respecto de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, el único caso en que el Presidente tiene mando directo sobre las Fuerzas Armadas es el caso de guerra, pero el Presidente no puede hoy día darle una orden a un Carabinero o a un miembro de las Fuerzas Armadas.”*⁴⁸

⁴⁵ Informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de los ex Ministros de Minería y de Hacienda, señores Alejandro Hales Jamarne y Alejandro Foxley Rioseco, página 137.

⁴⁶ Informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del ex Ministro de Obras Públicas, señor Ricardo Lagos, p. 101.

⁴⁷ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 129.

⁴⁸ Intervención del señor Eduardo Aldunate Lizana, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, martes 3 de diciembre de 2019.

Las disposiciones referidas permiten una adecuada interpretación del artículo 24, inciso segundo, de la Constitución que dispone que la autoridad del Presidente de la República “*se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.*” Tal órbita de autoridad, que siempre debe ser ejercida “*de acuerdo con la Constitución y las leyes*”, debe necesariamente ser coherente con el carácter profesional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

Lo anterior es relevante, toda vez que para ser admisible una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, debe tratarse de un “acto de su administración”, es decir, debe existir un acto (acción) imputable a la autoridad, que refleje una conducta voluntaria, antijurídica y culpable, que le sea directamente imputable, lo que en ningún caso se cumple en la Acusación.

La acusación constitucional es por tanto un instrumento que persigue la responsabilidad individual de la autoridad que se acusa, debiendo fundarse en un acto (acción) imputable directamente a este Presidente, en el que se haya manifestado una intención positiva de comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o de infringir abiertamente la Constitución o las leyes, mediante la imputación de actos personales del acusado, clara y precisamente formulados.

Como hemos señalado, la Acusación no identifica con claridad actos (acciones) que permitan dar por probada una responsabilidad directa y personal de la autoridad acusada, ya que en la mayoría de las conductas antijurídicas señaladas no ha participado de forma directa este Presidente.

3. En la Acusación no se me imputan actos de administración, como lo exige el texto constitucional

Por último, la expresión “actos de su administración” del texto constitucional limita la aplicación de las causales a los actos de administración y excluye a los actos de gobierno. Los primeros son los actos que dicen relación con el funcionamiento de los servicios públicos, cuyo fin es satisfacer necesidades públicas, por lo que tienen una naturaleza más bien regular y sostenida en el tiempo. En ellos, el Presidente de la República cuenta con menores márgenes de discrecionalidad y apreciación (típicamente es un acto de la administración la dictación de una instrucción a un servicio público o bien la dictación de un reglamento, en ejercicio de la potestad reglamentaria presidencial).

Por el contrario, en los actos de gobierno existe un mayor margen de apreciación, son adoptados ante circunstancias extraordinarias, en base a criterios de todo tipo, incluyendo los políticos. El ejemplo clásico es la declaración de la guerra, por lo que no hay duda que la declaración de un estado de emergencia -como ocurrió en este caso- constituye un acto de gobierno. Ello y según se adelantó, sin perjuicio del control que respecto de la declaración del Estado de Emergencia ejerce la Contraloría General de la República mediante la toma de razón del respectivo decreto supremo y sin perjuicio de la aprobación que debe dar el Congreso Nacional a una renovación del Estado de Emergencia, en caso que éste requiera ser prorrogado en una segunda oportunidad.

Al respecto el profesor Cea Egaña se refiere a:

“[l]os Actos de Gobierno, más correctamente llamados Actos de Estado en la cultura anglosajona. Es decir, se trata de decisiones cuyo contenido es esencialmente político y controlable sólo por órganos de esa misma naturaleza, no mediante intervención judicial de estos fiscalizadores de la legalidad de las actuaciones administrativas.”⁴⁹

Se caracteriza este tipo de actos como cuando el Jefe de Estado:

“[n]ombra o pide la renuncia a los Ministros y Subsecretarios de Estado; disuelve la Cámara Baja del Parlamento en un régimen parlamentario; declara o deja sin efecto el estado de sitio; implanta una zona de catástrofe antes sismos o inundaciones; dispone el ascenso o retiro de los oficiales de las Instituciones Armadas; envía al Congreso mensajes con proyectos de ley que son de su iniciativa exclusiva, formula indicaciones durante la tramitación parlamentaria de ellos, les infunde urgencia para su tramitación, o ejerce la facultad de vetarlos; convoca a plebiscito o referendo para la ratificación popular de un proyecto de reforma constitucional; concede o no el indulto particular a los condenados por la Magistratura; impulsa planes y programas que priorizan determinadas áreas de desarrollo socioeconómico, zonas geográficas o sectores de la población infraprotegida por el sistema jurídico; o , por último lleva a cabo la política de seguridad e inteligencia, de naturaleza económica y social o de índole científico-tecnológica que estima más conveniente para el bien común del país cuyo gobierno le ha sido democráticamente confiado.”⁵⁰

Por otro lado, en la Acusación se me atribuye haber realizado tan solo tres acciones, ninguna de las cuales satisface la exigencia constitucional para ser calificada como una causal de acusación constitucional de acuerdo al tenor literal del artículo 52, N° 2), letra a) de la Constitución.

En primer lugar, se menciona el haber decretado el Estado de Emergencia, acto de gobierno (no de administración como exige el texto constitucional), cuyo mérito no puede ser calificado por los Tribunales de Justicia, tal como lo contempla la misma CPR en su artículo 45, señalando que *“Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 39.”*. El artículo 39 de la CPR, por su parte señala que *“El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.”*

Lo anterior ha sido refrendado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de casación Rol N° 4029-2013, de fecha 24 de diciembre de 2013, que, conociendo de un Recurso de Casación en el Fondo, sostuvo:

⁴⁹ CEA EGAÑA, José Luis, Teoría de Gobierno, p. 167.

⁵⁰ CEA EGAÑA, José Luis, Teoría de Gobierno, pp. 168-169.

“Duodécimo: Que la consecuencia inevitable de las aseveraciones precedentes es que, tal como lo señala la juez de la causa, la regulación de los estados de excepción implica la **conurrencia de exigencias cuya verificación es de resorte exclusivo del gobierno**. En efecto, la Constitución Política manda sin equívocos que se excluye rotundamente del control judicial el acto administrativo dictado en ejercicio de la potestad de gobierno y discrecional relativa a la declaración de estados de excepción constitucionales, la cual no es susceptible de ser fiscalizada por los Tribunales. Ello tiene como fundamento no sólo la disposición expresa constitucional sino que también la circunstancia de que el control jurisdiccional tiene como límite divisorio los actos que son propios de la actividad política, en este caso de la autoridad máxima de gobierno, de suerte que los órganos jurisdiccionales no se encuentran autorizados para revisar decisiones de esta índole”⁵¹ (énfasis añadido).

A propósito de dicha sentencia, Francisco Zúñiga señala:

*“En consecuencia, se concluye que la calificación del estado de excepción es un acto de gobierno o político proveniente de una atribución exclusiva de un órgano supremo del Estado que queda exento de control judicial, por expresa disposición constitucional, cuestión que se funda en que el control judicial tiene como límite los actos que son propios de la actividad política, esfera que escapa a los tribunales de justicia.”*⁵²

Para luego reforzar este punto, señalando:

*“Invariablemente la decisión acerca del estado de excepción es política (Schmitt); intervienen los poderes constituidos en su declaración siendo el impulso fundamental del presidente de la República, y precisamente un acto de gobierno es un acto estatal no justiciable, independientemente de su forma un decreto supremo, todo sin perjuicio de los controles políticos o de legalidad que siempre son procedentes”, “Con todo, la sentencia comentada delinea de manera completa al acto de gobierno: primero, es un acto fruto de una atribución exclusiva o “especial” del presidente la República, de fuente constitucional (artículo 32 N° 5 de la Constitución); segundo concierne a un estatuto excepcional para situaciones de anormalidad que exigen prontamente el restablecimiento de la normalidad institucional (salud pública); tercero la politicidad de la materia incardinada en una subfunción gubernativa del “Poder Ejecutivo”; cuarto, el margen de libre apreciación (impropiamente denominada “discrecionalidad”) de la autoridad ejecutiva frente a las hipótesis habilitantes para declarar estados de excepción, y quinto, la inmunidad de control judicial.”*⁵³

⁵¹ Sentencia de Casación ROL N° 4029-2013, de 24 de diciembre de 2013.

⁵² ZÚÑIGA URBINA, Francisco. *El Derecho de Excepción y la Responsabilidad del Estado: Falta de Servicio y Acto de Gobierno. Comentario de la Sentencia de Casación Rol N° 4029-2013 de la Corte Suprema, de 24 de diciembre de 2013* (2014), Estudios constitucionales Vol. 12 N° 1, Santiago.

⁵³ ZÚÑIGA URBINA, Francisco. *El Derecho de Excepción y la Responsabilidad del Estado: Falta de Servicio y Acto de Gobierno. Comentario de la Sentencia de Casación Rol N° 4029-2013 de la Corte Suprema, de 24 de diciembre de 2013* (2014), Estudios constitucionales Vol. 12 N° 1, Santiago.

Lo anterior no implica sin más de que se trate de un acto de gobierno desprovisto de toda forma de control. Desde luego, debiendo constar en un decreto supremo, está sujeto al control de la Contraloría General de la República, como ocurrió en todos los casos en que se decretó Estado de Emergencia. Del mismo modo, el Congreso Nacional debe dar su acuerdo, en caso que el Presidente de la República decida prorrogar más de una vez el Estado de Emergencia.,

En segundo lugar, se me imputa la cancelación de eventos de alta significancia internacional, en particular haber cancelado la Cumbre de Líderes de las Economías APEC y COP 25. De acuerdo a los acusadores ello habría comprometido gravemente el honor de la Nación, y constituiría una infracción a mi deber constitucional, al haber situado a Chile como un país “*indigno para servir como sede de una cumbre internacional.*”⁵⁴

Sin embargo, existe una desconexión absoluta entre dichos actos y la imputación respecto a haber consentido en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos en nuestro país que, por lo demás, en la Acusación se atribuye a terceros. Nadie puede sostener seriamente que la cancelación de ambas reuniones internacionales haya sido causa de haber consentido en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos ni en forma alguna puede afirmarse que constituyen actos de consentimiento en dichas transgresiones. La Acusación en este sentido es completamente artificiosa y carece de fundamento. Bajo esta lógica, todas las cancelaciones de eventos internacionales producidas por manifestaciones o para velar por la seguridad pública, acarrearían la responsabilidad política del Presidente de la República, lo que es, a todas luces absurdo.

Por lo demás, la cancelación de la Cumbre de Líderes de las Economías APEC y de la COP 25 fue una decisión que tome como Presidente de la República para resguardar el orden público, proteger a autoridades y visitantes extranjeros, y para concentrar todos los esfuerzos de este Gobierno en la canalización de las demandas sociales, lo cual corresponde a un típico acto de gobierno y no de administración, como lo requiere el texto constitucional.

Además, si el constituyente hubiese querido que la acusación constitucional pudiese fundamentarse en actos de gobierno y en actos de administración, habría utilizado la misma nomenclatura que el artículo 52 N° 1 de la CPR, que se refiere a “*actos del gobierno*”. Sin embargo prefirió hacer la distinción y referirse sólo a “*actos de su administración*” estableciendo una clara separación entre ellos.

De este modo, la frase por actos “de su administración” y como lo ha entendido la doctrina constitucional, permite únicamente a los actos de administración configurar alguna de las tres causales de acusación constitucional en contra del Presidente de la República.

En palabras de Francisco Zúñiga Urbina:

“La atribución de responsabilidad constitucional del Presidente de la República, exige como es obvio una causalidad específica, y por ende es una responsabilidad subjetiva o personal, pero conectada a la posición de éste como órgano supremo del Estado. En este contexto tiene especial interés consignar el alcance de los actos o inconductas que pueden ser encuadradas en estos ilícitos. Una primera lectura del artículo 52 N° 1

⁵⁴Acusación, p. 102.

letra a) de la Constitución, que se refiere al Presidente de la República como pasible “por actos de su administración”, junto con admitir la singularidad de actos formales (Actos de la Administración que emanan del Jefe de Estado, a saber: decretos, reglamentos, instrucciones y actos formales), excluye claramente a los actos políticos o de Gobierno, que de suyo poseen un peso institucional y un margen de discrecionalidad muy importante; siendo relevante la permanente y compleja diferenciación funcional de Gobierno y Administración en la Carta vigente. Esta primera lectura es avalada por el imperativo hermenéutico constitucional de que tratándose de un Derecho Sancionador, los ilícitos son de derecho estricto e interpretación restrictiva, en la medida que son compatibles con la naturaleza jurídico-política de esta responsabilidad.”⁵⁵ (énfasis agregado)

De lo anterior es posible concluir, entonces, que el acto administrativo en virtud del cual se decreta Estado de Emergencia, es constitutivo de un acto de gobierno, lo cual es coherente con lo establecido en la misma Constitución, en el sentido que tal como se señaló, estos actos se sustraen del control jurisdiccional y se sujetan a control político, el cual la misma CPR otorga a la Cámara de Diputados en virtud del artículo 52 N° 1 de la Constitución, lo cual se ve reforzado por el hecho que la causal de acusación constitucional en revisión se refiere sólo a “*actos de su administración*” dejando por tanto expresamente fuera de la causal los actos de gobierno, sin que esto quiera decir que éste tipo de actos son exentos de control, pues como se señaló, están sujetos a la fiscalización de la Cámara de Diputados.

La misma lógica es aplicable a los actos mediante los cuales tome la decisión de cancelar la Cumbre de Líderes de las Economías APEC y haber hecho otro tanto con la reunión COP 25, ambos actos de administración y por tanto, como se señaló, incapaces de sustentar *per se* una acusación constitucional.

En síntesis, y conforme a lo previsto en la CPR, las causales que hacen procedente una acusación en contra del Presidente de la República suponen que se realicen “*por actos de su administración*”. La presente Acusación no satisface este estándar porque: (i) se me atribuye una omisión inespecífica: haber consentido en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos; (ii) no se trata de una atribución de responsabilidad personal de este Presidente de la República, es decir, por actos propios; y, (iii) ninguno de los tres actos que se me imputan (haber decretado el Estado de Emergencia, haber cancelado la cumbre APEC y la reunión COP 25) constituyen actos de administración sino que son típicamente actos de gobierno, en los términos señalados.

IV. LA ACUSACIÓN SUPONE UN ABUSO DEL DERECHO, TODA VEZ QUE PRETENDE REVISAR LAS CONSIDERACIONES DE MÉRITO PARA LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA

⁵⁵ ZÚÑIGA URBINA, Francisco. *Responsabilidad Constitucional del Gobierno* (2006), Ius et Praxis, N° 12(2), p. 68.

La Acusación se erige sobre una imputación sensible y gravísima: que este Presidente habría permitido y, más aún, alentado actos que constituirían violaciones a los derechos humanos.

El libelo funda esta acusación en la declaración del Estado de Emergencia. En efecto, reprocha haber decretado el Estado de Emergencia con el *preciso objeto de reprimir* el derecho de reunión y la libertad de expresión, los que en su conjunto conformarían el derecho a la protesta social.

Al respecto, corresponde señalar en primer lugar que la dictación del Estado de Emergencia y la calificación de las circunstancias que harían necesaria su declaración es una facultad exclusiva del Presidente de la República, no siendo permitido al H. Congreso Nacional impugnar aquella calificación, sin perjuicio de su intervención en el caso de que, una vez prorrogado, se pretenda una nueva renovación.

Adicionalmente, la acusación constitucional es un mecanismo que tiene un objeto estricto, que es hacer efectiva una responsabilidad jurídico-constitucional de una autoridad determinada, lo que ciertamente no habilita a revisar el mérito de decisiones discrecionales que se hayan realizado en uso de una facultad legal o constitucional. Así, no es admisible utilizar dicho mecanismo para juzgar políticamente el ejercicio de la facultad presidencial en la declaración de un estado de excepción constitucional.

Sin perjuicio de todo lo anterior, no es efectivo de modo alguno que la declaración del Estado de Emergencia haya tenido por *deliberado propósito* –como lo representa la Acusación– la represión de manifestaciones sociales ni violaciones a los derechos humanos.

Por el contrario, declaré los Estados de Emergencia teniendo como único propósito el resguardo de la seguridad de los ciudadanos y el orden público, función esencial e inexcusable del Presidente de la República. En ese marco, la declaración de los Estados de Emergencia se ajustó a derecho, pues fue realizada de forma proporcionada, racional y con pleno respeto a la Constitución y a los estándares internacionales.

1. De acuerdo a la Constitución, la potestad de declarar el Estado de Emergencia es privativa del Presidente de la República

La Constitución dispone que la declaración del Estado de Emergencia responde a una facultad privativa y exclusiva del Presidente de la República, no teniendo permitido el Congreso Nacional inmiscuirse en su dictación o duración, sino sólo en el caso de que el Presidente pretenda prorrogarlo por segunda vez, transcurridos 30 días desde su establecimiento, conforme al inciso primero del artículo 42 de la Constitución, lo cual no ha ocurrido en estos hechos:

“El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El

referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40”.

De este modo, el Estado de Emergencia, a diferencia de los estados de excepción constitucional de Sitio y de Asamblea, es declarado por el Presidente de la República sin previo acuerdo con el Congreso Nacional. Esto importa necesariamente que la calificación de las circunstancias que hacen procedente su declaración –*la grave alteración del orden público y/o el grave daño para la seguridad de la Nación*- debe ser apreciada por el mismo Presidente de la República de forma exclusiva.

2. A los demás Poderes del Estado les está expresamente vedado pronunciarse sobre el mérito de la declaración que realiza el Presidente de la República

Teniendo el Presidente de la República habilitación directa para dictar el Estado de Emergencia, los demás poderes del Estado están impedidos de entrar a calificar los fundamentos de las medidas que haya adoptado la autoridad en el ejercicio de sus facultades. Así lo establece la Constitución en el inciso primero de su artículo 45 que:

“Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda”.

De acuerdo a la misma norma constitucional, entonces, ni aún los tribunales de justicia podrían calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para decretar un estado de excepción constitucional. A ellos corresponde verificar que las facultades que se estén ejerciendo, que las medidas particulares, se correspondan al estado de excepción constitucional en particular.

Una interpretación lógica de dicha disposición obliga a concluir que también le está vedado al Congreso Nacional impugnar los fundamentos de dicha decisión. Si tal hubiera sido la decisión del constituyente, se habría incluido en el texto la necesidad que el Presidente de la República cuente con aprobación del Congreso para la declaración del Estado de Emergencia, al igual como lo prevé para el estado de sitio.

La exclusividad de esta facultad emana no sólo de la letra de las normas constitucionales aplicables, sino de la lógica que reside detrás de cada tipo de estado de excepción constitucional. En efecto, el Estado de Emergencia se estableció para responder a hipótesis de “*grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación*”, escenario que demanda una respuesta ágil por parte del Ejecutivo, sin instancias deliberativas que pudieran entorpecerlo, en aras al pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Ciertamente, la decisión del constituyente de mantener reservado en el Presidente de la República la calificación de las circunstancias que habilitan a la dictación de un Estado de Emergencia y la duración de éste, responde a las necesidades urgentes del contexto que requiere su dictación. El propósito del Estado de Emergencia es procurar el pronto

restablecimiento del orden público o de la seguridad –según sea el caso– dentro del acotado plazo que la Constitución permite, esto es, 15 días.

Por ende, la incorporación de un órgano explícitamente diseñado para ser una instancia deliberativa, como el Congreso Nacional, en la toma de la decisión inicial, calificando la *gravedad* de las circunstancias y luego dirimiendo la extensión geográfica y temporal que debiera tener, comprometería seriamente la celeridad de la medida. En última instancia, devendría en un mecanismo ineficaz para abordar las circunstancias que se propone enfrentar. En otras palabras, pondría en riesgo la seguridad nacional y el orden público.

De este modo, no habiéndose prorrogado el Estado de Emergencia por el plazo que, conforme a la Constitución, habilita al Congreso Nacional para incidir en la determinación de su duración, no concurren los requisitos para que dicho órgano intervenga en tal decisión. Por tanto, no es admisible el soterrado intento de los acusadores de impugnar los motivos del Presidente de la República.

3. Los acusadores igualmente objetan la calificación de las circunstancias que ameritaban la declaración del Estado de Emergencia, reprochando que se habría torcido su uso, con el objeto de reprimir la manifestación social

Los propios acusadores reconocen que la declaración del Estado de Emergencia es una atribución exclusiva del Presidente de la República:

“Como se puede apreciar, de la regulación propia de los estados de excepción constitucional y las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, se observa el espacio de libre apreciación o discrecionalidad de la autoridad ejecutiva frente a las hipótesis habilitantes para declararlos, recayendo sobre su decisión, la determinación de dicha declaración oficial”⁵⁶.

Pues bien, luego de establecer lo anterior, el libelo me acusa de haber decretado el Estado de Emergencia con el preciso objeto de reprimir el derecho de reunión y la libertad de expresión. Es decir, los acusadores teorizan respecto a un acto, acusando que habría tenido por objeto reprimir tales derechos. Lo expresan en la Acusación del siguiente modo:

“La declaración del estado de excepción constitucional para enfrentar la protesta social es un hecho cuyo único antecedente lo encontramos en la dictadura cívico militar. La entrega del control y del orden público a las Fuerzas Armadas, involucra un riesgo para la población que debía ser advertido por el mandatario. Desplegar a soldados fuertemente armados, con fusiles de guerra de alto calibre, a enfrentar manifestaciones sociales y no a resguardar parte de la estructura crítica del estado, acarreó consecuencias dañinas para la población, centenares de personas y en muchos casos irreversibles. Sin embargo, la secuencia de los acontecimientos indica con claridad que la decisión política del Presidente tuvo por propósito reprimir las expresiones de descontento

⁵⁶ Acusación, p. 70.

*contra su gobierno, lo que se prolongó una vez que cesó el estado de emergencia con fecha 28 de octubre”*⁵⁷ (énfasis agregado).

De este modo, los acusadores se valen de este instrumento para manifestar una crítica a decisiones de esta autoridad, y para imputar –sin evidencia alguna- que habría declarado el Estado de Emergencia pensando éstos como un mecanismo de represión, omitiendo por otra parte todo el contexto fáctico en el que se enmarcó la declaración de aquellos estados de excepción constitucional.

Sin ir más lejos, la Acusación reprocha que la declaración de los Estados de Emergencia respondió a “*un uso patológico o con fines criminalizadores*”⁵⁸ de la institución. Como contrapartida, prescindió completamente de los hechos en los que se insertó mi decisión.

Ciertamente, las pretensiones del libelo escapan de las estrictas causales por las que procede una acusación constitucional. Esta consiste en un procedimiento de derecho estricto, razón por la cual debe circunscribirse a conductas reprochadas a una autoridad que, de un modo directo, personal y causal, importe infringir una norma de competencia o de atribución de potestades propias de la autoridad en cuestión. En consecuencia, la acusación constitucional no es una vía idónea para hacer valer esta clase de discrepancias.

No obstante, ajustándonos al tenor de la Acusación, corresponde discernir si acaso es posible ver, en la declaración de los Estados de Emergencia, un acto vil, que responda a un intencionado y directo propósito de represión. Lo cierto es que no:

*“La pregunta en esta acusación no es si el Presidente cometió errores al resguardar el orden, que es una de sus tareas esenciales conforme a la Constitución [...] sino si lo hizo con el deliberado propósito de que se violaran los derechos humanos. No veo en el libelo evidencia alguna que me permita afirmar lo segundo”.*⁵⁹

Contrario a lo que reprocha la Acusación, y según se verá seguidamente, la declaración de cada Estado de Emergencia fue una decisión razonada, que tuvo como único propósito el resguardar la seguridad de las personas y el orden público. Para ello es fundamental enmarcar esta decisión en el escenario que se desarrolló a contar de la semana del 14 de octubre del presente año, máxime si se considera que los instrumentos que utiliza la propia Acusación –criterios de tratados internacionales de derechos humanos y de derecho público para la limitación de derechos- sitúan la discusión en un plano fáctico.

4. La declaración de cada Estado de Emergencia fue una decisión razonada, oportuna y adecuada a las circunstancias de hecho, que tuvo por preciso objeto resguardar la seguridad de los ciudadanos y el orden público

Según se ha expuesto en los párrafos precedentes, no corresponde que los acusadores califiquen el discernimiento respecto a la procedencia del Estado de

⁵⁷ Acusación, p. 76.

⁵⁸ Acusación, p. 61.

⁵⁹ Intervención de Jorge Correa Sutil, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, lunes 25 de noviembre de 2019. Disponible en: <http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=46#>

Emergencia, el cual fue declarado en uso legítimo de las facultades constitucionales y legales que me corresponden como Presidente de la República. Sin perjuicio de ello, cabe reiterar que la declaración del Estado de Emergencia respondió a una decisión razonada, necesaria y proporcionada, siendo aquél estado de excepción constitucional un camino oportuno y ajustado a las circunstancias vigentes al momento de su declaración.

En efecto, mi decisión fue motivada por un contexto de grave alteración del orden público, y en atención a que constituye una función esencial e ineludible del Estado y en especial del Presidente de la República de resguardar la seguridad de las personas y el orden público.

Aquel contexto fue una lamentable escalada de violencia y vandalismo, ya relatada pormenorizadamente, que tuvo principio en la sucesión de evasiones masivas en la red de Metro de Santiago, hasta que el día jueves 17 de octubre del año en curso se verificaron ataques violentos en cuatro estaciones de Metro. Al día siguiente, lejos de detenerse, los hechos de violencia crecieron exponencialmente, con nuevos ataques a estaciones de Metro, y sumándose saqueos, daños e incendios a edificios, fogatas y barricadas en las principales vías de Santiago. Así, caída la noche del día viernes 18 de octubre de 2019, la situación alcanzó una fase crítica.

Ante este complejo escenario de violencia, y la necesidad de complementar la dotación –ya reforzada– de Carabineros de Chile, tomé la decisión de decretar Estado de Emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo de la Región Metropolitana.

Según ya se ha relatado, desde el sábado 19 de octubre, desgraciadamente, la violencia se intensificó y se fue extendiendo a otras zonas del país. En este contexto, decreté Estado de Emergencia para la Región de Valparaíso (con excepción de la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández) y para la Provincia de Concepción en la Región del Biobío. Asimismo, se extendió a toda la Región Metropolitana, y el Jefe de la Defensa Nacional decretó toque de queda para esa noche.

Del mismo modo se operó el día 20 de octubre, decretándose nuevos Estados de Emergencia en las comunas de Antofagasta, La Serena y Coquimbo, Rancagua, Talca, Chillán y Chillán Viejo, Temuco y Padre de las Casas, Valdivia y de Punta Arenas; el 21 de octubre para la Provincia de Iquique y la comuna de Pozo Almonte, las comunas de Copiapó, Caldera y Vallenar, las comunas de Puerto Montt y Osorno; y el martes 22 de octubre, para las comunas de Arica, Tocopilla, Mejillones, Calama, y Puerto Natales.

En definitiva, la declaración de cada Estado de Emergencia constituyó una respuesta necesaria, justificada y proporcional a los actos de destrucción, delincuencia y vandalismo que se experimentaron exponencialmente en un breve lapso de tiempo, decisión adoptada en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales vigentes.

Al respecto, la Acusación invoca disposiciones de tratados internacionales, tales como el artículo 27 de la CADH y el artículo 4 del PIDCP, así como jurisprudencia de la Corte IDH, señalando que la dictación de un estado de excepción constitucional debe ajustarse a estándares de proporcionalidad.

Pues bien, en particular, cada declaración y posterior levantamiento del Estado de Emergencia se ajustó a derecho y fue realizada con pleno respeto a la Constitución, a las leyes y a los estándares internacionales, siendo una medida necesaria, urgente y proporcional, que tuvo como único objetivo el de resguardar la seguridad de las personas y el orden público. De hecho, como se indicó, tanto la declaración del Estado de Emergencia como su término fueron debidamente notificados a la Organización de Estados Americanos, en cumplimiento del artículo 22.3 de la CADH.

a. La declaración de cada Estado de Emergencia fue necesaria y urgente

Primeramente, no cabe duda que se trató de una decisión necesaria. Su necesidad derivó del carácter tuitivo del régimen de excepción que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para proteger las vidas, tranquilidad, seguridad y bienes de la población. La urgencia se debió a la grave y sostenida alteración del orden público generado por los masivos atentados a los medios de transporte público, comercio, numerosas barricadas que impedían la garantía de libre circulación de las personas, constituyendo un peligro público actual e inminente para la población.

Dan cuenta de ello el examen de los hechos y las solicitudes de diversas autoridades, requiriendo o bien la declaración de un Estado de Emergencia o bien su mantención. Aquellas comunicaciones provinieron de autoridades de distintas veredas políticas y de diversos territorios y regiones. Cabe destacar que estas solicitudes no sólo manifestaban un deseo de que se estableciera o mantuviera el Estado de Emergencia, sino que también indicaban circunstancias concretas que lo hacían necesario.

Así, era transversal el entendimiento de que el Estado de Emergencia se erigía como un recurso necesario ante la crisis de violencia. Más aún, reputados políticos nacionales coincidieron que la declaración de Estado de Emergencia se trataba de una decisión *ineludible*. Así la calificó el ex ministro en las carteras de Defensa Nacional (2014-2015) e Interior y Seguridad Pública (2015-2016) del segundo mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet Jeria, Jorge Burgos Varela.⁶⁰

Junto a ello, en medio del Estado de Emergencia, más de mil académicos y políticos firmaron una misiva titulada "En defensa de la democracia", donde aseguraron respaldar *"la acción del Estado y de sus instituciones para que se reestablezca la paz y la seguridad de las personas"*.⁶¹

En esta misma línea, en la sesión especial de esta H. Cámara de Diputados celebrada el domingo 20 de octubre de 2019, don Raúl Leiva Carvajal, diputado del Partido Socialista, manifestó lo siguiente:

"Yo no voté por este gobierno, pero también tengo que ser respetuoso por las autoridades y efectivamente hoy día, en un ánimo crispado, hay algunos que pretenden sacar algún dividendo o provecho político de la

⁶⁰ Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/jorge-burgos-exministro-del-interior-defensa-no-comparto-nada-la-critica-violacion-sistematica-derechos/885468/>

⁶¹ Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/defensa-la-democracia-la-carta-convergencia-liberal-donde-pide-dialogo-nacional/874879/>

*desgracia que tienen nuestros vecinos. En nuestras comunas la gente tiene miedo. En nuestras comunas se dan cosas que no se había visto. Están saqueando supermercados. Están robando y violentando a su gente y ahí hay que actuar con fuerza y energía dentro de un Estado de Derecho y dentro del marco constitucional”.*⁶²

Revisado el contexto fáctico en el que se insertó mi decisión, y en vista del amplio consenso respecto a la necesidad de la declaración de los Estados de Emergencia, pierde razón la posición de los acusadores, quienes insisten en que ésta fue una medida innecesaria en cuanto al orden y seguridad, y que por ende devenía en represiva.

b. La declaración de cada Estado de Emergencia fue proporcional

Además de necesaria, la decisión de decretar los Estados de Emergencia se ajustó al criterio de proporcionalidad. Esta exigencia proviene tanto de nuestra Constitución –que exige acotar el Estado de Emergencia a *las zonas afectadas* por las circunstancias que lo hacen procedente–, como de los tratados internacionales citados, los que exigen que recursos de este tipo se extiendan “*en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación*”.

Evidentemente, los estándares jurídicos no son precisos, sino parámetros abstractos, siendo necesario analizar a la luz de los hechos concretos si acaso la decisión de decretar Estado de Emergencia, al momento en que fue adoptada, fue una decisión proporcionada al fin que se buscaba. No cabe duda que el examen debe ser particular, más aún si tenemos en consideración que se trata de una facultad de uso exclusivo y privativo del Presidente de la República, según reconocen los propios acusadores.

Pues bien, la proporcionalidad de la medida resulta manifiesta si se considera que fue aplicada con límites de duración, circunscribiendo su ámbito geográfico a las zonas afectadas donde fuera estrictamente necesaria, garantizando y procurando, en todo momento, el control de legalidad de las actuaciones de los órganos públicos.

Más aún, el Estado de Emergencia es el estado de excepción constitucional menos intenso de nuestro ordenamiento jurídico, en atención a lo que establece el artículo 43 de la Constitución. Así, haber adoptado ésta alternativa, y no –por ejemplo– un Estado de Sitio, da cuenta de la intención de utilizar el recurso de mínima afectación dentro del contexto que he descrito.

Asimismo, cada Estado de Emergencia decretado se adoptó luego de agotadas las medidas ordinarias para la mantención del orden público y la seguridad. En efecto, la declaración del Estado de Emergencia en el resto del país se efectuó luego que la dotación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no dio abasto ante la simultaneidad y magnitud de los graves hechos de violencia que se desarrollaron en cada una de las zonas afectadas. Así, la declaración de cada Estado de Emergencia se abordó y adoptó de forma particular y diferenciada, caso a caso, analizando específicamente cada lugar en la medida en que me pareció necesario hacerlo.

⁶² Intervención del H. Diputado Raúl Leiva Carvajal, sesión especial de la H. Cámara de Diputados, domingo 20 de octubre de 2019. Disponible en: http://www.cdtv.cl/video_sesion.aspx?id=3833

Así, se dictaron los Decretos de Estado de Emergencia en los lugares afectados, conforme a la situación de cada zona y en la oportunidad que se señala en la siguiente tabla:

Región	Zona Decretada	Decreto	Fecha Publicación	Decreto Término Emergencia	Fecha Término Emergencia
Arica	Comuna de Arica	496	22-10-2019	527	28-10-19
Tarapacá	Provincia de Iquique Comuna de Pozo Almonte	487	21-10-2019	528	28-10-19
Antofagasta	Comuna de Antofagasta Comuna de Tocopilla Comuna Mejillones Comuna Calama	478 495	20-10-2019 22-10-2019	529	28-10-19
Atacama	Comuna de Copiapó Comuna de Caldera y Comuna de Vallenar	488	21-10-2019	530	28-10-19
Coquimbo	Comunas La Serena Comuna Coquimbo	475	20-10-2019	531	28-10-19
Valparaíso	Región Valparaíso Excepción isla Pascua y Juan Fernández	473	19-10-2019	532	28-10-19
RM	Región Metropolitana	472 479	19-10-2019 20-10-2019	533	28-10-19
O'Higgins	Comuna Rancagua	476	20-10-2019	534	28-10-19
Maule	Comuna Talca	482	20-10-2019	535	28-10-19
Ñuble	Comunas de Chillán y Chillan Viejo	484	20-10-2019	536	28-10-19
Biobío	Provincia de Concepción	474	19-10-2019	537	28-10-19
Araucanía	Comunas de Temuco y Comuna Padre las Casas	483	20-10-2019	538	28-10-19
Los Ríos	Comuna de Valdivia	477	20-10-2019	539	28-10-19
Los Lagos	Comuna de Puerto Montt y Comuna de Osorno	490	21-10-2019	540	28-10-19
Magallanes	Comuna de Punta Arenas Comuna Puerto Natales	485 497	20-10-2019 22-10-2019	541	28-10-19

Finalmente, la proporcionalidad de la medida se ve también satisfecha en cuanto a su temporalidad. Empleando el mismo criterio de proporcionalidad, dispuso el término al Estado de Emergencia en cuanto las circunstancias lo permitieron, incluso antes de que venciera el plazo de 15 días para su prórroga, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución.

En efecto, con fecha 27 de octubre de 2019, mediante los decretos supremos N°s 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 y 541, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se levantaron todos los Estados de Emergencia decretados.

Por otra parte, en un plano distinto se encuentran los *toques de queda*. La Acusación confunde la dictación de los Estados de Emergencia y de los *toques de queda*, evaluando el mérito de ambas decisiones sin distinguirlas.

En efecto, sobre el punto de la proporcionalidad, la Acusación se limitó a invocar un informe en derecho no publicado⁶³, y que ni siquiera fue acompañado como antecedente de la Acusación, el cual se referiría exclusivamente al *toque de queda* decretado para la región de Valparaíso, y concluiría que éste no satisfacía los estándares internacionales de proporcionalidad.

Pues bien, la dictación del Estado de Emergencia no implica por sí misma la adopción automática de medidas restrictivas de derechos fundamentales. No es un efecto indisoluble a él. Su dictación simplemente hace posible restringir las libertades de locomoción y de reunión, cuando las circunstancias lo ameriten ante una grave alteración del orden público o de un grave daño para la seguridad de la Nación.

Así, dicté el Estado de Emergencia solo en los lugares que específicamente lo requerían, en la medida que se hiciera patente tal necesidad, según se ha mencionado previamente. Luego, en cada una de esas zonas afectadas, en virtud de la expresa referencia a las facultades otorgadas al Jefe de la Defensa Nacional respectivo en los Decretos de Estado de Emergencia, se ponderó la necesidad de dictar alguna medida restrictiva de las referidas libertades, como fue el *toque de queda*, y la extensión de ésta, atendiendo a la realidad y situación concreta en cada una de ellas.

Tales medidas no constituyen un acto personal de este Presidente sino decisiones adoptadas por los Jefes de la Defensa Nacional que también satisfacen plenamente el principio de proporcionalidad.

En efecto, el *toque de queda* establecido por los Jefes de la Defensa Nacional fue usado única y exclusivamente en aquellos casos en que resultaba imprescindible para asegurar el orden público y la seguridad de las personas. En el mismo sentido, su uso siempre se acotó a zonas determinadas, por horarios específicos y se fue reduciendo su extensión progresivamente, en cuanto las circunstancias lo ameritaban. Así se desprende inequívocamente de la siguiente tabla, que da cuenta del uso racional y proporcionado de dichas instrucciones:

⁶³ “Informe en Derecho sobre los Estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos sobre Salvaguardas Aplicables a Medidas Concretas de Limitación de Derechos Fundamentales en Estado de Excepción, del profesor de Derecho Internacional Pietro Sferazza Taibi”, mencionado en la Acusación, p. 74.

REGIÓN	COMUNA O PROVINCIA	19-OCT		20-OCT		21-OCT		22-OCT		23-OCT		24-OCT		25-OCT		26-OCT	
		Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
Arica y Parinacota	Arica	NO	NO	NO	NO	NO	NO	22:00	06:00	22:00	05:00	22:00	04:00	NO	NO	NO	NO
Tarapacá	Iquique	NO	NO	NO	NO	22:00	07:00	22:00	06:00	22:00	05:00	23:00	05:00	NO	NO	NO	NO
	Alto Hospicio		NO	NO	NO	22:00	07:00	22:00	06:00	22:00	05:00	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Pozo Almonte	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Antofagasta	Antofagasta	NO	NO	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	21:00	05:00	22:00	05:00	22:00	05:00	NO	NO
	Calama	NO	NO	NO	NO	NO	NO	20:00	06:00	21:00	05:00	22:00	05:00	22:00	05:00	NO	NO
	Mejillones	NO	NO	NO	NO	NO	NO	20:00	06:00	21:00	05:00	22:00	05:00	NO	NO	NO	NO
	Tocopilla	NO	NO	NO	NO	NO	NO	20:00	06:00	21:00	05:00	22:00	05:00	NO	NO	NO	NO
Atacama	Copiapó	NO	NO	NO	NO	21:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	22:00	05:00	NO	NO
	Caldera	NO	NO	NO	NO	21:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	NO	NO	NO	NO
	Vallenar	NO	NO	NO	NO	21:00	06:00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Coquimbo	Coquimbo	NO	NO	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	05:00	22:00	04:00	00:00	04:00	NO	NO
	La Serena	NO	NO	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	05:00	22:00	04:00	00:00	04:00	NO	NO
Valparaíso	P. Valparaíso	22:55	07:00	20:00	06:00	18:00	06:00	18:00	05:30	18:00	05:00	22:00	05:00	20:00	05:00	NO	NO
	P. San Antonio	22:55	07:00	20:00	06:00	18:00	06:00	18:00	05:30	18:00	05:00	22:00	05:00	20:00	05:00	NO	NO
	Marga Marga																
	P. Petorca P. San Felipe P. Los Andes P. Quillota	22:55	07:00	20:00	06:00	18:00	06:00	18:00	05:30	18:00	05:00	22:00	05:00	22:00	05:00	NO	NO
Metropolitana	P. Santiago	22:00	07:00	19:00	06:00	20:00	06:00	20:00	05:00	22:00	04:00	22:00	04:00	23:00	04:00	NO	NO
	P. Chacabuco																
	San Bernardo	22:00	07:00	19:00	06:00	20:00	06:00	20:00	05:00	22:00	04:00	22:00	04:00	23:00	04:00	NO	NO
	Puente Alto	22:00	07:00	19:00	06:00	20:00	06:00	20:00	05:00	22:00	04:00	22:00	04:00	23:00	04:00	NO	NO
Libertador Bernardo O'Higgins	Resto de la Región Metropolitana	NO	NO	19:00	06:00	20:00	06:00	20:00	05:00	22:00	04:00	22:00	04:00	23:00	04:00	NO	NO
	Rancagua	NO	NO	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	20:00	06:00	23:00	05:00	NO	NO
Maule	Talca	NO	NO	NO	NO	21:00	06:00	21:00	06:00	21:00	06:00	21:00	04:00	00:00	04:00	NO	NO
Bío Bío	P. Concepción	02:00	07:00	20:00	06:00	18:00	06:00	18:00	06:00	18:00	06:00	23:00	04:00	23:00	04:00	NO	NO
Los Ríos	Valdivia	NO	NO	22:00	06:00	21:00	06:00	21:00	06:00	21:00	06:00	22:00	06:00	NO	NO	NO	NO
Los Lagos	Puerto Montt	NO	NO	NO	NO	NO	NO	21:00	06:00	21:00	06:00	21:00	05:00	23:00	04:00	NO	NO
	Osorno	NO	NO	NO	NO	NO	NO	20:00	06:00	20:00	06:00	21:00	05:00	23:00	04:00	NO	NO

Tabla N° 02. Horario *toque de queda* por Provincia/Comuna y fecha
 Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

En definitiva, ha quedado establecido que decreté los Estados de Emergencia sólo en aquellas zonas donde fue necesario por los graves y severos niveles violencia y destrucción que conocimos en las últimas semanas, sin que pueda utilizarse una herramienta tan relevante como la acusación constitucional para cuestionar su mérito.

c. La declaración de cada Estado de Emergencia se hizo teniendo en mira la seguridad de las personas y el orden público, no siendo posible concebirlo como una *“herramienta de intimidación y control ilegal de la protesta social”*.

Ha quedado establecido que la decisión de decretar los Estados de Emergencia no respondió a un capricho ni a una arbitrariedad ni a un abuso de poder, sino que respondió al imperativo de velar por la seguridad de la población y el orden público y para asegurar los derechos de todas las personas. En efecto, como se ha descrito, y como todos pudimos apreciar, la afectación de la seguridad y el orden público era tal que existía la absoluta necesidad de contener esa violencia, siendo inexcusable por tanto hacer uso de los mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla.

En ese contexto, no tiene asidero la acusación del libelo, que apunta que los Estados de Emergencia se habrían utilizado como una herramienta de intimidación y control ilegal de la protesta social.⁶⁴ Su dictación, en el marco de los graves hechos de violencia y de afectación del orden público conocidos por todos, era necesaria, y su aplicación fue estrictamente proporcional.

Ciertamente, el juicio de proporcionalidad de una medida tiene íntima relación con el componente de contexto. Por ello resulta de relevancia tener presente el acabado relato

⁶⁴ Acusación, p. 58.

de los hechos que he efectuado, narración fundamental para entender la decisión adoptada. La Acusación prescinde por completo del contexto en el que se enmarcó la difícil decisión que tomé, y reprocha su propósito en base a meras suposiciones.

Adicionalmente, he distinguido enfáticamente dos circunstancias que siguen derroteros muy distintos. Por una parte, existen manifestaciones pacíficas de la ciudadanía que hace uso de su libertad de expresión, y por otra parte, la existencia de graves hechos de violencia y actos delictivos que han alcanzado niveles críticos. Así lo expresé en la sesión del COSENA celebrada el 7 de noviembre del presente año, cuya acta da cuenta de ello:

*“Señala S.E. el Presidente de la República que **siempre se ha hecho una clara distinción**: una cosa es la violencia que se ha producido, con una simultaneidad e intensidad nunca antes vista, lo que ha producido daño tanto a civiles como a Carabineros. Otra cosa, de naturaleza muy diferente, es la expresión de los ciudadanos, que ejercieron su derecho a manifestarse pacíficamente para pedir una sociedad más justa, más equitativa, con menos abusos y menos privilegios.*

Frente a la violencia, indica, se han aplicado las herramientas que el ordenamiento jurídico otorga, protegiendo a los más débiles y vulnerables. La tarea de las Fuerzas de Orden y Seguridad ha sido inmensa. Se respalda y apoya su labor, dentro del mandato constitucional y legal, y siempre que se respeten las normas y protocolos existentes.

Las reglas del Uso de la Fuerza y los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, revisados el 2018 y elaborados con la colaboración de organismos internacionales, han sido reiterados a las jefaturas correspondientes, instruyendo que todas las actuaciones deben adoptarse conforme a dichas reglas. Es decir, el uso de la fuerza debe ser legal, racional y proporcional y, como último recurso, se deben tomar las medidas necesarias y autorizadas para la legítima defensa y la protección de terceros. Además, señaló S.E. que se instruyó la adopción de medidas especiales de respeto a las personas detenidas, el debido resguardo a los derechos humanos y se dispuso la adopción de todas las medidas de transparencia”.⁶⁵(énfasis agregado)

De este modo, no debe quedar duda alguna que la declaración del Estado de Emergencia y el consecuente despliegue de las Fuerzas Armadas fue una medida que se originó ante los graves hechos de violencia, teniendo en consideración que la dotación reforzada de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no fue suficiente para el resguardo del orden público, y en todo caso, con la directa instrucción de resguardar y respetar los derechos humanos de todas las personas.

Por otra parte, cabe recordar que el derecho de reunión que la Constitución asegura es “a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”, y que “las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía”.

⁶⁵ Acta de sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 7 de noviembre de 2019, p. 7.

Teniendo presente lo anterior y la escalada de violencia vivida en Chile desde el día 18 de octubre del presente año, no es posible imputar el uso de mecanismos institucionales como el Estado de Emergencia a una política de represión a quienes se manifestaban pacíficamente. Sobre el punto, resulta lúcida la exposición de don Jorge Correa Sutil:

*“Me parece una acusación que falta ostensiblemente a la verdad [...] la acusación de haber reprimido el derecho de reunión es falsa, porque cuando el Presidente decretó el Estado de Emergencia, los reunidos portaban armas. Las bombas molotov y los acelerantes químicos que los reunidos empleaban entonces en contra de las estaciones del metro, son armas. No se necesita estudiar Derecho Penal para afirmarlo. La violencia se ejercía a esas horas contra el Metro de Santiago, ese conducto subterráneo que nos une a todos. [...] Quemar el mejor de los servicios públicos con armas no es ejercicio de un derecho constitucional. También me parece que la acusación falta a la verdad cuando acusa al Presidente de haber decretado estado de excepción para limitar la libertad de expresión. [...] El Presidente no ordenó reprimir la manifestación grande, la del millón y tantos en Santiago y otro tanto en cada ciudad de Chile. Esa fue una manifestación. No sé si es constitucional, desconozco si pidieron permiso [...]”.*⁶⁶

En esta misma línea, cabe tener presente que, durante la vigencia del Estado de Emergencia, de acuerdo a las cifras reportadas por las Intendencias, a lo largo del país se pudieron manifestar más de dos millones 700 mil personas, en 441 marchas. En ese período, en el que rigieron toques de queda, Carabineros de Chile otorgó 244 mil salvoconductos, de los cuales 1.411 fueron al INDH, a fin de facilitar la labor que le corresponde como organismo autónomo del Estado; 1.746 a periodistas, con lo que se aseguró una amplia cobertura de los hechos que ocurrían en el país y el ejercicio de la libertad de prensa, y a 1.082 abogados independientes para la defensa de los detenidos e imputados.

V. CONCLUSIÓN

En conclusión, la Acusación es inadmisibile por no cumplirse los requisitos constitucionales para que ella sea conocida por esta H. Corporación:

1. La Acusación no respeta el carácter de *ultima ratio* que la Constitución exige especialmente cuando se acusa constitucionalmente al Presidente de la República. Como se explicó, tal carácter se traduce en dos requisitos fundamentales que la Acusación no satisface. En primer lugar, la acusación constitucional que se dirige en contra del Presidente de la República debe encontrarse mínimamente fundada, lo que exige interponerla por hechos acreditados o, al menos, cuya acreditación se pretende obtener con los antecedentes que la fundan, nada de lo cual cumple la Acusación. En segundo lugar, el carácter excepcionalísimo de esta acusación, exige que ella se interponga como último recurso, cuando la institucionalidad o el Estado de Derecho no opera normalmente. En este caso, resulta irrefutable que el Estado de Derecho ha

⁶⁶ Intervención de Jorge Correa Sutil, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, lunes 25 de noviembre de 2019. Disponible en: <http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=46#>

operado en normalidad, con pleno respeto a la autonomía de organismos tales como los Tribunales de Justicia, la Defensoría Penal Pública y el INDH, además de prestar la colaboración del Gobierno en el cumplimiento de sus funciones propias. Así, por lo demás, ha sido valorado por autoridades imparciales y por los organismos internacionales de derechos humanos.

2. La Acusación vulnera el debido proceso, garantía que resulta plenamente exigible en este procedimiento. En efecto, las imputaciones imprecisas y por hechos de terceros que se efectúan en contra de este Presidente de la República, junto con la remisión a hechos no acreditados y que actualmente están siendo investigados por los órganos competentes, vulnera gravemente el derecho a defensa de esta parte.
3. La Acusación no cumple con el requisito establecido en el artículo 52, N° 2, letra a), de la Constitución de interponerse por “*actos*” de la administración de este Presidente de la República. En efecto, como los propios acusadores reconocen reiteradamente, la Acusación se funda en un supuesto consentimiento que este Presidente de la República habría prestado a eventuales violaciones de derechos humanos. Al margen de lo infundada de esa imputación, es evidente que ella se basa en una conducta omisiva, que conforme al texto constitucional no habilita para acusar constitucionalmente al Presidente de la República.

Esto, además, se ve reforzado por los artículos 24, 32 N° 18 y 101 de la Constitución, que le confieren carácter “profesional” a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, impidiendo al Presidente de la República incidir directamente en su despliegue operativo.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, argumentos de hecho y de derecho, y de las normas pertinentes citadas, y considerando que la Acusación no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución,

Solicito a esta H. Cámara: se tenga por formulada la cuestión previa, que la misma sea acogida y se tenga la presente Acusación por no interpuesta para todos los efectos constitucionales y legales.

PRIMER OTROSÍ: EN SUBSIDIO DE LO SOLICITADO EN LO PRINCIPAL DE ESTA PRESENTACIÓN, PARA EL CASO EN QUE LA CUESTIÓN PREVIA DEDUCIDA NO SEA ACOGIDA POR ESTA H. CORPORACIÓN, CONTESTO ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL FONDO, SOLICITANDO QUE ELLA SEA RECHAZADA EN TODAS SUS PARTES

A. CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO PRIMERO DE LA ACUSACIÓN

I. IMPUTACIONES QUE FORMULA EL CAPÍTULO PRIMERO DE LA ACUSACIÓN

La imputación general que se formula en el Capítulo Primero de la Acusación consiste en que este Presidente de la República sería responsable de “*consentir en que las Fuerzas Armadas y de Orden cometieran violaciones a los derechos humanos de forma sistemática*”⁶⁷. Tal supuesto “consentimiento” haría a este Presidente de la República responsable de una serie de eventuales abusos cometidos por funcionarios de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas, tanto durante el Estado de Emergencia como en los días posteriores, que los acusadores relatan basándose principalmente en reportes periodísticos;⁶⁸ y, por otra parte, de las “cifras generales” de detenciones, lesiones y hospitalizaciones, según lo informado por el INDH. Estas últimas incluirían la responsabilidad de este Presidente de la República por los 2.381 heridos en hospitales y 6.362 detenidos.⁶⁹ Adicionalmente, sostienen que se habrían infringido las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile, en relación a las mujeres y niños.⁷⁰

Este consentimiento, en ningún caso especificado ni acreditado por los acusadores, supondría – en su opinión - una abierta infracción a la Constitución y a las leyes, en particular un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos.

Sin embargo, como se verá en detalle a lo largo de este Capítulo, las imputaciones que formula la Acusación se apoyan en una premisa equivocada, ya que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas fueron desplegadas con el único objeto de resguardar el orden público y asegurar el respeto a los derechos de todas las personas (III). Adicionalmente, la Acusación no entrega antecedentes que permitan tener por acreditados tales hechos y tampoco permite distinguir las circunstancias en que ellos ocurrieron. Este tratamiento poco riguroso de los hechos es especialmente grave si se considera que ellos son actualmente objeto de investigación por parte de los órganos competentes, los que han actuado con total independencia y con toda la colaboración de este Gobierno para llevar a cabo esa tarea (IV). Por otra parte, este Presidente de la República ha adoptado todas las medidas necesarias para prevenir cualquier violación a los derechos humanos, poner todos los antecedentes a disposición para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades que correspondan, cumpliendo así con todas las obligaciones internacionales que se encuentran dentro de la esfera de mis atribuciones

⁶⁷ Acusación, p. 8.

⁶⁸ Acusación, pp. 10 y ss.

⁶⁹ Acusación p. 9.

⁷⁰ Acusación, p. 59.

(V y VI). Por último, la afirmación de que en Chile se habrían producido violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos es infundada (VII).

Por esas razones, las imputaciones que formula el Capítulo Primero de la Acusación deben ser rechazadas categóricamente por esta H. Corporación (VIII).

II. SENTIDO Y ALCANCE DE LA CAUSAL INVOCADA POR LA ACUSACIÓN

1. Sentido y alcance de la expresión “haber infringido abiertamente la Constitución o las leyes”

La causal invocada para efectos de sustentar el presente Capítulo Acusatorio, se encuentra contenida en el artículo 52 N° 2, literal a) el que establece que se podrá formular una acusación constitucional en contra del Presidente de la República por “*actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes.*”, así, el Primer Capítulo Acusatorio, imputa a este Presidente de la República supuestamente haber infringido abiertamente la Constitución o las leyes.

Para analizar esta causal, es necesario determinar previamente qué se entiende por “infringir” y qué se entiende por “abiertamente”:

a. “Infringir”

El profesor Silva Bascuñán, conforme con lo establecido en la RAE, señala que “infringir” es “quebrantar”, o sea “traspasar, violar”.⁷¹ Así, teóricamente esta causal, sólo puede configurarse mediante acciones, pues los verbos rectores no contemplan actuaciones omisivas. Así, según fue analizado en el punto III.2 de la cuestión previa, el carácter necesariamente activo que deben tener los hechos por los que se acusa constitucionalmente al Presidente de la República, al tenor del vocablo “*actos*” que usa el artículo 52 N° 2, letra a), se ve reforzado en el caso de la causal consistente en infringir abiertamente la Constitución y las leyes.

Lo anterior fue confirmado por la comisión revisora del libelo acusatorio de la Ministra Marcela Cubillos, cuyo informe establece que “*Para la procedencia de una acusación constitucional respecto de los ministros y ministras de Estado la Constitución diferencia entre infracción de la Constitución e infracción de ley. Ambas son un ilícito que implica una transgresión personal, es decir, la comisión de una acción atribuible a la autoridad imputada, de una o más normas de conducta o de organización.*”⁷² La misma interpretación se recoge en la acusación constitucional presentada contra el ex Ministro de Justicia, don Luis Bates, señalándose al respecto que “*En consecuencia, la infracción de la ley es un ilícito que exige acciones positivas del funcionario imputado, que deben verificarse como un quebrantamiento de una norma legal.*”⁷³

⁷¹ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 147.

⁷² Informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la Ministra Marcela Cubillos, p. 7.

⁷³ Acusación Constitucional contra el Ministro Luis Bates, disponible en Informe de la sesión 13°, de fecha miércoles 3 de noviembre de 2004, de la Cámara de Diputados, p. 66.

Lo anterior se puede confirmar al analizar las causales de acusación constitucional contenidas en el artículo 52 de nuestra Constitución, pues al comparar la causal establecida respecto del Presidente de la República con aquella establecida respecto a Ministros de Estado, que se refiere a *“infringir la Constitución o las leyes, haber dejado éstas sin ejecución”*, podemos entender que el Constituyente ha distinguido claramente entre la conducta activa y la omisiva. Así el *“infringir las leyes”* solamente se aplica a conductas activas, y el *“dejar las leyes sin ejecución”* contempla las conductas omisivas. Por lo tanto, tanto en el caso de una acusación contra un Presidente de la República como en el caso de los Ministros de Estado, la infracción a la Constitución sólo puede hacerse de manera activa. La hipótesis omisiva entonces – restringida a las leyes – se contempla como causal de acusación de los Ministros de Estado y no respecto de la norma constitucional, sino que alude a *“dejar éstas sin ejecución”* siendo sólo aplicable a las leyes.

Por lo tanto, clarificado este punto, se concluye que en el caso del Presidente de la República la infracción a la Constitución y a las leyes, debe ser siempre mediante una acción, ya que en este caso el Constituyente, no hizo la distinción, quedando excluidas, para efectos de considerar la causal en comento, cualquier conducta omisiva que haya podido efectuar el Presidente de la República.

Además, la limitación establecida respecto a que la infracción a la Constitución sólo puede hacerse mediante una acción, tiene especial sentido si se considera el estándar de gravedad que se exige a estas acciones, según se detallará a continuación.

b. “Abiertamente”

Para efectos de configurar la causal de acusación constitucional contra el Presidente de la República no basta sólo con infringir mediante una acción, la Constitución o las leyes, sino que esta infracción debe revestir una entidad tal que debe considerarse que se ha infringido *“abiertamente”* la Constitución o las leyes.

“Abiertamente” según la RAE significa *“de manera abierta”* y abierta, a su vez, significa *“Claro, patente, indudable”*, es decir el estándar que se requiere para configurar una infracción abierta, es un estándar altísimo. Se requiere para configurar esta causal que no exista duda respecto de la infracción que se imputa a un Presidente de la República para que ella se configure. De modo que en este caso la infracción debe ser indudable, es decir, si hay alguna duda por mínima que sea, la causal no se configura.

Silva Bascuñán señala al respecto que *“Al emplearse los términos “gravemente” y “abiertamente” se ha querido hacer notar la importancia y trascendencia de este proceso, al que no ha de recurrirse, como se dijo, por causales fútiles o banales.”*⁷⁴

Lo anterior cobra especial relevancia si consideramos que una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, en caso que el Senado resuelva a favor de aquélla, implica la destitución del mismo, cargo elegido mediante elección popular, y como tal, constituye una manifestación plena de la soberanía de la Nación. Corolario de esto es el hecho que la misma Constitución considere un quórum de

⁷⁴ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 147.

aprobación de la acusación constitucional, más alto que el necesario respecto de Ministros de Estado, por ejemplo.

2. Sentido y alcance de la expresión “por actos de su administración”

Como se explicó previamente, la expresión “por actos de su administración” delimita en varios sentidos el ámbito de responsabilidad constitucional del Presidente de la República.

En primer lugar, la palabra “actos” permite afirmar de manera categórica que la norma constitucional sólo comprende los comportamientos activos y no los omisivos, de modo que la CPR circunscribe la responsabilidad del Presidente de la República a comportamientos positivos, excluyéndose los omisivos.

Los únicos actos que se me imputan en la Acusación son la declaración de Estado de Emergencia, además de la suspensión de la Cumbre de Líderes de las Economías APEC y de la COP 25 en nuestro país. Las demás, son todas omisiones, que carecen de relevancia constitucional para una acusación constitucional, aunque sus firmantes hayan tratado de evadir este escollo manifiesto valiéndose de la expresión “consentir en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos”. No obstante lo anterior, tal consentimiento nunca existió según se explicará más adelante.

En segundo lugar, se trata de actos de “su” administración, es decir, sólo se pueden reprochar al Presidente de la República la ejecución de actos realizados en su período presidencial y no en el de otras administraciones. Se excluyen por tanto no solo los actos de administraciones anteriores, sino también de actos o actuaciones de otras autoridades o funcionarios públicos, incluso aquellos que están bajo su dependencia. Se refuerza así la idea de que se trata siempre de una responsabilidad constitucional personal, lo que es concordante con el principio de culpabilidad propio de todo Estado democrático. En un proceso sancionatorio como lo es el de la acusación constitucional, ser acusado por conductas de un tercero conduce a una inadmisibile responsabilidad objetiva. Así, ninguna de las consecuencias que los acusadores atribuyen de la ejecución de los actos en comento me es imputable personalmente. Como se explicó, el “consentir” que aducen los Acusadores, implicaría una voluntariedad en el resultado que no es posible imputar a este Presidente de la República, como tampoco la imputación de acciones cometidas por terceros, respecto de los cuales, como se explicó, no es posible que haya intervenido directamente.

Por último, la expresión “actos de su administración” del texto constitucional limita la aplicación de las causales a los actos de administración y excluye a los actos de gobierno, lo cual ha sido refrendado por la doctrina y por la jurisprudencia. Como se explicó, para efectos de impetrar una acusación constitucional contra el Presidente de la República, es necesario por tanto sustentarla en algún acto de administración emanado de él, y los escasos actos que se me imputan en la presente Acusación, corresponden a actos de gobierno.

3. Imprecisiones en que incurren los acusadores en esta materia

Teniendo en cuenta el sentido y alcance que debe darse a la causal en análisis, es posible determinar que los acusadores han incurrido en una serie de imprecisiones que hacen imposible la configuración de la causal en comento.

Los acusadores indican que este Presidente habría, supuestamente, infringido la Constitución y las leyes al “consentir” en que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada. Además de ser falsa esta imputación, pues las violaciones a los derechos humanos, si las hubiere, en ningún caso han sido sistemáticas y generalizadas, como se explicará en el presente Capítulo, los acusadores sustentan su teoría en un supuesto consentimiento, sin hacer mención siquiera a la forma en que éste se habría otorgado.

Conforme a la RAE consentir es “Permitir algo o condescender en que se haga”, a su vez condescender significa “Aceptar o tolerar con suficiencia o desdén”. Ahora bien, en el ámbito jurídico, el consentimiento ha sido ampliamente desarrollado, pues es fundamental al momento de analizar la voluntariedad del emisor de un acto o de un hecho, y de este análisis se determinarán los efectos jurídicos de dicho acto o hecho jurídico. Así la doctrina ha señalado que:

*“La voluntad es el movimiento o cambio interior, psicológico, que determina a la acción. Es el libre querer interno de **lograr un fin** determinada por medio de la acción.*

En los actos jurídicos unilaterales se habla propiamente de voluntad; pero en los actos bilaterales ésta toma el nombre de consentimiento, que es el acuerdo de las voluntades de dos o más personas dirigido a lograr un resultado jurídico.

Pero es de advertir que a menudo la palabra consentimiento es tomada de una manera general, como sinónimo de voluntad, o sea, se habla de consentimiento tanto para referirse a la única voluntad de los actos unilaterales como a las dos o más de los actos bilaterales o plurilaterales.”⁷⁵ (énfasis agregado)

Los acusadores no han explicado cómo este supuesto consentimiento, el cual se me imputa además como una omisión, haya estado revestido de la intencionalidad señalada, lo cual es un mínimo jurídico en materia de imputaciones, y también en el área penal:

“[p]ara la imposición de la pena no es bastante la existencia de una conducta antijurídica [...] sino que ella requiere además que al hechor se pueda hacer el reproche de culpabilidad, esto es, el reproche que se hace al que podía obrar diversamente y optó por la conducta prohibida.”⁷⁶

En el derecho público, este elemento volitivo es parte expresa del acto administrativo, el cual, en su definición, en el artículo tercero de la Ley N° 19.880 señala en su inciso segundo que “[p]ara efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.” Así, podemos notar que la voluntariedad del acto administrativo es un elemento central del mismo. Bermúdez, señala al respecto que:

⁷⁵ ALESSANDRI, SOMARRIVA Y VODANOVIC, *Tratado de Derecho Civil*, Parte Preliminar y General, Tomo II, p. 194.

⁷⁶ POLITOFF, MATUS Y RAMÍREZ, *Lecciones de Derecho Penal Chileno*, Parte General, p. 243.

“La inclusión de este elemento en el concepto de acto administrativo resulta un poco más difícil de explicar, atendidas las dificultades dogmáticas que presenta la incorporación de un elemento negocial en una actuación de autoridad unilateral. Toda vez que responde a una forma de entender el acto administrativo a partir de la teoría del acto jurídico (de Derecho Privado), en que todos los sujetos manifiestan voluntad en su actuación relacional. La declaración de voluntad es la exteriorización de una intención seria de producir efectos jurídicos con la actuación que emana de un sujeto capaz de ello.”⁷⁷

Así, como se puede apreciar, en todas las ramas del derecho la manifestación de voluntad en el sentido mismo de ejecutar el acto en análisis – en el caso del derecho penal, el delito o la falta – es un elemento esencial, por lo que es dable concluir que, en este caso en particular, también se debe considerar. Por lo anterior, resulta necesario entonces establecer en este caso que haya existido entonces, una actuación deliberada en ese sentido.

Para efectos de configurar esta causal, el aludido consentimiento tendría que ser activo y formal, como se expresó, mediante los actos administrativos correspondientes y no mediante omisiones. Como se señaló, los acusadores en ningún caso explicitan qué actos administrativos serían constitutivos de un consentimiento emitido por este Presidente a que se cometieran violaciones sistemáticas y generalizadas a Derechos Humanos. En el caso que los acusadores se refieran a que este Presidente consintió mediante una omisión, como se explicó, la causal tampoco se configura toda vez que se requiere una acción expresa. Ahora bien, incluso si aceptáramos que puede configurarse el ilícito constitucional por una omisión, los acusadores no señalan ni explicitan qué omisiones habrían dado lugar al referido consentimiento y de qué forma se habría configurado un ilícito constitucional.

De modo que no se configura la causal invocada en el Capítulo Primero de la Acusación, por lo que las imputaciones allí formuladas deben ser rechazadas categóricamente por esta H. Corporación.

III. LA ACUSACIÓN SE SUSTENTA EN UNA PREMISA ERRADA: NO ES EFECTIVO QUE LAS FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS FUERZAS ARMADAS HAYAN SIDO DESPLEGADAS PARA REPRIMIR MANIFESTACIONES PACÍFICAS

1. El despliegue de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Emergencia, tuvo como único objeto resguardar el orden público y los derechos de las personas

En primer lugar, corresponde descartar la premisa sobre la que los acusadores construyen parte de su argumentación. No es efectivo que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas hayan sido desplegadas para “*reprimir la protesta social*”.⁷⁸ Por el contrario, tanto el despliegue de Carabineros de Chile, como la declaración del Estado de Emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas, tuvieron como único objetivo restablecer el orden público y asegurar el respeto a los derechos de todas las personas.

⁷⁷ BERMÚDEZ SOTO, Jorge. *Derecho Administrativo General*, p.154.

⁷⁸ Acusación, p. 2.

Como ya se ha relatado detalladamente en los Antecedentes de Hecho, los hechos ocurridos a contar del 18 de octubre son de una gravedad inédita en nuestra historia, y han tenido como consecuencia la afectación de los derechos y condiciones de vida de miles de habitantes en todo Chile. Ante una escalada de violencia que alcanzó niveles sin precedentes en nuestra historia reciente, con la comisión de múltiples delitos, saqueos e incendios, y encontrándose sobrepasado el personal de Carabineros de Chile, la declaración del Estado de Emergencia fue absolutamente necesaria y constituía un deber de este Presidente de la República.

Lo que vino después, estando en vigencia el Estado de Emergencia, fue una proliferación de sentidas demandas ciudadanas, por situaciones que se han ido gestando desde hace décadas en nuestro país. Contrario a lo que sostienen los acusadores, no ha existido la más mínima intención de reprimir las expresiones de la ciudadanía, en la medida que en su ejercicio no se afecte la seguridad de la población, el orden público y el normal desenvolvimiento de la sociedad. Por ello, desde un primer momento tuve la firme posición de condenar los hechos de violencia y los actos delictuales que han destrozado las ciudades de nuestro país, y tener apertura respecto de las necesidades más urgentes impulsando una Agenda Social y promoviendo un Acuerdo por la Paz, un Acuerdo por la Justicia Social y un Acuerdo por una Nueva Constitución.

2. Las manifestaciones pacíficas se han seguido desarrollando, velando por el resguardo del orden público y los derechos de las personas

Por lo demás, tanto durante la vigencia del Estado de Emergencia como en los días posteriores, ni Carabineros de Chile ni las Fuerzas Armadas impidieron u obstaculizaron el desarrollo de manifestaciones pacíficas. En este punto, los datos que aporta la propia Acusación reafirman lo dicho. En efecto, la Acusación da cuenta de numerosas marchas y manifestaciones desarrolladas durante las últimas semanas.⁷⁹

Entre ellas la manifestación realizada con fecha 25 de octubre en los alrededores de Plaza Italia, en la que, de acuerdo a los datos de la Intendencia de la Región Metropolitana, habrían participado más de un millón doscientas mil personas, y en la que Carabineros de Chile solo intervino para reprimir a violentistas aislados.

Manifestaciones como ésta se reiteraron y se permitieron no solo en Santiago, sino que en otras ciudades de Chile, de acuerdo a la información que maneja el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Así, a contar del día 19 de octubre se han sucedido numerosas manifestaciones en diversas ciudades del país, prácticamente todos los días. Por ejemplo, con fecha 26 de octubre se registraron manifestaciones en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Punta Arenas y otras ciudades del país, con la participación de más de 94.090 personas. Con fecha 4 de noviembre, en todas las regiones del país hubo marchas que reunieron, en total a 63.690 personas; con fecha 8 de noviembre, se reunieron 141.024 personas en marchas registradas en cada región del país; con fecha 12 de noviembre el número de manifestantes llegó a 346.025, a nivel nacional; y con fecha 26 de noviembre,

⁷⁹ Acusación, pp. 43 y 44.

según los datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública existieron 56.275 personas participando en manifestaciones, también a nivel nacional.

3. Promoción e impulso de una Agenda Social para recoger las demandas ciudadanas

Adicionalmente, la premisa en que se fundamenta la Acusación, según la cual habría intentado reprimir la manifestación social, desconoce todas aquellas acciones que ha tomado este Presidente y el Gobierno destinadas a darle un cause político transversal e institucional a las legítimas demandas manifestadas por la ciudadanía. Dentro de ese marco, deben entenderse la Agenda Social impulsada por este Presidente de la República y los esfuerzos por lograr un Acuerdo por la Paz, un Acuerdo por la Justicia Social y un Acuerdo por una Nueva Constitución. Frente a ellas no cabe sino reconocer que este Presidente y el Gobierno, al mismo tiempo que ha buscado resguardar el orden público y la seguridad de las personas, ha ofrecido un camino político para superar la crisis actual.

En primer lugar, la Agenda Social impulsada por el Gobierno supone un esfuerzo muy relevante por hacerse cargo de las demandas ciudadanas. Con ella el Gobierno y este Presidente de la República han mostrado con hechos concretos su completa disposición a escuchar a la ciudadanía, a dialogar políticamente y a lograr acuerdos. Por lo demás, esta actitud de diálogo y apertura a escuchar a la ciudadanía lo transmití de forma explícita y expresamente cuando le pedí perdón a todos mis compatriotas por la falta de visión que tuvimos los distintos gobiernos para reconocer esta situación de abusos e inequidades en toda su magnitud, que se ha venido arrastrando por décadas.

Por eso, el día 23 de octubre en cadena nacional, señalé:

“Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas, pero es verdad también que los distintos Gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas...”

En efecto, en la misma oportunidad, anuncié el inicio de una renovada Agenda Social, cuyo objetivo es seguir recogiendo las demandas ciudadanas, y que se sumó a la medida anunciada el día 19 de octubre, consistente en revertir el alza de los pasajes del Metro de Santiago, mediante un proyecto de ley que fue envidado y aprobado rápidamente en el Congreso Nacional, actualmente la ley N° 21.184, publicada en el Diario Oficial con fecha 21 de octubre.

Como se señaló en los Antecedentes de Hecho, esta Agenda Social ya ha dado sus primeros frutos con leyes que se encuentran aprobadas y publicadas, y otras numerosas iniciativas que se encuentran actualmente en tramitación en el Congreso Nacional o en elaboración. El Gobierno ha demostrado con hechos concretos su capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos políticos amplios, que permitan recoger las legítimas demandas de la ciudadanía.

Como señalé mediante cadena nacional a todos los chilenos y chilenas, con fecha 17 de noviembre, ese es precisamente el objetivo del Acuerdo por la Justicia Social:

“El Acuerdo por la Justicia Social significa avanzar, con una renovada voluntad y un claro sentido de urgencia, para mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, para mejorar los ingresos de nuestros trabajadores, mejorar la salud de nuestras familias, y para asegurar, a través de precios razonables de los servicios básicos como el transporte público, la electricidad, el agua o los peajes, que las familias enfrenten un costo de la vida que reduzca el temor que afecta a tantas familias de no saber si van a poder llegar a fin de mes.

Nuestra Clase Media ha progresado en base a su propio mérito y sacrificio, y ellos lo saben. Pero también es cierto que una parte de ella es frágil y que muchas familias de clase media viven permanentemente con temores: temor a perder el trabajo, temor a la enfermedad, temor a un acto de la delincuencia, temor a la tercera edad. Y por eso la Agenda Social tiene también que hacerse cargo de esa fragilidad y estos temores.”⁸⁰

Considerando todos estos antecedentes, que los acusadores omiten completamente, resulta absolutamente infundado sostener que este Presidente y el Gobierno hayan tenido la intención de reprimir la protesta social. Lo anterior es una manifiesta falta a la verdad. Por el contrario, este Presidente y el Gobierno han adoptado una serie de contundentes acciones y medidas, que tienen por objeto escuchar y dar cauce institucional a las legítimas demandas de la ciudadanía, como también, poder cumplir con el deber de resguardar el orden público y la seguridad.

IV. LOS ACUSADORES TRATAN DE FORMA POCO RIGUROSA LOS HECHOS EN QUE FUNDAN SU PRETENSIÓN

1. Los acusadores invocan hechos y circunstancias no acreditados para fundar la Acusación y que están siendo investigadas y conocidas por los órganos competentes

La mayoría de los hechos que se me imputan y las especiales circunstancias a las cuales hacen referencia los acusadores no han sido objeto de una calificación jurídica por parte de los órganos competentes llamados a hacerlo, esto es, los Tribunales de Justicia.

Como se indicó anteriormente, en relación a la segunda cuestión previa de admisibilidad, de conformidad al artículo 76 de la CPR “[l]a facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. Lo anterior constituye una norma fundamental para el principio democrático básico de la separación de poderes del Estado, que distingue de manera clara y precisa las funciones que tienen el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De hecho, para reforzar este principio, el referido artículo 76 de la CPR también declara que “[n]i el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en

⁸⁰ Discurso Presidencial, 17 de noviembre de 2019. Disponible en: <https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=134637>

caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Son por tanto los Tribunales de Justicia los llamados a conocer las causas civiles y criminales, a resolverlas y a hacer ejecutar lo juzgado de conformidad a la ley.

Por otra parte, el órgano llamado por nuestra Constitución para dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito es el Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la CPR.

Nuestra Constitución delimita, en consecuencia, de manera clara y precisa, las instituciones del Estado mandatadas a “hacer justicia”. A investigar primero los hechos, a conocerlos, a juzgarlos, y a hacer ejecutar lo que se resuelva.

No obstante lo anterior, la mayoría de los hechos y circunstancias que se mencionan en la Acusación no han sido acreditados ni reconocidos por los órganos competentes. Muchos casos están siendo investigados actualmente, con procesos en curso, y por consiguiente no es posible darlos por acreditados y calificarlos jurídicamente como lo hacen los acusadores. Lo mismo sucede con la determinación de los intervinientes en ellos y las circunstancias de su ocurrencia.

No cabe duda alguna que los graves hechos que son mencionados por los acusadores deben ser investigados por el Ministerio Público y conocidos y juzgados por los Tribunales de Justicia aplicando la ley con todo su rigor, si se determinan responsabilidades.

Así lo he declarado desde el primer día, en el entendido que tales abusos y delitos no pueden quedar en la impunidad. Durante el anuncio del proyecto de ley del ingreso mínimo garantizado, el 6 de noviembre de 2019, señalé: *“Vamos a investigar, perseguir, detener y sancionar a los grupos criminales que han destruido no sólo propiedades tan importantes [...] Con la misma fuerza y rigor, cualquier exceso que se haya cometido, cualquier falta de respeto al protocolo o cualquier uso excesivo de la fuerza, también va a ser investigado por la fiscalía y sancionado por los tribunales de justicia. Eso es lo que corresponde en una democracia.”*⁸¹ (énfasis agregado) Asimismo, en entrevista al diario El Mercurio, con fecha 9 de noviembre, declaré: *“ha habido excesos, abusos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos. Pero eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los Tribunales de Justicia.”*⁸² (énfasis agregado)

2. Los acusadores realizan imputaciones infundadas que no permiten sacar las conclusiones que pretenden ni mucho menos fundar la responsabilidad del Presidente de la República

Los acusadores realizan de forma recurrente imputaciones que no tienen fundamento, muchas de las cuales faltan de manera manifiesta a la verdad u omiten todos

⁸¹ Disponible en: https://www.cnnchile.com/pais/pinera-visitara-civiles-victimas-violencia-policial_20191106/

⁸² Diario El Mercurio, 9 de noviembre de 2019.

los antecedentes de contexto que permiten entender y fundamentar las decisiones y acciones adoptadas por este Presidente y el Gobierno en las últimas semanas.

Los acusadores señalan, en varias ocasiones, que este Presidente habría “*consentido*” que “*las Fuerzas Armadas y de Orden cometieran graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos*”,⁸³ sin explicitar de qué forma y en qué casos habría operado ese presunto consentimiento, ni qué acciones u omisiones habrían dado lugar al mismo. Tampoco se menciona el impacto preciso que habría tenido tal imputación en los ilícitos constitucionales imputados, y no se fundamenta por qué estas supuestas violaciones a los derechos humanos habrían sido sistemáticas y generalizadas.

Asimismo, afirman erradamente los acusadores que “[f]rente a la agudización de las movilizaciones, la administración del Presidente Sebastián Piñera decidió enfrentarlas, exclusivamente, mediante el uso de la fuerza pública.”.⁸⁴ Los acusadores hacen también referencia a un “*contexto general de criminalización del derecho a la protesta por parte de las autoridades y en particular de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.*”.⁸⁵

Lo anterior es completamente falso y no guarda ninguna relación con los hechos y acontecimientos que se han producido en nuestro país durante las últimas semanas. Así, como se detalla con claridad en VI.8 de este apartado, la decisión de decretar Estado de Emergencia se encontró plenamente justificada y respetó de manera cabal los principios de oportunidad, necesidad y proporcionalidad. Además, en la misma sección, se detalla por qué los Estados de Emergencia y los *toques de queda* declarados por los Jefes de la Defensa Nacional fueron absolutamente necesarios para garantizar los derechos de las personas. Asimismo, la aseveración que hacen los acusadores omite deliberadamente todas las medidas y acciones que ha tomado este Presidente, que se recogen en la “Agenda Social” propuesta, la cual busca hacerse cargo de los principales planteamientos que se han efectuado por la mayoría de nuestros compatriotas, expresando sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor.

Me imputan también los acusadores que “[d]esde la declaración del estado de emergencia tanto las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como las de Orden y Seguridad, fueron empleadas por la autoridad presidencial, no sólo para controlar hechos delictivos, sino que **especialmente para reprimir la protesta social** que se extendió por todo Chile. De esta manera, el Presidente, desestimó desde un comienzo la libertad del pueblo de poder manifestarse legítimamente mediante la protesta social, **prohibiendo la dimensión colectiva de la protesta** y utilizando el poder con el que cuenta como autoridad, para controlarla como herramienta para el despliegue del abuso normativo y prácticas de control inadecuadas y desproporcionadas.”.⁸⁶ Agregan más adelante que “la secuencia de los acontecimientos indica con claridad que la **decisión política** del Presidente tuvo por propósito **reprimir las expresiones de descontento contra su gobierno**...”⁸⁷. (énfasis agregado)

⁸³ Acusación, p. 83.

⁸⁴ Acusación, p. 1.

⁸⁵ Acusación, p. 7.

⁸⁶ Acusación, p. 2.

⁸⁷ Acusación, p. 65.

La imputación referida contraviene de forma manifiesta la verdad y contiene variadas y graves afirmaciones, irresponsables y absolutamente infundadas, que deben rebatirse.

En primer lugar, nunca fue ni ha sido la intención de este Presidente emplear a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para “*reprimir la protesta social*” o para “*reprimir las expresiones de descontento*” contra mi Gobierno, ni tampoco tuvo ese fin la declaración del Estado de Emergencia.

Como se ha expresado, la declaración de Estado de Emergencia fue plenamente justificada, en razón de los graves y numerosos incidentes de violencia y delitos ocurridos en nuestro país, y que se individualizan en los Antecedentes de Hecho de esta contestación, de los cuales no se pronuncian los acusadores. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública han actuado en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Lo mismo han hecho las Fuerzas Armadas en el contexto del Estado de Emergencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y en la LOC de Estados de Excepción.

Así las cosas, se me imputa una responsabilidad en los hechos calificados por los acusadores de violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos, por el solo hecho de haber decretado Estado de Emergencia, único acto que como tal se me atribuye. Respecto a lo anterior, cabe preguntarse si existió dolo o culpa por parte de este Presidente al declarar los Estados de Emergencia, y si éstos se establecieron conforme a derecho. Como queda asentado a lo largo de esta presentación, la declaración de los Estados de Emergencia respondió únicamente al cumplimiento de mi deber constitucional de resguardar el orden público y la seguridad nacional, y para proteger los derechos fundamentales de las personas. Por lo mismo, no puede imputarse a este Presidente una responsabilidad en el sentido que señalan los acusadores. Así, en ningún caso han existido instrucciones directas y particulares de este Presidente de la República a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en orden a cometer hechos delictivos. Tampoco ha habido por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública una predisposición a la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Como quedará asentado a lo largo de esta contestación, lo anterior se aleja diametralmente de la realidad, de la forma en que ocurrieron los hechos y de las acciones y medidas adoptadas por este Presidente de la República, en orden a resguardar el orden público y la seguridad, y a proteger los derechos humanos de las personas.

Declaran incluso los acusadores, de forma poco cuidadosa que “*aun constatándose la evidente escalada de violencia cometida por los agentes del Estado en contra de la ciudadanía, [este Presidente] no dio orden alguna para asegurar el respeto de los derechos de las personas e impedir la violación de éstos.*”⁸⁸. Lo anterior se aparta completamente de la realidad y desconoce las medidas que tomé desde el primer momento en materia de derechos humanos, y las acciones que en consecuencia se llevaron adelante, las cuales son completamente omitidas por los acusadores.

Así, una de mis principales preocupaciones fue la protección de los derechos humanos, hecho que consta en el acta de la sesión del COSENA, de fecha 7 de noviembre de 2019, que señala: “*El Presidente agrega que, al momento de decretar los Estados de*

⁸⁸ Acusación, p. 66.

Emergencia, una de las principales preocupaciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden fue la protección de los derechos humanos de las personas, en toda su dimensión. Al respecto, indica, se tomaron diversas medidas preventivas... ”⁸⁹. Entre estas medidas se mencionan las siguientes:

- § Reuniones presenciales y conversaciones telefónicas con el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante en Jefe del Ejército y los Jefes de la Defensa Nacional en las Regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío, con la clara instrucción de aplicar en forma estricta las Reglas del Uso de la Fuerza, que cumplen con los estándares internacionales y acogen los planteamientos de organismos de derechos humanos. Como resultado, todos los Jefes de Defensa instruyeron la aplicación de las Reglas de Uso de la Fuerza, en sus respectivas zonas.
- § Reunión con el Director del INDH, a efecto de ofrecer toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de su mandato legal y facilitar el acceso a los lugares y recintos para cumplir con dicho mandato. A su vez, los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, han mantenido línea directa con el INDH para ofrecer su colaboración.
- § Reforzamiento de la Defensoría Penal Pública, para que cada persona detenida contara con un defensor público.
- § Contacto con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la ONG *Human Rights Watch*, para que enviaran misiones de observación en terreno a nuestro país. Asimismo, se ha mantenido una estrecha colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “**CIDH**”).
- § Implementación de una política de transparencia en la entrega de datos sobre eventos graves, personas detenidas, lesionadas y fallecidas. De hecho, la información sobre la situación del país desde el 19 de octubre, con todas estas cifras, se encuentra a disposición en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
- § Se enfatizó al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia la importancia de ejercer sus funciones con la mayor celeridad en causas relativas a derechos humanos.

Como se ha señalado, las principales preocupaciones del Gobierno y de este Presidente estas últimas semanas han sido resguardar el orden público y la seguridad nacional, proteger los derechos humanos de todos nuestros compatriotas, y avanzar con las medidas que permitan dar respuesta a las anheladas demandas manifestadas por miles de chilenos y chilenas. Con ese norte fueron y han sido mandatados a realizar su labor las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, respectivamente.

Incluso, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile en la sesión del COSENA, de fecha 7 de noviembre de 2019, se refirió a la participación de su institución

⁸⁹ Acta del Consejo de Seguridad Nacional, 7 de noviembre de 2019, p. 2.

durante la vigencia de los Estados de Emergencia y señaló que “*los miembros de las Fuerzas Armadas no salieron a las calles a agredir a la población, sino que a protegerla. Explica que fue la preocupación principal del Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional*”⁹⁰.

Ahora bien, lo anterior no obsta a que hayan existido, o que puedan existir irregularidades, situaciones de abuso graves constitutivas de vulneraciones a los derechos humanos por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Este Presidente ha sido enfático desde el primer día en condenar firmemente dichos hechos, los cuales sin duda son de extrema gravedad. En ese sentido, desde el primer día he señalado que cualquier incumplimiento a los protocolos del uso de la fuerza, cualquier exceso que se haya cometido, cualquier abuso, cualquier violación a los derechos humanos debe ser investigada, de manera seria y eficaz, por el Ministerio Público y juzgado por los Tribunales de Justicia, conforme a nuestro Estado de Derecho. Así por ejemplo lo expresé en un punto de prensa el día 17 de noviembre al señalar que “*No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas en su recuperación y para que la Fiscalía y los Tribunales de Justicia cumplan con su misión de investigar y hacer justicia.*”⁹¹. Asimismo, y como quedará claro más adelante, hemos tomado todas las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar situaciones de esa naturaleza, y hemos estado en contacto y coordinación permanente con todas las instituciones del Estado que juegan un rol en la prevención, investigación y sanción de dichos hechos.

Todos debemos condenar en forma categórica y sin ninguna ambigüedad la violencia, venga de donde venga. La violencia solo engendra más violencia y va siempre acompañada de dolor y frustración. Por eso, este Presidente ha hecho y hará todos los esfuerzos dentro del Estado de Derecho para que exista justicia y no haya impunidad contra todos aquellos que hayan cometido ilícitos, con especial atención, en los que son más graves y afectan el alma de nuestra sociedad.

En ningún momento este Presidente ha desestimado “*la libertad del pueblo de poder manifestarse legítimamente*”, tampoco ha prohibido “*la dimensión colectiva de la protesta*”, ni menos ha utilizado el poder para reprimirla. Se hace referencia también en el extracto transcrito más arriba, de “*prácticas de control inadecuadas y desproporcionadas*” que han traído como consecuencia “*el desborde de la institucionalidad del Estado de Derecho*” y que principalmente han puesto en riesgo “*la seguridad de todos los habitantes de esta nación*”. Todas estas imputaciones carecen de la más mínima rigurosidad y no reflejan en ningún caso el verdadero sentido de la realidad, pues no pone en contexto todo lo acontecido en nuestro país en las últimas semanas y todas las acciones que he tomado e instruido.

Han sido semanas difíciles y duras, quizás las más complejas desde el retorno de la democracia, en las cuales he adoptado todas las medidas que se encuentran dentro de mi esfera de competencias con el objetivo de cumplir con mis obligaciones constitucionales y legales, y especialmente con la conservación del orden público, la protección de los

⁹⁰ Acta de sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 7 de noviembre de 2019, p. 5

⁹¹ Disponible en: <https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=134617>

derechos de las personas y la restauración de la paz. Todas las medidas que he tomado han tenido por objeto la consecución de esos fines.

Como he señalado, la Acusación obvia todos los hechos delictivos de los cuales hemos sido testigos en las últimas semanas. Acontecimientos de la más alta gravedad, como incendios a bienes nacionales de uso público y bienes privados, desórdenes públicos, barricadas y saqueos. En ningún momento los acusadores toman esos hechos en consideración, ni las implicancias que ellos han tenido en la ciudadanía, omisión gravísima para entender el contexto al cual hacen referencia.

Tal como fue explicado por el Director de Transporte Público Metropolitano en su exposición en la Comisión revisora de la Acusación al Presidente de la República:

*“Desde el día 18 de octubre, hemos visto cómo en una primera semana de operación 41 estaciones de metro han sido quemadas, más de 35 buses en total han sido quemados, más de 3 mil buses han sido vandalizados, más de 200 conductores han sido agredidos, y todo el sistema completo ha tenido un perjuicio directamente en la movilidad de las personas. ¿Qué significa esto? Que las personas han visto cómo sus tiempos de viaje en ciertos casos se han duplicado, se han triplicado, en otros casos se han cuatruplicado. Una persona que antes se demoraba, por ejemplo, 20 minutos desde San Pablo hasta Tobalaba, hoy en día se está demorando 70-80 minutos.”.*⁹²

Por su parte, el ex director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, señor Ricardo Brodsky, se refirió a fines de octubre, al número de funcionarios policiales heridos, tema que no se ha mencionado en la Acusación:

*“Hay también 900 carabineros heridos. Eso es también un dato no menor. Han sido víctimas de piedrazos, de lesiones, hemos visto escenas. Pienso que el instituto [INDH] ha manifestado su solidaridad con estos Carabineros, pero por mandato legal no pueden denunciarlo como violaciones a los derechos humanos, pero el mundo político también debería reaccionar respecto de eso. No es normal.”.*⁹³

En síntesis, los acusadores eluden parte importante de los acontecimientos, lo cual transforma sus imputaciones en infundadas, ajenas a la realidad y que pugnan con las verdaderas intenciones, acciones y definiciones de este Gobierno y de este Presidente.

Los acusadores sostienen que se ha desbordado la institucionalidad del Estado de Derecho en Chile, lo que es incorrecto. Como señalé, han sido días muy difíciles y de alta complejidad, en los que la violencia ha tomado, lamentablemente, un rol protagónico. Sin embargo, en estas semanas nuestra institucionalidad ha seguido operando y los distintos órganos del Estado han funcionado con normalidad. El Ministerio Público, la Defensoría

⁹² Intervención de Fernando Saka Herrán, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, 27 de noviembre de 2019. Disponible en: <http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=46#>

⁹³ Diario El Mercurio, 31 de octubre de 2019.

Penal Pública y los Tribunales de Justicia están realizando sus labores, con altos niveles de exigencia. Todas las instituciones relacionadas a los derechos humanos, tales como el INDH y la Defensoría de los Derechos de la Niñez (en adelante, “**Defensoría de la Niñez**”), han podido ejercer sus funciones, con total independencia de parte de este Gobierno, y, sobre todo, con toda nuestra colaboración.

Ante los efectos de la violencia y destrucción simultánea de las estaciones del Metro de Santiago, los saqueos e incendios a locales comerciales y supermercados, fui claro y categórico aquel 21 de octubre al señalar:

“Quiero hablarles a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del Metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia con libertad y en paz.”⁹⁴

Al respecto, los acusadores sostienen erradamente que “[f]ue esa la declaración que sirvió de orientación y estímulo a las Fuerzas Armadas y de Orden para intensificar la represión de todas las formas de protesta. Los atropellos contra los derechos fundamentales de las personas apuntaron a la consecución de un objetivo: apaciguar la disidencia política. El mensaje a las personas cada vez se hizo más nítido. Todo aquél que decidiera manifestarse contra el Gobierno se exponía a perder la vida, a ser torturado, a quedar ciego.”⁹⁵

La imputación referida es completamente inaceptable y pretende imponer una versión sesgada de los hechos con calificaciones gravísimas, que no se condicen con la realidad de los hechos. Por lo demás, la frase a que se alude está absolutamente sacada de contexto. El día lunes 21 de octubre pasado, cuando hice esa declaración, habíamos vivido días de una violencia inusitada, con ataques incendiarios a diversas estaciones del Metro de Santiago y a otros bienes públicos y privados, desmanes, destrozos, múltiples saqueos a locales comerciales. De esta forma, con esas palabras me estaba refiriendo expresamente a los grupos que estaban dispuestos a usar la violencia sin ningún límite, a quienes no les importaba incluso sacrificar vidas humanas, a quienes estaban dispuestos a quemar los hospitales, las estaciones de Metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a los chilenos y chilenas, tal y como quedo de manifiesto en los Antecedentes de Hecho de esta contestación.

Incluso más, desde el inicio de mi segundo mandato he utilizado la palabra “guerra”, en el contexto de los esfuerzos por hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.⁹⁶ El uso de dicha expresión posee un carácter

⁹⁴ Disponible en: <https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=103689>

⁹⁵ Acusación, p. 3.

⁹⁶ Así por ejemplo: “La guerra contra el narcotráfico, contra la narcocultura es una guerra muy difícil porque los narcotraficantes son personas implacables, no respetan a nada ni a nadie, están muy bien armados, están bien financiados. Y, por tanto, tenemos que combatirlos sin cuartel, sin tregua.” (Entrevista en Radio Cooperativa, 14 de octubre de 2019)

análogo relacionado a la acción de los violentistas y los esfuerzos del Gobierno por detenerlos. En ningún caso esta palabra ha sido usada en contra de quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse.

Al final del Capítulo Primero, los acusadores se apresuran en concluir, sin el más mínimo de rigurosidad respecto de sus aseveraciones e imputaciones, y sin desarrollar la relación causal necesaria para que se configure la causal de acusación constitucional que invocan que: “[a]nalizados los hechos que fundamentan este libelo, es indudable que los actos de administración del Presidente de la República implican un incumplimiento de la obligación asumida por el Estado de Chile en el artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”⁹⁷, y que “no se ha cumplido con los estándares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contempla respecto a los límites en el uso de la fuerza pública...”⁹⁸

Fuera de esta categórica conclusión, en ningún momento fundamentan por qué y de qué forma, actos de mi Administración habrían implicado un incumplimiento a las referidas disposiciones internacionales. Así, los acusadores no desarrollan estas graves imputaciones y no entregan mayores antecedentes que permitan sostenerlas, tratándose por tanto simplemente de apreciaciones u opiniones, que no se condicen con la realidad ni se sostienen mínimamente.

Los acusadores exponen una serie de deberes y obligaciones del Estado de Chile, conforme a variados tratados o instrumentos internacionales que se han suscrito y ratificado, y que están vigentes en nuestro país.⁹⁹ Ahora bien, en esas exposiciones, los acusadores intercalan acusaciones graves e infundadas de supuestas vulneraciones a derechos fundamentales. Lamentablemente, no ahondan en la explicación y fundamentación de dichas imputaciones, sino que simplemente las declaran, sin que quede claro, de ninguna forma, de qué manera este Presidente ha incumplido tales obligaciones.

Los acusadores, luego de citar las distintas normas que regulan los estados de excepción constitucional, concluyen que “lo que acontezca bajo el estado de excepción constitucional es de responsabilidad política directa del Presidente de la República.”¹⁰⁰

“Quiero hablar en forma fuerte y clara, la primera preocupación de los chilenos es la delincuencia; la primera prioridad de nuestro Gobierno es combatir la delincuencia con todos los instrumentos que nos otorga la ley y con toda la fuerza de la voluntad del Gobierno, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de los Alcaldes y de todos los ciudadanos. Esta es una guerra que no es fácil, nunca ha sido fácil, pero la vamos dar sin tregua, sin cuartel, sin ninguna contemplación.” (Presentación de medidas contra la delincuencia, 23 de agosto de 2019)

“Y en esta guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la delincuencia, contra el crimen organizado no va a haber ninguna contemplación, ni ninguna duda; va a haber toda la fuerza y voluntad del mundo siempre dentro del marco de la ley.” (Visita a las fuerzas que colaboran en la frontera con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, 15 de agosto de 2019)

“La verdad que estamos en una guerra sin cuartel, sin tregua contra el crimen, la delincuencia, el narcotráfico y los portonazos.” (Entrevista a matinal “Bienvenidos” de Canal 13, 9 de septiembre de 2019)

⁹⁷ Acusación, p. 41.

⁹⁸ Acusación, p. 43.

⁹⁹ “La obligación de prevenir las violaciones de los derechos humanos; la obligación de investigar seriamente las violaciones cometidas en su ámbito de jurisdicción; la obligación de identificar, procesar y sancionar a los responsables de las mismas; la obligación de reparar los daños producidos por la violación de los derechos humanos, así como procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado; y la obligación de establecer la verdad de los hechos.” Acusación, p. 42.

¹⁰⁰ Acusación, p. 62.

Claramente, dicha afirmación, no tiene ningún sustento legal ni constitucional, y desconoce los principios y fundamentos básicos de la teoría de la responsabilidad. Decir que por el solo hecho de decretar un estado de excepción constitucional, el Presidente de la República se hace responsable “directamente” de absolutamente todo lo que acontezca bajo dicho estado, es una afirmación que no resiste ningún tipo de análisis, toda vez que para probar un ilícito constitucional no se puede dejar de lado la culpabilidad del acusado y la necesaria relación de causalidad que debe existir entre la acción u omisión imputada y las consecuencias producidas. En este sentido, nos remitimos a lo ya señalado al deducir la Cuestión Previa en cuando a que la acusación constitucional en contra de un Presidente de la República sólo procede por actos de su administración en que la autoridad acusada sea personal y directamente responsable, no por actos de terceros.

3. Los antecedentes y las pruebas que se acompañan a la Acusación carecen del mínimo estándar requerido para que prospere una acusación constitucional o son contradictorios con lo señalado por los acusadores

Como se señaló anteriormente, los acusadores hacen imputaciones infundadas dando por probados hechos y circunstancias que no han sido debidamente acreditados por los órganos competentes.

Así, no se acreditan en la Acusación los hechos que se me imputan, ni tampoco se acompañan documentos suficientes e idóneos que sustenten las imputaciones. Incluso más, en ocasiones, el contenido de ciertos documentos acompañados por los acusadores es contradictorio con lo señalado por éstos en la Acusación.

En efecto, en el numeral 1 del Capítulo Primero (“*Antecedentes de hecho*”), los acusadores hacen referencia a una serie de cifras y hechos, de forma poco rigurosa, sin un mayor desglose y detalle específico de los casos que permitan satisfacer el estándar de una acusación constitucional. Los acusadores señalan que la información contenida en la Acusación ha sido extraída de datos consolidados hasta el 16 de noviembre de 2019, generados por diversos organismos de protección de derechos humanos, considerando especialmente el INDH. Ahora bien, las cifras indicadas por los acusadores no se condicen con las cifras oficiales que han reportado a dicha fecha las instituciones y organismos competentes, y que se encuentran publicadas en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos.¹⁰¹

Se hace alusión por parte de los acusadores en el Capítulo Primero, a hechos que son de extrema gravedad, como son las alegadas violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido por agentes del Estado en las últimas semanas. Sin embargo, en todos los casos que se mencionan, no se acompañan antecedentes que demuestren, con fundamentos, la efectividad que dichos hechos se hayan desarrollado en las circunstancias alegadas por los acusadores. Los casos que se mencionan en la Acusación, se fundan, en varios casos, simplemente en noticias de distintos medios de comunicación, sin hacerse referencia siquiera a las causas civiles o penales actualmente en curso por dichos hechos. Por consiguiente, si se pretende hacer responsable a este Presidente de hechos de tal gravedad, no basta simplemente con notas de prensa, que en muchos casos carecen de la rigurosidad necesaria para fundar un ilícito constitucional.

¹⁰¹ Disponible en: <http://ddhh.minjusticia.gob.cl/informacion-sobre-la-situacion-del-pais-desde-el-19-de-octubre>

Así, los casos que se mencionan tienen como antecedente únicamente noticias de diversos medios de comunicación, tales como *Radio Bío Bío*, *Cooperativa*, *Ciper*, *The Clinic*, *El Desconcierto*, *Canal 24 Horas*, *El Mostrador*, *CNN Chile*, *Publimetro*, *Chilevisión*, *BBC*, *New York Times*, *La Izquierda Diario*, *Teletrece Radio*, *Mega Noticias*, *Temuco Diario*, *Página 12*, *TeleSUR*, *El Periodista*, *Soy Chile*. Asimismo, en muchos otros casos gravísimos que se mencionan, no se entregan mayores detalles, antecedentes, ni contexto, y simplemente se hace referencia a víctimas con reserva de identidad. Por consiguiente, el nulo detalle de tales casos no permite esclarecer a qué hechos se está haciendo referencia, y tampoco permite obtener las conclusiones que los acusadores pretenden.

Asimismo, llama poderosamente la atención que los acusadores acompañen en la Acusación documentos con antecedentes que confirman lo expresado por este Presidente y el Gobierno y no obstante ello prefieren omitir toda referencia y dejar de lado el contexto. Este es el caso, por ejemplo, de los graves incidentes en materia de orden público a las que se ha aludido desde un principio, y de los que se da cuenta en uno de los documentos acompañados por los acusadores.¹⁰² Estos lamentables sucesos que solamente se refieren a la Región de Valparaíso, dan cuenta de la compleja situación de orden público en la que nos encontramos, no obstante esta información es omitida por los acusadores al momento de relatar los acontecimientos y el contexto en el cual se han desenvuelto los hechos estas últimas semanas.

En el mismo orden de ideas, los acusadores acompañan como documento un artículo de la CIDH en el cual se condena el excesivo uso de la fuerza pública, pero también se rechaza toda forma de violencia en el marco de las protestas sociales en nuestro país.¹⁰³ En dicho artículo se mencionan aseveraciones muy relevantes que tampoco se condicen con las alegaciones de los acusadores. Así por ejemplo, la CIDH condena tanto el “*uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como los actos violentos cometidos por civiles*”. En ese sentido, es importante reiterar la necesidad de condenar la violencia, venga de donde venga, sin ninguna excepción, y que lamentablemente muchos no lo han hecho.

Por otro lado, en el documento acompañado por los Acusadores, la CIDH urge al Estado Chileno y a todas las partes involucradas “*establecer un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población*”. Como se ha señalado, lo anterior ha ocurrido en nuestro país, pero los acusadores han preferido omitir todas las acciones y medidas que ha tomado este Presidente y el Gobierno en ese sentido.

Entre ellas, cabe señalar que a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, estamos impulsando diálogos ciudadanos denominados “*El Chile que queremos*”, los

¹⁰² En la presentación de Carabineros de Chile en el contexto de las manifestaciones en la Región de Valparaíso, desde el 19 de octubre al 5 de noviembre acompañada en la Acusación, se mencionan 628 incidentes a nivel regional, entre ellos 231 desórdenes, 284 saqueos, 46 daños, 40 incendios, entre otros. Se consigna además la afectación de 14 supermercados, 7 entidades comerciales, 4 entidades financieras, 8 entidades públicas, entre otras. Asimismo, se deja constancia de 16 ataques a cuarteles de Carabineros y 101 a vehículos fiscales de la institución.

¹⁰³ “*CIDH condena excesivo uso de la fuerza y rechaza toda forma de violencia en el marco de las protestas sociales en Chile*”, 23 de octubre de 2019, documento acompañado en la Acusación.

cuales buscan ser un espacio abierto de escucha y diálogo, donde se puedan recoger las principales demandas sociales de los chilenos y chilenas.¹⁰⁴ Desde el primer momento, este Presidente ha impulsado un diálogo político y social amplio, en el cual nos hemos reunido con diversas organizaciones de la sociedad civil, alcaldes, parlamentarios, los máximos representantes de los Poderes del Estado, empresarios, para buscar coincidencias y acuerdos en acciones y medidas concretas para avanzar con urgencia en las legítimas demandas que la ciudadanía ha expresado en estas últimas semanas.

A mayor abundamiento, en el propio documento acompañado en la Acusación al que me he referido, la CIDH expresa que el *“Estado de Chile informó a la Comisión que en todos estos casos [uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad] el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes, dictándose incluso prisión preventiva en contra de presuntos responsables”*. Lo anterior así ha ocurrido, porque como se ha señalado, este Presidente tiene un compromiso irrestricto con el pleno respeto de los derechos humanos, por consiguiente se han tomado y se seguirán adoptando todas las medidas necesarias para que los responsables de estos gravísimos hechos no queden en la impunidad.

Hacen también alusión los acusadores a un *Informe en Derecho sobre los Estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos sobre Salvaguardas Aplicables a Medidas Concretas de Limitación de Derechos Fundamentales en Estado de Excepción*, del profesor Pietro Sferrazza Taibi, reconociendo que dicho informe no ha sido publicado. Establecen los acusadores que de acuerdo a dicho Informe, se puede concluir que *“existe un incumplimiento de los estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos elaborados por la jurisprudencia de la Corte IDH, dado que no se verifican los presupuestos fácticos según el principio de juridicidad y proporcionalidad.”*¹⁰⁵

Los acusadores ni siquiera acompañan el informe que arriba a tal grave conclusión, cuestión que dificulta gravemente mi derecho a defensa, al desconocer el contenido y alcance de dicho informe. Tampoco explican los acusadores por qué se habría infringido el principio de juridicidad y proporcionalidad al declararse los Estados de Emergencia. Nuevamente, no se vislumbran hechos y antecedentes que funden tales acusaciones.

Respecto a este tema, lo único que se limitan a mencionar los acusadores es que *“[e]n algunas situaciones, la vigencia del toque de queda se extendió por un período de 12 horas, desde las 18:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente.”*, lo que, según dicen, evidentemente excedería la lógica de la proporcionalidad. Ahora bien, debido a que los acusadores no adicionan nada a esa declaración, no se advierte la razón lógica para llegar a esa conclusión. Tampoco mencionan el caso particular al cual hacen referencia y menos explican por qué habría sido desproporcionada la vigencia del *toque de queda* en tal caso particular.

Como se explicará, tomé la decisión de decretar Estado de Emergencia en razón a la compleja situación que se fue desarrollando en el país, y se explicará por qué en todos los casos dicha decisión cumplió cabalmente los principios de juridicidad, proporcionalidad y racionalidad.

¹⁰⁴ Disponible en: chilequequeremos.cl

¹⁰⁵ Acusación, p. 63.

4. La Acusación pretende desconocer el derecho a la presunción de inocencia de quienes se encuentran siendo investigados o imputados por tales hechos

Como se ha señalado, los hechos que fundan la Acusación están siendo actualmente investigados por el Ministerio Público y conocidos por los Tribunales de Justicia, los cuales deberán resolver caso a caso conforme a nuestro ordenamiento jurídico, y con el mayor rigor de la ley, para las situaciones en que se acrediten delitos graves, abusos o vulneraciones a los derechos humanos. He sido enfático y categórico en el sentido de insistir en que ninguno de dichos hechos puede quedar en la impunidad y que los responsables deben responder ante la justicia.

Ahora bien, hasta que las personas involucradas y acusadas no sean declaradas culpables a través de una condena por sentencia firme del Tribunal de Justicia competente, rige en nuestro Estado de Derecho el principio de presunción de inocencia, el que se ve flagrantemente vulnerado por los acusadores en la Acusación al tratar tales hechos como ciertos y verdaderos. Lo anterior es aún más grave, si tenemos en consideración que las personas que están siendo investigadas o que están imputadas por tales hechos no tienen ninguna posibilidad de defensa en este proceso, no pueden controvertir los antecedentes que se mencionan ni pueden alegar por tanto su inocencia.

La presunción de inocencia, como garantía básica del debido proceso, se encuentra recogida en el artículo 4 del Código Procesal Penal:

“Artículo 4°.- Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.”.

Así también, dicha garantía está expresamente reconocida en el artículo 14, N° 2 del PIDCP, y en el artículo 8, N° 2 de la CADH, ambos instrumentos internacionales ratificados por Chile y vigentes.

Esta garantía protege a la persona durante todas las etapas del procedimiento, es decir cuando es imputado, acusado y condenado, en este último caso cuando todavía no haya sentencia firme. Considerando por tanto que en ninguno de los hechos mencionados en la Acusación existe todavía una condena firme, debe respetarse el estado de inocencia hasta la existencia de una resolución firme que establezca la culpabilidad en tales hechos.

V. ESFERA DE RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA

Como señalé previamente y, por lo demás, lo reconocen los propios acusadores, la declaración del Estado de Emergencia, y la calificación de las circunstancias que lo hacen procedente es una facultad privativa del Presidente de la República.

De ello, sin embargo, la Acusación extrae una conclusión infundadamente extensiva: que *todo lo que acontezca* durante el período de tiempo en que rija un Estado de Emergencia, sería responsabilidad del Presidente de la República.

*“En consecuencia, se aprecia que el ámbito de discreción o apreciación presidencial es la que supone la declaración misma del estado de excepción constitucional y, en consecuencia, los hechos que se derivan de dicha declaración”.*¹⁰⁶

*“Es decir, todos estos elementos conducen inequívocamente a concluir que lo que acontezca bajo el estado de excepción constitucional es de responsabilidad política directa del Presidente de la República”*¹⁰⁷
(énfasis agregado).

Evidentemente una afirmación de tal clase constituye un salto lógico, y resulta apresurada y desmedida. El Estado de Emergencia es una herramienta que forma parte de nuestra institucionalidad, al ser consagrada en nuestro ordenamiento jurídico y codificada en el sistema internacional de derechos humanos.

Por tanto, su declaración es un acto lícito, del cual ningún ilícito, a priori, se puede imputar al Presidente que lo decretó. La sola declaración del Estado de Emergencia no implica ni presupone, ni en nuestro derecho interno ni en el derecho internacional, amparar la realización de actos ilícitos. Por el contrario, la regulación de los estados de excepción constitucional en nuestro ordenamiento excluye la licitud de atropellos a los derechos humanos denunciados en la Acusación.

En efecto, el Estado de Emergencia solo permite la restricción de derechos de locomoción y reunión (artículo 43 de la Constitución), y no la afectación de otros derechos. Por tanto, cualquier violación a otros derechos distintos de los de locomoción o reunión —o a ellos, pero en medidas no autorizadas por el Estado de Emergencia— será —y está siendo— debidamente investigada y sancionada.

Por lo mismo, un Presidente de la República al declarar los Estados de Emergencia no está tolerando, ni consintiendo, ni mandando la realización de ningún ilícito. Por el contrario, al decretar los Estados de Emergencia instruí que las actuaciones se realizaran con pleno respeto al ordenamiento jurídico. Muestra de lo anterior son los dichos de autoridades, como el General Director de Carabineros, quien en la sesión del COSENA celebrada el 7 de noviembre del presente año señaló *“que el Presidente de la República le pidió cumplir con la misión de la Institución, con la advertencia de que debe hacerse con respeto irrestricto a los derechos humanos”*¹⁰⁸.

De esta manera, cuando una autoridad recurre a un mecanismo que la propia institucionalidad ofrece no es posible imputar responsabilidad por hechos que no sean personales de la misma, o que no sean de aquellos que ésta pueda haberse representado que ocurrirían lícitamente durante aquél.

Para imputar a este Presidente de la República responsabilidad por hechos ilícitos, no permitidos ni asilados en el marco del Estado de Emergencia, es exigible que, cuanto menos, se designe con precisión una conexión precisa entre cada ilícito y actos concretos de

¹⁰⁶ Acusación, p. 71.

¹⁰⁷ Acusación, p. 73.

¹⁰⁸ Acta de sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 7 de noviembre de 2019, p. 5

este Presidente de la República. Tal relación de causalidad no es señalada por los acusadores.

Por el contrario, la Acusación desliza que existiría una responsabilidad internacional del Estado de Chile por la supuesta violación sistemática y generalizada de los derechos humanos –a la que nos referiremos posteriormente, desmintiéndola-. Al respecto, señala el libelo:

*“Considerando los antecedentes descritos, si bien corresponde a los tribunales de justicia nacional o internacional atribuir al Presidente de la República la autoría de un eventual ilícito penal internacional, es de consideración de estos diputados y diputadas que se reúnen todos los requisitos para sostener que **existe, al menos, una responsabilidad internacional del Estado por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos**, habida consideración de que todos los hechos descritos en la presente acusación, **constituyen acciones y omisiones imputables al Estado que violan obligaciones internacionales vigentes**, tomando en cuenta además la descripción semántica de los conceptos mencionados y desarrollados por la jurisprudencia internacional, lo que per se compromete gravemente el honor de la nación según se exige en el art. 52, N° 2, letra a) de la Constitución Política de la República”*¹⁰⁹ (énfasis agregado).

Así, la Acusación confunde la responsabilidad que pueda o no corresponder al Estado de Chile con la responsabilidad individual y personal que pueda caberle a una persona natural, en este caso el Jefe de Estado. En efecto, los acusadores señalan que habría una “*responsabilidad internacional del Estado*”, pero pretenden perseguirla en ésta, una sede que tiene por propósito hacer efectiva una responsabilidad personal por un ilícito constitucional y no determinar la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, cuestión que correspondería a tribunales internacionales competentes.

En efecto, para hacer efectiva la responsabilidad de un Presidente de la República se requiere de la existencia de actos de su administración que infrinjan abiertamente la Constitución y las leyes. Y, ciertamente, ninguno de los razonamientos contenidos en la Acusación permite demostrar mi responsabilidad personal e individual en los hechos acontecidos.

Sin embargo, dada la confusión de los acusadores, corresponde aclarar que en los instrumentos de derechos humanos vigentes en Chile se distinguen dos sistemas a los que se ha hecho mención: la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos humanos, y la responsabilidad penal internacional por crímenes de lesa humanidad.

1. La Acusación no permite establecer una responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos

¹⁰⁹ Acusación, p. 97.

La responsabilidad internacional por violaciones a derechos humanos -como la que puede un organismo jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional competente - es una responsabilidad de Estado.

Precisamente, el sistema internacional de derechos humanos tiene por objeto establecer la responsabilidad de los Estados. No tiene por finalidad identificar dentro de un Estado o de un gobierno de turno a la persona específica responsable de una infracción.

Precisamente, así ha ocurrido en los casos Olmedo Bustos y otros Vs. Chile, del año 2001; Palamara Iribarne vs. Chile, del año 2005; Claude Reyes y otros vs. Chile, del año 2006; el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, del año 2006; el caso Atala Riffo e hijas vs. Chile, del año 2012; el Caso García Lucero y otras vs Chile, del año 2013; el Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, del año 2014; el Caso Maldonado Vargas y otros vs Chile, del año 2015; el caso Poblete Vilches y otros vs Chile, del año 2018 el Caso Órdenes Guerra y otros vs Chile, del año 2018.

Una eventual responsabilidad internacional del Estado no conlleva la responsabilidad individual de un representante de ese Estado, hecho que deberá acreditarse según las normas del derecho doméstico o del derecho penal internacional, no formando parte del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es especialmente cierto en democracias constitucionales, en las que existe separación de poderes y funciones, controles y contrapesos, y alternancia en el poder, pues la responsabilidad por no prevenir un mal, por ejemplo, o por la determinación de una política, es atribuible a diversas partes e instituciones.

Adicionalmente, la determinación de la eventual responsabilidad internacional del Estado corresponde sólo a instancias internacionales competentes en la materia, en base a las normas que rigen la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos.

En todo caso, y según se expondrá en el capítulo siguiente, este Gobierno ha desplegado todos sus esfuerzos posibles en el cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile en materia de protección de los derechos humanos de acuerdo al ordenamiento interno y a las normas internacionales aplicables; tanto las obligaciones preventivas, como investigativa, sancionadora y de reparación.

Por ejemplo, con anterioridad a la dictación del Estado de Emergencia, ya se habían dictado órdenes expresas que establecen las reglas para el uso legal de la fuerza, elaboradas con participación del INDH y que resguardan los derechos humanos, dictadas recientemente mediante el decreto supremo N° 1.364, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A ello se suma la Circular N° 1.832 de Carabineros de Chile, de 1 de marzo 2019, sobre uso de la fuerza; la Orden General N° 2.635 que actualiza los protocolos mantención de orden público, y la Orden General N° 2640, que eleva el Departamento de Derechos Humanos a Dirección, estas últimas publicadas también en marzo del presente año.

2. La Acusación no permite establecer una responsabilidad penal internacional por crímenes contra la humanidad

Por otra parte, la alusión a vulneraciones *sistemáticas y generalizadas* de derechos humanos –a la que nos referiremos separadamente en un capítulo posterior- corresponde al ámbito del derecho penal internacional, en el que tales actos pueden dar pie a responsabilidad de mando.

Sin embargo, lo anterior supone un estándar exigente, que en este caso dista de cumplirse. Por de pronto, supone que se hayan verificado delitos base (v.gr. una tortura) que determinados por un tribunal competente, que sean manifestación de un *ataque* generalizado o sistemático contra la población civil, y que el ataque generalizado o sistemático responda a una política de Estado.

El concepto de violaciones sistemáticas a derechos humanos aparece tanto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) como en la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (2006).

En este estadio, la pregunta no dice relación con una atribución de responsabilidad de un acto de un tercero, sino que se trata de la pregunta por la responsabilidad directa del Jefe de Estado, es decir, de sus propias acciones. Por ello es que para la atribución de esta clase de responsabilidad se requiere probar conocimiento e intención de los ataques, y la existencia de una política de Estado dispuesta en orden a dichos ataques. En este caso, no existe evidencia alguna que apunte hacia el conocimiento o intención de los ataques ni a una política de Estado, y la Acusación prescinde de todo esfuerzo por señalarlas.

En Chile, la ley N° 20.357 tipifica en nuestro ordenamiento jurídico los crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos de guerra (en adelante “**Ley N° 20.357**”), incluyendo además algunas cuestiones de parte general que son –por la necesaria especificidad- muy relevantes. El tratamiento que le da la legislación chilena a dichos delitos es consistente con el Estatuto de Roma y la interpretación que de él ha hecho la Corte Penal Internacional.

La Ley N° 20.357 nos entrega criterios interpretativos, los que deben ser examinados antes de abordar las graves acusaciones planteadas por la Acusación.

De esta manera, el artículo 1 de la Ley N° 20.357 define qué se entiende por crímenes de lesa humanidad, indicando que deben concurrir las siguientes circunstancias:

Artículo 1°.- Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias:

1°. Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detentan un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos.

Es decir, los casos concretos en los que los acusadores cimientan sus conclusiones no bastan por sí solos, sino que debe cumplir con los dos requisitos que establece el Artículo 1 de la Ley N° 20.357.

Resulta meridianamente claro que la ley emplea una construcción alternativa: o es sistemático o es generalizado. Sin embargo, los acusadores utilizan ambos términos sin distinción ni mayor precisión, lo que dificulta la aproximación al problema. La diferencia no es trivial. Luego, la misma Ley N° 20.357 define qué se entiende por ataque sistemático o generalizado:

Artículo 2°.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá:

1°. Por "ataque generalizado", un mismo acto o varios actos simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas, y

2°. Por "ataque sistemático", una serie de actos sucesivos que se extienden por un cierto período de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas.

Se encuentran, por tanto, en juego, dos tipos de criterios alternativos: uno cuantitativo y otro cualitativo. Eso sí, en ambos casos se necesita que sea cuanto menos, con conocimiento de dicho ataque, de modo de cumplir con el requisito del artículo 1 N° 2 de la Ley N° 20.357, lo cual implica un nuevo umbral. Esto significa que incluso aunque hubiesen violaciones masivas a los derechos humanos, no se configura la hipótesis de crímenes de lesa humanidad, pues el hecho global debe ser abarcado por el dolo del autor, quien debe conocer que se está llevando a cabo un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que su hecho representa parte de ese ataque.¹¹⁰

En otras palabras, para poder predicar de cualquier escenario un crimen de lesa humanidad, se requiere una línea de conducta que implique la comisión de múltiples delitos a fin de cumplir, promover o alentar activamente un ataque contra la población civil

En la especie no existen elementos que lleven a concluir la existencia de una política de Estado, por lo que debe descartarse la existencia de crímenes de lesa humanidad.

Adicionalmente, el respaldo que como Gobierno se le ha dado a las Fuerzas de Orden y Seguridad para cumplir con su mandato de resguardar el orden público, y a las Fuerzas Armadas durante la vigencia del Estado de Emergencia, no dice relación alguna con las alegaciones de violaciones a los derechos humanos. Dicho respaldo no sólo responde a al deber del Estado de seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia, sino que, en efecto, va aparejado precisamente de la instrucción explícita y categórica de respetar las normas y protocolos respectivos, y los derechos humanos de todas las personas. En ningún caso es un respaldo irreflexivo. Así lo manifesté, por ejemplo, en la la sesión del COSENA celebrada el 7 de noviembre del presente año:

*“Frente a la violencia [distinguiéndola de las manifestaciones pacíficas], indica, se han aplicado las herramientas que el ordenamiento jurídico otorga, protegiendo a los más débiles y vulnerables. La tarea de las Fuerzas de Orden y Seguridad ha sido inmensa. **Se respalda y apoya su labor, dentro del mandato constitucional y legal, y siempre que se respeten las normas y protocolos existentes**”¹¹¹ (énfasis agregado).*

¹¹⁰ Corte Penal Internacional, Situación de la República de Kenia, Pre Trial Chamber III, 31 marzo 2010

¹¹¹ Acta de sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 7 de noviembre de 2019, p. 7.

En suma, mi respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a las Fuerzas Armadas no puede ser interpretado del modo que lo hacen los acusadores. Este respaldo jamás se ha otorgado de forma desvinculada al pleno respeto a la normativa aplicable y a los derechos humanos de todos los ciudadanos.

VI. EL GOBIERNO HA DADO PLENO CUMPLIMIENTO A TODOS SUS DEBERES EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Obligaciones del Estado de Chile en materia de protección de los derechos humanos de acuerdo al ordenamiento interno y a las normas internacionales aplicables

Sin perjuicio de lo señalado en relación a la esfera de responsabilidad del Presidente de la República, la propia Acusación reconoce que el Estado de Chile tiene deberes precisos en materia de promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes.

Como se demostrará a lo largo de este apartado, ese estándar que la propia Acusación reconoce, ha sido cabalmente cumplido por este Presidente de la República en todo cuanto se encontraba dentro de la esfera de sus atribuciones.

En efecto, sostienen los acusadores que de las obligaciones generales que tiene el Estado en materia de derechos humanos se “*derivan ciertas obligaciones específicas*”¹¹², las que consisten en:

*“prevenir las violaciones de los derechos humanos; la obligación de investigar seriamente las violaciones cometidas en su ámbito de jurisdicción; la obligación de identificar procesar y sancionar a los responsables de las mismas; la obligación de reparar los daños producidos por la violación de derechos humanos, así como procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado; y la obligación de establecer la verdad de los hechos;”*¹¹³

Respecto de cada una de esas obligaciones, este Presidente de la República adoptó y continúa adoptando las medidas necesarias para satisfacerlas.

2. El Gobierno ha cumplido íntegramente el deber de prevención en materia de derechos humanos

En primer término, tratándose de las medidas preventivas impulsadas por este Gobierno, ellas pueden ser agrupadas en dos tipos. Por una parte, están aquellas adoptadas con anterioridad a los hechos del 18 de octubre, las que demuestran que existe un compromiso sostenido y permanente en la materia. Por otra, aquellas adoptadas una vez decretado el Estado de Emergencia y en los días posteriores, con el objeto de prevenir violaciones a los derechos humanos con ocasión de la situación vivida por el país.

¹¹² Acusación, p. 53.

¹¹³ Acusación, p. 53.

a. Medidas preventivas adoptadas antes de los hechos del 18 de octubre de 2019

§ Plan Nacional de Derechos Humanos

El antecedente directo del Plan Nacional de Derechos Humanos es la Declaración y Programa de Acción de Viena, firmada por Chile el año 1993. El año 2009, el Estado de Chile se sometió por primera vez al Examen Periódico Universal, que examina el nivel de cumplimiento de los Estados en la materia. De las recomendaciones realizadas al Estado de Chile entonces, tres se referían a la necesidad de contar con una institucionalidad de carácter nacional dedicada a la promoción de los derechos humanos, y dos instaban a la elaboración de un plan nacional en la materia.

La primera de esas recomendaciones fue cumplida el año 2012, mediante la presentación, por parte de este Presidente de la República, del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, tramitado bajo el Boletín N° 8.207-07, actualmente ley N° 20.885. Entra las funciones de la nueva Subsecretaría se contempló expresamente la elaboración e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos.

El proceso de elaboración de dicho Plan, incluyendo los ajustes hechos a una propuesta original, concluyó durante este Gobierno. Así, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 fue aprobado por decreto supremo N° 368, de fecha 9 de julio de 2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual se encuentra desde el 5 de septiembre de 2019 ingresado a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón. Dicho Plan contempla 15 capítulos, cada uno de los cuales considera varias metas, y 604 acciones que alcanzan transversalmente a todos los ministerios y los servicios, instituciones y organismos dependientes o relacionados con el Estado, en materia de derechos humanos.

Sin perjuicio de la total tramitación del decreto respectivo, por decisión del Comité Interministerial de Derechos Humanos, las metas contempladas en el Plan Nacional de Derechos Humanos ya han comenzado a implementarse, generándose el primer reporte de cumplimiento durante el año 2018.

En particular, dentro de las acciones contempladas por el Plan Nacional de Derechos Humanos se encuentran, por ejemplo, tomar todas las medidas necesarias para que se investigue y sancione a quienes hubieran cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura; la educación en derechos humanos; y la erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Dentro del capítulo educación en derechos humanos, el Plan contempla expresamente los desafíos de la educación en derechos humanos del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, materia dentro de la cual existe una meta específica con diversas medidas a adoptar. Entre ellas, se encuentran:

- Ingreso al Consejo Nacional de Educación de una propuesta de estándares de formación inicial docente que fomenten el aprendizaje y enseñanza de los derechos humanos en el sistema educacional;

- Institucionalizar una coordinación en materia de derechos humanos en la orgánica ministerial de manera transversal, que vele por la capacitación y formación continua de funcionarios y funcionarias;
- Diseño e implementación del programa de núcleo básico de derechos humanos para ser incorporado en las escuelas matrices militares, tanto para oficiales como para integrantes del cuadro permanente o gente de mar;
- Incorporar contenidos de derechos humanos en los cursos programados en las Fuerzas Armadas, según necesidades específicas por programas y planes de estudio;
- Implementar cursos de capacitación E-learning auto-aplicados sobre introducción a los derechos humanos, con contenidos específicos para funcionarias y funcionarios públicos; y
- Revisión de orientaciones técnicas, materiales y contenidos de las mallas curriculares de las escuelas matrices de Fuerzas Armadas (FFAA) y cursos extracurriculares para la incorporación de enfoque de derechos humanos.

Respecto de cada una de ellas, el Plan contempla acciones concretas, con sus respectivos indicadores, plazo estimado de cumplimiento e instituciones responsables cuyo monitoreo y estado de avance se ve reflejado en los reportes de cumplimiento. Es decir, se trata de un esfuerzo integral por incorporar el respeto y promoción de los derechos humanos en todos los niveles de la acción estatal, particularmente de aquellos órganos que tienen a su cargo el orden público y la seguridad, cuya materialización ha sido posible gracias al esfuerzo de este Gobierno.

§ Creación de la Dirección de Derechos Humanos en Carabineros de Chile

Adicionalmente, en relación a Carabineros de Chile, en enero de 2019, el Gobierno se comprometió en la Comisión de Seguridad del Senado con la creación de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros de Chile, elevando a dicha categoría al antiguo Departamento de Derechos Humanos.

Dicho compromiso que se vio materializado mediante la Orden General de la Dirección General de Carabineros de Chile N° 2.640. Dentro de las funciones de la nueva Dirección se incorporó el encargo de diseñar, ejecutar, supervisar y/o hacer seguimiento, en coordinación con los estamentos pertinentes, la implementación Institucional de las políticas, estrategias, planes, programas, normativas y otros instrumentos que establecen las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos en la función policial, conforme se encuentran garantizadas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Adicionalmente, recae en esta Dirección la tarea de responder a los requerimientos relativos a derechos humanos que se soliciten a Carabineros de Chile por parte de organizaciones civiles u otros organismos del Estado.

Entre las medidas adoptadas por la nueva Dirección se encuentra, por ejemplo, el Nuevo Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos y Técnicas de Intervención Policial.

- § Regulación del uso de la fuerza, en conformidad a las obligaciones internacionales y con participación del INDH y de organizaciones de la sociedad civil

El Estado de Chile suscribió el “Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones Caso N° 12.880” con la CIDH con fecha 9 de marzo de 2018, a raíz del caso *Edmundo Alex Lemún Saavedra vs. Chile*. En virtud de este acuerdo, el Estado de Chile se comprometió a las siguientes garantías de no repetición: (1) aprobar un decreto supremo que contenga lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial; (2) revisar y actualizar los protocolos existentes relativos al empleo del uso de la fuerza para la mantención del orden público; y, (3) establecer el mecanismo para que Carabineros de Chile reporte anualmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas relativas al uso de la fuerza y episodios violentos.

Dicho compromiso se materializó, en primer lugar, en la dictación, por parte de este Presidente de la República del decreto supremo N° 1.364, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual fue publicado en el Diario Oficial con fecha 4 de diciembre de 2018, (en adelante, el “**DS N° 1.364**”).

En concreto, el DS N° 1.364 regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el desempeño de su labor de mantener el orden público. Para ello, establece, en primer lugar, los lineamientos generales a que debe sujetarse el uso de la fuerza pública. De acuerdo al artículo 1 del DS N° 1.364, ellos son:

“1) En sus actuaciones, las fuerzas policiales deberán velar por la protección de la seguridad pública y los derechos de las personas.

2) En sus actuaciones, las fuerzas policiales respetarán y cumplirán la ley en todo momento.

*3) Los funcionarios policiales deberán evitar el uso intencional de armas letales, **debiendo preferir el empleo de elementos o la adopción de medidas menos dañinas** para lograr sus objetivos.*

4) En caso que sea necesario emplear un arma de fuego, y siempre que sea posible, adecuado y útil, el funcionario policial advertirá claramente su intención de utilizarla. Esta advertencia no será necesaria en aquellos casos que con ella se ponga en peligro al funcionario policial o se cree un riesgo grave a otras personas.

5) Los funcionarios policiales deberán asegurar el mantenimiento del orden público con el objeto de garantizar las reuniones autorizadas por la autoridad competente y de carácter pacífico.

6) En caso de reuniones no autorizadas por la autoridad competente y de carácter no violento, los funcionarios policiales evitarán el uso excesivo de la fuerza.

*7) Los funcionarios policiales **no podrán hacer uso de la fuerza en contra de personas detenidas**, salvo cuando sea estrictamente necesario para concretar la detención, para mantener la seguridad y el orden en las unidades policiales o cuando esté en peligro la integridad física de alguna persona.*

*8) Las normas internas que regulen la intervención policial para el mantenimiento del orden público, **deberán dar estricto cumplimiento a la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, en materia de derechos humanos**” (énfasis agregado).*

Seguidamente, en su artículo 2, se establece como obligación de Carabineros de Chile, el revisar y actualizar la Orden General N° 2.287, de 2014, que aprobaba la actualización de Protocolos de Intervención del Orden Público (en adelante, la “**Orden General N° 2.287**”) y la Circular N° 1.756, de 2013 (en adelante, la “**Circular N° 1.756**”), a fin de asegurar que dichas instrucciones cumplieran con los lineamientos generales establecidos en el artículo 1 del mismo DS N° 1.364. En este proceso, por disposición expresa del mismo decreto, debe participar la sociedad civil y el INDH.

Por último, el artículo 3 del DS N° 1.364 establece el deber de Carabineros de Chile de presentar informes semestrales al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que contengan información estadística relativa al uso de la fuerza y episodios violentos, de forma desagregada por región y provincia.

En suma, el DS N° 1.364 estableció un conjunto de lineamientos generales en el uso de la fuerza pública plenamente coherente con los estándares nacionales e internacionales, y además contempló las disposiciones necesarias para que dichos lineamientos fueran efectivamente respetados e incorporados en las instrucciones dirigidas al personal de Carabineros de Chile, haciendo partícipe de dicho proceso a la sociedad civil y al INDH.

Una vez dictado y publicado el DS N° 1.364, el Gobierno realizó todas las gestiones pertinentes para materializar la actualización de la Orden General N° 2.287 y la Circular N° 1.756. Durante dicho proceso participaron activamente el INDH, el Consejo de la Sociedad Civil que asesora a la Subsecretaría del Interior y la Defensoría de la Niñez. En total, 66 observaciones del INDH y la Defensoría de la Niñez fueron acogidas en la versión final de los nuevos protocolos.

Este proceso concluyó con fecha 1 de marzo de 2019, con la dictación, por parte del General Director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, de la Circular 1.832, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza y la nueva Orden General N° 2.635, que actualiza los protocolos para la mantención del orden público, ambas publicadas con fecha 4 de marzo de 2019 en el Diario Oficial.

En relación a su contenido, resulta especialmente relevante destacar que la Orden General N° 2.635, hizo aplicables a la función policial los principales instrumentos de derechos humanos ratificados por Chile.

§ Curso de Instructores en derechos humanos en Carabineros de Chile

Por otra parte, en materia de formación de Carabineros de Chile en temáticas de derechos humanos, se ha mantenido y fortalecido el curso de Instructores en Derechos Humanos en la Función Policial de Carabineros de Chile. Este curso se inició el año 2012 y en octubre de este año desarrolló su XIII versión.

Cada año, oficiales de distintas unidades del país reciben formación teórica y práctica intensiva, en un período de tres semanas, sobre la protección de los derechos humanos en la función policial. Este curso cuenta con el apoyo y respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, y cuenta entre los formadores a representantes de UNICEF, INDH, Defensoría de la Niñez, Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Derechos Humanos, Servicio Nacional de la Discapacidad y Museo de la

Memoria y los Derechos Humanos, que desde el año 2018 además es institución observadora de la totalidad del curso.

b. Medidas preventivas adoptadas con ocasión del Estado de Emergencia

§ Instrucciones en orden aplicar las Reglas de Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas

En primer lugar, inmediatamente una vez decretado el Estado de Emergencia, instruí al Jefe de la Defensa Nacional, en la Región Metropolitana, General de División del Ejército de Chile, Sr. Javier Iturriaga del Campo, para que en todo momento fueran obedecidas las Reglas de Uso de Fuerza; y la misma instrucción fue entregada a los restantes Jefes de la Defensa Nacional, así como a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Adicionalmente, con fecha 24 de octubre de 2019, y por instrucción expresa de mi parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, junto a la Subsecretaria de Derechos Humanos, se reunieron, en la Guarnición de Santiago, con el Jefe de la Defensa Nacional, General Javier Iturriaga, y el alto mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y el Ministro de Defensa Nacional, con el objeto de trabajar sobre la adecuada utilización de las Reglas de Uso de Fuerza.

En definitiva, se instruyó a todos los Jefes de la Defensa Nacional que se aplicaran las Reglas de Uso de Fuerza en sus jurisdicciones.

§ Promoción y facilitación de la labor del INDH durante el Estado de Emergencia y en los días posteriores

También dentro de las medidas preventivas adoptadas por este Presidente de la República se encuentra la colaboración y facilitación de la labor del INDH.

Concretamente, el Gobierno instruyó para que le fueran entregados 1.411 salvoconductos durante la vigencia del toque de queda en las distintas zonas de Emergencia. Adicionalmente, se hizo presente al INDH, mediante Oficio N° 32.816, de fecha 22 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la total disposición del Gobierno a colaborar en todas las gestiones realizadas por la institución a lo largo del país. Asimismo, ha existido por parte de este Gobierno una permanente coordinación con el INDH, al cual se le han otorgado todas las facilidades para el ejercicio de sus labores, tal y como se expresa en el numeral 3, letra b) siguiente.

§ Política de transparencia en materia de acceso a la información y cobertura por parte de los medios de comunicación

En la misma línea puede señalarse la colaboración que prestó el Gobierno a la cobertura de los hechos ocurridos por parte de los medios de comunicación. En concreto, 1.746 salvoconductos fueron entregados a periodistas durante la vigencia del toque de queda en las distintas zonas en que se declaró Estado de Emergencia, a fin de que pudieran cumplir con su labor de informar y fiscalizar.

§ Invitación a organismos internacionales con pleno acceso a la información

Otra prueba incontestable del compromiso del Gobierno, y de este Presidente de la República, en materia de derechos humanos ha sido la apertura y transparencia con que se ha actuado frente a los organismos internacionales de derechos humanos.

En efecto, las principales organizaciones internacionales en la materia fueron invitadas por el Gobierno a conocer la situación del país, contando con todo el respaldo y colaboración del Gobierno, mientras realizaban su labor.

Así, fueron invitados el Director Ejecutivo de la División de las Américas ONG *Human Rights Watch*, con fecha 24 de octubre de 2019;¹¹⁴ y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en esa misma fecha.¹¹⁵

Así, por ejemplo, desde un primer momento, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como la Subsecretaría de Derechos Humanos se pusieron a disposición de dichas organizaciones, a fin de colaborar con su trabajo y entregarles la información que pudieran requerir. En el mismo sentido, dicha Subsecretaría volvió a manifestar esa disposición del Gobierno, en reunión de fecha 25 de octubre, y en los días posteriores. En ese contexto, por ejemplo, se coordinó la visita de la delegación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador y a diversas Comisarías.

3. El Gobierno ha procurado que se cumpla íntegramente el deber de investigar las posibles violaciones a los derechos humanos, dando todas las facilidades a los órganos competentes

- a. **Coordinación con el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial**

Desde un primer momento, solicité al Fiscal Nacional, señor Jorge Abbott, poner especial énfasis en la investigación de las causas vinculadas a derechos humanos. Asimismo, el Ministerio Público ha mantenido, en todo momento, plena independencia para recibir e investigar todo tipo de denuncias de presuntos abusos cometidos durante el Estado de Emergencia, y con posterioridad. De esta forma, el INDH y otras personas e instituciones han presentado las denuncias y querellas ante el Ministerio Público, que han estimado necesarias.

Así también, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha mantenido contacto y coordinación permanente con la Defensoría Penal Pública para apoyar en todo lo necesario las funciones del referido servicio. Así por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría Penal Pública, están confeccionando una cartilla informativa para que sea entregada por las policías a toda persona detenida, con independencia del motivo de la detención, y con prescindencia de si la persona será trasladada a tribunales para audiencia de control de detención, o será puesta en libertad previo control de identidad o apercibimiento.

¹¹⁴ Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores al Director Ejecutivo de la División de las Américas de *Human Rights Watch*, 24 de octubre de 2019.

¹¹⁵ Nota N° 390, de fecha 24 de octubre de 2019, enviada por la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, a la Oficina de la Alta comisionada para los Derechos Humanos.

Asimismo, se enfatizó a los Tribunales de Justicia la importancia de ejercer su importante labor con la mayor celeridad posible, especialmente en causas relativas a derechos humanos, enfatizando la importancia de garantizar a todas las personas el debido proceso y el acceso a la justicia. Los Tribunales de Justicia han mantenido, en todo momento, su plena independencia, como debe ser en un Estado de Derecho como el nuestro, para conocer y juzgar la existencia de posibles violaciones a los derechos humanos, con pleno respeto y apego a nuestra legislación vigente y a las obligaciones contraídas a partir de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

b. Coordinación con el INDH y la Defensoría de la Niñez

Este Gobierno, por instrucción expresa de mi parte, otorgó al INDH todas las facilidades necesarias, desde el primer momento, para efectos de que el mencionado organismo pudiera cumplir de manera adecuada sus funciones legales. Así, se le ha prestado máxima colaboración para que pueda investigar y denunciar situaciones que pudiesen representar posibles abusos o violaciones a los derechos humanos, otorgándosele pleno acceso a los recintos y lugares que son necesarios visitar para el desarrollo de su trabajo. Asimismo, el INDH ha gozado de plena autonomía e independencia y ha contado con todas las facilidades para realizar su trabajo.

Incluso más, el 23 de octubre me reuní personalmente con el Director del INDH, señor Sergio Micco, en conjunto con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y la Subsecretaria de Derechos Humanos, encuentro en el cual le manifesté que contaba con todo el apoyo y la colaboración del Gobierno para que el INDH pudiera llevar a cabo sus funciones de la mejor manera posible, manteniendo siempre plena autonomía en todas sus actuaciones.

Asimismo, con fecha 22 de octubre del presente año, y en razón de una reunión sostenida por el Ministro del Interior y Seguridad Pública de la época, señor Andrés Chadwick, con el Director del INDH el día 21 del mismo mes, dicho Ministro envió el Oficio N° 32.816, en el que reiteraba la total disposición del Gobierno de Chile a colaborar en todas las gestiones realizadas por el INDH a lo largo del país. Por medio del mismo oficio el Ministerio del Interior y Seguridad Pública requirió, en relación al lamentable fallecimiento de Alex Núñez Sandoval, toda la información pertinente a Carabineros de Chile, institución que informó que se había instruido el sumario administrativo a fin de esclarecer las responsabilidades del caso y se habían puesto los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, para que desarrollara la investigación correspondiente.¹¹⁶

Asimismo, aproximadamente una semana después, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública volvió a oficiar al Director del INDH, solicitándole que pudiera hacer llegar las querellas que habían presentado y las denuncias que como INDH habían recibido, para efectos de que el referido Ministerio pudiera tomar las medidas pertinentes.¹¹⁷ Al respecto, cabe señalar que por cada querella presentada por el INDH, Carabineros de Chile

¹¹⁶ Oficio N° 32.816, 22 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

¹¹⁷ Oficio N° 33.384, 28 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

ha iniciado el respectivo sumario para determinar las responsabilidades disciplinarias que existieren.

Desde el comienzo de la crisis y hasta la fecha, instruí al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para efectos de que pudieran mantener un contacto permanente con el INDH, para prevenir, investigar y denunciar cualquier situación representativa de potenciales abusos o violaciones a los derechos humanos.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha mantenido contacto permanente con las autoridades de la Defensoría de la Niñez, el INDH, y distintas organizaciones de derechos humanos. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos ha instruido a todos los Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia, para efecto de que mantengan contacto directo con los Directores Regionales del INDH, ofreciéndoles plena colaboración y entregándoles toda la información solicitada por éstos, con máxima transparencia.

c. Invitación a organismos internacionales con pleno acceso a la información y coordinación con los Expertos Independientes de Naciones Unidas

Durante el Estado de Emergencia, este Presidente se preocupó especialmente por el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales a las que Chile se encuentra sujeto. De esta forma, el Gobierno informó debidamente a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos de las garantías constitucionales que, conforme a derecho, se vieron restringidas durante el Estado de Emergencia.

En efecto, con fecha 21 de octubre de 2019 el Gobierno de Chile, a través de su Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos, informó detalladamente al Secretario General de esta organización que se había declarado el Estado de Emergencia en diversas regiones, provincias y comunas del país. Además, se señalaron las disposiciones legales en virtud de las cuales esta declaración era procedente, la duración que podían tener los Estados de Emergencia decretados, las medidas que se podían tomar durante la vigencia de estos y los fundamentos en base a los cuales se tomó la decisión de declararlos.¹¹⁸

Posteriormente, con fecha 25 de octubre de 2019, mediante nota N° 105, procedí a transmitir esta misma información al Secretario General de las Naciones Unidas.¹¹⁹ Además, dos días después, informé también al Secretario General la finalización del Estado de Emergencia.¹²⁰

Asimismo, el Gobierno no sólo informó prontamente a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas sobre las medidas adoptadas, sino que, con fecha 24 de octubre del presente año, este Presidente invitó a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Director Ejecutivo de la División de las Américas de *Human Rights Watch* a visitar el país con el objeto de “[...] observar la

¹¹⁸ Misión Permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos, Nota N° 155/19, 21 de octubre de 2019.

¹¹⁹ Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, Nota N° 105/2019, 25 de octubre de 2019.

¹²⁰ Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, Nota N° 106/2019, 27 de octubre de 2019.

*situación del país [...] y tomar nota de las medidas implementadas por el gobierno para reestablecer la paz social y proteger y promover los derechos humanos”.*¹²¹

Así también, instruí al Ministro de Justicia y Derechos Humanos para que se invitara a la CIDH. Antes de dicha invitación, este Gobierno respondió por escrito las preguntas efectuadas por la CIDH, el 4 de noviembre, y acudió a la audiencia pública en Quito, Ecuador, el 11 de noviembre.

d. Convocatoria a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal

Se han realizado dos sesiones de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal –el 30 de octubre y el 11 de noviembre–, con el objeto de revisar el funcionamiento del sistema de justicia penal durante estas últimas semanas, para efectos de asegurar el acceso a la justicia, el debido proceso y la protección de los derechos de todas las personas.

En la primera de ellas participó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Presidente de la Excma. Corte Suprema, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros de Chile, el Prefecto General de la Policía de Investigaciones de Chile, la Subsecretaria de Derechos Humanos, el Subsecretario de Justicia, el Subsecretario de Prevención del Delito (S), entre otras autoridades.

En dicha sesión, cada autoridad informó la forma en que su respectiva institución ha dado cumplimiento a sus funciones durante este período y las principales dificultades observadas. De dicha reunión, se llegó a las siguientes conclusiones:

- § A dicha fecha, el sistema de justicia ha dado respuestas a los distintos escenarios presentados. Los jueces se han constituido en los recintos policiales en que se han detenido las personas, se han recepcionado o hecho las denuncias de eventuales delitos, sea el denunciado un civil o un funcionario policial, las que han dado origen a las correspondientes investigaciones penales y administrativas correspondientes.
- § Se ha coordinado el traspaso de información a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la que se puso a disposición del público en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
- § Se aprobó la creación de un grupo de trabajo coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, e integrado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las Fuerzas de Orden y Seguridad, destinado a fortalecer el sistema de información actualmente disponible.

En la segunda sesión, participó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente de la Excma. Corte Suprema, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el

¹²¹ Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores al Director Ejecutivo de la División de las Américas de *Human Rights Watch*, 24 de octubre de 2019. Ver también Nota N° 390, de fecha 24 de octubre de 2019, enviada por la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, a la Oficina de la Alta comisionada para los Derechos Humanos.

Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros de Chile, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Subsecretario de Justicia, el Subsecretario de Prevención del Delito (S), entre otras autoridades. El objetivo fue dar cuenta de las acciones desarrolladas por el grupo de trabajo referido. Asimismo, y para mejorar la coordinación entre las diversas instituciones se acordó, entre otras cosas, lo siguiente:

- § Las policías deberán entregar oportunamente a la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos la información relativa a las personas que han sido privadas o restringidas en su libertad, así como los recintos policiales a los que hayan sido conducidas, en conformidad a la ley.
- § Las policías deberán responder de forma oportuna y expedita los requerimientos de información efectuados por cualquier abogado en cualquier recinto policial, en orden a si se encuentra privada o restringida en su libertad una persona determinada en ese u otro establecimiento de la misma institución.
- § Se reforzarán las instrucciones a las policías del deber de otorgar información a familiares de las personas que han sido detenidas, respecto del motivo de la detención y del recinto policial en donde se encontraren.
- § Se reiterarán las instrucciones respecto de los deberes de registro exhaustivo y detallado de todas y cada una de las detenciones que practicareen los organismos policiales.
- § El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría Penal Pública, confeccionará una cartilla informativa para que sea entregada por las policías a toda persona detenida.

e. Convocatoria al Comité Interministerial de Derechos Humanos

El día 12 de noviembre, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos encabezó la 7° sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos, en la cual participaron el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministro de Salud, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de la Niñez. Participaron además como invitados la representante de ACNUDH Chile, Melanie Santizo, y el representante de UNICEF, Paolo Mefalopulos.

Durante la sesión se dejó constancia del trabajo realizado por los diversos ministerios en materia de derechos humanos, en el ámbito propio de sus competencias, y se reforzó el compromiso de todos los ministerios con el respeto irrestricto a los derechos humanos, y el llamado a redoblar los esfuerzos para profundizar las acciones de protección de los derechos humanos.

Asimismo, el 22 de noviembre, en el Palacio de la Moneda y con mi participación, se llevó a cabo la 8° sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos, a la cual asistieron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministro de Salud, la Ministra de

Relaciones Exteriores (S), la Ministra de Educación, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Subsecretario General de la Presidencia. Participaron además como invitados el representante de ACNUDH Chile, Xavier Mena, el representante de UNICEF, Paolo Mefalopulos, el representante de la OMS, Fernando Leanes, la Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz y el Presidente del INDH, Sergio Micco.

En esa oportunidad, se planteó y acordó el desarrollo de estándares especiales para ciertos grupos especialmente vulnerables, como mujeres y niños, niñas y adolescentes, y la creación de una comisión técnica asesora del Comité, para efectos de prestar apoyo técnico a las instituciones a cargo del uso de la fuerza pública por parte del Estado.

Asimismo, en dicha sesión destacué especialmente la relevancia y el compromiso de este Gobierno con el respeto y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas, señalando expresamente: “[p]ara nuestro Gobierno y para este Presidente el respeto a los derechos humanos es un principio sagrado y fundamental, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Ninguna causa justifica su atropello.”¹²²

En consecuencia, todo lo anteriormente señalado da cuenta del compromiso claro e irrestricto de este Presidente y del Gobierno por la protección y el pleno respeto de los derechos humanos. Asimismo, han quedado de manifiesto todas las medidas y acciones que se han efectuado para prevenir vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la situación que vive el país durante las últimas semanas.

Todas estas acciones, apoyo y coordinación con los organismos, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, no dejan lugar a dudas respecto a la preocupación de este Presidente y del Gobierno con la plena vigencia de los derechos humanos de todas las personas, en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier contexto. No se advierte, por tanto, de qué forma podría configurarse y explicarse un presunto “consentimiento” por parte de este Presidente de la República a que se efectuaran violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, si tenemos en cuenta todas las acciones y medidas, que en definitiva son actos de su administración concretos y en sentido contrario a lo expresado por los acusadores.

4. El Gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para que los órganos competentes del Estado cumplan íntegramente el deber de sancionar a los eventuales responsables de violaciones a los derechos humanos

- a. **Coordinación con el Ministerio Público para la entrega de antecedentes y apertura de sumarios administrativos e investigaciones sumarias en Carabineros de Chile**

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha estado monitoreando de manera constante la actuación de Carabineros de Chile en materia de derechos humanos. Así, con fecha 23 de octubre el Ministro del Interior y Seguridad Pública envió a Carabineros de Chile el oficio N° 33.102, solicitando a dicha institución, remitir cada 24 horas, el detalle individualizado de civiles lesionados o fallecidos, indicando además si ha habido participación o responsabilidad de funcionarios de la

¹²² Acta de la 8° sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos, de fecha 22 de noviembre de 2019. (<https://prensa.presidencia.cl/fotonoticia.aspx?id=134794>)

Institución en cada uno de los casos, e informando si se han abierto procedimientos administrativos y la entrega de los antecedentes correspondientes al Ministerio Público. De esta forma, los antecedentes con los que cuenta Carabineros de Chile han sido remitidos al Ministerio Público, ya sea a solicitud de los Fiscales o de oficio.

A esta fecha, Carabineros de Chile ya ha iniciado 464 Sumarios Administrativos y 322 Investigaciones Sumarias. Los uniformados que están bajo Sumarios Administrativos, no siguen ejerciendo funciones en terreno mientras dure dicha investigación.

Al 10 de noviembre de 2019, se recibieron en el Ministerio Público un total de 2.670 denuncias contra funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, de los cuales son 2.052 contra Carabineros de Chile, 50 contra la Policía de Investigaciones, 183 contra el Ejército, 26 contra la Armada, además de 4 de otras instituciones y 355 casos sin información. De dichas denuncias, 1.679 han sido por apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por funcionario público (artículo 150 D del Código Penal), 774 por abusos contra particulares (artículo 255 del Código Penal), 121 por otros delitos comunes, 44 por torturas cometidas por funcionario público (artículo 150 A, inciso primero, del Código Penal) y 52 casos sin información.¹²³

Al 12 de noviembre de 2019, el Ministerio Público ha formalizado la investigación respecto de 11 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y hay también a esa fecha 12 solicitudes de audiencia de formalización.

b. El Estado de Derecho ha operado en plenitud

Desde el primer día de la crisis, y en adelante, en Chile ha operado en plenitud un Estado de Derecho. Todas las actuaciones del Ejecutivo se han encontrado, en todo momento, sujetas a la fiscalización de la Cámara de Diputados. Es muy relevante enfatizar que la declaración del Estado de Emergencia en nada afectó nuestro Estado de Derecho, todas las instituciones siguieron funcionando y ejerciendo sus plenas atribuciones con normalidad. Así, los detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público y éste, a su vez, ha determinado a cuáles de esas personas debía controlarse su detención ante los Tribunales de Justicia, quienes decretaron o no las medidas cautelares que consideraron correspondían, sin intervención alguna del Gobierno ni de este Presidente.

El Congreso Nacional continuó sesionando en sus sedes y con los horarios que determinaron sus Cámaras soberanamente.

La Contraloría General de la República, la Defensoría Penal Pública y el INDH continuaron funcionando autónomamente, así como las demás instituciones públicas y privadas.

Los Tribunales de Justicia han seguido desarrollando su trabajo con absoluta normalidad. En ningún momento se ha visto amenazada o vulnerada la independencia judicial y el principio democrático básico y fundamental de la separación de poderes.

¹²³ Cifras Violencia Institucional, 18 de octubre al 10 de noviembre de 2019, Ministerio Público de Chile.

Las instituciones nacionales relacionadas a derechos humanos autónomas, como el INDH y la Defensoría de la Niñez, han realizado su trabajo con plena autonomía, pudiendo monitorear las situaciones y actividades que han estimado pertinentes, recibiendo denuncias e interponiendo querellas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Una prueba adicional de lo anterior, es que el Consejo de Defensa del Estado también ha operado autónomamente, contribuyendo a esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades de quienes hubieran cometido delitos. Concretamente, el 2 de diciembre del presente año, dos querellas por torturas en contra de funcionarios de Carabineros de Chile fueron presentadas por esta institución.

Así lo ha señalado también la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, cuando expresó el 21 de noviembre que “[n]o es mi deber definir las responsabilidades, porque Chile es un país donde rige el Estado de Derecho y muchos de estos casos están en la fiscalía y el sistema judicial va a definir”¹²⁴. En el mismo sentido, el Vicepresidente de la Asociación de Magistrados recalcó que “el Estado de Derecho está funcionando y, hace dos días, hubo reconocimiento por uno de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el rol importante que estaban cumpliendo los jueces de garantía en Chile.”¹²⁵

Finalmente, se modificó el Anexo 1 de la Orden General N° 2.365. En virtud de dicha modificación, se eliminó el uso de perdigones para el control de manifestaciones.

5. El Gobierno ha instado por el establecimiento de la verdad de los hechos en materia de derechos humanos

a. El Gobierno ha adoptado todas las medidas conducentes a esclarecer los hechos

Desde un inicio, instruí que toda la información relacionada con eventos graves, detenciones, lesionados y fallecidos, estuviera disponible públicamente a través de la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos¹²⁶. En ella se encuentra habilitado un *banner*, denominado “Información sobre la situación del país desde el 19 de octubre”, en el cual se puede encontrar información compilada por diversas instituciones del Estado (Carabineros de Chile, Servicio Médico Legal y la Defensoría Penal Pública, además de las Fuerzas Armadas, respecto de los días en que estuvo vigente el Estado de Emergencia), sobre la situación del país desde el 19 de octubre.

Adicionalmente, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de prevenir vulneraciones de derechos, adoptó una serie de medidas con el fin de facilitar la cobertura periodística de lo ocurrido durante el Estado de Emergencia, de manera de

¹²⁴ Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/21/968002/Bachelet-Carabineros-crisis-social-Chile.html>

¹²⁵ Disponible en: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/gobierno-y-oposicion-buscan-acuerdos-a-un-mes-del-inicio-de-la-crisis/2019-11-13/103711.html>

¹²⁶ Disponible en: <http://ddhh.minjusticia.gob.cl/informacion-sobre-la-situacion-del-pais-desde-el-19-de-octubre>

garantizar la transparencia, libertad de prensa y de expresión. Como ya se expresó, se entregaron salvoconductos que permitieron el ejercicio de la libertad de prensa y la transparencia del actuar de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

Tan cierto es lo anterior, que es un hecho que los canales de televisión abierta transmitieron en directo desde las calles del país, en vivo y las 24 horas del día, el despliegue y acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, en todo cuanto no comprometiera el éxito de sus operaciones.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha hecho uso de todas sus atribuciones legales para esclarecer con celeridad los hechos y responsabilidades en relación a las denuncias y querellas realizadas.

Así, con fecha 23 de octubre, dicho Ministerio ofició al General Director de Carabineros de Chile y al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando enviar antecedentes relativos a funcionarios y civiles fallecidos o lesionados o víctimas de cualquier tipo de afectación a su integridad física. Adicionalmente, se les pidió, en primer lugar, informar los procedimientos administrativos y/o disciplinarios puestos en marcha y, segundo, si los antecedentes de cada caso habían sido puestos a disposición del Ministerio Público para efectos de dar curso a las investigaciones correspondientes.¹²⁷

En la misma línea, el mismo día 23, se ofició a Carabineros de Chile solicitando toda la información disponible en relación a los hechos y acciones que devinieron en el fallecimiento de Alex Nuñez Sandoval, caso que había sido puesto en mi conocimiento por el director del INDH, don Sergio Micco, en reunión sostenida en el Palacio de La Moneda, ese mismo día, oportunidad en que el Ministro del Interior y Seguridad Pública de la época le expresó la total colaboración del Gobierno a la labor que realizan como organismo autónomo del Estado. Además, en caso de que los antecedentes vincularan el deceso de Alex Nuñez Sandoval con algún miembro de Carabineros, se solicitó toda información sobre procedimientos administrativos y/o disciplinarios puestos en marcha, así como el estado de avance de los mismos.¹²⁸

De forma similar, los días 25 y 26 de octubre, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública volvió a oficiar al General Director de Carabineros de Chile solicitándole enviar todos los antecedentes relativos a los casos de Maicol Francisco Ignacio Nuñez Saavedra, de Gabriel Calderón Gutiérrez, a los hechos ocurridos en la comuna de Valparaíso, al caso de César Mallea González, de Alejandro Eugenio Torres Guerrero y de Jeremy Rigoberto Lira Fajardo. Nuevamente, se pidió además información respecto a los procedimientos administrativos y/o disciplinarios puestos en marcha, el estado de avance de estos y si respecto de ellos se realizó la comunicación correspondiente al Ministerio Público.¹²⁹

b. El Gobierno ha adoptado medidas para casos en que personas han sufrido lesiones o han sido víctimas de violencia

¹²⁷ Oficios N°s 33.100, 33.101, 33.102 y 33.103, todos de 23 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

¹²⁸ Oficio N° 33.104, 23 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

¹²⁹ Oficios N°s 33.237 y 33.238, de 25 y 26 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, creó el Programa Integral de Recuperación Ocular, el cual contempla recursos específicos para brindar atención médica integral a aquellas personas víctimas de lesiones oculares totales o parciales en el contexto de las manifestaciones. Este Programa busca recuperar al máximo las capacidades funcionales de las personas afectadas. Todas las víctimas tendrán asegurada por el Estado, en forma gratuita, la atención médica, estética, apoyo social y psicológico en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital San Salvador. Para estos efectos, se conformará un equipo multidisciplinario integrado por oftalmólogos, cirujanos, psicólogos y terapeutas ocupacionales.

Por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se conformó un Equipo Especial de Profesionales, que trabaja en una red de acompañamiento a mujeres que hayan denunciado violencia sexual, que asegure el acceso a la justicia y a programas de reparación. Este Equipo mantiene plena coordinación con el INDH, la Fiscalía Nacional, la Unidad Nacional de Atención a Víctimas y Testigos de Ministerio Público (URAVIT) y la Defensoría Penal Pública.

Las mujeres que hayan denunciado ser víctimas de violencia sexual y/o física en el contexto de las manifestaciones del mes de octubre de 2019, tendrá derecho a ser atendidas con cargo a los recursos destinados al programa de atención, protección y reparación integral de violencia contra la mujer del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

6. El Gobierno ha adoptado resguardos especiales para la prevención, investigación y sanción de posibles violaciones de derechos humanos en contra de menores de edad

En esta materia, los acusadores aseveran que este Presidente de la República sería responsable de vulneraciones a la Convención de Derechos del Niño, ratificada por Chile el 13 de agosto de 1990; y las obligaciones para con la niñez que se derivan de la CADH, en particular de su artículo 19.¹³⁰

Sin embargo, nuevamente los hechos desmienten lo afirmado por los acusadores. Este Presidente de la República ha ejercido todas sus atribuciones legales para dar seguridad y protección a los niños, niñas y adolescentes. En esa línea pueden mencionarse numerosas acciones adoptadas desde la Subsecretaría de la Niñez.

Así, desde dicha Subsecretaría se ha mantenido una coordinación permanente para el funcionamiento continuo de los actores a nivel local, a través de las Oficinas Locales de la Niñez y el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, “Chile Crece Contigo”; monitoreando desde el nivel central la provisión de servicios de manera constante y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que se atienden en ellos.

Por ello, se puso a disposición de los SEREMIS de Desarrollo Social y Familia, de los Encargados Regionales de Niñez, Coordinadores de las Oficinas Locales de Niñez y de los Encargados Comunales del Subsistema de Protección Integral a la Infancia, “Chile Crece Contigo” las siguientes herramientas:

¹³⁰ Acusación, p. 59.

- § “Decálogo de Emergencias” actualizado¹³¹;
- § Fichas para trabajo con familias actualizadas¹³²;
- § Cuadernillo “Construir esperanza”: para trabajo con niños y niñas en contexto de conflicto social, realizado por ONG’s Metáfora, Travesías y Federica. Contenido validado por nivel central y se cuenta con permiso de autoras para difusión abierta y uso con niños, niñas, familias y equipos que trabajan con ellos¹³³;
- § Fono Infancia: apoyo psicológico gratuito en todo el país y desde cualquier teléfono llamando al 800200818 o en el chat www.fonoinfancia.cl;
- § Salud Responde: orientación en todas las consultas relativas a salud de gestantes, niños y niñas. Cuenta también con psicólogos(as) entrenados para apoyo en emergencias. Disponible las 24 horas del día.
- § Curso online “Apoyo a niños y niñas en situaciones de emergencias”: Está habilitado el curso para todos quienes se inscriban en plataforma “Aprendiendo Juntos” del Ministerio de Desarrollo Social y Familia¹³⁴; y
- § Orientaciones técnicas propuestas por UNICEF para la realización de diálogos sociales con niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, la coordinación permanente con los SEREMIS permitió canalizar las denuncias sobre posibles vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes hacia la Defensoría de la Niñez y a la Superintendencia de Educación.

Por otra parte, también se mantuvo una coordinación permanente con el Servicio Nacional de Menores por la situación de los niños, niñas y adolescentes que abandonan la intervención y con Carabineros de Chile a fin de insistir en el cumplimiento de los protocolos en lo relacionado con niños, niñas y adolescentes.

7. El Gobierno ha adoptado resguardos especiales para la prevención, investigación y sanción de posibles violaciones de derechos humanos en contra de mujeres

Los acusadores sostienen, entre los fundamentos de la Acusación, que este Presidente de la República sería responsable de infracciones a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.¹³⁵ Sin embargo, los hechos nuevamente demuestran lo contrario. El Gobierno ha adoptado todos los resguardos en materia de protección de los derechos de las mujeres, tal como fue informado mediante Oficio Ord. N° 803, de 21 de noviembre de 2019, remitido por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género a la Presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la H. Cámara de Diputados.

Entre las medidas adoptadas, se encuentra, en primer lugar, la coordinación permanente que ha mantenido el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con el

¹³¹ Disponible en: <http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Decálogo-emergencia-2019.png>

¹³² Disponible en: <http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2019/11/fichas-de-emergencia-2019.pdf>

¹³³ Disponible en: https://terapiadejuego.cl/wp-content/uploads/2019/11/Construir_Esperanzas.pdf

¹³⁴ Disponible en: <https://aprendiendojuntos.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/>

¹³⁵ Acusación, p. 59.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, a fin de verificar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos en el resguardo del orden público y en las detenciones, respecto de las mujeres.

En esa línea, con fecha 24 de octubre de 2019, se llevó a cabo una reunión con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, a fin de verificar el cumplimiento de dichas instrucciones; en el mismo sentido, con fecha 28 de octubre el Ministerio del ramo participó, en conjunto con el Ministro del Interior y Seguridad Pública y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en una reunión con el Director del INDH, don Sergio Micco, a fin de poner a disposición de dicha institución el trabajo que ya estaba realizando el Ministerio de la Mujer y la Equidad Género. Posteriormente se realizó una nueva reunión con el Director Nacional del INDH, a fin de revisar el catastro de denunciadas mujeres y establecer lineamientos para la derivación de dichas mujeres a los dispositivos dispuestos por los profesionales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Adicionalmente, en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género se inició un Plan de Contingencia a cargo de la Unidad Nacional de Violencia contra las Mujeres, desarrollado en todas las Direcciones Regionales del Servicio. También en coordinación el Servicio Nacional de la Mujer se instruyó a todos los funcionarios del Ministerio de la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cualquier hecho de violencia contra la mujer de que se tomare conocimiento, al tenor de los Oficios Ord. N° 758 y 759, de 2019.

Por otra parte, con fecha 29 de octubre se respondieron las consultas realizadas por las Integrantes del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Con ocasión de esta respuesta, además, se acogió por parte del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género el apoyo técnico ofrecido por el Comité de Expertas.

En materia de acompañamiento a mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto con el Servicio del ramo, conformaron un equipo de profesionales, a fin de brindarles el acompañamiento necesario. Todo según consta en la Resolución Exenta N° 1.413, de 2019, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entre las funciones de este equipo, se encuentra: garantizar el acceso a la justicia de quienes denuncien haber sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes del Estado; coordinación permanente con el INDH, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el Ministerio de Salud, entre otros; centralizar las denuncias que lleguen a los dispositivos del Servicio o a las oficinas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; realizar derivaciones a los Centros de Violencia Sexual para ingresar a tratamiento reparatorio; y monitoreo de los casos derivados

Luego, con fecha 30 de octubre del presente año, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género realizó una sesión extraordinaria del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el que, además de escuchar a las distintas representantes de las organizaciones del Consejo, se les hizo entrega de información y orientaciones elaboradas por el Ministerio y el Servicio del ramo. Instancia similar se generó con el Consejo de la Sociedad Civil que asesora al Servicio.

En relación a la coordinación con Carabineros de Chile, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género también ha mantenido una coordinación permanente, con un énfasis especial en fiscalizar el cumplimiento de los protocolos y los sumarios abiertos a raíz de

hechos de violencia en contra de las mujeres. Con ese objeto, un equipo de profesionales del Ministerio se reunió con la Coronel señora Karina Soza, de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros de Chile.

En relación a denuncias específicas realizadas durante la vigencia del Estado de Emergencia y en los días posteriores, a raíz de la información levantada por la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, dicho servicio denunció directamente ante la Fiscalía Centro Norte un listado de presuntas desapariciones de mujeres, ocurrida con ocasión del Estado de Emergencia.¹³⁶ Dicha denuncia se encuentra actualmente siendo investigada.

8. La declaración de Estado de Emergencia y los *toques de queda* declarados fueron necesarios para garantizar los derechos de todas las personas

Los Estados de Emergencia fueron decretados con el único objetivo de garantizar a todos los chilenos y chilenas el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, reestablecer el orden público y resguardar la seguridad ciudadana y la paz social. En este sentido, en ningún caso la declaración de los Estados de Emergencia fue una respuesta a las pacíficas y legítimas manifestaciones sociales que se desplegaron a lo largo del país, como pretenden establecer los acusadores, sino que fue una respuesta a los actos de violencia y destrucción que alteraron gravemente el orden público y la seguridad ciudadana.

Habiendo quedado asentado el hecho de que la declaración de Estado de Emergencia era absolutamente necesaria y justificada, en razón de los hechos y antecedentes latamente relatados anteriormente, es también preciso señalar que la declaración de los Estados de Emergencia en las distintas regiones del país, no solamente tenía por objeto resguardar el orden y la seguridad pública, gravemente vulnerada según los hechos relatados, sino que también buscaba esencialmente proteger y garantizar los derechos de todas las personas y su libre ejercicio.

Así, los hechos reseñados, constitutivos de delitos de la mayor gravedad, representaron un riesgo general y grave para la vida, integridad física y psíquica, y seguridad de la población. Estos hechos violentos -ataques incendiarios, desordenes públicos, barricadas y cortes de ruta- afectaron además, la libre circulación de vehículos y personas, vulnerándose con ello la garantía fundamental de libertad de desplazamiento de las personas.

De esta forma, la declaración de Estado de Emergencia era una medida imprescindible para asegurar el derecho a vida de todas las personas, su integridad física y psíquica, y su derecho a vivir en paz. Así lo expresé luego de la declaración de Estado de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo, de la Región Metropolitana, el día sábado 19 de octubre a las 00:13 horas, cuando recalqué que el objetivo de este Estado de Emergencia era ***“asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes, tanto público como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas que se han visto seriamente conculcados por la acción de verdaderos delincuentes [...] que están dispuestos a destruir una institución tan útil y necesaria como***

¹³⁶ Oficio Ord. N° 485, de 2019, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

es el Metro, y que además no respetan los derechos ni las libertades de nuestros compatriotas. En una democracia, un estado de Derecho, como el que con tanto esfuerzo hemos construido todos los chilenos en nuestro país, no debe haber espacio alguno para la violencia ni la delincuencia que hemos conocido en los últimos días en nuestra ciudad”¹³⁷. (énfasis agregado)

Los delitos descritos, lamentablemente, se fueron expandiendo a otras zonas del país, por lo que debí tomar nuevas medidas a fin de proteger a la ciudadanía de la violencia desatada. La ciudadanía vio amenazada su vida, integridad física y psíquica, seguridad, y libertad ambulatoria por incendios, saqueos, desordenes públicos y el bloqueo no autorizado de calles y caminos (barricadas).

El mismo día 19 de octubre, entre las 14:00 y las 22:00, los ataques se repitieron en dos regiones del país. Durante ese mismo día, y por canales de información oficiales, medios de prensa y redes sociales, se recibían mensajes de distintas personas, autoridades y civiles, que pedían con angustia más intervención para poder asegurar la vida, integridad física, seguridad, y libertad ambulatoria de los habitantes de su región o provincia, derechos que estaban siendo gravemente amenazados y vulnerador por la acción de estos grupos violentos.

En ese orden de ideas, la decisión de decretar los estados de excepción constitucional no respondió a un capricho ni a una arbitrariedad ni a un abuso de poder, sino que respondió al imperativo de velar por la seguridad de la población y los derechos fundamentales de todos mis compatriotas. En efecto, como se ha descrito, y como todos pudimos apreciar, la afectación de la seguridad y orden público era tal que existía la absoluta necesidad de contener esa violencia por medio de los mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla, de forma de resguardar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas y dar tranquilidad a la población.

En cada una de estas zonas, los respectivos Jefes de la Defensa Nacional, ejercieron en plenitud las atribuciones que les confieren la Constitución y la LOC de Estados de Excepción. En ejercicio de dichas potestades, instruyeron, el llamado *toque de queda*, como medida necesaria y legítima de resguardo, exclusivamente cuando el nivel de violencia así lo requiriera, atendiendo a la severidad de los desmanes y ataques que se iban produciendo en cada jornada. En cuanto fue posible, dichas instrucciones se levantaron, y el 26 de octubre, un día antes de anunciar el fin de la declaración de Estado de Emergencia, en ninguna localidad del país se encontraba vigente esta medida.

El mismo 26 de octubre, antes de que se cumpliera el plazo de 15 días de vigencia que establece la Constitución, anuncié el fin del Estado de Emergencia en todo el país, a partir de las 00:00 horas del lunes 28 de octubre. En esa oportunidad señalé:

“Las últimas semanas, el país y los chilenos hemos vivido tiempos de brutal y destructiva violencia, pero también hemos escuchado el profundo mensaje de la ciudadanía, de las chilenas y chilenos pidiendo y exigiendo una sociedad más justa y más solidaria. Nuestro Gobierno ha enfrentado esta situación cumpliendo con su deber [...] y aplicando todos los

¹³⁷ Disponible en: <https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-decreta-estado-de-emergencia-en-las-provincias-de-santiago-y-chacabuco-y-en-las-comunas-de-san-bernardo-y-puente-alto-para-normalizar-el-orden-publico/>

*instrumentos democráticos, legítimos y necesarios que la Constitución y la ley nos otorga para poder restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y asegurarle a todos los chilenos el ejercicio de su libertad y de sus derechos. Nuestro Gobierno también se ha hecho cargo, con voluntad y con urgencia, de atender el profundo mensaje que hemos escuchado de todos los chilenos. Y, por eso, hemos propuesto al Congreso una profunda y exigente agenda social, que recoge muchos de los planteamientos sentidos y más significativos de nuestros compatriotas.”*¹³⁸ (énfasis agregado)

VII. NO ES EFECTIVO QUE EN CHILE SE HAYAN PRODUCIDO VIOLACIONES SISTEMÁTICAS Y GENERALIZADAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ambos Capítulos acusatorios se cimientan sobre unos mismos hechos, y así, ambos parten de una premisa equivocada: que existiría una violación tanto sistemática como generalizada de los derechos humanos, en la que habría consentido. Esto se aprecia de la sola lectura de los títulos de cada uno:

*“Capítulo Primero: el Presidente de la República infringió abiertamente la constitución y las leyes al consentir en que las fuerzas armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada”*¹³⁹

*“Capítulo Segundo: el Presidente de la República comprometió gravemente el honor de la nación por consentir en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos”*¹⁴⁰

Los acusadores afirman que existiría una vulneración sistemática y generalizada de los derechos humanos, de forma copulativa. Luego, me atribuyen un supuesto “consentimiento” respecto de actuaciones cometidas por funcionarios de Carabineros de Chile y, de ese modo, me imputan responsabilidad en toda esta cadena de sucesos.

Sin perjuicio de que no es posible realizar tal juicio de imputabilidad –según se ha abordado en los capítulos precedentes- corresponde desvirtuar también el primer supuesto del planteamiento de los acusadores, este es, la existencia de vulneraciones a los derechos humanos que revestirían el carácter tanto de sistemáticas como de generalizadas.

Al caracterizar los conceptos en cuestión –“sistemáticas” y “generalizadas”-, los acusadores no acuden explícitamente a los conceptos normativos de nuestra ley chilena. Mencionan que *“la progresión de hechos permite demostrar que el Jefe de Estado*

¹³⁸ Disponible en: <https://eliberero.cl/alerta/presidente-pinera-anuncia-fin-de-estado-de-excepcion-y-cambio-de-gabinete/>

¹³⁹ Acusación, p. 7.

¹⁴⁰ Acusación, p. 82.

consintió en la aplicación sistemática de actos de represión hacia las personas que protestaban, toda vez que no se trata de hechos aislados que puedan ser calificados como “abusos”.¹⁴¹. Agregan que “[l]os antecedentes expuestos muestran una alta cantidad de víctimas de la violencia de los agentes del Estado y la repetición de métodos y patrones que, inequívocamente, han tenido por objeto intimidar a la población, vulnerando y amenazando el derecho a la vida, la integridad física y psíquica y restringiendo indebidamente, además, el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión”¹⁴², concluyendo de ellos que estaríamos ante violaciones sistemáticas y generalizadas.

Aunque los acusadores no explicitan cuáles son los conceptos normativos en juego, de sus afirmaciones se logra advertir que se remiten a los denominados “crímenes de lesa humanidad”.

No obstante, como explicaré a continuación, no se configuran los criterios jurídicos para dar por establecida la existencia de crímenes de lesa humanidad ni en los términos de la Ley N° 20.357 ni en los términos del derecho internacional-, y en cualquier caso tal determinación corresponde a los órganos competentes.

1. Estándar en el derecho internacional y nacional en la materia

Para los efectos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante, “**Estatuto de Roma**”), se entiende por “crimen de lesa humanidad” *“un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.”*¹⁴³

Luego, el mismo artículo 7 del Estatuto de Roma señala a modo de ejemplo algunos actos que podrían cometerse como parte de un ataque, como son el asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, u otros; desaparición forzada de personas; y el crimen de apartheid.

Seguidamente, el Estatuto de Roma señala que “*Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, **de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política***”.¹⁴⁴ (énfasis agregado).

De este modo, el derecho internacional no concibe el concepto de “crimen de lesa humanidad” sin que exista una política de Estado en orden al ataque contra la población. Se

¹⁴¹ Acusación, p. 81.

¹⁴² Acusación, p. 81.

¹⁴³ Estatuto de Roma, artículo 7, párrafo 1.

¹⁴⁴ Estatuto de Roma, artículo 7, párrafo 2, letra a).

refiere a una línea de conducta que implique la comisión de actos y que el Estado promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil.

La aplicación del Estatuto de Roma permite hacer efectivas las responsabilidades penales individuales de quienes han dirigido o cometido este tipo de infracciones ante la Corte Penal Internacional.

En cualquier caso, conviene referirse brevemente al elemento “sistemático”, para descartar por completo su configuración en el presente caso. La Corte Penal Internacional ha sostenido en los casos *Katanga y Ngudjolo* y *Fiscal v. Gbagbo* que este se refiere a “*la naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabilidad de su ocurrencia aleatoria*”.¹⁴⁵ (traducción propia)

En otras palabras, un contexto de violación sistemática de derechos humanos exige que la infracción de derechos responda a una **política de Estado** dirigida a la obtención de aquel resultado. Se expresa a través de patrones de crímenes, que deben ser (i) cuidadosamente organizados, (ii) seguir un patrón regular de conducta, (iii) sobre la base de una política común, (iv) involucrando recursos públicos o privados sustanciales.¹⁴⁶

En forma similar, el Tribunal para la Ex Yugoslavia, ha determinado que se requiere (i) un objetivo político o un plan, (ii) la comisión continua y masiva de crímenes que están vinculados, (iii) el uso significativo de recursos públicos o privados, (iv) la implicancia de autoridades políticas o militares de alto nivel.¹⁴⁷

También la Corte IDH ha desarrollado la idea de violaciones “sistemáticas” de derechos humanos. En la misma línea que la Corte Penal Internacional, la Corte IDH concluye que el carácter sistémico de las infracciones de derechos humanos aparece asociado a una cuidadosa planificación de las mismas por parte de la autoridad estatal.

Por ejemplo, en relación al conflicto armado interno acaecido en Guatemala entre 1960 y 1996, la Corte IDH sostuvo que “*la gravedad de los hechos del presente caso, los cuales se enmarcan dentro de una práctica de Estado sistemática de desapariciones forzadas [...] pues “la existencia de documentos oficiales como el Diario Militar y los registros de la realización de “Operativos de Limpieza y Patrullaje”, evidencia la organización y planificación con la que se realizaban las desapariciones forzadas, así como la coordinación existente entre las autoridades políticas y/o militares de alto nivel*”.¹⁴⁸

Del mismo modo, la Corte IDH en el caso de *La [Masacre de] Cantuta v. Perú*, sostuvo que “*la particular gravedad de los hechos se revela en la existencia de toda una estructura de poder organizado y de procedimientos codificados mediante los cuales*

¹⁴⁵ *Fiscal v. Katanga y Ngudjolo*, septiembre de 2008, párr. 394. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_05172.PDF; *Fiscal v. Gbagbo*, 12 de junio de 2014, párr. 223. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04777.PDF

¹⁴⁶ Situación de la República de Kenya, Caso No. ICC-01/09, Decisión en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma sobre la Autorización para Investigar en la Situación de la República de Kenya, 31 de marzo de 2010, Sala de Cuestiones Preliminares II, Corte Penal Internacional.

¹⁴⁷ *Fiscal v. Kordic and Cerkez*, diciembre de 2004, párr. 94; *Fiscal v. Blagojevic and Jokic*, enero de 2005, párr. 545

¹⁴⁸ *Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala*, noviembre de 2012, párr. 215

operaba la **práctica de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas**. Estos no constituían hechos aislados o esporádicos, sino que llegaron a configurar un patrón de conducta durante la época en que ocurrieron los hechos, como método de eliminación de miembros o sospechosos de pertenecer a organizaciones subversivas, empleada en forma sistemática y generalizada por agentes estatales.”¹⁴⁹ (énfasis agregado)

Asimismo, en *Matanza de Maripipán vs. Colombia*, la Corte IDH consideró que la masacre de campesinos cometida por fuerzas paramilitares en el contexto de este caso respondía a “un acto minuciosamente planeado (...), ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército.”¹⁵⁰

A similar conclusión llegó la Corte IDH en el caso *Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador*, pues “los agentes estatales actuaron de forma deliberada, al planear y ejecutar a través de las estructuras e instalaciones del Estado, la perpetración de siete masacres sucesivas de adultos mayores, hombres, mujeres, niños y niñas indefensos, en el marco de un plan sistemático de represión a que fueron sometidos determinados sectores de la población considerados como colaboración o pertenencia a la guerrilla, o de alguna manera contrarios u opositores al gobierno”.¹⁵¹

Por último, la Corte IDH resolvió en noviembre de 2012 en el caso *Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala* que las desapariciones forzadas de 26 personas no constituían “hechos aislados, sino que forma[ban] parte de un plan sistemático estatal de desapariciones forzadas contra miembros de la población civil que fueron considerados “enemigos internos”.”¹⁵²

Por otra parte, para la ley chilena, el artículo 2° de la Ley N° 20.357 refiere que un “ataque sistemático” contra los derechos de las personas consiste en “una serie de actos sucesivos que se extienden por un cierto período de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas”.

No obstante lo anterior, para que la conducta sea típica bajo el derecho chileno, y se configure el tipo penal de crimen de lesa humanidad, debe cumplirse el elemento que establece el N° 2 del artículo 1 de la Ley N° 20.357, esto es, que el ataque –sea generalizado o sistemático- “responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.

De este modo, los crímenes de lesa humanidad no se definen por si son sistemáticos o generalizados, sino porque deben responder a una política del Estado o bajo la dirección de un mando; política o plan que sea además organizada y deliberada, con conocimiento del ataque, y con medios para favorecer su impunidad. Nada de lo anterior se condice con mi actuar y el actuar de las diversas autoridades en las últimas semanas.

¹⁴⁹ Caso *La Cantuta v. Perú*, párr. 82.

¹⁵⁰ Caso de la *Masacre de Mapiripán v. Colombia*, párr. 96.43

¹⁵¹ Caso de las *Masacres de El Mozote y otros lugares aledaños v. El Salvador*, párr. 155.

¹⁵² Caso *Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) v. Guatemala*, párr. 214

Es posible concluir lo anterior tanto por la legislación nacional (artículo 1 N° 2 de la Ley N° 20.357), como por el tratamiento internacional a esta materia, toda vez que el Estatuto de Roma exige, para conceptualizar un “*ataque contra la población civil*”, que exista una política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

En conclusión, según los criterios del derecho internacional y nuestra legislación nacional, la configuración de crímenes de lesa humanidad está determinada por la presencia de una cierta planificación logística de las mismas por parte de la autoridad estatal. Siendo necesario que aquel responda a cierto nivel de organización en el ataque y que sea improbable que sea fortuito.¹⁵³

Sin embargo, tal como se verá a continuación, un examen profundo de los hechos acontecidos en el país no permite dar por establecidas las graves categorías que se han reseñado.

2. Los hechos ocurridos en Chile con posterioridad al 18 de octubre no cumplen con tales estándares, y así lo han reconocido las principales autoridades en la materia

Revisados los estándares internacionales y las exigencias de la legislación interna, resulta evidente el contraste entre los altísimos y graves estándares que éstas imponen, y la generalidad y liviandad con la que los acusadores hablan de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos.

Ciertamente, ninguno de los lamentables hechos que ha ocurrido a contar del 18 de octubre de 2019 obedece a un acto “*minuciosamente planeado*” que haya sido “*ejecutado con previsiones logísticas*” ni con un objetivo de vulnerar derechos humanos de chilenos y chilenas “*de forma deliberada*”. Ninguna de aquellas categorías se aviene con la realidad.

De los estatutos revisados, sea que se recurra a las categorías del derecho internacional o a la tipificación nacional que realiza la Ley N° 20.357, para que los lamentables hechos sean imputables a este Presidente de la República en cuanto crímenes, deben insertarse dentro de un contexto en que tales ataques sean organizados, dirigidos o tolerados por el poder político.

La existencia de una política orientada a tales fines cobra relevancia en este punto. Es decir, no sólo debe acreditarse la existencia de actos individuales de ciertos agentes del Estado orientados a los fines señalados, sino que además dichos actos individuales deben estar comprendidos dentro de una política de Estado, cuestión que se ha descartado terminantemente.

El ex director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, señor Ricardo Brodsky, ha manifestado en relación a la acción del Gobierno en materia de derechos humanos:

¹⁵³ Pablo Beltrán, “*Requisitos comunes a todo crimen de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional y sus primeros 10 años: un enfoque práctico*,” Santiago, 2013, pág. 50; *Fiscalía vs. Katanga y Ngudjolo Chui*, septiembre de 2008, párr. 394; *Fiscalía vs. Bemba*, junio de 2009, párr. 83.

*“[C]reo que el Gobierno ha sido proactivo en acoger las denuncias y facilitar el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y, bueno, en pedir a la Alta Comisionada de DD.HH. de Naciones Unidas (Michelle Bachelet) que instale una misión de observación acá y lo mismo a Human Right Watch. Hay una actitud activa. Lo peor cuando se violan los derechos humanos es que las autoridades las niegan, pero en este caso no ha ocurrido y eso es positivo.”*¹⁵⁴

El propio director del INDH, Sergio Micco, aclaró que no existe, en los hechos, una vulneración sistémica de derechos humanos:

*“Conceptualmente, la violación sistemática de los derechos humanos supone una concertación entre distintas instituciones, donde se crean leyes o se hacen políticas públicas que directamente, intencionadamente, tienen el objetivo de violar los derechos humanos. [...] Si tú me preguntas a mí, como director del Instituto yo te diría que no [existe violación sistemática de los derechos humanos]. [...] Quien diga acá se coordinaron Carabineros, el Ejército, el Ministro del Interior, la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia, para violar sistemáticamente los derechos humanos... eso es una afirmación gravísima, que se tiene que probar”*¹⁵⁵.

Luego, Sergio Micco precisó su planteamiento señalando que no estaban en condiciones de afirmar que existe tal sistematicidad, aunque tampoco se podía descartar y, en todo caso, enfatizó que lo que corresponde es que cada caso se resuelva por la vía institucional respectiva, esta es, los tribunales de justicia.¹⁵⁶

Los dichos del director del INDH previenen que, para aventurar la calificación de crímenes de lesa humanidad se debe atender no sólo a un componente cuantitativo, como son los definidos en el artículo 2 de la Ley N° 20.357, sino también a uno cualitativo, como lo es el definido en el numeral 2° del artículo 1 del mismo cuerpo legal. Esto es, que el ataque responda a una política del Estado o de sus agentes o de grupos armados u organizados, bajo la dirección de un mando responsable.

Lo anterior es de la máxima relevancia. A este respecto, los acusadores han citado la Ley N° 20.357 sólo en aquella parte que conviene a sus intereses (su artículo 2) utilizando únicamente los conceptos cuantitativos (“sistemáticos” o “generalizados” copulativamente) prescindiendo y haciendo caso omiso de los estándares que impone el artículo 1 del mismo cuerpo legal. Ello es relevante porque el artículo 1 de dicha ley exige concurren ambos requisitos para la conformación de la conducta típica.

También reconocidos políticos han descartado la tesis de los acusadores. Así, por ejemplo, se ha pronunciado Jorge Burgos, ex ministro de Defensa e Interior y Seguridad Pública:

¹⁵⁴ Diario El Mercurio, 31 de octubre de 2019.

¹⁵⁵

Disponible

en:

https://www.youtube.com/watch?v=D7WUHceZsRc&feature=share&fbclid=IwAR3IHxp8iudeSVqZ-DuindmlXErYTze-coea_RpOBkKUQKHe1eRxR8PjTGc

¹⁵⁶ Disponible en: <https://www.elmostrador.cl/dia/2019/11/09/indh-violaciones-a-derechos-humanos-son-graves-y-reiteradas/>

*“No comparto para nada la crítica de violación sistemática de derechos. Las denuncias específicas de acción delictiva deben ser investigadas con rigor, como está ocurriendo”.*¹⁵⁷

En la misma línea, se pronunció el ex Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, quien, en sus dichos, descarta concurra tanto el elemento de sistematicidad como el de generalidad:

*“No. A mí no me parece que sea sistemático. Han sido situaciones dada la magnitud de las movilizaciones” (...) “Hasta aquí, fíjese usted, el número de muertos, bueno, la gran mayoría fueron los que fallecieron en los incendios dentro del metro. Y en consecuencia, no está claro si fueron personas que de casualidad no pudieron arrancar o estaban colocando los elementos para producir los incendios”.*¹⁵⁸

Por otra parte, habiendo concurrido a nuestro país organizaciones internacionales de derechos humanos, estas mismas han descartado la posibilidad de calificar los hechos a los que refiere la Acusación como violaciones sistemáticas.

Así, por ejemplo, el informe de *Human Rights Watch*, publicado el 26 de noviembre de 2019, no se pronunció respecto a aquellas categorías. Por ende, consultado sobre aquél punto en entrevistas, el director para las Américas de *Human Rights Watch*, José Miguel Vivanco, explicó que no basta con la definición vulgarmente utilizada para conferirle ese carácter a los abusos que registraron, sino que se requeriría una instrucción que esté originada en las autoridades máximas, de lo cual no existe antecedente alguno:

*"Para que una conducta o unos hechos puedan ser caracterizados como 'sistemáticos', no solo es suficiente y necesaria la reiteración de la conducta —en distintos escenarios, por distintos o los mismos agentes, en distintas circunstancias, durante un periodo específico— sino también hace falta que exista evidencia de que esa conducta reiterada —que puede corresponder a prácticas de abuso como las hemos descrito acá— obedece, son el fruto o se explican porque existe una especie de orden", señaló. "Esa es la terminología que usted encuentra en derecho penal internacional [...] Estamos hablando de un ataque, la expresión es 'ataque', 'campaña', 'orden' o una instrucción que está originada en las autoridades máximas que están dirigiendo. No tenemos esos antecedentes y responsablemente no podemos hacer ese tipo de inferencias".*¹⁵⁹

La declaración de don José Miguel Vivanco da cuenta que su noción de “sistematicidad” incorpora el elemento recogido en nuestra legislación nacional en el artículo 1 N° 2 de la Ley N° 20.357, y establece que no es posible afirmar su concurrencia.

¹⁵⁷ Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/jorge-burgos-exministro-del-interior-defensa-no-comparto-nada-la-critica-violacion-sistemica-derechos/885468/>

¹⁵⁸ Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/ricardo-lagos-sobre-violacion-de-ddhh-durante-crisis-social/922120/>

¹⁵⁹ Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/26/968453/Vivanco-violaciones-DDHH-sistematicas-inferir.html?fbclid=IwAR1IAbe78iIaZdRoFO5K6WnO61X9U6eOEhAEuQIFp1qcHvJdggdXMPnRNU>

Posteriormente, con fecha 25 de noviembre de 2019, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, señora Ana Piquer, expuso ante la Comisión que conoce de la presente Acusación. En aquella instancia, aclaró respecto a su informe lo siguiente:

*“Nada de esto se puede interpretar en el sentido de que opinamos de que nunca jamás Carabineros puede hacer uso de la fuerza, porque eso, por supuesto, la fuerza policial puede hacerlo cuando es necesario y de manera proporcional. Ni tampoco puede interpretarse como un ataque institucional a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros, no estamos diciendo que necesariamente todos los Carabineros o los militares actúen de una manera inadecuada. [...] **Hasta el momento no hemos afirmado que son sistemáticos, principalmente por un asunto de que eso requiere un mayor análisis de evidencia que es el trabajo que estamos haciendo**”.*¹⁶⁰ (énfasis agregado)

En definitiva, no puede sostenerse, como lo plantean los acusadores, que exista un patrón de comportamiento, que sean constitutivo de crímenes de lesa humanidad. Como se ha expresado latamente, se me imputa responsabilidad por hechos atribuidos a terceros, en los cuales no he tenido ninguna participación directa y además, la imputación es falsa, ya que en el ejercicio de mi cargo jamás he instruido ni tolerado la afectación ni vulneración a derechos humanos de mis compatriotas.

Todo lo contrario, y como reafirman mis reiteradas intervenciones públicas, siempre señalé a las Policías que su accionar debía realizar con apego a la ley y los protocolos de uso de la fuerza, y que su accionar debía realizarse con estricto apego y respecto a los derechos humanos.

Los acusadores no podrán mencionar un solo caso en que mi intervención haya derivado en la actuación concreta de un policía que involucre la detención o lesión de alguna persona en el transcurso de una de las numerosas marchas autorizadas, y otras manifestaciones y concentraciones. Ello es así por cuanto jamás intervine personalmente para ordenar un hecho de esa naturaleza ni jamás lo haría.

Así, la falta de rigor en el relato de los hechos se ve agravada con la liviandad de las conclusiones que exponen los acusadores. Ciertamente, no es posible predicar de las lesiones sufridas por civiles una política de Estado dirigida con el preciso objeto de vulnerar derechos humanos.

VIII. EN CONSECUENCIA, NO ES EFECTIVO QUE SE HAYA PRODUCIDO UNA INFRACCIÓN ABIERTA A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES POR ACTOS DE MI ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a lo explicado, entonces, no es posible sostener que este Presidente de la República haya infringido la Constitución y las leyes, mucho menos que lo haya hecho en forma “abierta”, como exige la Constitución para proceder a acusarlo constitucionalmente.

¹⁶⁰ Intervención de la señora Ana Piquer, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, lunes 25 de noviembre de 2019. Disponible en: <http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=46#>

En primer término, la Acusación no cumple con imputar actos que satisfagan la causal contemplada en el artículo 52 N° 2, letra a) de la CPR, consistente en infringir abiertamente la Constitución y las leyes. Esto es así porque la Acusación imputa fundamentalmente omisiones, con la sola excepción de la declaración del Estado de Emergencia y de la suspensión de la Cumbre de Líderes de las Economías APEC y de la suspensión en territorio chileno de la COP 25; en circunstancias que la Constitución exige expresamente que se trate de “*actos de su administración*” que, a mayor abundamiento, supongan una infracción activa de la Constitución y las leyes, como se explicó.

Seguidamente, también se incumplen los requisitos de la causal invocada al atribuirse a este Presidente de la República hechos de terceros, en los que no me cabe responsabilidad ni material ni normativa. Por último, como también se explicó, la causal se sustenta en omisiones que tampoco pueden ser calificadas como “*de administración*”, sino que corresponden a actos de gobierno.

Por el contrario, desplegué todos los medios que se encontraban dentro de la esfera de mis atribuciones para cumplir cabalmente con todas las obligaciones internacionales y nacionales en materia de protección de los derechos humanos.

Al respecto, corresponde insistir en que los acusadores no logran ni especificar ni acreditar cómo se habría producido el supuesto “consentimiento” en relación a las vulneraciones de derechos que se me imputa. En cualquier caso, los antecedentes aportados en este Capítulo, permiten concluir exactamente lo contrario. Este Presidente de la República no solo no consintió en dichas vulneraciones, sino que desplegó todos los medios de que disponía a su alcance para prevenirlas y, en aquellos casos lamentables en que tuvieron lugar, para poner a disposición de las autoridades competentes toda la información necesaria para investigarlas, determinar sus responsables y que se determinen las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.

Este compromiso fue expresado en palabras y obras, conocidas y comprobables, de forma que pretender desconocerlo carece de la objetividad mínima para efectuar estas imputaciones y por lo demás, no se ajusta a la realidad.

B. CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ACUSACIÓN

I. IMPUTACIONES QUE FORMULA EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ACUSACIÓN

El Capítulo Segundo de la Acusación me imputa “*consentir en la violación sistemática y generalizada de Derechos Humanos*”¹⁶¹ hechos cuya eventual configuración habrían tenido como resultado un compromiso grave del honor de la Nación. Aunque los acusadores reconocen que el artículo 52 número 2 letra a) de la CPR “*dispone que el Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor...*”, no se refieren a los actos de administración sobre los cuales se funda esta imputación.

El consentimiento en que se basan, según se desprende del capítulo acusatorio en comento, correspondería a una omisión por parte de este Presidente, quien habría permitido que ciertos hechos ocurrieran, sin imputárseme una acción en concreto.

Dado lo anterior, este Capítulo explicará en primer lugar el motivo por el cual la causal en que se sustentan las imputaciones alegadas no se configura, principalmente porque para ello se requiere de una actuación formal respecto de la cual pueda alegarse haberse comprometido gravemente el honor de la Nación, y no por tanto una mera omisión. Además, dicha actuación formal debe ser imputable a mi persona y su contenido debe ser un acto de administración y no de gobierno (II).

Seguidamente desvirtuaré uno por uno los actos de terceros (organismos internacionales, parlamentarios extranjeros, entre otros) en que los acusadores sustentan la causal (III), especialmente que la cancelación de cumbres internacionales como la APEC y la COP 25 no han tenido efecto negativo en el honor de la Nación (IV). Más aún, mediante publicaciones en diversos medios, expondré cómo la comunidad internacional no sólo ha brindado su apoyo a este Gobierno, sino que además ha reconocido que la actuación de éste ha facilitado la investigación de los graves hechos denunciados (V y VI), actuando este Gobierno con una total apertura y transparencia al respecto. Finalmente, estableceré cómo, si este Presidente no hubiese actuado de la forma en que lo hizo, podrían haber ocurrido situaciones más graves que las ocurridas (VII)

II. SENTIDO Y ALCANCE DE LA CAUSAL INVOCADA POR LA ACUSACIÓN

El artículo 52 N° 2, literal a) de la Constitución establece que se podrá formular una acusación constitucional en contra del Presidente de la República por “*actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes.*”, así, el Segundo Capítulo Acusatorio, imputa a este Presidente de la República el eventualmente haber comprometido gravemente el honor de la Nación.

¹⁶¹ Acusación, p. 88.

Como se puede apreciar, la causal que se invoca a efectos de acusar al Presidente de la República en este Capítulo, se sustenta en los mismos hechos que aquella esgrimida en el Capítulo Primero de la Acusación. Sin embargo, el resultado que se le otorga a esos hechos es distinto, en este caso los “actos de su administración” deben haber comprometido gravemente el honor de la Nación, independiente de si se infringieron abiertamente la Constitución o las leyes.

1. Sentido y alcance de la expresión “haber comprometido gravemente el honor de la Nación”

Para el adecuado análisis de esta acusación, es menester determinar el sentido y alcance de la causal invocada, para lo cual, en primer término, es necesario determinar qué se entiende por “honor de la Nación”, para luego determinar qué significa “comprometerlo gravemente”.

Humberto Nogueira analiza cada palabra de la causal “comprometido gravemente el honor” en los siguientes términos:

“A. Verbo comprometer: Corresponde a poner en riesgo, exponerle en una acción aventurada. Basta por tanto que se estime creado el peligro en virtud del acto.

B. Calificativo de la acción, gravemente: Equivale a compromiso grande, de mucha importancia. Debe haber por tanto un criterio de proporcionalidad Lógica respecto de la intensidad del compromiso en relación a la pérdida del bien jurídico protegido.

C. Honor: es la ‘La gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones’

D. Seguridad, es decir, libre de peligro, daño o riesgo, está firme, sin riesgo de desmoronarse o caerse.

*El honor y seguridad nacionales son el prestigio, buena reputación de la comunidad nacional, el legado recibido de las generaciones anteriores, el desarrollo de las actuales potencialidades y el robustecimiento con las acciones hacia el futuro o de los bienes que se poseen.”.*¹⁶²

a. Honor de la Nación

El concepto de Honor de la Nación, se trata sin dudas de un concepto jurídico indeterminado, que la doctrina ha tratado de dotar de contenido, sin que sea claro su alcance.

La RAE ha definido honor como “Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea.”.

Si se aplica esta definición a la Nación, el honor de ésta correspondería a la buena reputación de la que goza la Nación, que trasciende a ella, y que se desprende de sus

¹⁶² VERDUGO, Mario, PFEFFER, Emilio, NOGUEIRA, Humberto (2003) *Derecho Constitucional Tomo 2* Santiago, Editorial Jurídica, Segunda Edición, pp. 156-157.

mismas acciones. En caso de la Nación, este honor se construiría de manera mixta por las acciones tanto de sus miembros como de sus gobernantes, sin que pueda imputarse toda la construcción del honor a unos o a los otros.

El profesor Silva Bascuñán señala al respecto que:

*“Una sociedad política tiene, como bien de incalculable valor, el prestigio de su nombre, que simboliza el legado de las generaciones pasadas, explicación de sus actuales potencialidades y augurio de la continuación y robustecimiento en el futuro de los progresos logrados. Todo lo que empañe ese prestigio, desdiga de los méritos que se reconocen en el grupo y deprima el espíritu colectivo, va contra su honor.”*¹⁶³.

A su vez Gutenberg Martínez, señala que *“El honor y la seguridad nacional son el prestigio y buena reputación de la comunidad nacional.”*¹⁶⁴

Por su parte, Ángela Vivanco, remitiéndose a las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, señala que el honor es *“es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos.”*¹⁶⁵ Como señala el informe de la comisión que se pronunció sobre la acusación constitucional contra la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Javiera Blanco, *“[l]o anterior, predicado respecto de la Nación corresponde a un prestigio que se ve empañado, desdiciendo los méritos o deprimiendo el espíritu colectivo.”*¹⁶⁶

Ahora bien, en materia de honor, la doctrina constitucional ha distinguido entre la variante subjetiva del honor y la variante objetiva. La variante subjetiva consiste en la apreciación o valoración que como país tenemos de la Nación, respecto de nosotros mismos. No obstante, en materia de entes colectivos como lo es la Nación, una variante subjetiva del honor resultaría imposible determinarlo. Por otra parte, la variante objetiva del honor corresponde a la imagen que se proyecta a terceros, en el caso de la Nación, la visión internacional que proyecta.

Respecto de este punto, el profesor Patricio Zapata, en la Comisión de esta Honorable Cámara que conoció de la acusación constitucional interpuesta contra la ex Ministra de Justicia, Javiera Blanco, señaló al respecto que:

*“[e]n ese momento se discutió bastante qué significaba esto, y quedó claro que no bastaba que se tratara de conductas que producen un cierto perjuicio comunicacional, una mala imagen, un bochorno. A todos nos tiene que preocupar la imagen que tiene Chile ante el mundo, pero el **concepto de honor**, a diferencia del concepto de honra, que es subjetivo, que es algo que se aprecia, es un **concepto objetivo**. El honor de la nación*

¹⁶³ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. pp. 145-146

¹⁶⁴ MARTINEZ, Gutenberg y RIVERO, Renée, *Acusaciones Constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p. 99.

¹⁶⁵ Informe de la Comisión encargada de pronunciarse acerca de la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco, p. 159. Disponible en: <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=27920&prmTIPO=INFORMECOMISION>.

¹⁶⁶ Id.

*chilena tiene que ver con su capacidad de honrar su palabra, su palabra empeñada en tratados internacionales; de responder ante sus aliados, de responder a las necesidades de sus conciudadanos en el extranjero, por ejemplo.”*¹⁶⁷ (énfasis agregado)

Asimismo, otros autores como el profesor Víctor Manuel Avilés y la profesora Miriam Henríquez sostienen que el haber comprometido gravemente el honor de la Nación exigiría la existencia de una condena, de sanciones aplicadas a Chile”.¹⁶⁸ La profesora Henríquez señala que para que se verifique la causal mencionada Chile debe haber sido denunciado, o condenado en sede internacional por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos vulnerados y/o debe existir una real potencialidad de que aquello ocurra, habiéndose por ende generado la referida responsabilidad internacional.¹⁶⁹

b. “Haber comprometido gravemente”

Establecer qué se entiende por “haber comprometido gravemente”, es esencial para determinar si los hechos imputados cumplen el estándar fijado por el Constituyente en orden a configurar la causal en análisis.

Señalan los acusadores que “comprometer” *“implica la realización de actos u omisiones que ocasionares el compromiso. Se trata entonces de una exposición, una puesta en riesgo por medio de una acción o caso aventurado. No es indispensable, por lo tanto, que el daño se haya producido efectivamente, sino que, razonablemente se considere creado el peligro en virtud del acto”*.¹⁷⁰

Para estos efectos, es importante tener en consideración que comprometer, conforme a su segunda acepción de la RAE significa *“Poner en riesgo a alguien o algo en una acción o caso aventurado”*. Así, en este caso implicaría poner en riesgo a la Nación, en una acción o caso aventurado, es decir mediante una acción y no mediante una omisión, contrario a lo que sostienen los acusadores.¹⁷¹

Igualmente, cabe tener en consideración que la causal se refiere a “haber comprometido” lo que supone que la acción ya se haya efectuado. El resultado de esa acción debe ser que el honor de la Nación esté actualmente comprometido, descartándose por tanto la existencia de un riesgo para efectos de configurar la causal. Así lo señaló la profesora Miriam Henríquez en la Comisión revisora de la acusación constitucional contra la ex Ministra de Justicia, Javiera Blanco:

¹⁶⁷

Disponible en: <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=MANDATOSGRALDET&prmID=82166&prmTIPODOC=LOCAL&prmPERIODO=2014-2018> p. 165

¹⁶⁸ Informe de la Comisión encargada de pronunciarse acerca de la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco, p. 202. Disponible en: <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=27920&prmTIPO=INFORMECOMISION>.

¹⁶⁹ Informe de la Comisión encargada de pronunciarse acerca de la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco, p. 160. Disponible en: <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=27920&prmTIPO=INFORMECOMISION>.

¹⁷⁰ Acusación, p. 71.

¹⁷¹ Acusación, p. 88.

*“La causal establecida en el literal b) del artículo 52 N° 2, no hablaba de ‘comprometer’ sino de ‘haber comprometido’, es decir no sanciona un peligro o potencialidad, sino un resultado ya producido, cuestión que en la práctica no había acontecido”.*¹⁷²

Por su parte, el Canciller Teodoro Ribera en su exposición en la Comisión revisora de la Acusación al Presidente de la República de fecha 3 de diciembre de 2019, clarificó que: *“El comprometer es colocar en peligro o riesgo un determinado valor jurídico. Sin embargo, la CPR utiliza la expresión ‘haber comprometido’. O sea, es pasado perfecto, compuesto de dos verbos, que denota una acción que empezó y concluyó. Es decir, debe tratarse de actos concluidos. Por tanto, no sanciona una eventualidad, tampoco sanciona un peligro eventual. Sanciona un peligro concreto, verificable, un daño ya verificado.”*¹⁷³

Lo anterior es plenamente aplicable en este caso, toda vez que aun cuando se pudiera considerar que se ha creado un riesgo, peligro o la eventualidad de un daño de compromiso al honor de la Nación, éste en ningún caso se ha concretado, por lo que la causal en comento tampoco se configura.

Además, el calificativo de “gravemente” da luces de que no basta con poner el riesgo, mediante una acción, el honor de la Nación, si no que este riesgo debe ser grave, y por grave, la doctrina ha entendido lo siguiente:

*“Gravemente’ equivale a aquello de mucha entidad o importancia, de modo que se amenace a la institucionalidad. Con esto se exige un criterio de proporcionalidad lógica entre el peligro generado por el acto en relación a la temida pérdida del bien que se trata de proteger.”*¹⁷⁴ Por otro lado se ha indicado que *“La palabra ‘gravemente’ entrega una proporción para indicar la intensidad de acto que pone en peligro el bien protegido”.*¹⁷⁵

Hay que tener en consideración para el análisis de la gravedad del acto que se busca imputar, el objeto y fin de una acusación constitucional, que destituir al Presidente de la República de su cargo, lo cual evidentemente no puede suceder por cualquier causa, si no que implica una gravedad intrínseca de los hechos imputados, toda vez que es un mecanismo que acusa a una autoridad electa de forma democrática. Por lo mismo su remoción no puede sustentarse en hechos que no revistan los mínimos para configurar esta causal, entre los que se encuentra no sólo que se comprometa el honor de la Nación, sino que esto revista caracteres de gravedad.

¹⁷² Informe de la Comisión encargada de pronunciarse acerca de la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco, p. 178. Disponible en: <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=27920&prmTIPO=INFORMECOMISION>.

¹⁷³ Intervención del Canciller Teodoro Ribera Neumann, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, martes 3 de diciembre de 2019.

¹⁷⁴ MARTINEZ, Gutenberg y RIVERO, Renée, *Acusaciones Constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p. 99.

¹⁷⁵ BRONFMAN, Alan, CORDERO, Eduardo y ALDUNATE, Eduardo, *Derecho Parlamentario Chileno. Funciones y atribuciones del Congreso Nacional*, Thomson Reuters, 2013, Santiago, p. 331.

Así, Silva Bascuñán indica que existe “*un criterio de proporción lógica para indicar la forma e intensidad del peligro generado por el acto, en relación a la temida pérdida del bien que se trata de proteger.*”¹⁷⁶

Igualmente, Silva Bascuñán, buscando determinar la gravedad que debe revestir el acto jurídico fundante de la Acusación, y por tanto el estándar con que debe medirse este compromiso grave al honor de la Nación, ha determinado que:

*“constituye traición e importa, en muchas de sus formas de concretarse, un delito descrito y penado en la legislación criminal. [...] Según el Diccionario, traición es “delito que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener” y alta traición es “la cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado” [...] Ahora bien, es evidente que la causal constitucional armoniza mucho mejor con el concepto expresado en los términos de “alta traición””.*¹⁷⁷

Así, como se puede constatar, la gravedad que debe investir la conducta que configure esta causal debe revestir un carácter de tal gravedad, que pueda considerarse como “alta traición” según se ha expuesto precedentemente.

Respecto de este punto, el profesor Patricio Zapata, en la Comisión de esta Honorable Cámara que conoció de la acusación constitucional interpuesta contra la ex Ministra de Justicia, Javiera Blanco, señaló al respecto que:

*“[e]n ese momento se discutió bastante qué significaba esto, y quedó claro que no bastaba que se tratara de conductas que producen un cierto perjuicio comunicacional, una mala imagen, un bochorno. A todos nos tiene que preocupar la imagen que tiene Chile ante el mundo, pero el concepto de honor, a diferencia del concepto de honra, que es subjetivo, que es algo que se aprecia, es un concepto objetivo. El honor de la nación chilena tiene que ver con su capacidad de honrar su palabra, su palabra empeñada en tratados internacionales; de responder ante sus aliados, de responder a las necesidades de sus conciudadanos en el extranjero, por ejemplo.”*¹⁷⁸

En el mismo sentido el señor Zapata señaló que:

“[l]a causal “comprometer gravemente el honor de la nación” exige algo más que la falta del Estado frente a un tratado internacional; así, por ejemplo, un comandante en jefe que hubiera aceptado sobornos para la adquisición de material bélico o que hubiera entregado información

¹⁷⁶ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 145.

¹⁷⁷ SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional” Tomo VI, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 146 y 147.

¹⁷⁸ Disponible en: <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=MANDATOSGRALDET&prmID=82166&prmTIPODOC=LOCAL&prmPERIODO=2014-2018> p. 165

*secreta a un país con el cual tenemos una relación tensa, eso compromete gravemente el honor de la Nación.”*¹⁷⁹

2. Sentido y alcance de la expresión “por actos de su administración”

Tal como se desarrolló latamente tanto en la Cuestión Previa como al contestar el Capítulo Primero de la Acusación, el sentido y alcance que debe dársele a la frase “*por actos de su administración*”, debe entenderse de la siguiente forma:

- a. Por “actos” deben entenderse acciones y no omisiones;
- b. Las acciones en comento, deben corresponder a actos personales del Presidente de la República expresados en actos formales emanados directamente de él; y,
- c. Los actos en cuestión deben ser de administración y no de gobierno, pues estos últimos no pueden servir de base para una acusación constitucional.

Según se ha expresado, la Acusación no cumple con ninguno de los tres requisitos copulativos antes enunciados.

Como se desarrollará a continuación, en este caso no se configura esta causal pues los acusadores no se refieren a actos (acciones) concretos, ni a uno o más actos formales por los que sea personalmente responsable que permitan sostener que se ha comprometido gravemente el honor de la Nación, ya que la Acusación como se explicó se sustenta principalmente en actos de administración, y no de gobierno.

3. Imprecisiones en que incurren los acusadores en esta materia

En primer lugar, fundamentan la configuración de la causal en hechos y no en actos. Los acusadores sostienen que el respeto a los derechos fundamentales “*exige más que una conducta de abstención de amenaza, perturbación o privación de los mismos por parte de los órganos del Estado*” y que “*debe necesariamente traducirse en una conducta positiva, de promoción de los derechos humanos por parte de los titulares del poder público*”.¹⁸⁰ No obstante, en ningún momento se hace mención a actos formales (acciones) de este Presidente que puedan configurar la causal en análisis. Además, los acusadores no consideran las medidas que he adoptado en materia de derechos humanos, según lo expresado previamente. Además, se trata de hechos muy graves que se encuentran en desarrollo y actualmente están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público, y en conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son los órganos competentes en la materia.

Los acusadores tampoco son capaces de enunciar los actos a través de los cuales habría consentido en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, lo cual es esencial para efectos de configurar la causal de acusación constitucional a este Presidente. No se mencionan las acciones que me sean imputables personalmente, que

¹⁷⁹

Disponible en: <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=MANDATOSGRALDET&prmID=82166&prmTIPODOC=LOCAL&prmPERIODO=2014-2018> p. 166

¹⁸⁰ Acusación, p. 90.

darían origen a esta causal de acusación. Ello no ha sido posible porque no ha ocurrido en la práctica.

El consentimiento que se me atribuye haber dado, además de no ser tal, se imputa en forma de una omisión o abstención que hace que la imputación exceda del ámbito de la causal de acusación constitucional, todo ello según se ha explicado.

Los acusadores en ningún momento son capaces de explicar cómo se habría producido este alegado consentimiento y que haya estado revestido de la intencionalidad señalada.

III. LA ACUSACIÓN NO LOGRA ACREDITAR LA CAUSAL INVOCADA

Como se ha explicado latamente a lo largo de esta presentación, los hechos en que se funda la Acusación no son imputables a esta Administración, ni a este Presidente.

Lamentablemente, el descontento social legítimo se ha ido gestando desde hace décadas en nuestro país, y se ha expresado en ocasiones acompañado de una violencia inusitada. A pesar de haber realizado los mejores esfuerzos por mantener el orden público, en esta labor sin duda ha habido excesos por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, los cuales, tal como he señalado con anterioridad serán investigados y juzgados por los organismos correspondientes.

Igualmente, es necesario aclarar que la gran mayoría de las acciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública han sido reactivas a actuaciones de especial violencia de ciertos grupos, que han causado disturbios y desmanes fuera de lo normal, lo que ha tornado muy difícil la contención de estas acciones por parte de las Policías.

Así, a pesar de la gravedad de los acontecimientos acaecidos desde el 18 de octubre del presente año, los acusadores no han expresado un solo acto de administración que me sea imputable personalmente – salvo la declaración del Estado de Emergencia, cuestión que fue latamente explicada-. Lo cierto es que como señalan los acusadores, como Jefe de Estado represento los intereses permanentes del país frente a la comunidad internacional,¹⁸¹ y en consecuencia, he cautelado el prestigio y honor de la Nación.

1. Los antecedentes acompañados por los acusadores carecen del estándar mínimo requerido para tener por acreditada la causal invocada

Los acusadores señalan que, a raíz de una serie de declaraciones o manifestaciones efectuadas en el exterior, en relación con los acontecimientos sucedidos en Chile a contar del día 18 de octubre de 2019, se podría acreditar la “afectación grave del honor de la Nación”, siendo necesario destacar que lo que se debe acreditar es el compromiso grave del honor de la Nación y no su afectación.

¹⁸¹ Acusación, p. 91.

Del análisis detallado de los argumentos esgrimidos y de los casos presentados en este punto, se puede desvirtuar el argumento presentado por los acusadores, según se detalla a continuación:

a. Comunicado del Sistema de Naciones Unidas

A este respecto los acusadores se limitan a reproducir íntegramente el texto del comunicado en comento, sin siquiera hacer alguna referencia respecto de cómo podría entenderse que éste comunicado compromete gravemente el honor de la Nación, pues la mera preocupación por parte del Sistema de Naciones Unidas no puede considerarse como un compromiso al honor de la Nación, ni mucho menos un compromiso grave.

Efectivamente, con fecha 19 de octubre ONU Chile emitió un comunicado en el cual *“expresa su profunda preocupación ante los graves hechos de violencia ocurridos en Santiago los días 18 y 19 de octubre. Lamentamos en particular el alto número de personas, incluyendo menores de edad, y miembros de las fuerzas del orden que resultaron heridas durante estos incidentes, así como los daños y las cuantiosas pérdidas materiales causadas.”*¹⁸²

El mismo comunicado se pronuncia respecto del Estado de Emergencia declarado, sin criticar la decisión de dictarlo, y enfatizando que *“las disposiciones que conlleva deben ser aplicadas bajo el más estricto apego al estado de derecho y a las normas internacionales de derechos humanos a las que Chile ha adherido.”*¹⁸³

Es una práctica común que el Sistema de Naciones Unidas emita este tipo de comunicados manifestando su preocupación por algún hecho ocurrido en algún país miembro, y recalcando el deber de cumplimiento del derecho internacional, sin que ello implique una responsabilidad internacional ni que comprometa gravemente el honor de la Nación, del país en cuestión.

Ejemplos como el anterior hay varios en que el Sistema de Naciones Unidas ha manifestado su mera preocupación, a través de un comunicado de prensa.

En relación a la situación de Francia, el 14 de febrero de 2019, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Sr. Seong-Phil Hong y dos Relatores Especiales, manifestaron que el derecho a la protesta en Francia se había restringido y se debía repensar las políticas de mantenimiento del orden público. Los expertos condenaron el uso excesivo de la fuerza, los arrestos, detenciones y el uso desproporcionado de armas no letales, argumento que algunas leyes no estaban en concordancia con los tratados internacionales vigentes.¹⁸⁴

En relación a la situación de Ecuador, el 23 de octubre de 2019, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Sr. José Antonio Guevara Bermúdez y seis Relatores Especiales expresaron su consternación por la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad ecuatorianas frente a las protestas. Además, agregaron que el elevado número de

¹⁸² Disponible en: <http://www.onu.cl/es/comunicado-del-sistema-de-naciones-unidas-en-chile/>

¹⁸³ Disponible en: <http://www.onu.cl/es/comunicado-del-sistema-de-naciones-unidas-en-chile/>

¹⁸⁴ Disponible en: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=E>

heridos podría ser un claro indicio de que el uso de la fuerza fue excesivo y en violación de los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Por último, establecieron su preocupación por la militarización de territorios indígenas ya que esto podría violar el derecho a la autodeterminación y a su vez generar más violaciones de derechos humanos.

En relación a la situación de Colombia, el 31 de octubre 2019, señalaron su repudio por la masacre de miembros del pueblo Nasa en el Cauca e instaron al Gobierno a tomar medidas urgentes en cooperación con las autoridades indígenas están sufriendo una violencia incesante e inaceptable.

En ninguno de estos casos es posible sostener que se ha comprometido gravemente el honor de la Nación, de Francia, Ecuador o Colombia.

b. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Los acusadores señalan entre los medios a través de los cuales se habría comprometido gravemente el honor de la Nación, un comunicado oficial de fecha 23 de octubre de la CIDH. En este caso los acusadores, se limitan a copiar partes del comunicado, sin explicitar cómo puede entenderse que dicho comunicado compromete gravemente el honor de la Nación.

De la lectura del comunicado, más allá de constatar la preocupación de la CIDH respecto de los hechos que han ocurrido en Chile, no puede concluirse que con esto se esté afectado gravemente el honor de la Nación. Es más, al igual que el caso del Sistema de Naciones Unidas, forma parte del ejercicio de sus funciones que la CIDH emita este tipo de declaraciones, lo cual puede constarse en su página web.¹⁸⁵

Es más, el comunicado señala expresamente que:

*“La Comisión condena estos hechos e insta al Estado a seguir adoptando las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables.”.*¹⁸⁶ (énfasis agregado)

En términos mucho más gravosos, la CIDH ha emitido comunicados sobre la situación de Bolivia,¹⁸⁷ Ecuador¹⁸⁸ y Colombia.¹⁸⁹

En cualquier caso, no se advierte de qué manera se compromete gravemente el honor de la Nación, al tenor de la visita y de las declaraciones posteriores de la CIDH, pues el Estado de Chile ha tenido una posición clara, abierta y transparente respecto de los hechos ocurridos.

¹⁸⁵ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp>

¹⁸⁶ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/270.asp>

¹⁸⁷ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/290.asp>

¹⁸⁸ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/252.asp>

¹⁸⁹ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/313.asp>

c. Carta de 40 diputados del Parlamento Europeo sobre la materia

La carta a la que hacen mención los acusadores, corresponde a una carta de fecha 29 de octubre de 2019, dirigida a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, en la cual, los parlamentarios firmantes -40 de un total de 751 diputados que lo conforman- en primer lugar manifiestan su preocupación por los hechos que han ocurrido en Chile para luego solicitar a la Unión Europea la adopción de una serie de medidas en relación con el tema, tales medidas son:

- “1. Que manifieste públicamente y concretamente su solidaridad con el pueblo chileno;*
- 2. Que exija a las autoridades chilenas que pongan fin al estado de emergencia, al toque de queda y a la represión de la protesta social. Que igualmente exija a dichas autoridades que mantengan un estricto respeto de los derechos de manifestación y expresión;*
- 3. Que en el marco del diálogo político, la UE solicite información y explicaciones sobre la actuación de las fuerzas armadas y cuerpos policiales chilenos en la represión de la protestas;*
- 4. Que soliciten una reunión urgente con la Embajada de Chile ante la UE;*
- 5. Que la UE haga valer la cláusula de democracia del Acuerdo de Asociación que mantiene la Unión con Chile (Acuerdo de Asociación Económica, AAE), donde se establece el respeto de los derechos humanos fundamentales, el desarrollo económico y social sostenible; y compromete además a las partes con la buena gobernanza;*
- 6. Que si esta cláusula no se hace valer y continua la represión de la protesta y el estado de emergencia, se aplique la cláusula de suspensión del acuerdo en razón de incumplimiento de la cláusula de democracia;*
- 7. Que hasta que no se retire el ejército y la represión no se celebre ningún encuentro internacional en Chile, como la COP25 que está prevista para diciembre de 2019.”.*

Los acusadores se fundamentan en dicha carta para asegurar que se habría comprometido gravemente el honor de la Nación, basándose en la solicitud de estos parlamentarios. Sin embargo, del análisis de las solicitudes, respecto a si fueron o no acogidas por el Parlamento Europeo, podemos constatar que ninguna de ellas ha sido acogida. Por el contrario, si se hubiesen acogido, sería una materia que al menos daría cuenta de una preocupación del Parlamento Europeo, pero que difícilmente sería suficiente para afirmar un compromiso grave al honor de la Nación, y en especial, si el Parlamento Europeo no tomó medidas al respecto.

A mayor abundamiento, con fecha 14 de noviembre de 2019, la entonces Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini intervino ante el pleno del Parlamento Europeo, mientras se debatía la situación de Chile, señalando lo siguiente:

“Hacemos un llamado, una vez más, para investigar rápidamente todos los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos, desde todos los lados.

Este es un momento importante para la democracia de Chile – una democracia fuerte construida luego de décadas de dictadura. Una democracia que hoy necesita un nuevo contrato social, con un fuerte foco en la lucha contra la inequidad e inclusión social. El Gobierno ha respondido a las protestas con una serie de importantes medidas: el anuncio de una agenda social, un cambio de gabinete, y el lanzamiento de un dialogo nacional [...]

“Hacemos un llamado, una vez más, para investigar rápidamente todos los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos, desde todos los lados.

Este es un momento importante para la democracia de Chile – una democracia fuerte construida luego de décadas de dictadura. Una democracia que hoy necesita un nuevo contrato social, con un fuerte foco en la lucha contra la inequidad e inclusión social. El Gobierno ha respondido a las protestas con una serie de importantes medidas: el anuncio de una agenda social, un cambio de gabinete, y el lanzamiento de un dialogo nacional [...]

Chile anunció que no será el anfitrión de APEC y COP 25 para enfocarse en las prioridades domésticas. [...]

Europa está listo para acompañar a Chile en este delicado momento de su historia, hacia un contrato social nuevo y más inclusivo. Tenemos plena confianza en que la democracia de Chile es suficientemente fuerte para canalizar las demandas de su pueblo, y para usar este momento como un paso hacia un crecimiento más fuerte e inclusivo.”¹⁹⁰ (traducción propia)

De lo anterior, no sólo se puede concluir que la Unión Europea respalda a nuestro país en esta instancia, si no que se desvirtúa el punto 7 de la carta que hacen valer los acusadores, toda vez que queda constancia que fue Chile quién decidió suspender la celebración de la APEC y COP 25, como se señalará más adelante en este capítulo, y no fue la Unión Europea la que exigió esta situación. Respecto de los puntos, 3, 4, 5 y 6 de la

¹⁹⁰ Original en inglés: “We call once again for a swift investigation of all crimes and human rights violations, from all sides.

This is an important moment for Chile's democracy – a strong democracy built after decades of dictatorship. A democracy that now needs a new social contract, with a stronger focus on the fight against inequalities and on social inclusion. The government has started to respond to protests with a series of important measures: the announcement of a social agenda, a Cabinet reshuffle, the launching of a national citizens' dialogue [...]

Chile has annouced that will not host the APEC and COP Summits to focus on the domestic priorities. [...]

Europe is ready to accompany Chile in this delicate moment of its history, towards a new and more inclusive social contract. We have full confidence that Chile's democracy is strong enough to address its people's demands, and to use this moment as a step to grow even stronger and more inclusive.”. Disponible en: https://eeas.europa.eu/delegations/chile_es/70463/Speech%20by%20High%20Representative/Vice-President%20Federica%20Mogherini%20at%20the%20European%20Parliament%20plenary%20debate%20on%20the%20situation%20in%20Chile.

carta, no hay ninguna referencia en la intervención de la entonces Vicepresidenta Mogherini.

Así, de todo lo anterior se puede concluir que la carta enviada por 40 parlamentarios de la Unión Europea, no sólo no tiene per se la capacidad de comprometer gravemente el honor de la Nación, si no que queda demostrado que en los hechos no lo hizo, toda vez que el sentido de dicha carta, no es sino de apoyo a nuestro país, y de reconocimiento respecto de las actuaciones que ha tomado este Gobierno.

d. Solicitud de Parlamentarios Británicos de investigar denuncias a violaciones a los Derechos Humanos eventualmente cometidas en Chile

En primer lugar, cabe destacar que los acusadores no adjuntaron la solicitud de la que hablan, y sólo acompañaron una noticia al respecto.

El documento al que hacen referencia corresponde a una “Early Day Motion” presentada en el parlamento británico, en particular la EDM # 73, con fecha 28 de octubre de 2019.¹⁹¹

Una Early Day Motion corresponde, en conformidad a la información establecida en la página web del Parlamento del Reino Unido,¹⁹² a mociones para debatir en la *House of Commons*, sin un día fijado para su discusión, por lo que pueden o no ser discutidas. El hecho de presentar y/o patrocinar, una Early Day Motion no tiene consecuencia práctica, más allá de darle visibilidad a una determinada materia. En particular la moción en comento, tiene 26 firmas de un total de 650, es decir sólo un 4% de los miembros del parlamento Británico estuvo dispuesto a firmar y eventualmente debatir el tema planteado.

En la Acusación los acusadores sólo hacen una referencia al contenido de la moción, conforme a lo que se señala en la nota de prensa en la que se basa, nuevamente, sin señalar cómo puede entenderse que dicha moción afecta el honor de la Nación, de manera grave.

e. Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados Argentina

En primer lugar, para analizar este punto, es necesario conceptualizar qué es un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados Argentina, para lo cual en su glosario, disponible en su página web¹⁹³ se señala que:

“Es Proyecto de Resolución toda proposición que tenga por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u organización interna de la Cámara, los pedidos de informes basados en las facultades investigativas de las Cámaras y, en general, toda disposición de carácter imperativo que pueda tomar la Cámara por sí, sin intervención de otro poder [...] es admisible encuadrar

¹⁹¹ Disponible en: <https://edm.parliament.uk/early-day-motion/53421/popular-protests-in-chile>

¹⁹² Disponible en: <https://www.parliament.uk/about/how/business/edms/>

¹⁹³ Disponible en: https://www.hcdn.gob.ar/secparl/dgral_info_parlamentaria/dip/glosario/P/proys_ley_decla_reso.html

como Proyecto de Resolución los proyectos tendientes a “Declarar de Interés de la Honorable Cámara” alguna actividad u obra que merezca recibir tal calificación, lo que debe interpretarse de manera responsable [...] Por eso, en el marco de la interpretación amplia, también entran dentro del marco de “Proyecto de Resolución” los que buscan expresar “pesar” o “beneplácito” u otras declaraciones análogas, que se agotan en el propio acto de su declaración. Se trata de fijar una posición o criterio sin afectar la acción de otros poderes o terceros. Pero este criterio no es unánime y, de hecho, es posible ver dos proyectos análogos, despachados por la misma comisión, el mismo día y con distintos encuadres.”.

De lo recién expuesto, por tanto, se puede concluir que un proyecto de resolución no tiene ninguna incidencia práctica en la medida en que no sea la misma Cámara de Diputados la que pueda ejecutarlo, más allá de ser una mera declaración de intereses, como sería en este caso.

Los acusadores hacen referencia a un proyecto de resolución de fecha 29 de octubre de 2019, en el cual se resuelve que *“se solicita al Poder Ejecutivo Nacional de Argentina declare la ruptura de relaciones diplomáticas con la Republica de Chile, a fin de quitar por parte de nuestro país cualquier tipo de colaboración con un gobierno ajustador y represor.”*, lo cual tal como se señaló precedentemente, es sólo una declaración de intereses, firmado por un solo diputado, sin que por esto se pueda exigir al Poder Ejecutivo de la República Argentina el cumplimiento de lo resuelto. Asimismo, dicho Proyecto de Resolución *“exige al gobierno de Chile que disponga la inmediata libertad de todos los detenidos y que se impulse un castigo a todos los responsables civiles y políticas por las violaciones a los derechos humanos ocasionadas contra la juventud y el pueblo de Chile en lucha.”*.

Como es posible constatar, el Proyecto de Resolución en comento, no sólo no puede *per se* considerarse que comprometa gravemente el honor de la Nación, si no que da cuenta de la opinión de un solo parlamentario argentino que lo presentó, sin que haya sido tramitado ni menos votado. Por lo tanto, no se advierte cómo una alegación como la que formulan los acusadores se le puede pretender asignar como cierta una decisión de la República Argentina respecto a las relaciones diplomáticas con Chile. De ser efectiva la acusación que pretenden imputarme los acusadores, la República Argentina habría aceptado el quiebre de las relaciones diplomáticas con el país, pero ello no ocurrió ni ha ocurrido hasta la fecha.

Cabe destacar en este punto que los acusadores, convenientemente, no hacen mención a un proyecto de resolución presentado también en la Cámara de Diputados Argentina, con fecha 12 de noviembre de 2019¹⁹⁴, en el cual se expresa el repudio por el violento ataque producido por un grupo de manifestantes a la sede de la Embajada Argentina en la República de Chile, dicho Proyecto de Resolución establece expresamente que:

¹⁹⁴ Disponible en: <https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5060-D-2019&tipo=RESOLUCION>

“Las protestas que movilizan a cierto sector de la población chilena ya llevan más de tres semanas, tiempo en el cual se ha podido observar una cierta radicalización en los métodos de sus promotores que hacen pensar en que los motivos de sus reclamos lejos están de enmarcarse dentro de los límites de la deliberación racional y del diálogo democrático sino se inscriben dentro de conductas sediciosas que buscan socavar las bases institucionales fundamentales del país vecino. [...] un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza a uno de los edificios en el que funciona la Embajada Argentina en Chile, dejando como resultado una rotura de alguno de sus vidrios, pintadas y destrozos en sus jardines. Tan peligrosa fue la situación que el Embajador tuvo que ser subido a un carro blindado por las fuerzas de seguridad para ser evacuado y resguardada su seguridad física y la del personal diplomático, administrativo, técnico y de servicio que se encontraba allí prestando funciones.”.

Como se señaló precedentemente el honor de la Nación se construye de manera mixta por los miembros de la Nación y sus gobernantes, por lo que es necesario analizar todos los posibles factores que puedan eventualmente alterarlo, independiente del lado político o social del cual emanen.

f. Amnistía Internacional

Otro de los fundamentos que utilizan los acusadores es la misión de Amnistía Internacional, que se inició con fecha 24 de octubre, la que tenía por finalidad recabar testimonios y acceder a documentos respecto de los hechos acontecidos en nuestro país a contar del día 18 de octubre de 2019.

De manera preliminar, cabe señalar que el hecho de que Amnistía Internacional anuncie una visita a nuestro país no puede considerarse como un hecho que en sí mismo afecte gravemente el honor de la Nación. Por el contrario, las visitas que pueden efectuar forman parte del ejercicio de sus funciones, especialmente considerando que Amnistía Internacional tiene una sede permanente en Chile desde 1983. Si cada vez que Amnistía Internacional anuncie una visita a algún país se estime que el presidente en cuestión está comprometiendo gravemente el honor de la Nación, implicaría realizar un juicio anticipado sobre el resultado de dicha investigación.

Como resultado de esta visita, Amnistía Internacional, con fecha 21 de noviembre emitió un informe que da por hecho, afirmándolos con convicción, circunstancias que se encuentran actualmente en investigación por los órganos competentes, los Tribunales de Justicia y Ministerio Público, informe que fue altamente criticado por las instituciones involucradas, por los términos absolutos en los que se escribió.

En dicha línea Erika Guevara, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que la intención de las fuerzas de seguridad sería *“lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de los manifestantes”*¹⁹⁵, pronunciándose así respecto

¹⁹⁵ Disponible en: <https://amnistia.cl/noticia/chile-politica-deliberada-para-danar-a-manifestantes-apunta-a-responsabilidad-de-mando/>

de un elemento subjetivo, que no corresponde, otorgando así, una intencionalidad, que no corresponde, a la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, además de dar por ciertos hechos que, como se señaló, se encuentran en proceso de investigación por los organismos competentes.

De esta forma, la conclusión del informe de Amnistía Internacional es inmotivada y apresurada, puesto que éste se erige sobre hechos que continúan siendo investigados, sin haberlos contrastado con instituciones que cuentan con información sensible y crítica al respecto –como son Carabineros de Chile, el Ministerio de Salud, entre otros.-. Luego, con aquella base fáctica precaria, formula conclusiones y opiniones de la máxima gravedad, imputando intencionalidad a instituciones de nuestro país por actos que habrían sido perpetrados por funcionarios específicos de ellas.

Precisamente, y a diferencia de otros organismos internacionales, la labor de investigación de Amnistía Internacional no se desarrolló en colaboración con las instituciones del Estado. Si bien Amnistía solicitó una reunión con el Gobierno, lo hizo para el día miércoles 20 de noviembre de 2019 –esto es, a tan sólo un día de la fecha en la que emitieron su informe y publicaron sus conclusiones-, y “*con la finalidad de presentarle nuestras preocupaciones*”.¹⁹⁶ Ello claramente da cuenta de un cuestionamiento de base a la metodología utilizada para la elaboración del informe, al prescindir de contar con información oficial y la colaboración del Estado.

Es decir, la pretensión de Amnistía Internacional no era solicitar información ni formular una propuesta de trabajo en conjunto, sino lisa y llanamente presentar, de forma expositiva, sus conclusiones, una opinión ya formada respecto de lo sucedido en nuestro país. Ello no da cuenta de una lógica colaborativa sino adversarial.

Lo anterior explica, por ejemplo, por qué un informe que pretende catastrar los hechos de violencia, omite por completo toda mención al contexto en el que se recurrió a la declaración del Estado de Emergencia, o bien, la violencia sufrida por funcionarios de Carabineros.

Pues bien, las conclusiones de Amnistía Internacional ocasionaron tal revuelo, expuestas latamente en diversos medios de comunicación, que obligaron a que sus voceros a aclarar sus dichos.

De hecho, con fecha 25 de noviembre de 2019, fue citada a la Comisión de la Cámara de Diputados que conoce de la presente Acusación, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, señora Ana Piquer, la cual, aclaró respecto al informe que “*Nada de esto se puede interpretar en el sentido de que opinamos de que nunca jamás Carabineros puede hacer uso de la fuerza, porque eso, por supuesto, la fuerza policial puede hacerlo cuando es necesario y de manera proporcional. Ni tampoco puede interpretarse como un ataque institucional a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros, no estamos diciendo que necesariamente todos los Carabineros o los militares actúen de manera inadecuada.*”.¹⁹⁷ Preciso luego que “*hasta el momento no hemos afirmado que son*

¹⁹⁶ Solicitud de reunión con la Presidencia de la República y Amnistía Internacional, de fecha 13 de noviembre de 2019, recibida el 14 de noviembre de 2019 en el Palacio de la Moneda.

¹⁹⁷ Intervención de la señora Ana Piquer, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, lunes 25 de noviembre de 2019. Disponible en: <http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=46#>

*sistemáticos, principalmente por un asunto de que eso requiere un mayor análisis de evidencia que es el trabajo que estamos haciendo”.*¹⁹⁸

En todo caso, de todo lo señalado, no es posible constatar que la sola visita de Amnistía Internacional al país, sea un factor que comprometa gravemente el honor de la Nación, como lo pretenden los acusadores. Un razonamiento de este tipo importa, como se señaló, dar por sentado que el resultado de dicha visita sería siempre autorizado y crítico, y, más aún, importa supeditar el concepto del “honor de la Nación” a un juicio emitido por una organización internacional –esto es, a un tercero- como se indicó, que ni siquiera da garantías suficientes de imparcialidad.

g. *Human Rights Watch*

Los acusadores se basan en un comunicado de prensa de la organización no gubernamental *Human Rights Watch*, en el cual se contienen dos citas de su Director para las Américas, señor José Miguel Vivanco, en virtud de las cuales manifiesta su preocupación respecto de los hechos ocurridos en Chile a contar del día 18 de octubre de 2019.

Nuevamente, insistimos en que la preocupación de una organización internacional respecto de ciertos hechos ocurridos en el país, no puede considerarse como un compromiso grave del honor de la Nación, además, que esta organización realizó su visita a nuestro país, sin inconvenientes. Como se expresó previamente se les facilitó su labor, e incluso invité a su Director Ejecutivo a una reunión para analizar la situación en comento, la cual ocurrió con fecha 26 de noviembre pasado.

Al respecto, la Subsecretaria de Derechos Humanos, se pronunció respecto al informe e indicó que *“Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situaciones de disturbios y de detención.”*¹⁹⁹, indicando a su vez que *“este, es precisamente el objetivo central del Proyecto de Ley de Modernización de Carabineros presentado por nuestro Gobierno el año pasado, que incorpora nuevos y más exigentes controles en materia de DD.HH., mayor transparencia en el trato durante las detenciones y nuevos medios para denunciar abusos policiales.”*²⁰⁰

Así, no es posible establecer que la manifestación de preocupación por parte de *Human Rights Watch*, ni tampoco que, el informe por ellos emitidos, hayan podido comprometer de manera grave el honor de la Nación. Por el contrario, el trabajo realizado por esta institución y su informe dejan en evidencia que las medidas que he impulsado durante este Gobierno, como es la modernización a Carabineros de Chile y otras propuestas legislativas y administrativas, se encontraban en el sentido correcto.

¹⁹⁸ Intervención de la señora Ana Piquer, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, lunes 25 de noviembre de 2019. Disponible en: <http://www.cdtv.cl/Programa.aspx?idPrograma=46#>

¹⁹⁹ Disponible en: <https://radio.uchile.cl/2019/11/26/gobierno-da-una-semana-a-rozas-para-entregar-antecedentes-tras-informe-de-human-rights-watch/>

²⁰⁰ Disponible en: <https://radio.uchile.cl/2019/11/26/gobierno-da-una-semana-a-rozas-para-entregar-antecedentes-tras-informe-de-human-rights-watch/>

A mayor abundamiento, José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de *Human Rights Watch*, en entrevista con el diario El Mercurio, ante la pregunta “¿Violaciones “sistemáticas” a los Derechos Humanos, como se ha dicho?, respondió que: “*La sistematicidad es un concepto vinculado al derecho penal internacional, una categoría muy específica asociada a crímenes de lesa humanidad proveniente de Nüremberg y desarrollada por tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda. El estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional lo recoge en su artículo 7º, pero asociado a una campaña de carácter premeditado de ataque a derechos fundamentales que puede concluir en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. El umbral que se requiere para entrar en una discusión sobre sistematicidad es tan exigente, que nos lleva a un terreno donde no hay antecedentes para encapsularlos en ese concepto.*”²⁰¹

h. Cobertura de prensa internacional

Respecto de la cobertura de prensa internacional, los acusadores se basan en dos notas citadas en la Acusación, una de CNN Chile “Periodista argentino recibe en vivo un disparo de carabineros mientras cubría manifestaciones en Chile” y una de Soy Chile “Bloomberg: Acusaciones de tortura y violencia sexual podrían convertirse en un obstáculo insuperable para Piñera”.

Mediante estas notas, los acusadores buscan establecer que he comprometido gravemente el honor de la Nación. Al respecto debo señalar:

En primer lugar, ¿de qué forma dos notas de prensa pueden entenderse como prueba de que se ha comprometido el honor de la Nación? La defensa de la ex Ministra Javiera Blanco, respecto de una acusación similar señaló que: “*El libelo funda esta gravísima causal de acusación constitucional, equivalente a traicionar a la Patria, en dos notas de la prensa internacional, pretendiendo que ello acredita que ha comprometido gravemente el honor de la Nación. No se trata de la prensa internacional en su conjunto o de publicaciones sistemáticas mantenidas en el tiempo, sino de dos artículos en sitios electrónicos. Resulta evidente que dos artículos de medios electrónicos no pueden considerarse idóneos para configurar la causal invocada, cuyos contornos han sido [] explicados.*”²⁰² (énfasis agregado).

Además, no basta con que haya una cobertura generalizada de prensa en un sentido, pues es necesario que esta cobertura haya comprometido gravemente la reputación internacional de la Nación. Mientras esto no suceda, no es posible sostener que se configura esta causal.

En segundo lugar, el riesgo de citar notas de prensa, es que éstas se han escrito desde la óptica del medio de comunicación, que se expresa en una determinada línea editorial. Sin embargo, para efectos de sustentar la configuración de la causal en comento, basado en notas de medios de prensa no debiera existir duda alguna que se ha comprometido gravemente el honor de la Nación, no que no ocurre en este caso.

²⁰¹ Diario El Mercurio, 24 de noviembre de 2019.

²⁰² Disponible en: <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=MANDATOSGRALDET&prmID=82166&prmTIPODOC=LOCAL&prmPERIODO=2014-2018> p. 160.

A este respecto, a propósito de la Comisión que conoció de la acusación constitucional en contra de la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Sra. Javiera Blanco, la diputada Karol Cariola señaló:

*“Respecto al Capítulo III, donde se plantea haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, criticó la acusación, ya que no son argumentos ni pruebas suficientes que se hayan hecho reportajes en medios internacionales como El País y la BBC del Reino Unido, para poder decir que la credibilidad y el prestigio de nuestro país o del Estado de Chile está comprometido gravemente.”*²⁰³

i. Visita de la Premio Nobel de la Paz

Los acusadores indican que con fecha 3 de octubre,²⁰⁴ la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú habría visitado el país y expresado su preocupación por *“las presuntas violaciones de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado”*, citando luego la declaración de la señora Menchú.

Como se ha señalado, durante las últimas semanas diversos representantes de organizaciones internacionales y personalidades han visitado nuestro país y se han pronunciado sobre la situación en la que nos encontramos. El hecho que se expresen opiniones o se formulen pronunciamientos al respecto no supone *per se* que se haya comprometido gravemente el honor de la Nación, como se ha explicado.

j. Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En este punto los acusadores se limitan a señalar que se celebró una audiencia pública ante la CIDH, en Quito, Ecuador, citando al respecto manifestaciones efectuadas por la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz, y del representante del INDH, señor Branislav Marelic, quienes concordarían en la supuesta violación a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Al mismo tiempo, se refieren de manera tangencial a la declaración del representante del Gobierno, Mijail Bonito, señalando que éste habría negado la violación de los Derechos Humanos. No obstante, se trata de otro ejemplo de la poca rigurosidad con que los acusadores realizan aseveraciones parciales y fuera de contexto. En la presentación realizada ante la CIDH, y refiriéndose a las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil en las que se afirmó que en Chile había una violación generalizada y sistemática de los Derechos Humanos de los manifestantes, se expresó: *“no es posible señalar prima facie que hay una violación general y sistemática de los Derechos Humanos en Chile. Uno es el contexto, que no puede perderse de vista, el contexto de violencia generalizada, el contexto de ataque a fuerzas del orden interior”*.²⁰⁵

En efecto, se expuso tanto el contexto de violencia y de ataques a la fuerza pública que son hechos notorios y de público conocimiento, así como las medidas que se adoptaron desde el Gobierno para el respeto a los derechos humanos en la actuación de la fuerza

²⁰³ Informe de la Comisión encargada de pronunciarse acerca de la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Javiera Blanco, p. 197.

²⁰⁴ La referencia se entiende realizada al 3 de noviembre de 2019.

²⁰⁵ Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=uZo9d7YcCfg>

pública durante los disturbios, ilustrando así un contexto que no es acorde a una violación sistemática.

Incluso, en la línea de lo que he expresado desde un primer momento, el embajador Hernán Salinas, en el preludio de la intervención del Estado señaló: *“El Estado condena cualquier delito, abuso, arbitrariedad o acción que pudiese representar una infracción de Derechos Humanos. Ello, porque nuestro compromiso con los Derechos Humanos es inseparable de nuestra identificación con los valores de la democracia y el Estado de Derecho. No existe una doble lectura en esta materia.”*²⁰⁶

Clarificado lo anterior, cabe señalar que esta audiencia se convocó de oficio, con el objeto de recibir información sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país.

En ese momento, el Estado de Chile invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar Chile para observar, en terreno, la situación de derechos humanos en el país. En los mismos términos que se invitó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y *Human Rights Watch*.

Así, no es posible señalar que la sola visita por parte de diversas autoridades a dicha audiencia, comprometan *per se* y de manera grave el honor de la Nación, para esto sería necesario que la comunidad internacional y la misma CIDH reaccionaran de manera negativa, cosa que no ha sucedido hasta la fecha.

Vinculado con lo anterior, el Secretario Ejecutivo de la CIDH efectuó una visita a nuestro país a efectos de verificar la ocurrencia de los hechos en comento, y al culminarla la CIDH declaró:

“La Comisión agradece la invitación, apertura, y el apoyo brindado por parte del Estado de Chile para realizar la misión preparatoria y expresa su gratitud por toda la asistencia prestada para la organización y desarrollo de esta, así como por la logística de transporte y seguridad facilitada. Asimismo, valora la apertura y receptividad de las autoridades para abordar los temas de interés de la CIDH.”

*La CIDH saluda el compromiso anunciado por el Presidente de la República para que estos casos sean debidamente investigados y, en su caso, juzgados y sancionados, así como de asistir a las víctimas en su recuperación.*²⁰⁷

IV. LA CANCELACIÓN DE LAS CUMBRES APEC 2019 Y COP25 FUE PLENAMENTE JUSTIFICADA

Este año 2019 Chile sería el anfitrión de dos importantes eventos internacionales como lo son el Foro de Cooperación Económica – Asia Pacífico, por sus siglas en inglés “APEC” 2019 y la Conferencia de las Partes, por su sigla en inglés COP 25.

²⁰⁶ Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=uZo9d7YcCfg>

²⁰⁷ Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/312.asp>

1. Foro de Cooperación Económica – Asia Pacífico (APEC)

La APEC, corresponde al “*principal foro para promover el crecimiento, la cooperación técnica y económica, la facilitación y liberalización del comercio y las inversiones en la región Asia Pacífico.*”²⁰⁸ Así, se compone de una serie de reuniones entre autoridades de las Economías e importantes actores de la sociedad de los diversos países que integran el Foro, culminando con la “Cumbre de Líderes” que corresponde a la reunión de Líderes de las Economías que forman parte de la APEC.

La APEC se ha venido desarrollando durante todo el año 2019 y su punto culmine era la reunión de líderes de las Economías la APEC, la cual se realizaría en Santiago entre los días 11 y 17 de noviembre de 2019. Así la APEC cuenta con un amplio calendario de actividades, en ejecución desde diciembre de 2018 hasta la fecha,²⁰⁹ las que se desarrollaron con total normalidad.

Debido a los hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre del presente año, y con la finalidad de poder canalizar toda la atención necesaria en las demandas que ha levantado la ciudadanía, fue que con fecha 30 de octubre de 2019, tomé la decisión más responsable con el país, que era suspender las actividades calendarizadas en el marco de APEC entre el 11 de noviembre y el 17 de noviembre.

Sin duda, no fue una decisión fácil, pero había que estar a la altura de las circunstancias y responder a las demandas de la ciudadanía. La organización de la APEC consumiría una cantidad de recursos y tiempo, que desviaría la atención necesaria del país. Así, la comunicación enviada por e a los países invitados, que se adjunta a la presente contestación, indicaba que:

*“Por estas razones, el Gobierno de Chile, con gran pesar, y por la responsabilidad y cuidado de las personas, ha decidido no celebrar la semana de Líderes Económicos de APEC. Lamentamos profundamente tener que tomar esta difícil decisión, pero el Gobierno debe centrar todos sus esfuerzos en canalizar las urgentes demandas sociales del pueblo de Chile de una forma responsable y oportuna.”*²¹⁰ (traducción propia)

A mayor abundamiento, un grupo de países nos han enviado notas diplomáticas en el sentido de apoyar la decisión de Chile de cancelar las actividades vinculadas con la APEC, y dando su respaldo a nuestro país respecto de la situación interna que estamos viviendo, así como reconociendo el gran trabajo efectuado por nuestro equipo en la organización de todas las actividades realizadas por APEC.

Dicho lo anterior, es necesario recalcar que APEC 2019 se venía desarrollando durante el año, y la suspensión del último hito de conferencias internacionales no puede empañar todo el trabajo realizado, como lo han hecho saber diversos países, que han

²⁰⁸ Disponible en: https://www.apecchile2019.cl/apec/site/edic/base/port/preguntas_frecuentes.html

²⁰⁹ Disponible en: <https://www.apecchile2019.cl/apec/site/edic/base/port/l/apec/es/apec-chile/meetings-calendar-2019>

²¹⁰ Carta enviada por el Presidente de la República a los países partes de APEC y al FMI, de fecha 30 de octubre de 2019. Original en inglés: “For these reasons, the Government of Chile with great sorrow, full responsibility and care for the people, has decided not to host the APEC Economic Leader’s Week. We deeply regret having to make this difficult decision, but the Government must focus all of its efforts in and addressing the urgent social demands raised by the Chilean people in a responsible and timely manner.”

mandado misivas de agradecimiento por la organización, destacando el rol que cumplió el país en el desarrollo exitoso de APEC 2019. Así, en el Dossier APEC, que se adjunta a la presente contestación, se establecen los importantes logros obtenidos durante el año 2019 en la materia.

Durante el año APEC Chile 2019 se realizaron 254 eventos oficiales (reuniones, ministeriales, talleres) y, si se suman los eventos de APEC Ciudadano, eventos sociales, field trips, conferencias de prensa y eventos similares, se trata de 403 actividades realizadas.

En total asistieron 8404 personas (refiriéndose a todos los eventos que contaron con acreditación), entre las cuales los participantes extranjeros representan el 33%. Las economías APEC que más participantes mandaron fueron China, Chinese Taipei, Japón, Malasia y EE.UU.

Chile elaboró en total 68 entregables y concluyó su año anfitrión con 56 entregables aprobados (5 se encuentran todavía en curso y 7 serán finalizados en 2020). Cabe destacar como entregables principales tres Hojas de Ruta aprobadas (sobre Mujer y Crecimiento Inclusivo; Combate contra la Pesca Ilegal no declarada y no regulada; contra los Desechos Marinos) y la Declaración de consenso de los Ministros responsables de Comercio

2. Conferencia de las Partes 25

La Conferencia de las Partes (“COP”) es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Las Partes se reúnen anualmente para revisar el avance en la implementación de la Convención y se proponen, evalúan y aprueban otros instrumentos que apoyen su adecuada ejecución. El país Presidencia también es sede de la COP. La Presidencia de la COP va rotando y en esta oportunidad, le correspondía a la región de Latinoamérica y el Caribe. Frente al complejo desafío de organizar una cumbre climática a nivel mundial, nuestro país quiso ratificar su liderazgo en materia ambiental y presentó su candidatura a la presidencia de la COP 25. Luego de intensas negociaciones en el marco de la COP 24, la postulación fue aprobada por consenso de todas las partes. En virtud de lo anterior, Chile asumió la Presidencia y sería la sede de la siguiente Conferencia de las Partes, la que se llevaría a cabo en nuestro país entre los días 2 y 13 de diciembre.

Ejercer la Presidencia de la COP y procurar su adecuado desarrollo en Chile requiere de gran cantidad de recursos humanos y materiales, que hagan posible una organización de nivel mundial. Debido a los acontecimientos ocurridos en nuestro país a contar del 18 de octubre del presente año, tuve que tomar la decisión de cambiar el lugar de realización del evento, pasando de Santiago a Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, Chile no ha renunciado a la organización del mismo, manteniendo la Presidencia de COP 25. Así, la Ministra del Medio Ambiente informó, mediante una carta que se adjunta a la presente contestación, a los integrantes del Consejo Asesor Presidencial COP 25 que:

“Si bien debemos renunciar a recibir a la COP25 en nuestro país, no renunciamos a la convicción sobre la relevancia para los ciudadanos de Chile de dar la batalla por la acción climática y el impulso de las políticas socio ambientales. En diciembre de este año asumiremos la Presidencia

*de COP25 que se hará efectiva durante todo el año 2020 hasta la COP26”.*²¹¹

A mayor abundamiento, según declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera ante la Comisión de la H. Cámara de Diputados que conoce de la acusación constitucional contra este Presidente: *“Es tanto el prestigio del país, que cuando se llamó al secretario general de la ONU, para comunicarle que no se realizaría la COP en Chile, él propuso otro lugar, pero que Chile siguiera presidiendo.”*²¹²

Igualmente, Federica Mogherini, entonces Vicepresidenta de la Comisión Europea señaló que:

*“Al mismo tiempo, queremos confirmar nuestra disponibilidad para apoyar al país y a su pueblo en este momento de transición. En primer lugar, hemos decidido mantener nuestra cooperación a programas dedicados a COP 25, para apoyar la presidencia de Chile más allá de la conferencia que ahora se realizará en España.”*²¹³ (traducción propia).

3. Reporte comunicacional efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores, el impacto comunicacional de la cancelación de APEC y COP 25 se puede considerar como neutro, toda vez que de 153 publicaciones a raíz del anuncio de cancelación de la cumbre APEC, un 29% de las notas tienen un carácter informativo, sin asignarle una valorización positiva o negativa, este 29% no relacionó la medida con problemas de seguridad en el país. Un 19,6% de las menciones, le dieron un enfoque económico o político a sus publicaciones.

Dado lo anterior, no es posible concluir que, por la cancelación de una de las actividades llevadas a cabo en el marco de APEC, y el cambio de locación de COP 25 se haya comprometido gravemente el honor de la Nación.

Así, Rebecca Santa María, directora ejecutiva de APEC Secretariat, otorgó su apoyo a Chile en esta materia, señalando al respecto que: *“La seguridad y el bienestar de Chile y de nuestras economías miembro son la máxima prioridad de APEC. Como tal, la Secretaría de APEC apoya la decisión de Chile de suspender la organización de la semana de líderes de APEC.”*²¹⁴, en el mismo sentido se pronunció Richard Von Appen, miembro del APEC Business Advisory Counsel, *“Tal como el Presidente destacó en su declaración*

²¹¹ Carta de la Ministra del Medio Ambiente al Consejo Asesor Presidencial COP 25, de 14 de noviembre de 2019.

²¹² Intervención del Canciller Teodoro Ribera Neumann, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, martes 3 de diciembre de 2019.

²¹³ Original en inglés: *“At the same time, we want to re-confirm our readiness to support the country and its people in this moment of transition. First of all, we have decided to maintain our cooperation programmes dedicated to COP25, to support Chile in its presidency beyond the Summit that will now be held in Spain.”*
Disponible en: https://eeas.europa.eu/delegations/chile_es/70463/Speech%20by%20High%20Representative/VicePresident%20Federica%20Mogherini%20at%20the%20European%20Parliament%20plenary%20debate%20on%20the%20situation%20in%20Chile

²¹⁴ Disponible en: <https://www.msn.com/es-cl/noticias/mundo/secretar%C3%ADa-de-apec-respalda-decisi%C3%B3n-de-pi%C3%B1era-y-anuncia-que-cumbre-se-realizar%C3%A1-en-malasia-en-2020/ar-AAJBlyR>

*pública, Chile requiere concentrar hoy todos sus esfuerzos en restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social.”*²¹⁵.

Por otro lado, la decisión tuvo un amplio apoyo en la oposición, así, el diputado Matías Walker, señaló que:

*“Habíamos sugerido hace algunos días que Chile renunciara a ser sede de la COP25 y la APEC. Es una decisión de realismo, de sobriedad, de entender dónde estamos y cuáles son las prioridades en este momento: responder a las demandas sociales y de mayor participación.”*²¹⁶

En el mismo sentido el ex Canciller y presidente del Partido Por La Democracia, Heraldo Muñoz, señaló al respecto que *“la realidad se ha impuesto y no se puede hacer una reunión en estas circunstancias. La ciudadanía no habría entendido la destinación de recursos para estas cumbres en función de las prioridades sociales. Es un golpe a la política exterior pero no necesariamente afecta el prestigio de Chile.”*²¹⁷, recalando respecto del impacto internacional de la decisión que *“Debilita la proyección internacional de Chile. Pero para que se afecte la imagen, esto debiera ocurrir de esta manera permanente. En algún momento tenemos que llegar a acuerdos para un nuevo pacto social, una nueva constitución. Evidentemente afecta, pero yo me quedaría en el mediano y largo plazo. Chile es un país confiable”*.²¹⁸ (énfasis agregado)

Asimismo, diversos países han manifestado su apoyo a la decisión de Chile de cancelar la APEC y la COP25, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China indicó que confiaban en la capacidad del Gobierno y del pueblo chileno en mantener la estabilidad nacional y la paz social, agregando el anhelo por la pronta restauración del orden. Por su parte el Secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas expresó la solidaridad de dicho Gobierno ante la situación que vive Chile y añadió que nuestro país cuenta con todo el apoyo en estas complejas circunstancias, agregando que Chile ha hecho un gran trabajo en la organización de APEC y de la COP 25 y que su Gobierno valora y destaca este hecho. El Gobierno de Malasia, por su parte, agradeció a Chile por sus invaluable contribuciones durante el año 2019 en su rol de anfitrión para avanzar en los objetivos de APEC. Finalmente, el Canciller de Tailandia, al tiempo de reconocer el impecable trabajo que se estaba desarrollando para la APEC, reiteró que su país entiende completamente la situación y reconoció que debió haber sido una decisión muy difícil. Confirmando la misma percepción internacional, el Secretario de Estado de Estados Unidos emitió una declaración señalando:

“Apoyamos al Presidente de Chile Sebastián Piñera, quien ha enfrentado la difícil decisión de cancelar la próxima reunión de Líderes APEC y la COP25 en Chile. Entendemos la decisión de Chile de centrarse en las preocupaciones nacionales, y confiamos en que el gobierno y el pueblo chilenos resolverán las protestas en curso con respeto a la libertad de expresión y los derechos humanos, dentro del marco de las sólidas

²¹⁵ Disponible en: <https://www.pressreader.com/chile/la-tercera/20191031/281552292656707>

²¹⁶ Disponible en: <https://twitter.com/matiaswalkerp/status/1189546505457283074>

²¹⁷ Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/cancelacion-de-cop25-y-apec/883674/>

²¹⁸ Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/cancelacion-de-cop25-y-apec/883674/>

instituciones democráticas y el estado de derecho de Chile. Estados Unidos está comprometido a continuar nuestra relación de larga data con Chile para promover la seguridad, la prosperidad, la gestión ambiental y la buena gobernabilidad dentro de nuestro hemisferio y en todo el mundo.” (Traducción propia).²¹⁹

V. DEL ANÁLISIS DE LOS INFORMES Y DECLARACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES NO SE PUEDE CONCLUIR QUE SE HAYA COMPROMETIDO GRAVEMENTE EL HONOR DE LA NACIÓN

Del análisis de informes y declaraciones de organismos internacionales, en general, no se puede concluir que este Presidente haya comprometido gravemente el honor de la Nación, pues estos informes y declaraciones por un lado confirman que el Estado de Chile ha adoptado las medidas correspondientes en conformidad a los hechos sucedidos, y también que las instituciones del país siguen funcionando de manera adecuada. Así, por ejemplo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró que:

*“No es mi deber definir las responsabilidades, porque **Chile es un país donde rige el Estado de Derecho** y muchos de estos casos están en la fiscalía y el sistema judicial va a definir. Y ya hay algunos militares en las oficinas de la fiscalía, ha habido investigaciones porque algunos de ellos son responsables.”²²⁰. (énfasis agregado)*

En el mismo sentido Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, declaró que *“Nosotros **no tenemos duda de que Chile es una democracia, de que funciona una separación de poderes**, el sistema de justicia está intentando generar sus respuestas a la situación”²²¹. (énfasis agregado)*

Por su parte, respecto de declaraciones de Heiko Maas, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania se ha señalado que:

*“Maas agradeció los **esfuerzos realizados por el presidente Sebastián Piñera para resolver la crisis** y su seguridad de que investigará las acusaciones de uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y cooperará con la misión*

²¹⁹ En inglés: We support Chilean President Sebastian Piñera who made the difficult decision to cancel the upcoming APEC Leaders’ Week Meetings and COP25 in Chile. We understand Chile’s decision to focus on national concerns, and are confident that the Chilean government and people will resolve ongoing protests with respect for free expression and human rights, within the framework of Chile’s strong, democratic institutions and rule of law. The United States is committed to continuing our longstanding relationship with Chile to promote security, prosperity, environmental stewardship, and good governance within our hemisphere and across the globe. Disponible en: <https://www.state.gov/on-the-cancellation-of-apec-leaders-week-meetings-and-cop25-in-chile/>

²²⁰ Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/21/968002/Bachelet-Carabineros-crisis-social-Chile.html>

²²¹ Disponible en: <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/20/el-lapidario-analisis-de-la-cidh-en-su-visita-a-chile-hay-violaciones-a-los-derechos-humanos/>

*internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con este fin” y enfatizó la “funcionalidad del Estado de Derecho en Chile.”*²²². (énfasis agregado)

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, con motivo de la reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington DC, con fecha 27 de noviembre de 2019, declaró al Canciller Teodoro Ribera lo siguiente: *“Sepa usted Canciller, que la OEA lo acompaña, estamos junto al gobierno y pueblo de Chile, ahora y siempre. En este tiempo ustedes han demostrado una fuerza muy especial, una responsabilidad muy especial y las instituciones han venido respondiendo de la manera en que deberían responder”*.²²³

En el mismo sentido se pronunciaron también los países miembros de PROSUR mediante un comunicado de fecha 14 de noviembre de 2019, señalando que *“Respaldamos los esfuerzos que el Gobierno de Chile viene realizando para mantener la paz, el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática, utilizando los instrumentos legítimos que le otorga la Constitución y la ley.”*²²⁴, señalando asimismo, respecto de los Derechos Humanos que *“Reconocemos los activos esfuerzos desplegados por el Gobierno de Chile para promover y resguardar el respeto por los derechos humanos.”*²²⁵

Claudio Grossman, Presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ha declarado al respecto que:

*“No escapará a estos organismos que Chile tiene un gobierno y Congreso elegidos democráticamente, que hay un poder judicial independiente, separación de poderes, inexistencia de presos políticos o periodistas asesinados, o medios de comunicación cerrados [...] No se ha limitado o prohibido en Chile la existencia de organizaciones no gubernamentales o expulsado o encarcelado a defensores de derechos humanos.[...] La existencia de un Poder Judicial independiente, además del marco democrático existente y los intentos violentos de destruir el Estado de Derecho en Chile deberán ser tomados en cuenta.”*²²⁶

Por su parte, el Canciller de Japón, reconociendo el compromiso del Estado de Chile al respecto, señaló que *“Japón entiende que Chile está haciendo esfuerzos para resolver los*

²²² Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/Internacional/2019/11/14/967227/Alemania-apoya-Chile-crisis-social.html>

<https://www.infogate.cl/2019/11/15/ministro-de-rr-ee-de-alemania-aseguro-que-su-pais-esta-dispuesta-a-brindar-apoyo-a-chile-incluso-en-tiempos-dificiles/>

<https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/chile-node/maas-ribera/2268518>

²²³ Disponible en: <https://www.ntn24.com/america-latina/chile/almagro-respalda-canciller-de-chile-en-visita-la-oea-por-ola-de-protestas>

²²⁴ Disponible en: <https://minrel.gob.cl/declaracion-de-prosur-sobre-la-situacion-de-la-republica-de-chile/minrel/2019-11-14/192914.html>

²²⁵ Disponible en: <https://minrel.gob.cl/declaracion-de-prosur-sobre-la-situacion-de-la-republica-de-chile/minrel/2019-11-14/192914.html>

²²⁶ Diario El Mercurio, 30 de noviembre de 2019.

*problemas de acuerdo a valores fundamentales que los dos países comparten, incluida la democracia y el Estado de derecho.”*²²⁷

De lo anterior se puede constatar no sólo que la comunidad internacional tiene alta estima de la institucionalidad de Chile, declarando expresamente su confianza en ésta, sino que, se ha reconocido la actitud proactiva que he tenido en la materia, lo cual está lejos de comprometer el honor de la Nación.

Además, según declaró el Canciller Teodoro Ribera en su intervención ante la Comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente de la República que sesionó con fecha 3 de diciembre de 2019: *“Si supeditamos la causal al reproche internacional, estaríamos dejando que los asuntos internos quedaran regidos por el parecer internacional. (...) No podemos plantear que se mancilla el Honor, porque un tercero tenga una opinión u otra.”*²²⁸

VI. LA TRANSPARENCIA Y APERTURA CON QUE HA OPERADO EL ESTADO DE CHILE CONFIRMA SU COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La colaboración que ha prestado este Gobierno respecto de las investigaciones efectuadas respecto de las supuestas violaciones a Derechos Humanos en comento, ha sido irrestricta, habiendo actuado con total transparencia y facilitando la investigación de distintos organismos internacionales sobre la materia, sin obstaculizarlas.

Así, solicité la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que ha tenido impacto positivo en la comunidad internacional. El portavoz de la Alta Representante / Vice-Presidenta de la Delegación de la Comunidad Europea en Chile, declaró que “es importante la decisión del gobierno chileno de solicitar la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de otras organizaciones de derechos humanos.”²²⁹

En el mismo sentido, la misión enviada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló, respecto de visitas efectuadas a comisarías, cárceles y hospitales, que *“Las autoridades proporcionaron acceso sin restricciones para dichas visitas”*.²³⁰

La apertura con que ha actuado este Gobierno en esta materia sólo puede confirmar su compromiso con los Derechos Humanos y con la justicia, tal como lo he declarado sistemáticamente, así, por ejemplo, con fecha 6 de noviembre;

“Con la misma fuerza con que vamos a investigar, perseguir, detener y sancionar a estos grupos criminales que han destruido no solamente

²²⁷ Radio Cooperativa, viernes 22 de noviembre de 2019. Disponible en: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/canciller-japones-espera-una-rapida-y-pacifica-solucion-de-crisis/2019-11-22/095359.html>

²²⁸ Intervención del Canciller Teodoro Ribera Neumann, sesión comisión de Acusación Constitucional contra el Presidente y Jefe de Estado, S.E. Sebastián Piñera Echenique, martes 3 de diciembre de 2019.

²²⁹ Disponible en: https://eeas.europa.eu/delegations/chile/69666/declaraci%C3%B3n-del-portavoz-de-la-alta-representantevice-presidenta-sobre-los-%C3%BAltimos_es

²³⁰ Diario El Mercurio, sábado 23 de noviembre de 2019.

propiedades tan importantes (...) Con la misma fuerza y rigor, cualquier exceso que se haya cometido, cualquier falta de respeto al protocolo del uso de la fuerza, cualquier uso excesivo de la fuerza, también va a ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los tribunales de justicia.”

En el mismo sentido, con fecha 9 de noviembre, en entrevista con El Mercurio señalé que *“ha habido excesos, abusos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos. Pero eso tiene que ser investigado por la Fiscalía y juzgado por los Tribunales de Justicia.”*. De la misma forma en el acta de la sesión del COSENA se establece que *“Asimismo, solicita al Poder Judicial que, junto con el Ministerio Público, tomen todas las medidas para investigar y sancionar todos los casos en que se haya cometido un delito o abuso. Si existen miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que no cumplieron con la ley o los protocolos, deben ser juzgados y sancionados de conformidad al ordenamiento jurídico.”*

En un punto de prensa de fecha 17 de noviembre, señalé que *“Por eso, nuestro Gobierno hará todos los esfuerzos dentro del Estado de Derecho para que exista justicia y no haya impunidad con aquellos que causaron tanto daño a tantos chilenos.”*, es decir, este Presidente ha mostrado un consistente compromiso con la justicia.

La Viceministra de Relaciones Exteriores de Italia, Marina Sereni, publicó con fecha 18 de noviembre de 2019, una carta en la que señala que: *“El hecho de que el Gobierno chileno haya invitado a los observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe considerarse un acto de rigor y fuerza de la democracia chilena.”*²³¹

Asimismo, con fecha 30 de noviembre, en entrevista con el diario El Mercurio, Claudio Grossman, declaró que:

*“La comunidad internacional debe valorar las invitaciones efectuadas a órganos de tratados como las Naciones Unidas y la OEA y a las organizaciones no gubernamentales. Estas invitaciones contrastan con la actitud de gobiernos que han rehusado otorgar acceso a los órganos internacionales. Los informes siempre valoran la posibilidad de efectuar visitas y deben verse como contribuciones que enriquecen los procesos de toma de decisión interna, aportando elementos importantes en diálogos constructivos para la realización de los derechos humanos.”*²³²

Con todo, y tal como reza nuestra Constitución la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales de justicia, y no a este Presidente, quien tiene que respetar en todo caso el principio de presunción de inocencia que consagra nuestro ordenamiento jurídico. Así, mientras no haya una sentencia de tribunales de justicia en la materia, no es posible saber si se han cometido o no violaciones a los Derechos Humanos, u otros delitos, pues son los tribunales quienes deben conocer la materia, y es el Ministerio Público quien deberá llevar a cabo las investigaciones pertinentes, sin que este Gobierno deba pronunciarse al respecto en pos de la separación de poderes que debe regir el correcto funcionamiento del Estado.

²³¹ Diario El Mercurio, 18 de noviembre de 2019.

²³² Diario El Mercurio, 30 de noviembre de 2019.

VII. LA CONDUCCIÓN DE ESTE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EVITÓ QUE EL DAÑO A LA IMAGEN DEL PAÍS FUESE AÚN MAYOR

Analizado todo lo anterior queda preguntarse, ¿qué habría pasado si este Presidente de la República hubiese actuado de manera diferente, sin el apoyo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el control de los desmanes, delitos y actos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas?

Absurdo sería pensar que las circunstancias que han ocurrido en las últimas semanas en Chile no afecten en absoluto la relación con otros países, o incluso entre sus propios compatriotas, especialmente en un mundo tan globalizado como aquel en que nos movemos. Sin embargo, como se ha indicado, el impacto que ha tenido esta situación en la imagen país es bajo, no ha habido represalias por parte de terceros Estados, ni por parte de organizaciones internacionales.

De hecho, las circunstancias ante las cuales nos hemos encontrados han sido reconocidas por la propia CIDH en su comunicado de fecha 23 de octubre en que señala que:

“la CIDH toma nota que en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes han provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas de orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra bomberos.”²³³.

Así, se puede constatar que todas las acciones y cesiones tomadas por este Presidente, han permitido mantener el orden interno del Estado y así seguir presentándonos como un país en dónde las instituciones funcionan.

C. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo expuesto en esta presentación, y a los antecedentes que se acompañan, los hechos ocurridos en el país durante las últimas semanas son considerablemente más complejos de lo que pretenden los Acusadores. En ellos se entremezclan manifestaciones pacíficas y demandas legítimas expresadas por la ciudadanía con hechos de violencia y vandalismo de una intensidad y gravedad que nuestro país no había conocido hasta ahora. Frente a ello, este Presidente de la República y el Gobierno en general han actuado de forma clara. Por una parte, han escuchado las demandas de la ciudadanía y han intentado darles cauce institucional por medio de la Agenda Social y el Acuerdo por la Justicia Social y por una Nueva Constitución. Por otra parte, frente a los hechos de violencia y los delitos cometidos, el Gobierno ha ejercido las atribuciones que le conceden la Constitución y la ley para resguardar el orden público y la seguridad de las

²³³ Comunicado CIDH 23 de octubre de 2019, disponible en <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/270.asp>

personas, siempre sujetándose a los estándares internacionales y nacionales en materia de protección de los derechos humanos.

En este contexto, el relato sesgado que hacen los acusadores, según el cual el Gobierno habría intentado reprimir con la fuerza pública la manifestación pacífica, violando sistemáticamente los derechos humanos, resulta completamente infundado e irresponsable.

Como se explicó a lo largo de esta presentación, la Acusación es inadmisibile por no cumplirse los requisitos constitucionales para que ella sea tramitada y debe ser rechazada por ser infundados los capítulos acusatorios que formula. Así se desprende incontestablemente de todo lo expuesto en esta presentación, cuyas conclusiones son las siguientes:

I. La Acusación es inadmisibile por no cumplirse los requisitos constitucionales para que ella sea conocida por esta H. Corporación:

1. La Acusación no respeta el carácter de *ultima ratio* que la Constitución exige especialmente cuando se acusa constitucionalmente al Presidente de la República. Como se explicó, tal carácter se traduce en dos requisitos fundamentales que la Acusación no satisface. En primer lugar, la acusación constitucional que se dirige en contra del Presidente de la República debe encontrarse mínimamente fundada, lo que exige interponerla por hechos acreditados o, al menos, cuya acreditación se pretende obtener con los antecedentes que la fundan, nada de lo cual cumple la Acusación. En segundo lugar, el carácter excepcionalísimo de esta acusación, exige que ella se interponga como último recurso, cuando el resto de la institucionalidad no opera normalmente. En este caso, resulta irrefutable que el Estado de Derecho ha operado en normalidad, con pleno respeto a la autonomía de organismos tales como los Tribunales de Justicia, la Defensoría Penal Pública y el INDH. Así, por lo demás, ha sido valorado por autoridades imparciales y por los organismos internacionales de derechos humanos.
2. La Acusación vulnera el debido proceso, garantía que resulta plenamente exigible en este procedimiento. En efecto, las imputaciones genéricas e imprecisas que se efectúan en contra de este Presidente de la República, junto con la remisión a hechos no acreditados y que actualmente están siendo investigados por los órganos competentes, vulnera gravemente el derecho a defensa de esta parte.
3. La Acusación no cumple con el requisito establecido en el artículo 52 N° 2, letra a), de la Constitución de interponerse por “actos” de la administración de este Presidente de la República. En efecto, como los propios acusadores reconocen reiteradamente, la Acusación se funda en un supuesto consentimiento que este Presidente de la República habría prestado a eventuales violaciones de derechos humanos. Al margen de lo infundada de esa imputación, es evidente que ella se basa en una conducta omisiva, “consentir”, que conforme al texto constitucional no habilita para acusar constitucionalmente al Presidente de la República, pues para éstos efectos, como se explicó, es necesario fundamentar la causal en actos positivos y no en meras omisiones.

Esto, además, se ve reforzado por los artículos 24, 32 N° 18 y 101 de la Constitución, que le confieren carácter “profesional” a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad

Pública, impidiendo al Presidente de la República incidir directamente en su despliegue operativo.

4. La Acusación supone un abuso del derecho, ya que tiene por objeto revisar el mérito de la declaración del Estado de Emergencia, cuestión que es privativa del Presidente de la República. Por lo demás, como se acreditó, la decisión de declarar Estado de Emergencia estuvo plenamente justificada en los criterios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad. Así lo reconocieron numerosas autoridades de todo el espectro político.

II. La Acusación debe ser rechazada por ser infundados los capítulos acusatorios que formula:

1. El Capítulo Primero de la Acusación debe ser descartado por las siguientes razones:
 - § La Acusación no logra formular imputaciones que se basen en acciones materializadas en actos de este Presidente de la República, de acuerdo a lo exigido por la Constitución, sino que en la supuesta conducta omisiva de haber “consentido” en que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada.
 - § La Acusación no entrega antecedentes que permitan tener por acreditados los hechos en que se funda el Capítulo Primero y tampoco permite distinguir las circunstancias en que ellos ocurrieron. Según fue explicado, para sostener los hechos que motivan la Acusación, los acusadores se limitan a enunciar hechos que se encuentran actualmente siendo investigados, o cuyos antecedentes resultan completamente insuficientes para tenerlos por acreditados. Así ocurre, por una parte, con las referencias a denuncias y querellas que se encuentran en tramitación y, por otra, con las alusiones a reportes o archivos de prensa.
 - § Por lo demás, este Presidente de la República ha adoptado todas las medidas que se encuentran dentro de la esfera de sus atribuciones para promover y proteger los derechos humanos. En esta materia los hechos son elocuentes. Los esfuerzos desplegados por el Gobierno en materia de prevención, antes y durante el Estado de Emergencia; determinación de los responsables de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y su respectiva sanción; así como la disposición a reparar e investigar los hechos, han sido abundantes.

De todas esas medidas, detalladas en el cuerpo de esta presentación, deben ser destacadas las instrucciones impartidas por este Presidente de la República para que, en todo momento, se usaran las Reglas de Uso de Fuerza y los protocolos de Carabineros de Chile; la actualización de los protocolos de Carabineros de Chile antes de esta crisis, y su revisión con posterioridad a ella; la permanente colaboración con los organismos autónomos encargados de velar por el resguardo de los derechos humanos, como son el INDH, los Tribunales de Justicia y la Defensoría Penal Pública; y la política de transparencia total y colaboración que adoptó el Gobierno en relación a los organismos internacionales de derechos humanos.

§ Adicionalmente, corresponde descartar la aseveración según la cual en Chile se habrían producido violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Como se explicó, atendidos los estándares nacionales e internacionales, no es posible sostener que se hayan producido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Así, por lo demás, lo han reconocido numerosas autoridades, incluyendo al Director Nacional del INDH.

2. El Capítulo Segundo de la Acusación debe ser descartado por las siguientes razones:

§ Nuevamente, la Acusación no logra formular imputaciones que se basen en acciones materializadas en actos, de acuerdo a lo exigido por la Constitución, sino que en la supuesta conducta omisiva de haber “consentido” en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, lo que habría comprometido gravemente el honor de la Nación.

§ Los hechos que aduce la Acusación no logran acreditar la causal, ya que ellos suponen que este Presidente de la República sería directamente responsable de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre en nuestro país, que resulta, a todas luces, un absurdo.

§ La cancelación de las cumbres internacionales COP 25 y la APEC 2019 se encontraba plenamente justificada, considerando la necesidad de restaurar el orden público y priorizar la Agenda Social. Por lo demás, como se acreditó, ello no impactó la imagen de Chile en el exterior.

§ El compromiso mostrado por este Presidente de la República en materia de protección de los derechos humanos, y la política de total apertura y colaboración hacia los organismos internacionales de derechos humanos, impiden sostener que el honor de la Nación se haya visto afectado. Por el contrario, el compromiso del Estado de Chile en la materia ha sido reconocido por las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, argumentos de hecho y de derecho, y de las normas pertinentes citadas,

Solicito a esta H. Cámara: en subsidio de lo solicitado en lo principal de esta presentación, tener por presentada mi defensa de acuerdo a lo señalado en el Título Cuarto de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y rechazar en todas sus partes la acusación constitucional que se ha dirigido en contra de este Presidente de la República.

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvasse esta H. Corporación, tener por acompañados los siguientes documentos:

1. Decretos supremos que declararon Estado de Emergencia en las distintas provincias y regiones del país.
2. Decretos supremos que pusieron fin a los Estados de Emergencia.
3. Nota Diplomática N°155/19, de 21 de octubre de 2019, al Secretario General de la OEA, notifica estado de excepción constitucional.
4. Nota Diplomática número 162/19, 28 de octubre de 2019, al Secretario General de la OEA, notifica el término de todos los estados de excepción en el país.
5. Acta de Sesión Consejo de Seguridad Nacional, de 7 de noviembre de 2019. Disponible en: <https://prensa.presidencia.cl/fotonoticia.aspx?id=134638>.
6. Cifras Violencia Institucional, Ministerio Público de Chile, del 18 de octubre al 10 de noviembre de 2019.
7. Decreto supremo N° 1.364, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público.
8. Circular N° 1.832 de Carabineros de Chile, de 1 de marzo 2019, que actualiza instrucciones respecto del uso de la fuerza.
9. Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, que actualiza los protocolos mantención de orden público.
10. Orden General N° 2.640, de 29 de marzo de 2019, que eleva el Departamento de Derechos Humanos a Dirección.
11. Oficio N° 32.816, de 22 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el que se reitera total disposición del Gobierno de Chile a colaborar en todas las gestiones realizadas por el INDH a lo largo del país.
12. Oficio N° 33.384, 28 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita al Director del INDH que haga llegar las querellas que habían presentado y las denuncias que como INDH habían recibido, para efectos de tomar las medidas pertinentes.
13. Nota Diplomática N° 105/2019, de 25 de octubre de 2019, Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas.
14. Nota Diplomática N° 106/2019, de 27 de octubre de 2019, Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas.
15. Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores al Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, de 24 de octubre de 2019.
16. Nota Diplomática N° 390, de 24 de octubre de 2019, enviada por la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, a la Oficina de la Alta comisionada para los Derechos Humanos.

17. Acta de Sesión de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, de 30 de octubre de 2019.
18. Acta de Sesión de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, de 11 de noviembre de 2019.
19. Acta de 7° Sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos, de 12 de noviembre de 2019.
20. Acta de 8° Sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 2019.
21. Oficio N° 33.102, de 23 de octubre de 2019, enviado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública a Carabineros de Chile.
22. Oficio N° 33.100, de 23 de octubre de 2019, enviado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a Carabineros de Chile.
23. Oficio N° 33.101, de 23 de octubre de 2019, enviado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la Policía de Investigaciones.
24. Oficio N° 33.103, de 23 de octubre de 2019, enviado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la Policía de Investigaciones.
25. Oficio N° 33.104, 23 de octubre de 2019, enviado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a Carabineros de Chile.
26. Oficio N° 33.237, de 25 de octubre de 2019, enviado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a Carabineros de Chile.
27. Oficio N° 33.238, de 26 de octubre de 2019, enviado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a Carabineros de Chile.
28. Oficios N° 758 y 759, de 2019, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
29. Resolución Exenta N° 1.413, de 2019, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
30. Oficio N° 485, de 2019, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
31. Dossier APEC Chile.
32. Cartas enviadas por el Presidente de la República a los países invitados de la APEC, de 30 de octubre de 2019.
33. Carta la Ministra de Medio Ambiente, Sra. Carolina Schmidt Zaldívar a Consejo Asesor Presidencial COP 25, de 14 de noviembre de 2019.

POR TANTO, Sírvasse H. Cámara, tenerlos por acompañados.



TERCER OTROSÍ: Sírvase esta H. Cámara tener presente que designo como abogado patrocinante y confiero poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, don Juan Domingo Acosta Sánchez, cédula nacional de identidad N° 8.074.596-6, domiciliado para estos efectos en Palacio de La Moneda S/N, ciudad de Santiago, quien firma en señal de aceptación.

Sírvase H. Cámara, tenerlo presente.

8.074.596-6

Contenido

A. ANTECEDENTES DE HECHO 1

I. ANTECEDENTES DEL ALZA DEL PASAJE DEL METRO DE SANTIAGO..... 3

II. HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 3

III. LA DECISIÓN DE DECRETAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE EMERGENCIA SE ENCONTRABA PLENAMENTE JUSTIFICADA 5

IV. DESARROLLO DE LOS HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA 7

V. DESARROLLO DE LOS HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD AL ESTADO DE EMERGENCIA 8

A) AGENDA SOCIAL 9

B) AGENDA DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA..... 12

C) CONVOCATORIA AL COSENA..... 15

D) LLAMADO AL ACUERDO POR LA PAZ, POR LA JUSTICIA SOCIAL Y POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 16

E) AGENDA DE IMPULSO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO 16

VI. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y ESTE PRESIDENTE EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 17

DEDUCE CUESTIÓN PREVIA DE ADMISIBILIDAD 23

I. LA ACUSACIÓN NO RESPETA EL CARÁCTER DE ULTIMA RATIO QUE DEBE TENER UNA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL FORMULADA CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA..... 23

1. La acusación constitucional como herramienta de control constitucional es un mecanismo excepcional o de *ultima ratio* 23

2. En el caso de la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, este carácter excepcional se ve necesariamente reforzado 26

3. La Acusación no cumple con el mínimo estándar requerido para proceder a la destitución del Presidente de la República 29

II. LA ACUSACIÓN VULNERA GRAVEMENTE EL DEBIDO PROCESO, POR FUNDARSE EN HECHOS AUN NO ACREDITADOS Y POR REALIZAR IMPUTACIONES IMPRECISAS..... 32

3. La Acusación se funda en imputaciones imprecisas y en hechos y circunstancias no acreditadas por los órganos competentes..... 34

III. LA ACUSACIÓN NO CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DE QUE ELLA SE DEDUZCA “POR ACTOS DE SU ADMINISTRACIÓN” 38

2. Una acusación constitucional dirigida al Presidente de la República sólo se puede fundar en reproches por actos de “su” administración, esto es por actos que le sean personalmente imputables y no sean atribuibles a terceros como lo plantea la Acusación 41

3. En la Acusación no se le imputan actos de administración, como lo exige el texto constitucional..... 44

IV. LA ACUSACIÓN SUPONE UN ABUSO DEL DERECHO, TODA VEZ QUE PRETENDE REVISAR LAS CONSIDERACIONES DE MÉRITO PARA LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA 48

V.	CONCLUSIÓN	60
PRIMER OTROSÍ: EN SUBSIDIO DE LO SOLICITADO EN LO PRINCIPAL DE ESTA PRESENTACIÓN, PARA EL CASO EN QUE LA CUESTIÓN PREVIA DEDUCIDA NO SEA ACOGIDA POR ESTA H. CORPORACIÓN, CONTESTO ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL FONDO, SOLICITANDO QUE ELLA SEA RECHAZADA EN TODAS SUS PARTES.....		
A.	CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO PRIMERO DE LA ACUSACIÓN	62
I.	IMPUTACIONES QUE FORMULA EL CAPÍTULO PRIMERO DE LA ACUSACIÓN	62
II.	SENTIDO Y ALCANCE DE LA CAUSAL INVOCADA POR LA ACUSACIÓN.....	63
1.	Sentido y alcance de la expresión “ <i>haber infringido abiertamente la Constitución o las leyes</i> ”	63
2.	Sentido y alcance de la expresión “ <i>por actos de su administración</i> ”	65
III.	LA ACUSACIÓN SE SUSTENTA EN UNA PREMISA ERRADA: NO ES EFECTIVO QUE LAS FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS FUERZAS ARMADAS HAYAN SIDO DESPLEGADAS PARA REPRIMIR MANIFESTACIONES PACÍFICAS.....	67
1.	El despliegue de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Emergencia, tuvo como único objeto resguardar el orden público y los derechos de las personas.....	67
2.	Las manifestaciones pacíficas se han seguido desarrollando, velando por el resguardo del orden público y los derechos de las personas	68
3.	Promoción e impulso de una Agenda Social para recoger las demandas ciudadanas	69
IV.	LOS ACUSADORES TRATAN DE FORMA POCO RIGUROSA LOS HECHOS EN QUE FUNDAN SU PRETENSIÓN.....	70
1.	Los acusadores invocan hechos y circunstancias no acreditados para fundar la Acusación y que están siendo investigadas y conocidas por los órganos competentes	70
2.	Los acusadores realizan imputaciones infundadas que no permiten sacar las conclusiones que pretenden ni mucho menos fundar la responsabilidad del Presidente de la República	71
3.	Los antecedentes y las pruebas que se acompañan a la Acusación carecen del mínimo estándar requerido para que prospere una acusación constitucional o son contradictorios con lo señalado por los acusadores.....	79
4.	La Acusación pretende desconocer el derecho a la presunción de inocencia de quienes se encuentran siendo investigados o imputados por tales hechos	82
V.	ESFERA DE RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA.....	82
1.	La Acusación no permite establecer una responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos.....	84
2.	La Acusación no permite establecer una responsabilidad penal internacional por crímenes contra la humanidad	85
VI.	EL GOBIERNO HA DADO PLENO CUMPLIMIENTO A TODOS SUS DEBERES EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	88

1.	Obligaciones del Estado de Chile en materia de protección de los derechos humanos de acuerdo al ordenamiento interno y a las normas internacionales aplicables	88
2.	El Gobierno ha cumplido íntegramente el deber de prevención en materia de derechos humanos	88
3.	El Gobierno ha procurado que se cumpla íntegramente el deber de investigar las posibles violaciones a los derechos humanos, dando todas las facilidades a los órganos competentes	94
4.	El Gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para que los órganos competentes del Estado cumplan íntegramente el deber de sancionar a los eventuales responsables de violaciones a los derechos humanos.....	99
5.	El Gobierno ha instado por el establecimiento de la verdad de los hechos en materia de derechos humanos.....	101
6.	El Gobierno ha adoptado resguardos especiales para la prevención, investigación y sanción de posibles violaciones de derechos humanos en contra de menores de edad	103
7.	El Gobierno ha adoptado resguardos especiales para la prevención, investigación y sanción de posibles violaciones de derechos humanos en contra de mujeres	104
8.	La declaración de Estado de Emergencia y los <i>toques de queda</i> declarados fueron necesarios para garantizar los derechos de todas las personas.....	106
VII.	NO ES EFECTIVO QUE EN CHILE SE HAYAN PRODUCIDO VIOLACIONES SISTEMÁTICAS Y GENERALIZADAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	108
1.	Estándar en el derecho internacional y nacional en la materia	109
2.	Los hechos ocurridos en Chile con posterioridad al 18 de octubre no cumplen con tales estándares, y así lo han reconocido las principales autoridades en la materia	112
VIII.	EN CONSECUENCIA, NO ES EFECTIVO QUE SE HAYA PRODUCIDO UNA INFRACCIÓN ABIERTA A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES POR ACTOS DE MI ADMINISTRACIÓN	115
B.	CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ACUSACIÓN.....	117
I.	IMPUTACIONES QUE FORMULA EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ACUSACIÓN	117
II.	SENTIDO Y ALCANCE DE LA CAUSAL INVOCADA POR LA ACUSACIÓN.....	117
1.	Sentido y alcance de la expresión “ <i>haber comprometido gravemente el honor de la Nación</i> ”.....	118
2.	Sentido y alcance de la expresión “ <i>por actos de su administración</i> ”	123
3.	Imprecisiones en que incurren los acusadores en esta materia	123
III.	LA ACUSACIÓN NO LOGRA ACREDITAR LA CAUSAL INVOCADA	124
1.	Los antecedentes acompañados por los acusadores carecen del estándar mínimo requerido para tener por acreditada la causal invocada.....	124
IV.	LA CANCELACIÓN DE LAS CUMBRES APEC 2019 Y COP25 FUE PLENAMENTE JUSTIFICADA.....	136
1.	Foro de Cooperación Económica – Asia Pacífico (APEC).....	137

2.	Conferencia de las Partes 25	138
3.	Reporte comunicacional efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 139	
V.	DEL ANÁLISIS DE LOS INFORMES Y DECLARACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES NO SE PUEDE CONCLUIR QUE SE HAYA COMPROMETIDO GRAVEMENTE EL HONOR DE LA NACIÓN.....	141
VI.	LA TRANSPARENCIA Y APERTURA CON QUE HA OPERADO EL ESTADO DE CHILE CONFIRMA SU COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	143
VII.	LA CONDUCCIÓN DE ESTE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EVITÓ QUE EL DAÑO A LA IMAGEN DEL PAÍS FUESE AÚN MAYOR	145
C.	CONCLUSIONES	145